

# NACIONES UNIDAS

## CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL



Distr.  
GENERAL  
E/CN.4/1111  
1º de febrero de 1973  
ESPAÑOL  
Original: FRANCES/INGLES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS  
29º período de sesiones

Distr. doble

### INFORME DEL GRUPO ESPECIAL DE EXPERTOS PREPARADO DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 7 (XXVII) DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

#### INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
INTRODUCCION .....	1 - 28	1
A. Mandato y composición del Grupo Especial de Expertos ..	1 - 5	1
B. Organización de los trabajos y procedimientos aprobados por el Grupo Especial de Expertos .....	6 - 28	2
I. NORMAS INTERNACIONALES PERTINENTES A LAS CUESTIONES MENCIONADAS EN LA RESOLUCION 7 (XXVII) DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS .....	29 - 39	7
A. Normas relativas a la pena capital .....	30	7
B. Normas relativas al trato de los presos políticos y combatientes por la libertad capturados .....	31	7
C. Normas relativas a la situación de los africanos en las "reservas" y en los "campamentos de tránsito" .....	32 - 38	8
D. Normas pertinentes a las graves manifestaciones del <u>apartheid</u> en Sudáfrica y a las graves manifestaciones de colonialismo y discriminación racial en Namibia, Rhodesia del Sur y los territorios africanos bajo dominación portuguesa .....	39	9
II. SUDAFRICA .....	40 - 146	10
A. Pena capital .....	40 - 48	10
B. Trato dado a los presos políticos y a los combatientes por la libertad capturados .....	49 - 102	13
C. La situación de los africanos en las "reservas de nativos" .....	103 - 117	30

INDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
D. Las condiciones de los africanos en los "campamentos de tránsito" .....	118 - 127	34
E. Nueva investigación sobre las graves manifestaciones de <u>apartheid</u> que acompañan a la situación existente en la República de Sudáfrica .....	128 - 146	37
III. NAMIBIA .....	147 - 225	41
A. La pena capital en Namibia .....	150 - 156	42
B. Trato dado a los presos políticos y a los combatientes por la libertad que caen prisioneros .....	157 - 175	44
C. Situación de los africanos en las "reservas indígenas" .....	176 - 203	49
D. Graves manifestaciones de colonialismo y discriminación racial en Namibia .....	204 - 221	56
E. Medidas de represión adoptadas después de la visita del Secretario General .....	222 - 225	59
IV. RHODESIA DEL SUR .....	226 - 324	60
A. Pena capital .....	233 - 241	61
B. Trato que se da a los presos políticos y a los combatientes por la libertad que caen prisioneros ..	242 - 284	66
C. Condiciones en que viven los africanos en las "reservas indígenas" y los "campamentos de tránsito" ..	285 - 299	75
D. Graves manifestaciones de colonialismo y discriminación racial en Rhodesia del Sur .....	300 - 324	79
V. TERRITORIOS AFRICANOS BAJO DOMINACION PORTUGUESA .....	325 - 449	87
A. La pena capital en los territorios africanos bajo dominación portuguesa .....	329 - 355	87
B. Trato de los presos políticos y de los combatientes por la libertad capturados .....	356 - 396	100
C. Graves manifestaciones de colonialismo y discriminación racial .....	397 - 449	120

INDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	450	139
VII. APROBACION DEL INFORME .....	451	149

Anexos

- I.A. DECLARACION INTRODUCTORIA HECHA POR EL SR. IBRAHIMA BOYE, PRESIDENTE, EN LA 296ª SESION DEL GRUPO ESPECIAL DE EXPERTOS CELEBRADA EN DAR ES SALAAM, REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA, EL 9 DE AGOSTO DE 1972
- B. DECLARACION DEL EXCMO. SR. I. ELINAWINGA, MINISTRO DE RECURSOS HIDRAULICOS Y ENERGIA Y MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES INTERINO DE LA REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA
- II. DECLARACION DEL EXCMO. SR. M. NDENGUE, MINISTRO DE TRABAJO Y DE JUSTICIA Y MINISTRO INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA POPULAR DEL CONGO
- III. DECLARACION DEL EXCMO. SR. KARL-I-BOND NGUZA, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DEL ZAIRE
- IV. CARTA DE 23 DE AGOSTO DE 1972 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS POR EL GRUPO ESPECIAL DE EXPERTOS
- V. TELEGRAMA DE 23 DE AGOSTO DE 1972 DIRIGIDO AL SECRETARIO GENERAL POR EL GRUPO ESPECIAL DE EXPERTOS

## INTRODUCCION

### A. Mandato y composición del Grupo Especial de Expertos

#### 1. Antecedentes y actual mandato del Grupo Especial de Expertos

1. Como se recordará, el mandato del Grupo Especial de Expertos creado en virtud de la resolución 2 (XXIII) de la Comisión de Derechos Humanos, de 6 de marzo de 1967, fue ampliado y prorrogado en ocasiones sucesivas por varias resoluciones de la Comisión, a saber, las resoluciones 2 (XXIV), 21 (XXV) y 8 (XXVI). De conformidad con dichas resoluciones, el Grupo Especial de Expertos presentó a la Comisión cuatro informes sobre el trato dado a los presos políticos y sobre otras cuestiones relacionadas con los derechos humanos en el Africa meridional y en los territorios africanos bajo dominación portuguesa (E/CN.4/950, E/CN.4/984 y Add.1 a 19, E/CN.4/1020 y Add.1 a 3, E/CN.4/1050 y Corr.1).

2. En su 27º período de sesiones la Comisión de Derechos Humanos decidió, por su resolución 7 (XXVII) de 8 de marzo de 1971, que el Grupo continuara investigando los acontecimientos en las esferas y sectores mencionados en los incisos i) a iv) del párrafo 3 de la resolución 2 (XXIV) y en el párrafo 3 de la resolución 21 (XXV) de la Comisión, con particular referencia a las graves manifestaciones de colonialismo y de discriminación racial que se advierten en Namibia, Rhodesia del Sur, Angola, Mozambique y Guinea (Bissau) y que se deben a la actuación del régimen ilegal de Sudáfrica en Namibia, del régimen minoritario ilegal en Rhodesia del Sur y del régimen de Portugal en Angola, Mozambique y Guinea (Bissau). La Comisión pidió además al Grupo que la pusiera al tanto, en su 28º período de sesiones, de los nuevos acontecimientos que ocurriesen al respecto y que le presentara un informe, con conclusiones y recomendaciones, en su 29º período de sesiones.

3. De conformidad con la resolución 7 (XXVII) de la Comisión, el Grupo presentó a la Comisión, en su 28º período de sesiones, un informe (E/CN.4/1076), en que señala a su atención los nuevos acontecimientos ocurridos en las esferas mencionadas. El presente informe, que contiene más información sobre esos acontecimientos y las conclusiones y recomendaciones del Grupo, se preparó de conformidad con la misma resolución.

4. Debe señalarse que desde 1967 el Grupo ha venido llevando a cabo al mismo tiempo una serie de investigaciones acerca de los derechos sindicales y cuestiones afines en el Africa meridional y en los territorios africanos bajo dominación portuguesa, de conformidad con las resoluciones 1216 (XLII), 1302 (XLIV), 1412 (XLVI), 1509 (XLVIII) y 1599 (L) del Consejo Económico y Social. Como lo pidió el Consejo en su resolución 1599 (L) el Grupo investigó a fondo el sistema de contratación de los trabajadores africanos en la región, e informará al respecto al Consejo en su 54º período de sesiones. Además, cabe recordar que el Grupo presentó a la Comisión, en su 28º período de sesiones, un estudio sobre la cuestión del apartheid desde el punto de vista del derecho penal internacional (E/CN.4/1075), que la Comisión, en su resolución 8 (XXVI), le había pedido que emprendiera.



2. Composición del Grupo Especial de Expertos

5. Los miembros del Grupo Especial de Expertos, designados por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos conforme a las resoluciones 2 (XXIII) y 2 (XXIV) de la Comisión, son los siguientes:

El Sr. Ibrahima Boye, Embajador del Senegal en la Unión Soviética, Presidente;

El Sr. Branimir Janković, Profesor de Derecho Internacional, Universidad de Belgrado, Yugoslavia, Vicepresidente;

El Sr. Felix Ermacora, Profesor de Derecho Público, Universidad de Viena, y miembro del Parlamento, Austria;

El Sr. A. S. Mani, Primer Secretario, Misión Permanente de la India ante las Naciones Unidas;

El Sr. Luis Marchand-Stens, Ministro de Relaciones Exteriores, Perú;

El Sr. Mahmud N. Rattansey, Consejero, Embajador de la República Unida de Tanzania en París.

B. Organización de los trabajos y procedimientos aprobados por el Grupo Especial de Expertos

1. Reuniones, Mesa y Secretaría del Grupo Especial de Expertos

6. En una serie de reuniones celebradas en la Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, en febrero y marzo de 1972, el Grupo organizó su trabajo y planeó la misión a Europa y Africa que emprendió más tarde, durante los meses de julio y agosto de 1972, con objeto de oír testimonios y dar audiencias acerca de los acontecimientos recientes que eran de su competencia.

7. En el curso de esa misión el Grupo dio audiencia a testigos en Londres (31 de julio y 1º de agosto de 1972), Ginebra (4 de agosto de 1972), Nairobi (7 de agosto de 1972), Dar es Salaam (9 a 11 de agosto de 1972), Lusaka (14 y 15 de agosto de 1972), Brazzaville (17 y 18 de agosto de 1972) y Kinshasa (21 a 23 de agosto de 1972). Más tarde el Grupo celebró una serie de reuniones en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, del 15 de enero al 2 de febrero de 1972, para examinar y aprobar sus informes a la Comisión de Derechos Humanos y al Consejo Económico y Social. Las actas de los testimonios recibidos en reuniones públicas se encuentran en los documentos E/CN.4/AC.22/RT.127 a 143, 145 y 146.

8. El Sr. Ibrahima Boye (Senegal) siguió en su cargo de Presidente y Relator, y el Sr. Branimir Janković (Yugoslavia) en el de Vicepresidente.

9. En las reuniones celebradas en Nueva York, el Sr. Edward Lawson, Director Adjunto de la División de Derechos Humanos, representó al Secretario General, y el Sr. Ilhan Lütem, Auxiliar Especial de la División de Derechos Humanos, actuó como Secretario. Durante la

misión del Grupo en Europa y Africa, del 31 de julio al 23 de agosto de 1972, el Sr. Henri Mazaud, Auxiliar Especial de la División de Derechos Humanos, actuó como Secretario Principal, y el Sr. Christo Tepavitcharov, de la División de Derechos Humanos, actuó como Subsecretario Principal. En las reuniones de Ginebra, del 17 al 26 de enero de 1973, el Sr. Lawson actuó de Secretario Principal y el Sr. Tepavitcharov, de Secretario.

## 2. Desarrollo de la investigación

10. Como en sus investigaciones anteriores, el Grupo solicitó la cooperación de los Estados Miembros, así como de las organizaciones y de particulares interesados, a fin de oír al mayor número posible de testigos y de recibir por escrito la información del caso sobre las cuestiones mencionadas en la resolución 7 (XXVII) de la Comisión de Derechos Humanos. Las medidas tomadas por el Grupo a tal efecto se exponen a continuación.

### a) Correspondencia con los gobiernos de los Estados Miembros

11. El 7 de marzo de 1972, el Presidente del Grupo Especial de Expertos envió una carta a los Ministros de Relaciones Exteriores de Guinea, Portugal, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Popular del Congo, la República de Sudáfrica, la República Unida de Tanzania, el Senegal, Zaire y Zambia, en la que les informaba del mandato del Grupo e invitaba a sus gobiernos a colaborar. En particular, se les pedía que comunicaran la información que tuviesen sobre cuestiones comprendidas en el mandato del Grupo, incluso los nombres y direcciones de personas u organizaciones que quisieran dar esa información, verbalmente o por escrito, al Grupo. El 20 de julio de 1972, el Secretario General, en nombre del Grupo, envió una nota verbal análoga al Ministro de Relaciones Exteriores de Kenia.

12. Los Gobiernos del Senegal y la República Unida de Tanzania ofrecieron expresamente su colaboración al Grupo.

13. El 12 de diciembre de 1972 el Grupo comunicó al Gobierno de Portugal, para que formulara sus observaciones, cierta información que había recibido en el curso de su investigación acerca de la suerte de ciertos presos políticos y combatientes por la libertad detenidos o capturados por las autoridades portuguesas.

### b) Relaciones con la Organización de la Unidad Africana

14. Por carta de fecha 18 de mayo de 1972, el Director de la División de Derechos Humanos, a solicitud del Grupo, informó al Secretario General Administrativo de la Organización de la Unidad Africana acerca del mandato del Grupo e invitó a dicha Organización a que continuara brindando su colaboración al Grupo y le comunicara en particular toda información pertinente, así como los nombres y direcciones de las personas que pudieran estar dispuestas a dar dicha información, verbalmente o por escrito.

### c) Correspondencia con organizaciones no gubernamentales y con particulares

15. Por carta de fecha 16 de febrero de 1972, el Director Adjunto de la División de Derechos Humanos, a solicitud del Grupo, señaló el mandato de éste a la atención de las diversas organizaciones no gubernamentales que se ocupan de los derechos humanos en

África meridional y en los territorios africanos bajo dominación portuguesa, entre las que figuran particularmente muchos movimientos de liberación africanos que han colaborado con el Grupo en sus investigaciones anteriores. Se pidió a las organizaciones que comunicaran toda la información pertinente, así como los nombres y direcciones de testigos. El 23 de mayo de 1972 se dirigió a esas organizaciones otra carta en la que se confirmaban los objetivos y las cuestiones de interés para el Grupo. Los nombres de la mayoría de los testigos a quienes el Grupo recibió en audiencia fueron comunicados por dichas organizaciones. A petición del Grupo de Expertos, la División de Derechos Humanos dirigió una carta al Padre Luis Alfonso da Costa, Missionari Comboniani, Roma, quien contestó enviando una declaración por escrito.

d) Testimonios recibidos

16. En 1972, el Grupo recibió en audiencia a 68 testigos, que hicieron declaraciones sobre las cuestiones mencionadas en la resolución 7 (XXVII) de la Comisión de Derechos Humanos. Uno de estos testigos fue oído a puertas cerradas, a su propia solicitud. A continuación figura la lista de todos los testigos que rindieron testimonio en reuniones públicas, distribuidos según los países y territorios sobre los cuales prestaron declaración. Ha de advertirse que dos de los testigos declararon sobre más de un país o territorio. Los nombres de las personas que declararon acerca del sistema de contratación de trabajadores africanos y otros asuntos afines están marcados con un asterisco.

i) República de Sudáfrica

17. Declararon 17 testigos. Uno de ellos lo hizo a puerta cerrada. Los 16 testigos que declararon en sesión pública son los siguientes: Reverendo Wilfred Jackson (RT.127, Londres); Sr. David Sibeko (RT.128, Londres); Sr. Quentin Jacobsen (RT.129, Londres); Reverendísimo Gonville French-Beytagh (RT.130, Londres); Sr. Martin Ennals (RT.130, Londres); Sr. Hugh F. Lewin (RT.130, Londres); Sr. George Mbele (RT.130, Londres); Sr. N. Valticos\* (RT.131, Ginebra); Sr. Joe Kuzwayo (RT.132, Nairobi); Sr. Teophilus M. Bidi (RT.133, Dar es Salaam); Sr. Elias L. Ntloedibi (RT.133, Dar es Salaam); Sr. Cyprian Manyanda (RT.135, Dar es Salaam); Sr. Nathaniel Honono (RT.137, Lusaka); Sr. Lennox Diliza Lande (RT.137, Lusaka); Srta. Edna Mgabaza (RT.138, Lusaka); Sr. Duma Nokwe (RT.138, Lusaka).

ii) Namibia

18. Los 11 testigos siguientes declararon en sesión pública: Mons. Colin Winter (RT.129, Londres); Sr. Martin Ennals (RT.130, Londres); Sr. N. Valticos\* (RT.131, Ginebra); Sr. Jackson Kambode\* (RT.132, Nairobi); Sr. Aaron Shindjoba (RT.132, Nairobi); Sr. Karuete Shapumba Illonga\* (RT.132, Nairobi); Sr. Andreas Shipanga (RT.134, Dar es Salaam); Sr. Moses Garoeb (RT.138, Lusaka); Sr. Peter Nanyemba (RT.138, Lusaka); Sr. Solomon Mifima (RT.138, Lusaka); Sr. Jesaya Nyamu (RT.138, Lusaka).

iii) Rhodesia del Sur

19. Los diez testigos siguientes declararon en sesión pública: Srta. Judith Todd (RT.127, Londres); Sr. Guy Clutton-Brock (RT.128, Londres); Sr. Michael Mawema\* (RT.128 y 129, Londres); Sr. Jacob Moyo (RT.129, Londres); Sr. Herbert Musikavanu (RT.129, Londres);

Sr. Martin Ennals (RT.130, Londres); Sr. N. Valticos\* (RT.131, Ginebra); Sr. Attwell Bokwe\* (RT.138, Lusaka); Sr. Richard G. Hove\* (RT.139, Lusaka); Sr. Washington Malianga\* (RT.139, Lusaka).

iv) Angola

20. Los 26 testigos siguientes declararon en sesión pública: Sr. Martin Ennals (RT.130, Londres); Sr. N. Valticos\* (RT.131, Ginebra); Sr. Pascal Luvualu\* (RT.139, Lusaka); Sr. Paulo Jorge\* (RT.139, Lusaka); Sr. Makuna Mwonyo (RT.139, Lusaka); Sr. Lumeu Chikulu (RT.139, Lusaka); Sr. Yata Nsamba (RT.139, Lusaka); Comandante Joao Jacob Caetano (RT.140 y 141, Brazzaville); Sr. Muila Mavungo (RT.140, Brazzaville); Sr. Luiz Sebastiao Mateus (RT.140, Brazzaville); Sr. Tomás Manuel (RT.140, Brazzaville); Sr. César Armando\* (RT.140, Brazzaville); Sr. Mario de Andrade (RT.141, Brazzaville); Sr. Sebastien Lubaki (RT.142, Kinshasa); Sr. Samuel Abrigada (RT.142, Kinshasa); Sr. Jose Adao Gomes\* (RT.142, Kinshasa); Sr. Manuel Miranda (RT.143, Kinshasa); Sr. Antonio Martins (RT.143, Kinshasa); Sra. Marta Fernandes de Brito (RT.143, Kinshasa); Sr. Joao Ngonga (RT.143, Kinshasa); Sr. Pedro Vida Garcia\* (RT.143, Kinshasa); Sr. Domingo Sebastiao Sobrinho\* (RT.143, Kinshasa); Dr. Sebastiao Roberto (RT.145, Kinshasa); Sr. François Lele (RT.146, Kinshasa); Sr. Joseph Panda (RT.146, Kinshasa); Sr. Louis Kiala (RT.146, Kinshasa).

v) Mozambique

21. Los 11 testigos siguientes declararon en sesión pública: Sr. Martin Ennals (RT.130, Londres); Sr. N. Valticos\* (131, Ginebra); Sr. Joaquim Chissano (RT.135, Dar es Salaam); Sr. Jose Ngolombe (RT.135, Dar es Salaam); Sr. Corneliu Conforme Chauque (RT.135, Dar es Salaam); Srta. Mariana Matola (RT.136, Dar es Salaam); Sr. Silvestre Mueda (RT.136, Dar es Salaam); Sr. Ernesto Njologola (RT.136, Dar es Salaam); Sr. Faustino Kambeu (RT.138, Lusaka); Sr. Absalom Bahule (RT.138, Lusaka); Sr. Jack Ntundumula (RT.138, Lusaka).

22. Después de haber indicado su nombre, edad y profesión, cada testigo fue invitado a prestar juramento o a hacer una declaración solemne. Las fórmulas propuestas eran las siguientes:

"Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad",

o bien,

"Declaro solemnemente, por mi honor y mi conciencia, que diré la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad."

El Presidente explicó a cada testigo la finalidad de la investigación emprendida por el Grupo y le preguntó si deseaba hacer alguna declaración. Después de haber oído la declaración del testigo, cada miembro del Grupo tuvo ocasión de hacerle preguntas. En ciertos casos el testigo no hablaba ni comprendía ninguno de los idiomas de trabajo de las Naciones Unidas, y el Grupo tuvo entonces que recurrir a intérpretes contratados localmente. Los intérpretes juraron o declararon solemnemente que harían todo lo posible por interpretar con fidelidad las declaraciones formuladas en las sesiones.

23. Además de estas declaraciones orales, el Grupo recibió cierto número de comunicaciones escritas sobre varias de las cuestiones pertinentes a su mandato.

24. En Zaire el Grupo visitó un hospital situado en un campamento de refugiados angolanos en las proximidades de Kinshasa, donde oyó declaraciones de refugiados enfermos y combatientes por la libertad heridos, procedentes del interior de Angola.

25. El 7 de agosto de 1972, al comenzar su reunión en Nairobi, el Grupo oyó una declaración del Sr. Don-Nanjira, representante del Gobierno de Kenia (RT.132). El 9 de agosto de 1972, en su primera reunión en Dar es Salaam, el Grupo oyó al Sr. Elinewinga, Ministro de Desarrollo y Energía Hidráulicos, y Ministro Interino de Relaciones Exteriores de la República Unida de Tanzania (RT.133). El discurso pronunciado por el Sr. Elinewinga y la declaración hecha por el Presidente del Grupo figuran en el anexo I.

26. El 17 de agosto de 1972, durante su estancia en Brazzaville, el Grupo oyó una alocución del Sr. Ndengue, Ministro Interino de Relaciones Exteriores de la República Popular del Congo (véase el anexo II).

27. El 23 de agosto de 1972, durante su estancia en Kinshasa, el Grupo oyó una alocución del Sr. Karl-I-Bond Ngunza, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Zaire (véase el anexo III).

28. El Grupo había planeado visitar el Senegal, incluida la región de Casamance, para recibir otros testimonios relativos a la situación en Guinea (Bissau), pero no pudo hacerlo.

I. NORMAS INTERNACIONALES PERTINENTES A LAS CUESTIONES MENCIONADAS EN LA  
RESOLUCION 7 (XXVII) DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

29. Estas normas internacionales -convenciones, declaraciones y algunas resoluciones de la Asamblea General- han sido citadas o resumidas en informes anteriores del Grupo, especialmente en su informe correspondiente a 1970 (E/CN.4/1020, párrs. 31 a 70). En vista de la información detallada que se proporcionó en ese informe, y a falta de acontecimientos importantes a este respecto desde 1970, estas normas se mencionarán aquí sólo brevemente. Las normas básicas que rigen todas las actividades del Grupo son las de la Carta de las Naciones Unidas (en especial el inciso 3 del Artículo 1, el inciso 2 del Artículo 2 y los Artículos 55 y 56) y las disposiciones generales de la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 2 y 7), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (artículos 2 y 3) y los Pactos (inciso 2 del artículo 2 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; inciso 1 del artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos). Todas estas disposiciones prohíben cualquier discriminación, y en especial cualquier discriminación racial.

A. Normas relativas a la pena capital

30. El Grupo tuvo especialmente en cuenta las siguientes normas:

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3;

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 5;

Pacto de Derechos Civiles y Políticos artículos 6, 14 y 15;

Las disposiciones pertinentes de los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (véase el documento E/CN.4/1020, párrs. 40 y 41);

Las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.

B. Normas relativas al trato de los presos políticos  
y combatientes por la libertad capturados

31. Se hace mención de las siguientes normas:

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10;

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, incisos a) y b) del artículo 5;

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 7, 9 y 10;

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por el Consejo Económico y Social en su resolución 663 C (XXIV) del 31 de julio de 1957;

Las disposiciones pertinentes de los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (véase el documento E/CN.4/1020, párrs. 45 y 46);

La resolución 2674 (XXV) de la Asamblea General sobre el respeto de los derechos humanos en los conflictos armados.

C. Normas relativas a la situación de los africanos en las "reservas" y en los "campamentos de tránsito"

1. Residencia y circulación de las personas

32. Se han tenido especialmente en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 13), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5) y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (artículos 4 y 12).

2. Derecho a no ser privado arbitrariamente de la propiedad

33. Se han considerado especialmente pertinentes las siguientes normas: artículo 17 de la Declaración Universal; inciso 2) del artículo 1 de los dos Pactos de derechos humanos; resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General.

3. Libertad de expresión, de reunión y de asociación, y derecho de acceso a las funciones públicas

34. Se mencionan en especial los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal, los apartados viii) y ix) del inciso d) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y los artículos 19, 21, 22 y 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

4. Derechos relativos al trabajo; prohibición del trabajo forzoso

35. Se han tomado especialmente en cuenta el artículo 23 de la Declaración Universal, el Convenio Nº 105 de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso, el Convenio Nº 111 de la OIT relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, el apartado i) del inciso e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y los artículos 6 y 7 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

5. Derecho a un nivel de vida adecuado, incluso la alimentación, el vestido y la vivienda

36. Las normas consideradas fueron el artículo 25 de la Declaración Universal, el apartado iii) del inciso e) del artículo 25 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

6. Derechos relativos a la salud

37. Se menciona el artículo 25 de la Declaración Universal, el apartado iv) del inciso e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el artículo 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

7. Derechos relativos a la educación

38. Se ha tomado especialmente en cuenta el artículo 26 de la Declaración Universal, la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, los apartados v) y vi) del inciso e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y los artículos 13 y 15 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

D. Normas pertinentes a las graves manifestaciones del apartheid en Sudáfrica y a las graves manifestaciones de colonialismo y discriminación racial en Namibia, Rhodesia del Sur y los territorios africanos bajo dominación portuguesa

39. Sin perjuicio de otras disposiciones (véase la sección C), se ha dado especial atención al artículo 6 de la carta del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (resolución 96 (I) de la Asamblea General), a la Convención de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio (en especial los artículos I, II, III y IV), a los artículos 129 y 130 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato de los prisioneros de guerra y a los artículos 146 y 147 del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, y también a los artículos I y II de la Convención Internacional de 1968 sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y las recomendaciones de la Conferencia de Teherán que fueron aprobadas por la Asamblea General (en especial, la resolución VIII de la Conferencia).



## II. SUDAFRICA

### A. Pena capital

#### 1. Algunas leyes pertinentes

40. En un informe anterior del Grupo (E/CN.4/1020, párrs. 73 a 81) y en documentos anteriores de distribución general, se reproducen o examinan las leyes sudafricanas vigentes que establecen la pena de muerte.

41. Se recordará que el número de delitos castigados con la pena de muerte aumentó considerablemente a partir de 1950. También es verdad que el número de las ejecuciones de condenados a muerte es mucho mayor en Sudáfrica que en cualquier otro país del mundo.

42. Se recordará especialmente que dos leyes dirigidas contra los opositores a la política del apartheid, a saber, la General Law Amendment Act (1962), llamada "Sabotage Act" (Ley de sabotaje) 1/ y la Terrorism Act (1967) (Ley del terrorismo) 2/, establecen la pena de muerte para castigar ciertos delitos. Como se indica en un informe anterior del Grupo (E/CN.4/1020, párrs. 75 y 76), en virtud de la Ley de sabotaje de 1962 algunos delitos relativamente poco importantes fueron transformados en delitos de sabotaje y se hicieron punibles con las penas correspondientes a la traición, incluida la pena de muerte, cuando su objeto fuera producir algunos de los efectos enumerados en la Ley. Con frecuencia, dichos efectos se definen de un modo general e incluyen, por ejemplo, cualquier acto encaminado a "poner obstáculos a la administración de los asuntos públicos" (artículo 2, 2), j)). La carga de la prueba de que el delito no se cometió con la intención de producir algunos de esos efectos incumbe al acusado (artículo 2, 2)). Se señaló también (E/CN.4/1020, párr. 77) que varias de las disposiciones procesales de la Ley de sabotaje no estaban de acuerdo con las normas internacionales pertinentes de la Declaración Universal y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ni con los principios generalmente aceptados respecto de los delitos que pueden ser castigados con la pena capital; por ejemplo, la Ley establece un proceso sumario sin instrucción preliminar; el juez no puede dictar una sentencia suspendida, y las personas absueltas del delito de "sabotaje" pueden ser procesadas por cualquier otra acusación que se derive de los mismos hechos alegados.

43. En virtud de la Terrorism Act (1967) (Ley del terrorismo), toda persona que intente "poner en peligro el mantenimiento del orden público en la República", será culpable del delito de terrorismo en ciertas circunstancias y castigada con las penas previstas para el delito de traición, incluida la pena capital. El fiscal debe probar que el acto en cuestión probablemente producirá algunos varios efectos, inclusive "poner obstáculos a la administración de los asuntos públicos". Como en el caso de la Ley de sabotaje, la carga de la prueba de su inocencia incumbe al acusado. La Ley se dictó con un

---

1/ Reproducida íntegramente en el documento E/CN.4/AC.22/6, anexo IV.

2/ Reproducida íntegramente en el primer informe del Grupo, E/CN.4/950, anexo IV.

efecto retroactivo de cinco años (artículo 9, 1)), en contravención a las disposiciones de la Declaración Universal y el Pacto, y en ella aparecen disposiciones procesales análogas a las de la Ley de sabotaje (véase el párrafo 42).

2. Análisis de la información y las pruebas recibidas por el Grupo Especial de Expertos

a) Información relativa a las sentencias y ejecuciones cumplidas por decisión judicial

44. En el informe anterior del Grupo (E/CN.4/1050, párrs 48 a 50) se reproduce y examina material estadístico emanado del Informe Anual del Departamento de Prisiones, de fecha 30 de julio de 1970, en el que se afirma que en el período comprendido entre el 1º de julio de 1968 y el 30 de junio de 1969 el número de sentencias de muerte dictadas fue de 107 y el de personas ejecutadas de 84. Las 107 personas sentenciadas a muerte en ese período se sumaban a otras 59 que habían sido sentenciadas antes del 1º de julio de 1968 pero cuya ejecución no se había producido hasta esa fecha. Así pues, el número total de personas sentenciadas a muerte que estaban en prisión en 1968-1969 ascendía a 166.

45. Según la información de que dispone el Grupo, 80 personas fueron ahorcadas en Sudáfrica en el período terminado el 30 de junio de 1970 3/. Se dijo que ello equivalía a un 30% menos que en el anterior período de 12 meses. Esa cifra figuraba entre las estadísticas del informe anual del Comisionado de Prisiones presentado al Parlamento el 25 de marzo de 1971 y representaba la primera disminución importante del número de ejecuciones desde la segunda guerra mundial. Durante el año que se examina, se conmutó la pena a 28 personas sentenciadas a muerte, tres ganaron apelaciones y a dos se les concedió un nuevo proceso. Al 30 de junio de 1970, 47 reclusos aguardaban ser ejecutados. Casi todos ellos eran africanos. En el informe del Comisionado de Prisiones correspondiente al período comprendido entre el 1º de julio de 1970 y el 30 de junio de 1971 4/ se indicaba que en ese lapso habían ingresado en las penitenciarías 100 reclusos sentenciados a la pena capital, de los cuales 68 eran africanos (dos mujeres), 28 de color, 3 blancos y 1 asiático. Al 31 de junio de 1971, estaban recluidos 41 presos sentenciados a muerte.

46. En cuanto al hecho de que las estadísticas demostraban que las personas ejecutadas eran en su mayoría africanos, ese aspecto racial de las sentencias de muerte dictadas por los tribunales fue destacado por tres distinguidos abogados 5/, que tuvieron que prestar testimonio en el proceso seguido en 1970 contra el Dr. Barend van Niekerk, acusado de desacato a los tribunales a raíz de la publicación de un artículo sobre las sentencias de muerte 6/ en la revista jurídica sudafricana. El Dr. van Niekerk fue absuelto antes de que la defensa completara su caso. Posteriormente, Acta Jurídica, publicación

3/ The Times, Londres, 26 de abril de 1971.

4/ RP/101/71, Government Printer, Pretoria.

5/ Guardian, 9 de agosto de 1971.

6/ Mencionado en el documento E/CN.4/1050, párr. 54. Véase también el South African Law Journal (revista jurídica sudafricana), noviembre de 1969 y febrero de 1970.

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cape Town, reprodujo los argumentos de la defensa. Los abogados, los Sres. Res Welsh, Sidney Kentridge y C. Plewman, afirmaron que existían "pruebas positivas" de que entre 1947 y 1969 habían sido sentenciados a muerte por violación más de 120 no blancos. En el mismo período sólo se dictó sentencia de muerte contra tres personas blancas. Sin embargo, en el período comprendido entre 1947 y 1966, 288 blancos fueron declarados culpables de violación de mujeres no blancas, mientras que 844 no blancos resultaron culpables de violación de mujeres blancas. "Es, pues, evidente", decía la declaración, "que las cifras correspondientes a las sentencias de muerte no guardan relación con las relativas a las acusaciones o fallos condenatorios. Esa es una discrepancia que requiere explicación". Se señaló que en ese período ninguno de los 288 blancos había sido sentenciado a muerte por violación pero sí lo fueron 121 no blancos. Esa cifra, así como las relativas a las sentencias por homicidio, "exigen una investigación completa de los aspectos raciales de la sentencia de muerte" y ello podía explicarse "sólo mediante la hipótesis de una política deliberada con respecto a los fallos".

47. El Sr. Ennals destacó (RT.130, pág. 30) la elevada frecuencia de la pena capital en Sudáfrica, dirigida casi exclusivamente contra la población africana. El Sr. Lewin (RT.130, págs 77 y 87 a 92) dijo que en 1966, había estado durante ocho meses entre los presos políticos blancos confinados en la Prisión Central de Pretoria, que era la "cárcel de la horca", donde se llevaban a cabo todas las ejecuciones. Todos los reclusos sentenciados a muerte eran conducidos a esa prisión. El único lugar donde se mezclaban individuos de distintas razas era la sección de los condenados de la penitenciaría, aunque en celdas independientes para blancos y africanos. Ello ocurrió así hasta principios de 1970, fecha en que se construyó detrás de la Prisión Central un "pabellón de ahorcamiento" totalmente nuevo. Ello significa que las escenas que había presenciado en 1966 sólo podrían verlas en adelante los propios condenados. Durante el período en que el testigo estuvo en prisión, más de 100 presos aguardaban cada semana su sentencia definitiva o el resultado de sus apelaciones. El orador había pasado frente al tablón de anuncios del salón principal, donde figuraban las cifras. Cada mañana, los presos que iban de sus celdas a los talleres de la penitenciaría tenían que pasar frente a un muro con una pequeña puerta, a la derecha de la cual se alzaba el alto edificio de las horcas y el depósito de cadáveres al lado, y dos veces por semana se tenía habitualmente a los presos aguardando a veces hasta media hora, mientras se oían ruidos de golpes al otro lado de la pared. Esos golpes, según se supo, eran los de los clavos al ser introducidos en los ataúdes de quienes acababan de ser ejecutados. Ello sucedía normalmente los martes y jueves. A menudo había aserrín en el piso por donde caminaban los presos, y a veces el aserrín no era suficiente y se veía la sangre. El testigo describió (página 91) el caso de una mujer que, profiriendo gritos de agonía, fue arrastrada al patio exterior adyacente a la ventana de su celda. Supo después que se trataba de una joven madre, sentenciada a muerte por haber asfixiado a su hijo, a la que habían traído del pabellón de mujeres en camisa de fuerza para ser ahorcada. El testigo se refirió en su deposición (página 96) al efecto de las ejecuciones, no sólo sobre el resto de los reclusos sino también sobre los guardias. Mencionó el caso de un joven guardia que había asistido a su primera ejecución de cinco reclusos y que manifestó que nunca se había percatado de que había tanta sangre. La piel de la cara de uno de esos ejecutados había sido arrancada totalmente por la soga cuando cayó al suelo. El testigo señaló que la violencia de la pena capital producía efectos sobre la sociedad y repercutía en toda ella.

b) Presuntas violaciones del derecho a la vida

48. El informe anterior del Grupo (E/CN.4/1050, párr. 59), incluía información sobre la muerte de 16 presos políticos, en circunstancias dudosas. El Grupo desea hacer constar que ha recibido pruebas de otros casos análogos, principalmente los siguientes:

- a) El del Sr. Ahmed Timol, quien fue detenido en virtud de la Ley del terrorismo el 22 de octubre de 1971 y falleció el 27 de ese mes al caer desde el décimo piso del cuartel de la policía de seguridad;
- b) El del Sr. Mthayeni Cutshela, quien fue detenido el 21 de diciembre de 1970 en relación con el proceso seguido a los miembros del Unity Movement y falleció tras un intenso interrogatorio;
- c) El del Sr. Moffat Qusane, quien, según declaró un testigo (el Sr. Bidi, RT.133, pág. 31), se suicidó después de un prolongado período de detención en poder de las autoridades sudafricanas a las que había sido entregado por el Gobierno portugués de Mozambique.

En la sección siguiente se facilita más información sobre estos tres casos.

B. Trato dado a los presos políticos y a los combatientes por la libertad capturados

1. Algunas leyes pertinentes

49. Muchas leyes promulgadas desde 1950 autorizan el arresto, tanto antes del proceso como después de dictada la decisión judicial, de las personas sospechosas o declaradas culpables de haber participado en actividades contrarias a la política de apartheid. Todas esas leyes han sido reproducidas íntegra o parcialmente en anteriores documentos de distribución general. Las leyes que autorizan la detención de personas que se sospecha han cometido algún delito político, e incluso el conocimiento de un delito semejante, junto con la información relativa a la aplicación de esas leyes, se examinan detenidamente en el informe del Comité Especial del Apartheid (A/8770, de 26 de septiembre de 1972), que ha sido transmitido a la Comisión de Derechos Humanos en cumplimiento de la resolución 2923 A (XXVII) de la Asamblea General.

50. Una característica común de la Suppression of Communism Act (Ley de represión del comunismo), Nº 44 de 1950, en su forma enmendada, la General Law Amendment, Nº 76 de 1962, la llamada "Sabotage Act" (Ley de sabotaje) 7/ y la Terrorism Act (Ley del terrorismo), Nº 83 de 1967 8/, consiste en que establecen la pena de prisión para delitos definidos de un modo muy general.

51. Las leyes que autorizan el arresto de las personas sin acusación ni juicio previos son: el artículo 17 de la General Law Amendment Act, Nº 37 de 1963 ("Ley de los 90 días"

---

7/ Véase el documento E/CN.4/AC.22/6.

8/ Véase el documento E/CN.4/950, anexo IV.

reemplazada por la "Ley de los 180 días"); el artículo 215 bis de la Criminal Procedure Act (Ley de procedimientos penales) Nº 96 de 1965 ("Ley de los 180 días"); el artículo 22 de la General Law Amendment Act, Nº 62 de 1966 9/; el artículo 6 de la Ley del terrorismo, Nº 83 de 1967 y, por último, el Decreto 400 de 1960, que rige en el territorio del Transkei. Ese decreto fue dictado en 1960 durante la "crisis del Transkei", pero se ha transformado en un elemento permanente de la Ley. Entre otras cosas, permite la detención indefinida sin proceso (véase el documento A/8770, párrs. 60 y 61).

52. En 1971 se promulgó la Abuse of Dependence-producing Substances and Rehabilitation Centres Act (Ley sobre toxicomanía y centros de rehabilitación), Nº 41 de 1971, que autoriza la detención sin enjuiciamiento de cualquier persona de la que se sospecha posee información relativa a la tenencia o el tráfico de estupefacientes "hasta que respondiere satisfactoriamente a todas las preguntas" (artículo 13). Los detenidos pueden estar incomunicados.

53. Se recordará que la General Law Amendment Act de 30 de junio de 1969, llamada "Boss Law" (Ley del amo), fue examinada en informes anteriores (véanse los documentos E/CN.4/1020, párrs. 101 a 105 y E/CN.4/1050, párrs. 68 y 69). Según el artículo 29 de la Ley, nadie podrá prestar testimonio ante un Tribunal -al parecer ni para presentar su propia defensa en actuaciones penales- sobre ninguna cuestión acerca de la que el Primer Ministro o las personas autorizadas por él certifiquen que que afectará los intereses del Estado o la seguridad pública. A raíz de los trabajos de la comisión investigadora creada en septiembre de 1969 para estudiar la Ley (véase el documento E/CN.4/1050, párr. 70), el Gobierno promulgó la General Laws Amendment Act de 1972 que, al modificar la cláusula 10, establecía que la persona que cometiera un delito con arreglo a la Official Secrets Act (Ley sobre los secretos de Estado) lo hacía a sabiendas; y al enmendar la cláusula 29, exigía una declaración jurada en lugar de un certificado firmado por el Ministro responsable cuando, por razones de seguridad del Estado, no se permitiera prestar testimonio ante un tribunal. La misma Ley modificó el artículo 7 de la Transkei Constitution Act, (Ley de Constitución del Transkei) de 1963, por la que se transfería al Gobierno del Transkei el control de la policía en el Transkei, con exclusión de los sectores blancos; y la Bantu Laws Amendment Act de 1972 transfirió el control de las prisiones del Transkei al Gobierno de éste. El Gobierno promulgó también la Security Intelligence and State Security Council Act, Nº 64 de 1972 10/. Esta Ley definía las funciones de la Oficina de Seguridad del Estado y creaba un Consejo de Seguridad del Estado, cuyas funciones consistían en "formular la política y estrategia nacionales en relación con la seguridad de la República y con la forma en que dicha política o estrategia debía ser cumplida y ejecutada". Al adoptarse esa medida, se omitieron tres recomendaciones esenciales sobre el sistema de seguridad hechas

9/ El artículo 22 autoriza a cualquier oficial de policía comisionado a proceder, sin orden judicial, al arresto de un sospechoso por 14 días y por los nuevos períodos que de tanto en tanto fije cualquier miembro de la Corte Suprema. El propósito de la disposición consistía aparentemente en permitir la detención de las personas en Namibia, donde no se aplicaban las leyes de los "90 días" y de los "180 días". Dicha norma tuvo poca aplicación, dado que el año siguiente se promulgó la Ley del terrorismo.

10/ Government Gazette, 14 de junio de 1972, Nº 3554.

por la comisión investigadora, que implicaban la delimitación de las disposiciones de la General Laws Amendment Act sobre la publicación de cuestiones relativas a la seguridad del Estado 11/. Una de esas cuestiones, relacionada con la prohibición de prestar determinado testimonio ante los tribunales, se incluyó en las disposiciones de la General Laws Amendment Act, 1972 (véase supra).

54. Las personas sentenciadas a pena de prisión y, con algunas excepciones, las detenidas antes del proceso caen dentro del ámbito de la Prisons Act (Ley de prisiones) Nº 8 de 1959, en su forma enmendada 12/, y las normas dictadas de conformidad con esa Ley 13/. Se recordará en especial que el artículo 23 i) b) de la Ley de prisiones establece la separación de presos blancos y no blancos, y que el artículo 36 autoriza el castigo corporal. Los artículos 103, 104 y 110 de la ley reglamentaria incluyen disposiciones relativas a las quejas y solicitudes de los presos, a sus relaciones familiares y a las visitas de jueces y magistrados. La Prisons Amendment Act Nº 9 de 1971 14/ establece la descentralización de los pabellones de la prisión (artículo 1); pero modifica también los castigos impuestos a los presos por contravenir al reglamento de la prisión (cláusula 5). El reglamento anterior limitaba el plazo de reclusión en celda solitaria a 6 días a dieta reducida y a 15 días con trabajos livianos. Ello se modificó disponiendo la reclusión en celda solitaria, junto con el castigo en materia de alimentación, por un período "que no excediera de 30 días". La duración del castigo y la reducción de los alimentos prescritas se rigen ahora por la ley (artículo 5 b) ii)). Pese a las enérgicas objeciones en cuanto a la duración del plazo de reclusión en celda solitaria, expuestas en la Asamblea por la Sra. Helen Suzman, miembro del Parlamento, la medida fue aprobada sin modificación 15/.

55. Como consta en el informe anterior del Grupo (E/CN.4/1050), se arrestó y encarceló a un gran número de africanos por delitos cometidos con arreglo a "leyes aprobadas", en especial la Bantu (Abolition of Passes and Co-ordination of Documents) Act de 1952, en su forma enmendada; la Bantu (Urban Areas) Consolidation Act de 1945, en su forma enmendada; y las leyes laborales bantúes, principalmente la Bantu Labour Regulations de 1965 y la Bantu Labour Regulations (Bantu Areas) de 1968 16/. En junio de 1971, el Viceministro de administración bantú anunció que el Gobierno tenía el propósito de instaurar un nuevo sistema en cuanto al trato de los transgresores de la Ley de pases, a través de los "centros de socorro" y los "centros de rehabilitación" de los territorios patrios. Las disposiciones relativas a ese sistema están contenidas en el artículo 12 de la Bantu Laws Amendment Act, Nº 42 de 1964. Ya se han creado varios "centros de socorro" y se establecerán otros. Los centros de socorro tratarán de "legalizar" la

---

11/ The Times, Londres, 17 de mayo de 1972.

12/ Véase el documento E/CN.4/AC.22/6, anexo V.

13/ Ibid., anexo IV.

14/ Government Gazette, Nº 3031 de 24 de marzo de 1971.

15/ House of Assembly Debates (Hansard) 2, cols. 430 a 437; 489 a 494.

16/ Véanse los documentos E/4559, párrs. 83 y 84, y E/4791, párrs. 43 y 44.

situación de los transgresores técnicos, poniéndose en contacto con sus empleadores, la oficina laboral local o la autoridad del "territorio patrio"; si pudiera "legalizarse" su situación, no tendrían que ir a prisión, pero, en caso contrario, serían encarcelados o enviados a los "centros de rehabilitación" 17/.

## 2. Análisis de las informaciones y testimonios recibidos

### a) Información relativa al trato de los combatientes por la libertad capturados

56. Varios testigos, incluso los Sres. Bidi (RT.133, págs. 29 a 31 y 67), Sibeko (RT.128, págs. 71 a 75) y Ennals (RT.130, pág. 132), junto con una comunicación escrita de fecha 3 de agosto de 1972, dirigida posteriormente al Grupo, depusieron acerca de combatientes por la libertad capturados que habían sido entregados en 1968 a la Policía sudafricana por las autoridades portuguesas de Mozambique. Se trataba de Marcus Mokgotle, Sidney Mbuyazwe y Moffat Qusana, miembros los tres del Pan-Africanist Congress, capturados mientras se dirigían a Sudáfrica. El Sr. Ennals (RT.130, pág. 32) dijo que Mokgotle y Mbuyazwe habían sido posteriormente testigos de cargo en el enjuiciamiento de seis miembros del Pan-Africanist Congress en el Estado libre de Orange en 1971. El Sr. Ennals (RT.130, pág. 32) comunicó al Grupo que se había pedido al Comité Especial del Apartheid que investigara esos casos tomando como base el hecho de que las autoridades portuguesas habían transgredido la Convención Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados. El Pan-Africanist Congress había pedido que esos hombres fueran entregados a la Cruz Roja para su repatriación a Tanzania, donde se les había ofrecido asilo político. Para desmentir las declaraciones del Gobierno sudafricano, en el sentido de que esos hombres no estaban en el país, el Sr. Ennals adjuntó una fotocopia de las tres primeras páginas de las actas judiciales del proceso seguido a esas seis personas en la Corte Suprema, División del Estado libre de Orange, en las que se mencionaba a Marcus Mogatele (sic), como testigo de cargo. El Sr. Sibeko (RT.128, pág. 96) dijo que los que fueron obligados a deponer en favor del Estado en el caso Welkom habían sido sometidos a torturas, entre otros métodos, con dispositivos eléctricos. El Sr. Bidi (RT.133, págs. 31 y 67) dijo que a partir de diciembre de 1971, en que estuvo bajo custodia policial, no se habían recibido noticias sobre el paradero de Sidney Mbuyazwe, y que se decía que, según la versión oficial, Qusane había fallecido, suicidándose.

### b) Fallecimiento de presos políticos en circunstancias sospechosas

57. En los dos informes previos del Grupo (E/CN.4/1020, párrs. 96 y 146 a 153, y E/CN.4/1050, párrs. 59 a 60 y 80 a 86) se mencionó la muerte de varios detenidos políticos desde 1963, en circunstancias que se pueden considerar sospechosas. Los nombres de los fallecidos de los que el Grupo tuvo conocimiento son los siguientes:

Sr. "Lookmart" Solwandle Ngudle, "a quien se encontró ahorcado en su celda" el 5 de septiembre de 1963;

Sr. Suliman Saloojee, que falleció el 9 de septiembre de 1962 después de caer desde el 7º piso del Cuartel General de la Policía de Seguridad, donde lo estaban interrogando;

17/ Véase Survey of Race Relations, 1971, op. cit., págs. 143 y 144.

Sr. James Tyitya, "a quien se encontró ahorcado en su celda" en enero de 1964;

Sr. Leong Yum Pin, la misma declaración oficial (19 de noviembre de 1966);

Sr. James Hamakwayo, la misma declaración oficial (no se conoce la fecha exacta);

Sr. Ah Yan, la misma declaración oficial (5 de enero de 1967);

Sr. Alpheus Maliba, la misma declaración oficial (1967, no se conoce la fecha exacta);

Sr. J. B. Tubakwe, la misma declaración oficial (11 de septiembre de 1968);

Sr. Nichodimus Kgoatle, que murió de "bronconeumonía" (4 de febrero de 1969);

Sr. Solomon Modibane, que murió por "causas naturales" (28 de febrero de 1969);

Sr. James Lenkoe (10 de marzo de 1969);

Sr. Caleb Mayekiso, la misma declaración oficial (1º de junio de 1969);

Sr. Sijso Ginenishe (julio de 1969);

Imán Hadj Abdullah Haron (27 de septiembre de 1969);

Sr. Michael Shivute, detenido el 16 de junio de 1969 en virtud de la Terrorism Act y que falleció la noche del 16 al 17 de junio de 1969. El Gobierno declaró que se había suicidado;

Sr. Jacob Monakgotla, miembro de la tribu Bakubung, acusado en virtud de la Terrorism Act que falleció el 9 de septiembre de 1969, el día anterior a la iniciación del juicio. El médico forense declaró que la muerte se debía a una trombosis. No se realizó ninguna investigación.

58. Se recordará que las circunstancias del fallecimiento del Imán Haroun, que se revelara durante la investigación, dieron lugar a protestas y una petición presentada el 15 de marzo de 1970 por un miembro de la Asamblea Legislativa de que se realizara una nueva investigación imparcial, a alto nivel, sobre las circunstancias del fallecimiento del Imán. Se anunció que la policía estaba haciendo nuevas investigaciones. El 30 de septiembre se declaró que esas nuevas investigaciones habían revelado hechos que pudieran justificar la iniciación de procedimientos judiciales.

59. Unos documentos aportados por la International Defence and Aid Fund (The Terrorism of Torture), por Hilda Bernstein, Londres, abril de 1972) muestran que, desde 1963, 19 personas detenidas habían muerto en la cárcel. En un anexo a esta publicación figura una lista de los nombres, fecha de detención, fecha de fallecimiento, causas oficiales



de la muerte. No se incluye el nombre del Sr. Sijso Ginenishe mencionado en el párrafo 57. En la lista figuran 4 nombres adicionales, incluidos los del Sr. Ahmed Timol y el Sr. Mthayeni Cutshela, respecto de los cuales el Grupo de Trabajo recibió pruebas, véanse los pasajes infra, y también los nombres del Sr. Bellington Mampe, fecha de detención desconocida, fecha de defunción 1º de septiembre de 1963, causa de fallecimiento "desconocida" y el Sr. Hangula Shonyeka, detenido el 26 de agosto de 1966, fecha de defunción "desconocida", causa "suicidio por ahorcamiento" según las pruebas que se proporcionaron en el juicio en virtud de la Terrorism Act 18/.

60. Además de las personas enumeradas, de las cuales once el Gobierno pretende que se suicidaron, por lo menos dos personas fallecieron durante la detención en virtud de la Proclamation R400 en el Transkei 19/. Estos fueron Nogeni Gaga y Pongolosha Hoyo, que fallecieron el 7 de mayo de 1965 y el 8 de mayo de 1965, respectivamente, según datos suministrados por el Ministro de Policía. De ambos se dijo que habían fallecido de "causas naturales". Además, en testimonios obtenidos por el Grupo de Trabajo se mencionó otro caso, el del Sr. Moffat Qusana, que también se supone que falleció después de haber sido detenido (véase el párrafo 63).

61. Las pruebas sobre el fallecimiento del Sr. Mthayeni Cutshela fueron proporcionadas por el Sr. Honono (RT.137, pág. 11) y fueron confirmadas por la prueba escrita facilitada por la Srta. E. D. M. Wilcox y el International Defence and Aid Fund. Se declaró que el Sr. Cutshela, de 68 años de edad, había sido sacado tres veces de su casa de Bizana para ser interrogado. Más de una vez fue llevado al bosque de Mkambathi, donde la policía había establecido un campamento al que llevaban los presos para interrogarlos. Varios que posteriormente se encontraron entre los 13 miembros del Unity Movement que fueron sometidos a juicio (véase el párrafo 66) firmaron declaraciones juradas sobre el trato que habían recibido de la policía. En éstas constaban torturas permanentes, incluidos castigos constantes y tratamiento de electrochoque. Cutshela, según las declaraciones, sufrió durante su estada en el campamento de manera lamentable. Una mañana, como no se pudo levantar, lo transportaron a otro lugar. Posteriormente murió en una celda de la prisión de Umtata. Se entregó el cadáver a su hijo en un ataúd sellado. La policía retuvo el certificado de defunción, según dijo su hijo. Las pruebas de la Srta. Wilcox demuestran que, al principio, un juez se negó a hacer una investigación

---

18/ Bellington Mampe, que murió en la cárcel de Worcester en Western Cape Province, estuvo aguardando el juicio durante seis meses y fue el primer hombre que falleció en la detención de los "90 días". Hangula Shonyeka fue detenido en la prisión de Pretoria en virtud de la ley de los "180 días" el 30 de agosto de 1966 y se suicidó el 10 de octubre de 1966, según dijo el Ministro de Policía respondiendo a una pregunta en la Asamblea Legislativa el 8 de septiembre de 1970. Véase Apartheid is Built on Torture, publicado por el Centro de Información del Consejo Mundial pro Paz, Helsinki, págs. 24 y 27. Según este folleto, Ephraim Kamati Kaporo, uno de los acusados en el Namibian Terrorism Trial se enfermó en el curso de una audiencia y fue llevado al hospital donde falleció el 12 de octubre de 1967. El certificado de defunción da como causa de la muerte "causas naturales".

19/ House of Assembly Debates (Hansard), 2 y 11 de febrero de 1972, col. 164.

sobre su muerte. Después de nuevas peticiones jurídicas, se hizo la investigación y se encontró que Cutshela había muerto de causas naturales, a saber, hemorragia cerebral.

62. El caso de Ahmed Timol se mencionó en las declaraciones escritas del Pan-Africanist Congress (página 8), la All Africa Trade Union Federation (página 13) y la International Defence and Aid Fund (páginas 1 a 3). En estas declaraciones se señalaba que el Sr. Timol, maestro de escuela, fue detenido en virtud de la Terrorism Act el 22 de octubre de 1971. Falleció el 27 de octubre, después de una caída desde el décimo piso del cuartel de la Policía de Seguridad de Johannesburgo 20/. La Policía de Seguridad adujo que se había suicidado. La investigación que se realizó después de una demora de varias semanas reveló que varios miembros de la Policía de Seguridad lo habían interrogado y que el día de su muerte se lo estaba sometiendo a un interrogatorio. Los resultados de la autopsia mostraron que había sufrido varias lesiones entre 3 y 10 días antes de su muerte. El juez falló el 22 de junio de 1972 que el Sr. Timol se había suicidado y que no se podía culpar a nadie de su muerte.

63. El Sr. Bidi (RT.133, pág. 67) dijo en su deposición que el Sr. Moffat Qusana, uno de los tres combatientes por la libertad capturados que las autoridades portuguesas de Mozambique habían entregado a la policía de Sudáfrica, había sido declarado muerto, supuestamente como resultado de un suicidio. No se publicó ninguna declaración oficial acerca de este caso.

64. Por último, se observará que conforme a la información suministrada por la Asamblea Legislativa, durante 1970 la policía de Sudáfrica mató a tiros a 54 personas e hirió a otras 149. En varios casos el Grupo no pudo conseguir información que mostrara que el Gobierno de Sudáfrica hubiese realizado una investigación a raíz de la muerte sospechosa de las personas mencionadas en los informes del Grupo. No obstante, el Ministro de Policía de Sudáfrica reveló, en respuesta a una serie de preguntas, detalles de casos correspondientes a cuatro policías que fueran declarados culpables de delitos de violencia durante el año y había permitido que siguieran en servicio. Se los había declarado culpables de delitos que iban desde la tentativa de agresión hasta el intento de asesinato pero en una investigación del departamento se encontró que podían permanecer en el servicio 21/. Durante 1971 se reveló que se había declarado culpables a 181 policías de agresión simple. Otros 20 resultaron culpables de agresión con intento de cometer grave daño corporal y tres de homicidio culposo. De los policías declarados culpables de agresión simple, 27 habían sido convictos previamente 22/. De los que se encontraron culpables con intención, tres habían sido convictos previamente. Es dudoso que esas estadísticas incluyan a las personas detenidas por la Policía de Seguridad para ser interrogadas antes de su acusación por un juez y antes de entrar en prisión.

---

20/ Véase también el informe del Comité Especial del Apartheid "Maltrato y tortura de presos en Sudáfrica", A/8770, párrs. 579 a 583.

21/ Star, Johannesburgo, 13 de marzo de 1971.

22/ Rand Daily Mail, Johannesburgo, 11 de marzo de 1972.

c) Información relativa al número de presos y detenidos políticos en algunos juicios recientes

65. En el informe del Comité Especial del Apartheid (A/8770) figura información acerca de detenciones y juicios durante 1970 y 1971. Se presentaron al Grupo pruebas acerca de varios de esos juicios, entre ellos i) el juicio, con arreglo a la Terrorism Act, de 13 miembros destacados del Unity Movement de Sudáfrica incoado en Pietermaritzburg; ii) el juicio de seis miembros del Pan-Africanist Congress en Welkom, en el Estado Libre de Orange, y iii) el juicio del Dean de Johannesburgo. Con referencia a estos juicios han hecho acusaciones de tortura y malos tratos de las personas acusadas y los testigos detenidos y en la sección d) de este capítulo se volverá a tratar este tema.

i) El juicio del Unity Movement<sup>23/</sup>

66. El Sr. Honono (RT.137, páginas 7 a 21) se refirió al juicio con arreglo a la Terrorism Act de 13 miembros destacados del Unity Movement de Sudáfrica durante el cual la defensa había revelado las torturas "diabólicas" de los acusados. Este juicio duró un año, de abril de 1971 a abril de 1972, y todavía está pendiente una apelación. Se ha demostrado la pesada carga que impone a los acusados la Terrorism Act al exigir que prueben su inocencia así como la impotencia de los jueces para proteger el derecho fundamental de los individuos a un juicio imparcial y la abierta intervención del Ministro de Policía durante la sustanciación del juicio. Los testigos destacaron que a pesar de esto el Teniente Coronel Swanepoel, investigador jefe de la división de seguridad en el caso, declaró bajo juramento que consideraba que la presente legislación para combatir "el terrorismo y el comunismo" era "inadecuada para la situación actual".

67. En las declaraciones del Sr. Honono junto con las de la Srta. Wilcox (memorando escrito) se detallan los métodos de los interrogatorios policiales usados en este juicio. La Srta. Wilcox declara que cuando se cerró el proceso habían comparecido 100 testigos de cargo. La gran mayoría había sido mantenida detenidos o en custodia hasta el momento de comparecer, algunos por un período mayor de un año. Durante el interrogatorio de uno de los acusados, el fiscal de Estado había dicho: "Le sugiero que hubo por lo menos 140 detenidos que pasaron por ese campamento". Ese número de 140 no tenía en cuenta las detenciones en las zonas urbanas y otros pueblos del interior.

68. El 6 de abril de 1972 se condenó a los 13 acusados a penas de prisión que iban de cinco a ocho años por contravenciones a la Terrorism Act. El Estado se opuso a conceder fianza a seis de los acusados mientras se veía la apelación. El proceso del Sr. Joseph Tshukudu Maleka, el decimocuarto acusado cuyo juicio posteriormente se separó del resto, todavía está pendiente <sup>24/</sup>

ii) El juicio "Welkom"<sup>25/</sup>

69. El Sr. Sibeko (RT.128, pág. 66) se refirió a que se habían confirmado las condenas en apelación de cinco de los seis africanos acusados de ser miembros del ilegal

---

<sup>23/</sup> Véase también A/8770, párrs. 530 a 537.

<sup>24/</sup> Rand Daily Mail, 29 de julio de 1971.

<sup>25/</sup> Véase A/8770, párrs. 577 a 579.

Pan-Africanist Congress y de poner en práctica las actividades del movimiento mediante la organización de los jóvenes para que reciban instrucción militar. Las personas acusadas habían sido detenidas en mayo de 1971. Se informó en ese momento de que 140 africanos de Welkom habían sido puestos bajo custodia al mismo tiempo y los intentos de obtener información acerca del carácter de los cargos que se iban a hacer no tuvo ningún éxito (páginas 67 a 70).

iii) El juicio del Deán de Johannesburgo

70. El Reverendo French-Beytagh, ex deán anglicano de Johannesburgo (RT.130, págs. 3 a 27), prestó testimonio acerca de su juicio con arreglo a la Terrorism Act durante el cual se lo declaró culpable de tres de los diez cargos, a saber, utilización de dinero del Defence and Aid Fund para ayudar a presos políticos, incitar a la violencia a una organización denominada Black Sash, e incitar a la violencia a un tal Kenneth Jordaan, testigo de cargo. Se le condenó a cinco años de prisión, la sentencia mínima con arreglo a la ley, pero el tribunal de apelación posteriormente revocó la sentencia. La apelación había durado del 2 de noviembre de 1971 al 15 de abril de 1972 y el deán salió de Sudáfrica inmediatamente después por temor a volver a ser detenido. Las observaciones del Reverendo French-Beytagh sobre el trato cuando estuvo detenido se citan en las secciones pertinentes de este informe.

71. Según la información de que dispone el Grupo, en un proceso con arreglo a la Terrorism Act, James Edward April, un hombre de color, fue juzgado y declarado culpable en la Suprema Corte de Pietermaritzburg el 10 de abril de 1971 y condenado a 15 años de prisión. Se le formularon tres cargos: 1) que entre junio de 1961 y febrero de 1971, en su carácter de miembro del African National Congress y Umkonto We Sizwe había recibido instrucción en "comunismo, guerra, guerra de guerrillas, métodos de revolución, propaganda y métodos de comunicación secreta para poner en peligro el mantenimiento del orden público en la República"; 2) que entre el 2 de agosto y el 30 de agosto de 1967 entró en Rhodesia portando armas y participó en luchas armadas con la "intención de organizar e intervenir en una revolución armada en la República" y 3) que entre el 29 de diciembre de 1970 y el 17 de febrero de 1971 entró en el país con pasaporte y documentos falsificados y que tenía elementos para establecer un sistema de comunicación secreta. Los tres cargos se consideraron como uno solo a los efectos de la condena, y no se le declaró culpable del tercer cargo. En abril, dirigiéndose al tribunal dijo: "la gente desesperada recurrirá siempre a la violencia" y que habría una "victoria final del pueblo africano sobre el Gobierno fascista de Sudáfrica" 26/.

72. Según la información de que dispone el Grupo, el 13 de junio de 1972 se incoó en Pretoria un proceso a cuatro indios -uno de ellos una mujer- acusados en virtud de las leyes contra el terrorismo y el comunismo. Esas cuatro personas son Mohammed Salim Essop (22), Yousef Hassan Essack (21), Indhrasen Moodley (27) y la Sra. Amina Desai (51). Los tres hombres han estado en custodia desde octubre de 1971, fecha en que se les arrestó entre otros en una gran batida policial. La Sra. Desai fue encarcelada bajo fianza de 5.000 rands. El cargo principal en virtud de la Terrorism Act es que pusieron en

---

26/ Rand Daily Mail, Johannesburgo, 11 de mayo de 1971.

peligro el mantenimiento del orden público y conspiraron para promover la causa y la política del proscrito partido comunista de Sudáfrica o el proscrito African National Congress. Entre los cargos figura la complicidad con el Sr. Ahmed Timol, el maestro de escuela que, según la policía sudafricana, había muerto al caerse por una ventana del cuartel de la policía pocos días después de ser detenido. Los cuatro acusados fueron condenados a cinco años de prisión 27/.

73. En un memorando que la All Africa Trade Union Federation presentó al Grupo, se da un total de 809 persona que a fines de 1969 cumplían condenas de prisión en virtud de las principales leyes de seguridad del país. Respondiendo a preguntas formuladas en la Asamblea Legislativa el 18 de mayo de 1971, el Ministro de Justicia dijo que las cifras de los que cumplían condenas de prisión con arreglo a las leyes de seguridad el 1º de enero de 1971 eran las siguientes:

	<u>Blancos</u>	<u>Personas de color</u>	<u>Asiáticos</u>	<u>Africanos</u>	<u>Total</u>
<u>Terrorism Act</u>	-	-	-	49	49
<u>Unlawful Organizations Act</u>	-	-	-	125	125
<u>Suppression of Communism Act</u>	5	1	1	28	35
Sección 21, <u>General Laws</u> <u>Amendment Act de 1962</u> (sabotaje)	<u>6</u>	<u>9</u>	<u>13</u>	<u>212</u>	<u>240</u>
	<u>11</u>	<u>10</u>	<u>14</u>	<u>514</u>	<u>449</u>

En enero de 1972, las siguientes personas estaban cumpliendo condenas en virtud de las mismas leyes 28/:

	<u>Blancos</u>	<u>Personas de color</u>	<u>Asiáticos</u>	<u>Africanos</u>	<u>Total</u>
<u>Terrorism Act</u>	-	1	-	50	51
<u>Unlawful Organizations Act</u>	-	-	-	109	109
<u>Suppression of Communism Act</u>	4	1	1	23	29
Sección 21, <u>General Laws</u> <u>Amendment Act de 1962</u> (sabotaje)	<u>5</u>	<u>9</u>	<u>13</u>	<u>248</u>	<u>275</u>
	<u>9</u>	<u>11</u>	<u>14</u>	<u>430</u>	<u>464</u>

27/ Star, Johannesburgo, 1º de noviembre de 1972.

28/ House of Assembly Debates (Hansard), 25 de febrero de 1972, pregunta 4.

74. Se dispone de algunas cifras, no necesariamente completas, acerca de los detenidos en virtud de las leyes que disponen la detención sin acusación o juicio. Aunque tanto el Ministro de Justicia como el Ministro de Policía se negaron reiteradamente a proporcionar información sobre el número de detenidos por períodos indefinidos en virtud de la sección 6 de la Terrorism Act 29/, se sabe que en 1971 se detuvo a numerosas personas con arreglo a esta disposición. En mayo se reveló que de las 16 personas acusadas en virtud de la Terrorism Act durante 1971, se había declarado culpables a 14 y 2 resultaron no culpables 30/. Una de las personas que resultó absuelta posteriormente estuvo detenida durante 160 días 31/. De los detenidos en virtud de la Terrorism Act en ese período, 27 de los 47 detenidos fueron posteriormente puestos en libertad, aunque varios de éstos aparecen como testigos de cargo 32/.

75. Según la sección 215 bis de la Criminal Procedure Act que dispone la detención de los probables testigos de cargo hasta que haya concluido el procedimiento penal, o hasta 180 días, en 1971 se expidieron 25 mandamientos y 12 durante el primer trimestre de 1972 33/.

76. Según el Ministro de Policía, se detuvo a 37 africanos con arreglo a las disposiciones de emergencia para el Transkei (Proclamation 400) durante el período del 1º de julio de 1970 al 31 de marzo de 1971 34/. Desde abril de 1971 se ha detenido a seis personas en virtud de la misma disposición 35/.

d) Alegaciones relativas a las torturas y al trato cruel, inhumano o degradante infligido a los presos políticos

77. El Grupo recibió declaraciones relativas al trato a los detenidos, es decir, a presos políticos detenidos sin juicio o antes de ser llevados ante un tribunal para afrontar acusaciones concretas; y a presos políticos sentenciados en virtud de una o más de las leyes mencionadas en el párrafo 73 y detenidos en una cárcel ordinaria.

78. Dieron testimonio tres testigos que habían sido detenidos con el fin de interrogarlos antes del juicio de los presos políticos. El Sr. Lewin (RT.130, págs. 101 y 102) describió cómo se le había sometido a la "tortura de plantón", habiéndosele obligado a estar de pie en un mismo lugar durante 24 horas. Dos semanas más tarde fue víctima de agresiones en el cuartel general de la policía de seguridad. El Sr. Lewin proporcionó una lista de los agentes de policía de seguridad que habían dado malos tratos

---

29/ Véase por ejemplo, House of Assembly Debates (Hansard), 4 de febrero de 1972, respuesta a la pregunta 18, y nuevamente el 11 de febrero de 1972.

30/ House of Assembly Debates (Hansard), 9 de mayo de 1972, pregunta 4.

31/ Rand Daily Mail, 10 de mayo de 1972.

32/ Rand Daily Mail, 19 de abril de 1972.

33/ House of Assembly Debates (Hansard), 5 de mayo de 1972, pregunta 535.

34/ House of Assembly Debates (Hansard), 2 de abril de 1971, col. 679.

35/ House of Assembly Debates (Hansard), 18 de febrero de 1972, pregunta 231.

a los presos. El Rev. French-Beytagh (RT.130, págs. 3, 12 y 23) dijo que había sido detenido en el cuartel general de la policía de seguridad durante ocho días solamente, debido a la intervención del Cónsul británico. Durante el interrogatorio, aunque no fue maltratado físicamente, sufrió una conmoción psicológica. El Sr. Jacobsen (RT.129, págs. 27 a 60) 36/ dijo que había sido sometido a períodos de interrogatorio ininterrumpido, en dos ocasiones durante 48 horas sucesivas y una vez durante 72 horas. Estuvo en reclusión solitaria durante su detención (RT.129, págs. 27 y 37). Se le sometió también a la "tortura de plantón". Aproximadamente un mes después de su detención intentó suicidarse. Sólo pudo comunicarse con su abogado cuando se le formularon los cargos.

79. En una comunicación por escrito de fecha 20 de julio de 1972, el Sr. Max Katz relató su arresto y detención el 18 de noviembre de 1971 y su reclusión solitaria durante tres semanas. Fue trasladado de la Pretoria Central Prison a la sede de la policía de seguridad en Compol Buildings, Pretoria, para un interrogatorio de seis días sin dormir. Hicieron el interrogatorio ocho miembros de la policía de seguridad que trabajaban en pares en turnos de cuatro horas cada uno. El objeto de ésta era obligarlo a dar testimonio sobre sus actividades políticas y las de sus amigos. Fue puesto en libertad el 23 de diciembre. También había sido detenido en 1966 en circunstancias parecidas.

80. Gran parte del testimonio se refería a las torturas de acusados y testigos en el juicio del Unity Movement. Esto incluía el testimonio del Sr. Honono (RT.137, págs. 7 a 11) junto con los informes aparecidos en la prensa y los alegatos de la defensa presentados durante el juicio, los alegatos por escrito de la Srta. E. Wilcox, y el folleto sobre la utilización de torturas presentado por el Fondo Internacional de Ayuda y Defensa, al que se hace referencia en el párrafo 59. La sustancia de las alegaciones de la defensa presentadas durante el juicio era que la policía de seguridad había establecido un campamento de torturas en el bosque de Mkhambathi para obtener declaraciones de los detenidos, algunos de los cuales posteriormente aparecían como acusados y otros como testigos de cargo. Durante el interrogatorio de uno de los acusados trascendió que por lo menos 140 detenidos habían pasado por el campamento. A Gwendolyn y a Alfred Wilcox se les mantuvo incomunicados durante casi nueve meses y luego sencillamente se les puso en libertad. Además de la muerte de Mthayeni Cutshela mientras estaba detenido, los individuos habían tratado de suicidarse -Jakhede Nohlaza, de 68 años, durante su detención, y un acusado, Mogami Josiah Moeng, durante el juicio. En el memorando de la Srta. Wilcox se citaban tres casos de torturas. Uno era el de Josiah Mogami Moeng, a quien se le sujetó con esposas a un tronco de árbol por encima de su cabeza, y se le azotó y golpeó casi continuamente durante tres días y tres noches mientras que la policía trataba de obtener de él una declaración. A Pindiso Zimambane le esposaron, le ataron los pies y le colocaron pinzas en las orejas. Oía un zumbido y tenía sensaciones dolorosas. Esto se repitió muchas veces hasta que ya no sentía más el agudo dolor sino únicamente que su cuerpo se convulsionaba y que algo le apretaba toda la parte superior del cuerpo. Después de quitarle las pinzas de las orejas, le ataron el brazo con esposas a la rama del árbol encima de su cabeza y le dejaron así toda la noche. Le soltaron la mañana siguiente pero luego le esposaron a otro árbol y le dijeron que llamara cuando decidiera hablar más. Llovió durante la segunda noche. También fue golpeado y

---

36/ Véase también A/3770, párrs. 595 a 597.

se le clavó un dardo en la pierna. Poco tiempo después lo vendaron y lo ataron al suelo. Se dio cuenta de que alguien le desabrochaba los botones de los pantalones y sintió una sensación dolorosa como de un pinchazo de aguja que bajaba por la espina dorsal y subía desde sus órganos genitales. No supo cuánto duró esto, pero le fue imposible dormir después. De vez en cuando involuntariamente saltaba y se golpeaba la cabeza contra el techo del camión en donde se le acostó por la noche.

81. El Sr. Sibeko (RT.128, pág. 96) señaló a la atención las torturas a los acusados en el juicio de Welkom, así como a las de los individuos que posteriormente sirvieron de testigos de cargo. A su parecer, los métodos de tortura eran decididamente peores que en el pasado (págs. 107 a 111).

82. La Srta. Mgabaza (RT.138, págs. 31 y 32) dio testimonio sobre las experiencias de la Sra. F. E. Majola en manos de la policía de seguridad en mayo de 1969 y en otras ocasiones. En el curso de un registro de su casa la policía esculcó a su hija de seis años en las axilas. La Srta. Mgabaza también entregó al Grupo un documento preparado por la Federación Democrática Internacional de Mujeres en el que figuraban los testimonios de la Sra. R. V. Nzo, cuyo esposo fue detenido en reclusión solitaria durante 237 días, y el de la Sra. A. N. Lutuli de Ngakane, cuyo esposo fue detenido en virtud de las disposiciones de emergencia del Transkei y condenado a prisión en Robben Island durante 33 meses.

e) Información relativa a la organización de los servicios penitenciarios y al mal trato a presos sentenciados

83. Varios testigos, entre ellos el Sr. George Mbele (RT.130, págs. 116 a 142), el Sr. Lewin (RT.130, págs. 78 a 81 y 103), el Sr. Ennals (RT.130, págs. 54 y 55), el Sr. Honono (RT.137, pág. 12) y el Sr. Ntloedibe (RT.133, págs. 56 a 60) dieron testimonio de la organización del sistema penitenciario y del trato a los presos sentenciados.

84. El testimonio del Sr. Mbele (RT.130, págs. 116 a 142 complementado con un memorando) se basó en una transcripción de una entrevista, grabada en cinta magnetofónica, hecha por un preso puesto en libertad recientemente después de varios años en la isla de Robben. No se da el nombre ni detalles de identificación debido a la naturaleza de la Ley de prisiones por la cual, dijo el Sr. Mbele, las condiciones penitenciarias se colocaban fuera de la vigilancia pública. El Sr. Mbele manifestó que después de 1963 se había reorganizado el sistema penitenciario. Esto se hizo después de varias huelgas de hambre declaradas por los presos políticos a causa del trato que recibían en contravención de las normas penitenciarias. Hasta ese momento los presos de las diversas categorías "D" a "A" estaban en los correspondientes campamentos "D" a "A"; luego se siguió la política de recluir a la mayoría de los presos políticos no blancos en la isla Robben 37/.

85. La información relativa a la isla de Robben indicaba que varios grupos de presos se mantenían segregados. Los namibianos estaban rigurosamente separados de todos los

---

37/ Para las distintas categorías de presos, véase A/8770, párr. 599 y nota 186.



demás presos; los presos de Pietermaritzburg estaban encarcelados separadamente; y el grupo de Rivonia, en el que estaba Nelson Mandela, vivía en una sección especial de la cárcel, cada uno en una celda aparte. Un recluso, Benjamín Ramotse, que fue detenido en Botswana y entregado a la policía de Sudáfrica, estaba en reclusión solitaria y lo había estado desde su encarcelamiento en la isla de la prisión. El Sr. Mbele recalcó que, según informaciones que poseía, las condiciones en la isla de Robben habían empeorado considerablemente desde diciembre de 1970. A partir de esa fecha el Departamento de Prisiones había iniciado una nueva y dura política de privaciones y provocaciones (RT.130, pág. 126). Como resultado de ello se bajó a varios presos de categorías más altas a más bajas, con la correspondiente reducción de sus condiciones y pérdida de privilegios. Esto había culminado en una huelga de hambre de los presos en marzo de 1971. El Sr. Mbele también dio detalles de agresiones a los presos, así como de la comida y las facilidades de estudio y recreación. Si bien las condiciones habían mejorado ligeramente en cierto momento, había habido un empeoramiento agudo desde 1970 (RT.130, pág. 137).

86. El Sr. Honono (RT.137, pág. 12) señaló a la atención las condiciones existentes en la cárcel de Ntosasa, en el Transkei, utilizada para algunos de los detenidos que posteriormente aparecieron como testigos de cargo en el juicio de Pietermaritzburg de los miembros del Unity Movement 38/. El Sr. Honono dijo que esas condiciones no existían sólo en la cárcel de Ntosasa sino que por lo general se presentaban también en las zonas rurales.

87. El Sr. Ntloedibe (RT.133, págs. 56 y 57) narró los trabajos forzados a que fue sometido en una cárcel (no se mencionó su nombre); el registro humillante del cuerpo de los presos y las palizas infligidas por los guardias; y las condiciones en que los reclusos tenían que recibir a los visitantes. También describió su experiencia de tres meses de reclusión castigado a ración de agua de arroz. El tratamiento invariable en el hospital fuere cual fuere la dolencia era el aceite de ricino. El Sr. Ntloedibe afirmó que no se cumplían las disposiciones mínimas normales del trato de presos con respecto a los africanos o a otros presos no blancos. El Sr. Ennals (RT.130, págs. 54 y 55) confirmó esto y dijo que Sudáfrica violaba notoriamente las normas a que afirmaba atenerse.

88. El Sr. Lewin (RT.130, pág. 78) dijo que, según su experiencia, había habido mejoras en los últimos años, en gran parte como resultado de la divulgación de las condiciones penitenciarias hecha por Harold Strachan después de ser puesto en libertad en 1965, y después del traslado de los presos políticos blancos a una nueva cárcel en Pretoria. Pero los presos políticos seguían aislados de los otros reclusos; sus condiciones en materia de correspondencia y de visitas eran inferiores a las de los presos comunes; y mientras que a estos últimos se les concedía remisión de la pena y libertad condicional, y, frecuentemente, amnistía, esto se negaba a los presos políticos.

89. En las declaraciones del Sr. Ntloedibe (RT.133, pág. 61), del Sr. Kuzwayo (RT.132, págs. 46 a 50, 67 a 90, 92 a 96) y del Sr. Bidi (RT.133, págs. 33 a 48) se describían someramente los efectos de algunas de las "leyes de pases" en el control de la mano de obra. Según estos testigos, los granjeros blancos podían utilizar el trabajo de los presos pagando unas cantidades ridículas a las autoridades carcelarias. Estos testigos revelaron también que el trato dado a los presos por los granjeros blancos no era

38/ Se informó sobre las condiciones en esta cárcel en el East London Daily Dispatch del 29 de septiembre de 1971 y el 7 de octubre de 1971.

satisfactorio y que las condiciones de vida y de trabajo eran inhumanas y, a veces, peores que en las cárceles. El Sr. Kuzwayo (RT.132, págs. 87 a 90 y 92) se refirió también a las colonias agrícolas del Gobierno a donde se enviaba a los presos reincidentes.

90. Interrogado en la Asamblea Legislativa sobre el número de presos alquilados a empleadores, el Ministro de Prisiones dijo que no había estadísticas fácilmente disponibles, por lo que no era posible proporcionar la información solicitada 39/.

91. En 1972 nuevamente se señaló a la atención el gran número de presos encarcelados por infringir ordenanzas y reglamentos. Un juez de la Corte Suprema observó que el sistema de la justicia penal clamaba por reforma. Comentaba el hecho de que el 92% de las personas encarceladas estaba allí durante seis meses o menos 40/. El informe del Comisionado de Prisiones para el período comprendido entre el 1º de julio de 1970 y el 30 de junio de 1971 41/ indicaba que durante ese período 474.065 presos sentenciados (y 273.844 no sentenciados) fueron llevados a las cárceles. De los 475.065 presos sentenciados, 433.954 cumplieron penas menores de seis meses.

92. En junio de 1971 el Ministro Adjunto de Administración de Asuntos Bantúes anunció que el Gobierno se proponía introducir un sistema nuevo de tratar a los infractores de las disposiciones sobre "pases" por medio de "centros de ayuda" y "centros de rehabilitación" en los territorios patrios. En el capítulo 12 de la Bantu Laws Amendment Act, Nº 42 de 1964, se preveía el establecimiento de este sistema. En la declaración se decía que el sistema previsto constituía un intento sincero de reducir la responsabilidad del infractor técnico y de alejar a la mayoría de estos infractores de los tribunales y las cárceles. Si era posible "legalizar" la situación de los infractores mediante el enlace con empleadores, la oficina laboral local o la autoridad del territorio patrio, no tendrían que ir a la cárcel, pero si esto no era posible, serían encarcelados o enviados a "centros de rehabilitación" 42/. En el momento de la promulgación de esta legislación se expresaron temores de que los centros podrían llegar a ser una fuente de mano de obra barata para empleadores que no podían atraer a los trabajadores por medios normales. Los centros de ayuda podrían reducir el número de infractores de las disposiciones sobre pases condenados a períodos cortos "pero esto será solamente porque en lugar de mandarlos a la cárcel se llevará a las personas a los territorios patrios o a las zonas rurales y se las pondrá a trabajar en lugares donde hay escasez de mano de obra, especialmente en haciendas de propietarios blancos" 43/. Se pudo disponer de

---

39/ House of Assembly Debates (Hansard), 4 de febrero de 1972, cuestión 20.

40/ Rand Daily Mail, Johannesburgo, 27 de julio de 1972.

41/ RP.101/71.

42/ Survey of Race Relations 1971, op. cit., págs. 143 y 144. Véase también Second Bantu Laws Amendment Act, Nº 30, 1972.

43/ Ibid.

alguna información sobre el trabajo de estos centros de ayuda en el período de sesiones de 1972 de la Asamblea Legislativa. Se reveló, por ejemplo, que los centros de ayuda de Johannesburgo habían tenido 10.098 personas desde el 1º de enero de 1972, pero que se había puesto a trabajar a 52 de ellas solamente 44/. De las 36.619 personas llevadas a los centros de ayuda de Welkom, 27.800 personas habían sido sentenciadas a prisión 45/. El Ministro Adjunto de Desarrollo y Administración de Asuntos Bantúes dijo que "las leyes con respecto a la entrada, así como otras leyes llamadas restrictivas para mantener el orden necesario con respecto a esta cuestión, permanecen vigentes" 46/

f) Alegaciones relativas a violaciones del derecho de los acusados a un juicio justo, y a los procedimientos de reclamación y de reparación

93. Gran parte de los testimonios se concentraron en la violación de los derechos de los detenidos y de los presos sometidos a juicio. El Sr. Honono subrayó que en virtud de la Terrorism Act se hacía recaer sobre el acusado la responsabilidad de probar su inocencia (RT.137, pág. 33). También señaló que no existía el derecho de habeas corpus. El Sr. Bidi (RT.133, pág. 31) citó los casos de Marcus Mokgotle y Sidney Mbuyazwe, quienes todavía estaban bajo custodia policial, cuatro años completos después de haber sido detenidos, sin juicio y sin acceso a la asistencia letrada.

94. Varios testigos subrayaron los efectos que sobre los procedimientos judiciales tenía el empleo de testigos de cargo a quienes se había mantenido incomunicados. El Sr. Honono (RT.137, pág. 16) citó los comentarios del Sr. Edgar Lockwood, quien había observado el juicio del Unity Movement en Pietermaritzburg, en el sentido de que el juicio mostraba las nuevas armas que la Terrorism Act colocaba en manos de la parte actora. Se privaba a la defensa de todo conocimiento de lo que los testigos de cargo decían antes de iniciarse el juicio. En estos casos no había conferencias sumarias antes de los juicios. Todos los testigos importantes habían estado detenidos durante diversos períodos de tiempo. Mientras estaban recluidos no podían recurrir a un abogado ni tenían derecho a ver a un juez ni a informar a alguna otra persona del mundo exterior sobre la forma en que se les trataba. Una característica de estos juicios era el testimonio cuidadosamente preparado de los que habían pasado por el proceso del interrogatorio y la circunstancia de que mientras declaraban los testigos se hallaban presentes en la sala del tribunal cuatro o cinco de los inquisidores policiales, incluso el individuo que había conseguido la declaración escrita del testigo cuando estaba detenido. Esto fue confirmado por el Sr. Lande (RT.137, págs. 18 a 20), quien citó el caso de dos testigos amenazados de cometer perjurio porque se habían quejado del mal trato por la policía y de esa manera se habían apartado de sus declaraciones preparadas (RT.137, pág. 21). En el memorando de la Srta. Wilcox se decía que en el juicio de Pietermaritzburg las afirmaciones de torturas eran fundamentales para el caso y en el curso del juicio se fue poniendo de manifiesto la existencia de un sistema de torturas. Se presentaron quejas de agresión poco tiempo después de que se habían formulado los

---

44/ House of Assembly Debates (Hansard), 28 de marzo de 1972, cuestión 451.

45/ House of Assembly Debates (Hansard), 9 de febrero de 1972, col. 687.

46/ Ibid.

cargos. La policía de Natal manifestó que se estaban investigando esas quejas pero a mediados de agosto de 1971 se enviaron al Procurador General de Natal los resultados de esa investigación para que decidiera si sometía o no a juicio a los agentes de la policía de seguridad mencionados. En abril de 1972 se anunció que el Procurador General había decidido no enjuiciarlos pero su oficina se abstuvo de explicar las razones de esta decisión. Nueve de los acusados iniciaron entonces los trámites para demandar al Ministro de Policía por la suma de 10.000 rands cada uno por los cargos de agresión y tortura 47/.

95. Según la declaración escrita que complementaba el testimonio del Sr. Honono, durante el juicio, el abogado de la defensa dijo al tribunal que las personas que se habían opuesto a la política del Estado repentinamente se habían convertido en partidarios de ella. Formularon las declaraciones que creían que era lo que quería la policía por puro terror de ser detenidos en virtud de la Terrorism Act. El Sr. Honono arguyó que la confirmación del testimonio de un detenido por el de otro no era suficiente. Dijo que se habían mantenido juntos en grupos a más de 100 testigos de cargo antes de llevarlos ante el tribunal 48/.

96. El Rev. French Beytagh (RT.130, págs. 21 y 22) dijo que los testigos de cargo aparecieron repentinamente para declarar, lo cual significaba que de ninguna manera habría podido preparar su defensa por adelantado. El Sr. Jacobsen (RT.129, pág. 36) dijo que el primero de los principales testigos de cargo admitió que estaba aterrorizado. Sentía continuos dolores de cabeza y tuvo que quedarse sentado durante los tres días en que prestó testimonio. Habló como un loro. Había estado incomunicado durante casi cinco meses.

97. El Sr. Lewin (RT.130, pág. 107) dijo que durante su juicio no se mencionó que la policía de seguridad lo había maltratado por temor a que el juez dudara de su veracidad. En un gran número de casos los abogados se habían decidido a no presentar acusaciones de tortura en el tribunal por esta razón. El juicio de Pietermaritzburg fue uno de los primeros casos en que se presentó semejante testimonio. Pero el mismo fue rechazado de plano por el juez.

98. El Sr. Honono (RT.137, pág. 22) se refirió a la injerencia del Ministro de Policía en el juicio de Pietermaritzburg mientras se realizaba y esta sub judice. Esta era una declaración que se refería a "una prueba inverosímil y completamente falsa del supuesto maltrato dado por la policía", que había sido descrito en el tribunal por la defensa como "una forma más grave de desacato a la autoridad del tribunal y un desprecio gratuito de la defensa" 49/.

99. Varios testigos señalaron que se habían llevado a cabo muchos procesos en zonas rurales inaccesibles. Según pruebas presentadas en audiencia privada (RT.127/Add.1, págs. 4 y 5), ésta era una medida intencional del Gobierno sudafricano para dificultar

---

47/ Véase también Rand Daily Mail, Johannesburgo, 22 de agosto de 1972.

48/ Sunday Times, Johannesburgo, 2 de abril de 1972.

49/ Véase Cape Times, Ciudad de El Cabo, 12 de enero de 1972.

la defensa en juicio. El Rev. French-Beytagh (RT.130, pág. 3) dijo que habían sido rechazados los certificados médicos presentados para que su proceso se realizara en Johannesburgo, cerca de una clínica de especialistas en enfermedades del corazón y donde en todo caso el delito había sido cometido.

100. El Sr. Sibeko (RT.128, pág. 71) manifestó que la defensa de las personas acusadas a menudo se veía obstaculizada porque había pocos abogados con experiencia, debido a que estos mismos eran perseguidos. También dijo que en la prensa casi no se hablaba de algunos procesos, lo que significaba que escapaban al escrutinio internacional (RT.128, págs. 66 a 70). El Rev. French-Beytagh (RT.130, pág. 26) dijo que no consideraba que su apelación exculpase a la justicia sudafricana. Había costado una gran suma de dinero, y temía el posible deterioro de las reglas judiciales en el Tribunal de Apelación.

101. El Sr. Sibeko (RT.128, pág. 81) señaló a la atención el continuo arresto domiciliario de Mangaliso Sobukwe y las restricciones que se le imponían.

102. El Sr. Ennals (RT.130, pág. 67) dijo que apoyaba la idea de que los convenios relativos a los prisioneros de guerra se aplicaran al trato de los combatientes por la libertad. Subrayó la estrecha colaboración entre las fuerzas de la policía del África meridional, especialmente las fuerzas de Rhodesia y Sudáfrica, y las incursiones en territorios vecinos para capturar a personas buscadas por las autoridades sudafricanas.

### C. La situación de los africanos en las "reservas de nativos"

#### 1. Antecedentes históricos

103. Los orígenes de la política de instalar a los africanos en "reservas de nativos" y de constituir a éstas como "territorios patrios bantúes" se describen con detalle en el informe del Grupo de 1970 50/.

#### 2. Resumen de las leyes en vigor

104. Las leyes que autorizan la aplicación de la política en las "reservas", incluso en el Transkei, fueron resumidas en un informe anterior 51/ y analizadas y reproducidas en los documentos E/CN.4/AC.22/17 y Add.1. Entre estas leyes está la Bantu Homelands Citizenship Act Nº 26 de 1970, en virtud de la cual todo africano, viva o no en un "territorio", es ciudadano de una u otra jurisdicción territorial y por lo tanto extranjero en la República 52/, y la Bantu Education Amendment Act, Nº 44 de 1970, que faculta a las autoridades de los "territorios patrios" para promulgar sus propias medidas sobre el establecimiento y registro de escuelas 53/.

50/ Véase E/CN.4/1020 y E/CN.4/1020/Add.2.

51/ Véase E/CN.4/1020/Add.2.

52/ Véase el informe del Grupo de 1971 E/CN.4/1050, párrs. 102 y 103.

53/ La organización de la educación bantú se analiza en detalle en el documento E/CN.4/1050, párrs. 108 y 119.

105. Entre las leyes aprobadas desde fines de 1970 se cuentan la Bantu Homelands Constitution Act, Nº 21 de 1971, que faculta al poder ejecutivo para establecer asambleas legislativas por proclamación en lugar de hacerlo por ley aprobada por el Parlamento cuando se considere que esas zonas están preparadas para la "autonomía". Según las disposiciones de esta ley, el Gobierno ha creado rápidamente asambleas y consejos ejecutivos (estos últimos están formados principalmente por jefes) y ha establecido servicios públicos para los diversos "territorios patrios". El tipo de autoridad varía ligeramente de un "territorio patrio" a otro. El Transkei tiene ahora una Asamblea Legislativa y ha sido una "zona autónoma" desde diciembre de 1963. En una etapa anterior se establecieron autoridades territoriales; por ejemplo en 1961, para las autoridades de Ciskei, Tswanalandia, Lebowa, Venda y Machagana. Una para el Sotho del Sur se estableció en 1969, y una para los zulúes en junio de 1970. En mayo de 1971 se establecieron asambleas legislativas para los tswanas, aunque no adquirieron el mismo estatuto de "autonomía" que el Transkei. Lo mismo se hizo para las autoridades de Ciskei y de Venda en junio de 1971, para el Sotho del Norte y Machagana en julio de 1971 y para el Sotho del Sur en octubre de 1971. Zululandia entró finalmente en el sistema en abril de 1972. En junio de 1972 el "territorio patrio" de Tswana se convirtió en un territorio autónomo, a semejanza del Transkei, de Bophuthatswana, y fue proclamado autónomo en septiembre de 1972 54/. El Ciskei tendrá dentro de poco el mismo estatuto, y otras tres zonas, Shangaan, Venda y Sotho del Sur, lo han pedido 55/. Varias leyes aprobadas por las asambleas legislativas de los "territorios patrios" han sido debidamente aprobadas por el Presidente del Estado, y promulgadas como proclamaciones en números de la Government Gazette. Algunos ejemplos son: la Proclamación R.1629, por la que se aprueba la Ley Nº 4 de 1972 de la Asamblea Legislativa de Machangana, que autoriza la imposición de un gravamen especial; la Proclamación R.1616, por la que se aprueba la Ley Nº 5 de 1972 de la Asamblea Legislativa de Lebowa, que autoriza la asignación de fondos para servicios; la Proclamación R.1669, por la que se aprueba la Ley Nº 5 de la Asamblea Legislativa de Machangana relativa a la creación de una administración pública.

106. La Constitution Amendment Act Nº 1 facultó al Presidente del Estado para autorizar por proclamación el uso de un idioma africano como idioma oficial, además del afrikaans y el inglés en cualquier zona africana declarada territorio autónomo.

107. La Bantu Affairs Administration Act Nº 45 de 1971 autoriza a los consejos de administración de los asuntos bantúes a supervisar los asuntos de los africanos fuera de las zonas "bantustanes". Los miembros de los consejos son nombrados por el Ministro y se les confieren "todos los derechos, facultades, deberes y obligaciones" de una autoridad local urbana en la "administración de leyes y reglamentos que afecten a los africanos en las zonas blancas". En efecto, los consejos se encargarán de casi todos los poderes y funciones relativos a los asuntos africanos que antes ejercían las autoridades locales. Durante el debate de esta medida en la Asamblea un miembro nacionalista del Parlamento reveló que los consejos se utilizarían para acelerar el traslado de los africanos a los "territorios patrios" 56/.

54/ Proclamación R.224 de 1972, Government Gazette 3666, 29 de septiembre de 1972.

55/ Véase Barbara Rogers, South Africa: The Bantu Homelands, International Defence and Aid Fund, Londres, octubre de 1972, pág. 16.

56/ Star, Johannesburgo, 13 de marzo de 1971.

108. La Second Bantu Laws Amendment Act Nº 30 de 1972 dispuso la creación de "centros de ayuda" a los que puede ser enviado todo africano detenido o convicto por las leyes de "pases" (artículo 6, que enmienda la Bantu Labour Act de 1964). El Comisionado de asuntos bantúes de la zona donde está situado el centro de ayuda puede celebrar juicio, con jurisdicción sobre el delito cometido (artículo 6, 2) a)), y puede "dar la orden que le parezca justa con respecto a la colocación en un empleo de un bantú", incluso su "repatriación y la de las personas a su cargo a su zona o al último lugar de residencia, o a cualquier otro lugar indicado por el comisionado o funcionario de asuntos bantúes" (artículo 6 3) b)). Durante la sesión del Parlamento en que se aprobó esta medida el Ministro de Desarrollo y Administración Bantúes declaró: "los bantúes de la zona blanca, sea que hayan nacido aquí o que se les permita venir en cumplimiento de nuestras leyes de control, están aquí por el trabajo que se les permite tener" 57/.

109. La Transkei Constitution Amendment Act Nº 31 de 1971 dispone que, por cuanto el Ministro principal será elegido por votación secreta, tendrá facultades para nombrar a otros cinco ministros; también autoriza la representación de un nuevo distrito por su jefe, aumentando así en uno el número de jefes en la Asamblea Legislativa 58/. La Bantu Laws Amendment Act de 1972 extiende las facultades legislativas de la Asamblea Legislativa del Transkei a la administración y el control de las prisiones del Transkei, con excepción de las zonas "blancas" de los distritos de Port St. Johns y Matatiele.

### 3. Análisis de las informaciones y testimonios recibidos

#### a) Derechos civiles y políticos de los africanos en las reservas

110. El Sr. Bidi (RT.133, pág. 26, y memorando del Congreso Panafricanista) dijo que la política de "desarrollo separado" estaba inexorablemente ligada a la cuestión de las tierras. El caso del Transkei era bien conocido: estaba superpoblado, comprendía el 60% de la tierra no cultivable y seguía como había sido creado: una reserva de mano de obra negra barata para la economía blanca de Sudáfrica. El memorando se refería a las apelaciones del Ministro principal Kaiser Matanzima del "bantustán" del Transkei y del jefe Gatsha Buthelezi del "bantustán" Kwa-Zulu en procura de más tierras y una expansión de sus territorios, y de los puertos de mar de Port St. Johns y Richards Bay, respectivamente. La respuesta del régimen había sido una negativa inmediata y rotunda. "Kwa-Zulu" -decía el memorando- llevaba dos años de existencia. Cuando se fundó se le dio una asamblea legislativa y la zona fue inspeccionada por el Ministro de Administración y Desarrollo Bantúes en busca de encontrar un lugar adecuado para la nueva capital del "territorio patrio". Según nuevos informes recientes no se había movido ni una piedra ni construido un dique o un edificio desde la visita del Ministro. Mientras tanto, un edificio escolar servía aún como sede de la asamblea legislativa. Además, el régimen se negaba a dar a los funcionarios de Kwa-Zulu libertad de decidir cuestiones de interés para su pueblo y su territorio. Las mismas o parecidas situaciones prevalecían en todos los llamados "bantustanes".

57/ House of Assembly Debates (Hansard), 3 de febrero de 1972, col. 295.

58/ House of Assembly Debates (Hansard), 2, 1971, cols. 441 y 442.

111. El Rev. French-Beytagh dijo que el concepto "bantustán" de independencia era completamente falso. Alegó como prueba el hecho que no se estaba haciendo ningún intento para preparar a hombres capaces de dirigir Estados independientes.

112. Según la información al alcance del Grupo durante abril de 1972 el Jefe Supremo Kaiser Matanzima presentó una moción en la Asamblea Legislativa del Transkei para que su Gobierno iniciara conversaciones sobre la cuestión de la independencia, pero a condición de que el Gobierno sudafricano respondiera a sus demandas territoriales. Se pedían zonas blancas de labranza contiguas al Transkei, así como el enclave de tierras sudafricanas que rodea a Port St. Johns, único puerto en la costa del Transkei 59/. Menos de una semana más tarde el Primer Ministro sudafricano dijo que las demandas territoriales del Primer Ministro del Transkei habían sido rechazadas definitivamente por el Gabinete sudafricano 60/.

113. En la Asamblea Legislativa de Shangaan, en Giyana, el 12 de abril de 1972 el profesor H. W. E. Ntsanwisi hizo amargas observaciones sobre la "insensibilidad e inconsecuencia" de la política del Gobierno sobre los "territorios patrios". Dijo que "el hombre negro es considerado un transeúnte, no sólo en las zonas urbanas, sino también en los territorios patrios. Los territorios patrios aún pertenecen al Gobierno central" 61/. En la misma declaración se criticaba al Gobierno por no ofrecer una solución satisfactoria de un conflicto de límites entre los habitantes de los territorios patrios del Shangaan y de Sotho del Norte. Ambas partes habían considerado que los oficiales blancos solamente habían dificultado sus discusiones, y por lo tanto los excluyeron de las negociaciones y llegaron a un acuerdo entre ellos. El Gobierno había rechazado esta solución e insistido en imponer la suya propia.

b) Oportunidades económicas

114. El testimonio del Sr. Bidi (RT.133, pag. 26) sobre la escasez de tierras y su superpoblación fue pertinente en cuanto a la falta de oportunidades económicas en los "territorios patrios". Según la información al alcance del Grupo 62/, como resultado del crecimiento de su población y la disminución de su producción agrícola en realidad estas zonas tienen ahora menos posibilidades de sostenerse. En 1960 la relación entre el ingreso interno y lo que ganaban fuera del Transkei los trabajadores migrantes era de 47 a 53, y en 1966 era de 42 a 58 63/. Esto hacía aún más difícil que los "bantustanes" absorbieran el gran número de africanos repatriados de las ciudades. Un estudio reciente mostraba que sólo el 12% del ingreso ganado por los ciudadanos de Lebowa se obtenía dentro del "territorio patrio" 64/.

---

59/ Guardian, 14 de abril de 1972.

60/ Financial Times, 20 de abril de 1972.

61/ Guardian, 14 de abril de 1972.

62/ Merle Lipton, "Independent Bantustans?", International Affairs, vol. 48, Nº 1, enero de 1972, págs. 1 a 19.

63/ Financial Times, Survey, Londres, 22 de junio de 1970.

64/ Lipton, op. cit.



115. Al requerimiento del jefe Lucas Mangope, Ministro principal de Bophuthatswana, de que todos los impuestos mineros pagados al Gobierno sudafricano por las compañías mineras en el bantustán debían ser pagados a su Gobierno 65/, el Departamento de Administración y Desarrollo bantúes respondió que eso no era posible 66/; Sudáfrica, como proveedor de servicios al territorio, debía recibir el ingreso.

c) Sanidad e higiene

116. El Rev. ffrenh-Beytagh (RT.130, pág. 6) manifestó que el hecho de que solamente una decena de personas estuvieran recibiendo capacitación en Wentworth, única escuela de medicina para no blancos, significaba que no se podrían prestar servicios médicos adecuados a los "bantustanes".

d) Educación

117. El Rev. ffrench-Beytagh (RT.130, pág. 6) señaló a la atención el sistema de educación bantú, que ofrecía clases de niveles más bajos, escuelas secundarias completamente inadecuadas y lo que él consideraba el falso estatuto de las llamadas universidades bantúes.

D. Las condiciones de los africanos en los "campamentos de tránsito"

1. Antecedentes

118. Los antecedentes históricos de los campamentos de "tránsito" (o aldeas de reasentamiento, como los llaman las autoridades sudafricanas) fueron descritos en un informe anterior (E/CN.4/1020/Add.2, párrs. 65 a 105). Como se indica en el párrafo 157 del informe del Grupo de 1971 (E/CN.4/1050), los destinados al "reasentamiento" son: a) los africanos expulsados de explotaciones agrícolas de blancos, por ser demasiado viejos o estar incapacitados para el trabajo; b) los africanos desalojados de "centros negros"; c) las familias africanas sin tierras procedentes de las reservas; d) los hombres, mujeres y niños "dados de baja" de las zonas urbanas por "improductivos"; e) las esposas y familias de los presos sentenciados; f) los ex presos políticos, después de cumplir sus condenas.

119. En 1970 se supo algo sobre el número de centros de reasentamiento cuando el Ministro declaró en el Parlamento que en los territorios patrios bantúes había 69 municipios en diversas etapas de desarrollo y otros, cuya cantidad no se especificaba, se encontraban todavía en la etapa de planificación 67/. Según el Departamento de Administración y Desarrollo bantúes, 119.619 africanos fueron desalojados de zonas "blancas" y reasentados en los bantustanes durante 1969. De éstos, 52.128 fueron expulsados de zonas urbanas, 44.089 de zonas blancas rurales, 23.264 de "centros negros", granjas de misiones, etc., y 138 eran traficantes 68/. Durante 1970 el Gobierno desalojo

65/ Financial Mail, 18 de agosto de 1972.

66/ Financial Mail, 25 de agosto de 1972.

67/ House of Assembly Debates (Hansard), 29 de septiembre de 1970, col. 5263; véase E/CN.4/1050.

68/ RP.58/1971.

a 33.851 africanos de las cinco principales zonas urbanas a los "territorios patrios" bantúes". De éstos, 29.717 eran hombres y 4.134 mujeres 69/.

## 2. Resumen de las leyes en vigor

120. En informes anteriores se han citado las diversas leyes que autorizan el desarraigo de los africanos y su traslado a las zonas de asentamiento, entre las cuales figura la Bantu (Urban Areas) Consolidation Act, de 1945 70/.

## 3. Análisis de los testimonios

### a) Generalidades

121. Muchos testigos hablaron de las condiciones degradantes y deshumanizantes en los campamentos de reasentamiento. Las principales víctimas de la política eran hombres, mujeres y niños africanos obligados a salir de las zonas urbanas y de los llamados "centros negros" existentes en las zonas "blancas" y aquellos a quienes se consideraba como "no empleables", "superfluos" o "económicamente inactivos", como los ancianos y los enfermos, los pensionados, las viudas, las esposas y madres abandonadas y los jóvenes desempleados de 13 a 18 años de edad (RT.133, págs. 19 a 21). Habían sido arrojados al veldt, algunos en pleno invierno, con poco o nada en materia de mantas y ropa abrigada, y les habían dado tiendas como albergues temporales. Se había confiscado el ganado de algunos, y otros no habían tenido tiempo de prepararse para el traslado, de manera que tenían que subsistir con raciones oficiales que no bastaban para satisfacer sus necesidades (RT.133, pág. 21).

### b) Libertad de circulación y de residencia

122. El Sr. Ennals (RT.130, pág. 31) dijo que aun cuando el reasentamiento no era un encarcelamiento, constituía una restricción y coerción muy severas. Una política de reasentamiento en masa infligida a los enfermos, ancianos, las viudas y mujeres con niños a cargo constituía un trato inhumano y degradante, y contrario a las disposiciones del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

123. El Rev. Wilfred Jackson (RT.127, págs. 76 a 86) declaró que él personalmente había estado en contacto con la gente en las zonas de reasentamiento de su parroquia, en Limehill, donde el desalojo empezó en 1968 pero se realizó sobre todo en los dos años de 1968-1969. Había visto cómo cargaban a la gente en camiones. Se había obligado a todos a derribar sus propias casas y después se les arrojó en campo abierto. Aunque el Gobierno pretendía que se había ayudado a la gente a construir sus casas, no se les había dado ningún medio. El Gobierno pretendía que se había trasladado a las personas de una manera humana; esto no era cierto, y se les habían impuesto graves dificultades

---

69/ House of Assembly Debates (Hansard), 12 de febrero de 1971, col. 179.

70/ Véase E/CN.4/1050, párrs. 160 a 162.

e injusticias. Las investigaciones del Padre Cosmas Desmond habían mostrado que las condiciones de Limehill eran comunes a muchas otras zonas. El testigo declaró que cuando salió de Sudáfrica, seguía el reasentamiento y las condiciones eran aún peores que antes debido al mayor número de personas que habían sido trasladadas a los campamentos.

124. El Sr. Ennals (RT.130, págs. 32 y 48) y un testigo que prestó declaración en una sesión privada (RT.127/Add.1 (closed), págs. 6 y 7) hablaron de los presos políticos liberados que habían sido enviados a los campamentos de reasentamiento, donde no podían trabajar para mantener a sus familias. Se calculaba que en los últimos meses 100 ex presos políticos habían perdido sus empleos en esos asentamientos. Desde enero de 1972, se habían dado otros 64 casos semejantes. El Sr. Ennals dijo que los presos liberados eran confinados en la zona donde los llevaban, y se les tenía bajo vigilancia de la policía.

c) Oportunidades económicas y empleos

125. El Rev. Jackson (RT.127, págs. 76 y 77) subrayó los efectos del sistema de trabajo migratorio en la sociedad africana. En la zona que conocía entre los zulúes, el 50% de la población masculina permanecía en el hogar sólo de tres semanas a un mes por año. La política de traslado estaba intensificando este sistema y sus graves consecuencias. El lugar de trabajo más cercano a la zona de reasentamiento de Limehill era un pueblo pequeño a unas 12 millas de distancia, que daba muy poco empleo, y ciudades más grandes, a unas 35 millas de distancia, ya tenían toda la mano de obra necesaria. El resultado era que el Gobierno había establecido otro centro de trabajo en la forma de campo de reasentamiento, y los hombres tenían que migrar de esta zona a los pueblos en busca de trabajo, separándose una vez más de sus familias. Se puso de relieve que no había trabajo en los campos de reasentamiento (RT.127/Add.1 (privada)). El Sr. Ntloedibe (RT.133, pág. 52) dijo que algunos residentes de las zonas de reasentamiento podían cultivar pequeños terrenos y el Gobierno daba raciones al resto de la población.

126. Las escalas de raciones han sido descritas por el Rev. David Russell en un artículo publicado en el South African Outlook en junio de 1971. Las escalas mensuales son:

	<u>Personas</u> <u>de 12 años y mayores</u>	<u>Personas</u> <u>de menos de 12 años</u>
Alimento harináceo	20 libras	15 libras
Harina de maíz	8 libras	4 libras
Frijoles	5 libras	2 libras
Margarina	1 libra	1 libra
Leche descrema en polvo	2 libras	4 libras
Sal	1/2 libra	1/4 de libra

Se observará que no hay té, café, azúcar, jabón ni combustible.

d) Sanidad, higiene y servicios médicos

127. El Rev. Jackson (RT.127, pág. 77) dijo que los efectos del trabajo migratorio se veían en el estado de salud de las personas. Su iglesia había dirigido cinco clínicas

en una determinada zona. La gran mayoría de las enfermedades que tenían que tratar podían abarcarse con el término "malnutrición" o "deficiencias vitamínicas". Los niños morían por la falta de servicios médicos (RT.127/Add.1 (privada)). Los pensionistas y quienes carecen de ayuda familiar reciben raciones gratuitas.

E. Nueva investigación sobre las graves manifestaciones de apartheid que acompañan a la situación existente en la República de Sudáfrica

128. Se recordará que, de conformidad con la resolución 2 (XXIV) de la Comisión de Derechos Humanos, el Grupo Especial de Expertos presentó a la Comisión, en el 25º período de sesiones de ésta, un informe (E/CN.4/984/Add.18) en el que se trataba de esclarecer si la situación existente en la República de Sudáfrica contenía elementos constitutivos del delito de genocidio, tal como se define en la Convención de 1948 sobre la materia. En sus conclusiones, el Grupo declaró que, en el estado actual de la legislación sudafricana, no podía decir que el Gobierno de ese país tuviera la intención de cometer actos de genocidio, pero que algunos testigos consideraban que existían ciertos elementos de genocidio en la práctica del apartheid.

129. Tras examinar el informe, la Comisión aprobó la resolución 21 (XXV), por la que decidió que el mandato del Grupo comprendería igualmente una investigación sobre "las graves manifestaciones de apartheid que acompañan la situación existente en la República de Sudáfrica y que están expuestas en el informe del Grupo Especial de Expertos (E/CN.4/984/Add.18)".

130. El Grupo presentó informes sobre la cuestión a la Comisión en el 26º período de sesiones de ésta (E/CN.4/1020/Add.2, párrs. 106 a 158) y también en su 27º período de sesiones (E/CN.4/1050, párrs. 184 a 210). En sus últimas audiencias el Grupo seguía examinando, sobre la base de testimonios, si en la situación se encontraban elementos del delito de genocidio, y analizaba también otras manifestaciones del apartheid, especialmente en los sectores de la enseñanza, sanidad y trabajo, cuya gravedad habían mencionado varios testigos, pero sin calificarlas necesariamente de genocidio.

131. Existe una estrecha relación entre el presente capítulo y otros aspectos de los trabajos del Grupo, especialmente en lo tocante a la condición de los africanos en las "reservas" o "bantustanes" y en los "campos de reasentamiento", y a los problemas laborales, que se tratan con más detalle en el informe sobre los derechos sindicales presentado al Consejo Económico y Social.

132. El Sr. Ennals (RT.130, págs. 63 a 65) dijo que consideraba que los primeros elementos de genocidio eran los que se relacionaban con la absoluta restricción de los derechos humanos de una comunidad dada y definible. Por eso creía que los derechos humanos eran la cuestión fundamental que había que examinar en relación con el apartheid. No debía utilizarse únicamente la Convención sobre Genocidio sino también otras declaraciones disponibles y debían examinarse los derechos humanos en relación con la persona afectada. En Sudáfrica se procuraba legalizar la opresión y se utilizaba el instrumento legal para afianzar la supremacía de la minoría blanca (RT.130, pag. 66).

133. Varios testigos trataron de describir algunos de los orígenes y propósitos básicos de la política del apartheid. El Rev. French-Beytagh (RT.130, pág. 13) refirió al Grupo la esencia de una discusión que tuvo durante uno de sus períodos de interrogatorio, cuando la Immorality Act, que prohíbe el trato sexual entre personas de diferentes razas, se citó como inspirada por la Biblia. Cuando pidió que se le mencionaran textos, resultó claro que éstos se referían a la prohibición de que el hombre mezcle su simiente con la de un animal. Esto, dijo el testigo, indicaba que los africanos no eran considerados como seres humanos sino como animales.

134. Varios testigos, incluso el Sr. Bidi (RT.133, págs. 18 a 20) dijeron que, lejos de disminuir o modificarse, las prácticas y los excesos del apartheid aumentaban. La política de apartheid en la práctica había provocado indecibles sufrimientos y miserias a millones de africanos. Sus leyes no respetaban la vida familiar africana. Se desarraigaba a miles de familias y se las reasentaba en zonas que carecían de los requisitos básicos para sobrevivir, gozar de salud y reanudar la vida familiar.

135. El Rev. Jackson (RT.127, págs. 66 a 80) puso de relieve la función del sistema de trabajo migratorio como una de las graves manifestaciones del apartheid. Tenía los efectos más adversos sobre la sociedad africana, y trastornaba la vida familiar y moral del pueblo. Los efectos directos también se veían en el estado de salud del pueblo, principalmente por la malnutrición extensiva. Las ordenanzas gubernamentales impedían que el trabajador llevara a su familia a su lugar de trabajo. Esta política se estaba intensificando mediante los traslados de poblaciones y su "reasentamiento".

136. Varios de los testigos hablaron de las condiciones de degradación y deshumanización que según ellos prevalecían en los "campos de reasentamiento". El Sr. Ennals (RT.130, pág. 31), dijo que una política de reasentamiento en masa impuesta coercitivamente a enfermos, ancianos, viudas y mujeres con hijos a cargo constituía un trato inhumano y degradante y caía dentro del ámbito del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Rev. Colin Jackson (RT.127, págs. 76 a 85) citó las graves dificultades e injusticias infligidas a las personas para destruir sus casas y dejarlas en campo abierto. Se subrayó que aparte de un número limitado de ocupaciones, no había oportunidades de empleo en esas zonas. El Gobierno ofrecía un número mínimo de escuelas para pensionados y personas sin apoyo familiar (RT.133, pág. 33). Los niños se estaban muriendo por la falta de servicios médicos (RT.127/Add.1 (privada)).

137. El Sr. Sibeko (RT.128, págs. 82 a 85) habló de los efectos de las leyes de control de entrada sobre los ancianos, los enfermos crónicos y los huérfanos y los demasiado jóvenes o ya no capaces de ser útiles a la economía, como un "genocidio silencioso". Se citaron tres casos para ilustrar los efectos del reglamento de pases y control en las familias africanas y la vida familiar (RT.133, págs. 22 y 23). El Gobierno decía que estos controles se ejercían para evitar "la entrada indiscriminada de bantúes en nuestros pueblos y ciudades en las zonas "blancas" de la República". Los trastornos y el desarraigo han causado privaciones, frustración y miseria sin precedentes, dijo el Sr. Bidi (RT.133, págs. 24 y 25).

138. Como se indica en el capítulo sobre el trato de los presos políticos, cada año se encarcela a una elevada proporción de africanos por infracciones leves de las leyes de

pases y otras. Los castigos eran detención y encarcelamiento, posiblemente como trabajos forzados en explotaciones agrícolas. Estas medidas, dijo el Sr. Kuzwayo (RT.132 pág. 47), tenían por objeto obligar a los africanos a aceptar cualquier tipo de trabajo que se les diera. El Sr. Ntloedibe (RT.133, págs. 33 a 35) dijo que miles de personas detenidas y enviadas a esas granjas no habían regresado; nunca se ha sabido más de ellas. Podía decirse que los hombres habían muerto en la explotación agrícola del hombre blanco como resultado de los delitos de pases. Este era el medio más importante para encarcelar a africanos y utilizarlos como mano de obra barata.

139. Como se indicó en el capítulo sobre la pena capital, las personas ejecutadas eran en su mayoría africanas. Testigos que declararon sobre el trato dado por la policía a detenidos y presos políticos dijeron que en algunos casos habían aparecido señales de tortura (deposiciones escritas de la Srta. Wilcox); y los métodos de tortura eran decididamente peores que los utilizados en el pasado (Sr. Sibeko, RT.128, pág. 96).

140. El Rev. French-Beytagh (RT.130, pág. 6) mencionó la inferior calidad de la educación para los bantúes. Refiriéndose a las recientes manifestaciones estudiantiles de protesta, el Sr. Sibeko (RT.128, págs. 87 a 91) dijo que habían sido provocadas por la denuncia de discriminación en la educación y las abominables condiciones de las escuelas africanas, colegios universitarios y universidades. La expulsión de los estudiantes que protestaban se había convertido en una norma general. Como resultado de vez en cuando toda una generación de estudiantes africanos se veía privada de la oportunidad de terminar sus estudios y de asumir responsabilidades de dirección para poder denunciar los agravios del pueblo africano.

#### Cuestiones laborales

141. Varios testigos trataron oralmente o en declaraciones escritas estas cuestiones que se tratan con más detalle en el informe presentado por el Grupo de Trabajo al Consejo Económico y Social en cumplimiento de la resolución 1599 (L).

142. El Sr. Valticos (RT.131), representante de la OIT, señaló los informes especiales séptimo y octavo del Director General relativos a la aplicación de la Declaración sobre la política de apartheid, en los que se analizaban recientes leyes laborales que tenían por efecto confirmar y concentrar los poderes de control de la administración. Señaló que el Ministro de Administración y Desarrollo Bantúes tenía poderes virtualmente ilimitados para prohibir el empleo de africanos o su empleo continuo en cualquier zona determinada, o en cualquier clase dada de empleo o profesión, o en el servicio de cualquier empleador o clase de empleadores (RT.131, págs. 13 a 15).

143. Varios testigos, incluso el Sr. Valticos (RT.131, pág. 22), el Sr. Bidi (RT.133, pág. 27) y el Sr. Kuzwayo (RT.132, pág. 46), subrayaron que las organizaciones sindicales africanas no tenían derechos legales y no estaban representadas en las negociaciones de salarios. También se negaba a los africanos el derecho de huelga. En la sección 18 de la Bantu Labour "Settlement of Disputes" Act de 1953 se disponía que ningún empleado africano instigaría o participaría en una huelga; hacerlo era un delito punible. Los obreros africanos y los sindicalistas en ciería eran perseguidos y hostigados cuandoquiera que trataban de organizar o negociar sus condiciones de empleo. No obstante, los africanos habían desacatado estas leyes y participado en huelgas, por ejemplo en Durban y en Port Elizabeth en 1970 (RT.133, pág. 27).

144. Se señaló a la atención la política de "reservas de empleo", que garantizaba seguridad de empleo a los trabajadores blancos, pero no a los africanos (RT.133, pág. 27). Los únicos empleos reservados a los africanos eran duros, desagradables y mal remunerados. Los procedimientos de registro laboral sometían a los africanos al rechazo de entrada en las ciudades y el desempleo (RT.132, pág. 46) y a ninguna elección de empleo. Estas leyes producían mano de obra esclava y fuerza de trabajo barata (RT.132, pág. 47)

145. Los testigos indicaron la enorme desigualdad entre los salarios de los trabajadores blancos y negros. La ausencia de una legislación de salario mínimo daba por resultado que los salarios de los africanos se determinaran en gran medida por las condiciones de mercado de la oferta y la demanda, según el Sr. Valticos (RT.131, pág. 17). Además, los africanos se encontraban en una posición desigual porque no tenían derechos de negociación colectiva según la legislación industrial. El factor más importante, sin embargo, era la barrera de color en la industria que impedía a los trabajadores africanos avanzar hacia los puestos mejor pagados y las ocupaciones técnicas. Un resultado de la barrera de color era que, al crear una escasez artificial de mano de obra calificada daba un valor excesivo a la fuerza de trabajo calificada entre los blancos, que explicaba en gran medida la diferencia excepcionalmente grande entre salarios para trabajadores calificados y no calificados. Pero incluso en los casos en que los africanos y los blancos realizaban un trabajo similar como en las profesiones médica y docente, la política oficial había mantenido una diferencia entre los ingresos de los diversos grupos raciales. El Sr. Bidi (RT.133, pág. 28) citó cifras comparativas de salarios en los sectores de la minería, la construcción, la manufactura y los servicios públicos. Señaló que los recientes aumentos de salarios en la industria minera habían representado un incremento de 7,5 millones de rands para 350.000 empleados africanos y de 7 millones de rands para 19.000 mineros blancos. Así, mientras la paga media del minero africano había aumentado solamente en 2,8 rands para alcanzar a 13 rands por mes, la de su contraparte blanco había aumentado en 15 rands (pág. 27). El Sr. Valticos se refirió a las tendencias para aumentar los salarios de los africanos, pero dijo que mientras la legislación en la práctica mantuviera la discriminación contra los trabajadores no blancos y africanos en las esferas de la capacitación, la educación y el acceso a las profesiones especializadas y calificadas, así como mientras se siguiera privando a los africanos de las libertades sindicales y los derechos de negociación, la situación de los africanos seguiría siendo mala.

#### Denuncias relativas a la inminencia de una guerra civil en Africa meridional

146. El Sr. Mark Shope, en su memorando, dijo que a menos que hubiera un rápido cambio hacia una mayor justicia política, económica, cultural y social, sobrevendría una guerra civil que ninguna policía, ejército o cañones podrían impedir. La responsabilidad por la violencia en Sudáfrica sería principalmente del "hombre blanco", que estaba impidiendo al hombre negro expresar sus legítimas aspiraciones políticas en la manera democrática normal.

### III. NAMIBIA

147. Los procedimientos ilegales de que se ha valido Sudáfrica para extender constantemente su jurisdicción a Namibia se han descrito en los informes precedentes 1/. En un informe anterior del Grupo también se habló de la South West Africa Affairs Act de 1969, que llevó aún más lejos la integración ilegal de Namibia en Sudáfrica, ampliando considerablemente el número de cuestiones que escapan a la competencia de la Asamblea Legislativa del Africa Sudoccidental 2/. El traspaso a Sudáfrica de una gran parte de los poderes y funciones hasta entonces ejercidos por el Gobierno del territorio prosiguió en el período de 1970-1972. Después de la Bantu Education Amendment Act Nº 44 de 1970, por la que se traspasó la responsabilidad por la educación de los africanos directamente al Gobierno sudafricano, la Coloured Persons in South West Africa Education Act Nº 63 de 1972, la Basters of Rehoboth Education Act Nº 85 de 1972 y la Nama in South West Africa Education Act Nº 86 de 1972 continuaron el proceso de traspaso del control de la educación a Sudáfrica, en estos casos al Departamento de relaciones con las personas de color y asuntos rehoboth, y terminaron el proceso de separar la educación de los no blancos de la de los blancos 3/.

148. Las leyes que tratan concretamente de la pena capital, el trato de los presos políticos, el control de la mano de obra, especialmente el nuevo reglamento para oficinas de empleo (R.83,1972) y la situación de los africanos en las llamadas "reservas indígenas" o "territorios patrios", que está regida por proclamación del Presidente del Estado, se mencionan en las secciones correspondientes de este capítulo.

149. El 4 de febrero de 1972 se proclamó un estado de emergencia en Ovambolandia en virtud de la Proclamación R.17 4/. Se prohibieron todos los mítines, reuniones y asambleas (sección 3). La proclamación dio amplios poderes a la policía sudafricana y a los comisionados indígenas para detener sin mandamiento judicial a cualquier persona y encarcelar a todo sospechoso de haber participado o de tener la intención de tomar parte en un delito previsto en la Proclamación (sección 19). Toda persona comprendida en esos casos podía ser detenida hasta que las autoridades estuvieran convencidas de que habían contestado total y verdaderamente todas las preguntas que se le hicieran. No se permitiría a ninguna persona detenida o encarcelada, sin el consentimiento del Ministro, que consultara a un asesor jurídico con respecto a ningún asunto relativo a su detención y encarcelamiento (sección 20). Quedaba restringida la entrada a todas las zonas prohibidas, y toda persona que no fuera residente y entrara, permaneciera o estuviera presente en la zona sería culpable de un delito (sección 4). La aplicación de estos poderes de emergencia se describe en las secciones de este informe que tratan de los presos políticos y de la huelga de los trabajadores bajo contrato.

---

1/ Véase en particular el documento de trabajo presentado por la Secretaría, E/CN.4/22/12, párrs. 1 a 9.

2/ E/CN.4/1020/Add.1, párrs. 2 y 3.

3/ La política educativa del Gobierno sudafricano se examina en detalle en el último informe del Grupo, E/CN.4/1050, párrs. 283 a 295.

4/ Government Gazette, Nº 3377.



A. La pena capital en Namibia

1. Resumen de algunas leyes pertinentes

150. Como se ha dicho en los informes anteriores del Grupo (E/CN.4/1020/Add.1, párr. 5 y E/CN.4/1050, párr. 215), las leyes sudafricanas que autorizan la imposición de la pena capital se aplican ilegalmente en Namibia. Entre estas leyes puede citarse la ley sobre sabotaje (General Law Amendment Act Nº 76 de 1962) y las enmiendas a la misma, y la Ley Nº 83 de 1967 sobre el terrorismo.

2. Análisis de los testimonios recibidos por el Grupo Especial de Expertos

151. Los testigos, Sres. Moses Garoeb, Nanyemba, Mifima y Nyamu, se refirieron a la situación en la faja de Caprivi desde 1970. El Sr. Garoeb (RT. 138, pág. 66) dijo que desde agosto de 1972 la región había sido virtualmente una zona cerrada, a la que solamente podían entrar la policía y personal militar autorizado por el Gobierno. En este período, manifestó, se había dado muerte a muchas personas, mientras que otras habían sido obligadas a huir de Zambia o a refugiarse en la selva.

152. Sobre los acontecimientos ocurridos desde la huelga de 1971-1972, el Sr. Shipanga (RT. 134, págs. 4 y 5) presentó un documento firmado, pero confidencial, que entregó al Presidente para que lo verificara, y que informaba sobre tiroteos de la policía en Ovambolandia. De acuerdo con este informe las fuerzas del ejército y la policía habían disparado sobre una multitud reunida en Ohangwena. Un hombre llamado Mandali fue muerto en el acto. El 28 de enero de 1972 la policía dio muerte a dos hombres en Ondobe. El domingo 30 de enero de 1972 la policía había matado a cuatro hombres en Epinga. En esta ocasión la policía había disparado sobre una multitud de personas que asistían a la iglesia. Varias personas que fueron heridas en ese incidente murieron posteriormente. La misma semana hubo una reunión en Ongenga donde murió una persona. Tres hombres murieron en una incursión policial en helicóptero en Onanjena, aunque solamente se recuperó un cadáver. El documento añadía que había una fosa común en Onangula. No se sabía el número de personas muertas, pero se calculaba que había allí entre 300 y 400 personas enterradas. Según informes la zona está protegida por un fuerte contingente del ejército estacionado cerca del lugar. Ha habido informes de otras fosas comunes en otras partes de Ovambolandia. En el memorando de la Federación Panafricana de Sindicatos se menciona la existencia de fosas comunes en el lado namibiano de la frontera con Angola. El memorando de la Federación Panafricana de Sindicatos, que fue presentado por el Sr. Manyandu (RT. 135, págs. 2 a 6) se refería también al caso de Epinga, cuando la policía disparó sobre un grupo de miembros de la iglesia anglicana en su camino a un servicio dominical, con libros de himnos y misales en las manos. Tres personas fueron muertas en el acto: Tomas Muesihange, Lukas Veike y Benjamin Helumani. Otras tres fueron heridas: Seimba Muixika, Philipus Kotilipa y Kakaibe Nghidinua. Un cuarto herido murió más tarde en el hospital.

153. El Sr. Shapumba Ilonga (RT. 132, págs. 28 a 30) declaró que según informes de Namibia muchas personas habían sido muertas durante la huelga. Una carta confidencial de un hospital situado en la parte norte del territorio informaba que los pacientes admitidos habían permanecido ahí sin ningún tratamiento y que no se había permitido a nadie comunicarse con ellos. Se creía que esas personas habían muerto. Desde

que se había iniciado la huelga habían continuado los asesinatos en las zonas del norte. En Ondangua personas de diferentes partes de la zona habían sido reunidas y encadenadas juntas durante tres o cuatro días (RT. 132, pág. 31). Habían sido trasladadas en camiones, pero no se conocía su paradero; algunos decían que habían sido asesinados o habían muerto en campamentos. Otras personas a quienes habían sacado de sus hogares habían sido abandonadas sin alimentos ni agua y habían muerto al tratar de regresar a sus reservas.

154. El Sr. Shipanga (RT. 132, págs. 7 a 10) expresó que se creía que algunos prisioneros habían muerto torturados después de la huelga. En el hospital de Oshikata se habían visto cadáveres que más tarde retiró la policía. Uno de ellos estaba cubierto con una manta. Un miembro africano del personal del hospital preguntó a los policías a quién pertenecía la manta. Un policía contestó "a la prisión". El policía pensaba que siete u ocho personas habían sido enterradas; posiblemente eran las mismas que habían sido muertas por la policía el día anterior. El Sr. Shipanga (RT. 134, pág. 22), dijo que había casos en que los policías actuaban como jueces y mataban inmediatamente a los que consideraban culpables.

155. Según la información de que dispone el Grupo 5/ acerca de la matanza de cuatro hombres en Epinga, el 30 de enero de 1972, la Iglesia Anglicana de Namibia se había reunido en Othimbingue para examinar la situación de Ovambolandia y los problemas de las iglesias que actuaban ahí, y en esa ocasión recibieron información sobre el incidente. Según informantes de la iglesia que habían estado presentes en la ocasión, un grupo pacífico de anglicanos ovambos, muchos de ellos con sus misales y libros de himnos, regresaban del servicio religioso dominical. Una patrulla armada se acercó a las personas cerca de la iglesia, que queda a corta distancia de la principal carretera fronteriza. La congregación que salió de la iglesia vio las patrullas armadas, se aterrorizó y corrió en todas direcciones hacia el bosque. La patrulla entonces se retiró a la carretera fronteriza. Algunos hombres de la patrulla armada salieron de sus vehículos y se escondieron en el bosque. Los africanos salieron del bosque y se reunieron cerca de la iglesia. Estaban comentando por qué habrían venido las patrullas armadas, cuando los hombres salieron de su escondite y los rodearon. Por segunda vez la gente trató de huir. Entonces la policía les dio la voz de alto. Todos fueron registrados para ver si tenían documentos comprometedores y armas. Testigos oculares dijeron que la policía no encontró nada. Un africano de 19 años llevaba un bastón. Un capitán se le acercó y le preguntó si tenía un cuchillo; el joven contestó que no tenía ninguna arma; el capitán dijo "yo os conozco", y se afirma que trató de golpear al joven en la cabeza con un palo. El joven se asustó y trató de evitar el golpe, y su cabeza fue acribillada por las balas. Se dice que un sacerdote anglicano tiene parte del cráneo del joven en su poder. La gente trató otra vez de huir, y la policía disparó sobre la multitud y otros tres africanos fueron muertos; tres fueron heridos gravemente y trasladados al hospital en Oshakati, donde murió más tarde uno de ellos. Los nombres de los muertos son los que aparecen en el testimonio de la Federación Panafricana de Sindicatos, con la adición del nombre de Matías Ohainengena entre los muertos.

156. Según la Policía de Seguridad sudafricana, que ofreció una recompensa de 1.000 rands por la detención de Patrick Ijambo, guerrillero de Ovambolandia y

---

5/ Esta información figura en una declaración de prensa publicada por el Reverendo Colin O'Brien Winter, Obispo de Damaralandia, en una conferencia de prensa celebrada en Londres el 9 de marzo de 1972 en la Cámara de los Comunes.

Angola meridional, el jefe Nicodemus Hilombua de Ojavanenge recibió un disparo y fue herido durante la persecución de Ijambo, y murió poco después 6/.

B. Trato dado a los presos políticos y a los combatientes por la libertad que caen prisioneros

1. Resumen de algunas leyes pertinentes

157. Como se indica en los informes anteriores del Grupo, se ha dispuesto expresamente que las leyes de seguridad de Sudáfrica que autorizan la imposición de penas severas de prisión y el encarcelamiento sin juicio por actividades contra el apartheid se han hecho concretamente aplicables a Namibia 7/. Entre ellas figuran la Prisons Act N° 8, de 1959, y la General Laws Amendment Act, de 1969. Además hay algunas proclamaciones que se refieren exclusivamente a Namibia 8/. En particular, la promulgación de la Proclamación R.14 sobre Ovambolandia en 1972 sometió a esa región a la ley de emergencia. Los amplios poderes conferidos a la policía y a la administración por esta proclamación se reseñan en los párrafos anteriores de este informe. En un informe anterior del Grupo (E/CN.4/1050, párrs. 264 a 267) se describe la incorporación de la fuerza de policía del Africa Sudoccidental a la policía sudafricana, cuyo cuerpo está autorizado, en consecuencia, a ejercer los poderes confiados a la policía por las leyes del Territorio bajo mandato. El comisario de la policía sudafricana, que depende de la dirección del Ministro, tiene el mando, la superintendencia y el control de la fuerza de Namibia, lo mismo que en Sudáfrica. La Republic's Police Act N° 7, de 1958, modificó la definición de "República" para incluir al territorio del Africa Sudoccidental, aplicando así todos los poderes de la policía al Territorio. Las leyes de seguridad sudafricanas que disponen la imposición de penas severas por delitos políticos y el encarcelamiento sin juicio, que se han hecho concretamente aplicables a Namibia son así ejecutadas por miembros de la policía sudafricana estacionados o adscritos en el Territorio.

2. Análisis de los testimonios recibidos por el Grupo Especial de Expertos

158. Los testimonios presentados al Grupo pueden reunirse en tres grupos: a) información relativa a detenciones recientes y al número de presos políticos; b) alegaciones sobre torturas y trato cruel, inhumano y degradante de los presos políticos; c) alegaciones sobre violaciones del derecho de los acusados a un juicio imparcial y público y a la posibilidad de presentar quejas y apelaciones.

---

6/ Rand Daily Mail, 10 de agosto de 1971; Star, 15 de agosto de 1971.

7/ Véase E/CN.4/1020/Add.1, capítulo XIV, párr. 9.

8/ Véase E/CN.4/AC.22/12 para los detalles sobre la Proclamación N° 56 sobre zonas urbanas indígenas, que dispone entre otras cosas que cualquier juez o comisionado de asuntos indígenas puede declarar "persona ociosa o perturbadora" a un indígena residente en una zona urbana, y ordenar su detención y encarcelamiento antes de su expulsión. Véase también E/CN.4/1050 (párrs. 261 a 263) para los detalles sobre la Native Administration Proclamation N° 15, de 1928, y el reglamento que figura en la Government Notice N° 6, de 1930, que delimita las funciones de los jefes y los notables y los somete al control de los comisionados bantúes y su personal, y a la fuerza de la policía.

159. El Grupo examinó los testimonios que se analizan infra a la luz de las normas internacionales consagradas en los siguientes instrumentos: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el conjunto de Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.

a) Información relativa a detenciones recientes y al número de presos políticos

160. El Sr. Garoeb (RT. 138, pág. 73) dijo que estimaba que alrededor de 900 personas habían sido detenidas durante la huelga de los trabajadores por contrato, y posteriormente. Todavía no se tenían noticias de los que habían desaparecido de sus hogares. Manifestó que muchos de los detenidos no eran encarcelados en Namibia sino en Sudáfrica, aunque no se sabía exactamente dónde. El Sr. Shipanga (RT. 134, págs. 5 y 6) informó al Grupo de que las detenciones en masa habían continuado desde el comienzo de la huelga hasta febrero de 1972. Su informante en Namibia había visto a camiones policiales llenos de personas detenidas que se dirigían a Ondangwa. Solamente se había dejado en libertad a aquellos que estaban por encima de toda sospecha. Con respecto al número de detenidos y torturados, el Sr. Shipanga calculó que había centenares, si no millares (págs. 12, 33). Se había detenido a la gente al azar. Dijo que la policía y el ejército habían actuado con desenfreno en el Territorio, especialmente en las zonas septentrionales, pero también en partes de Namibia central y meridional. En los lugares donde las prisiones eran demasiado pequeñas para recluir a los presos se construían cercas de alambre de púas electrificadas y vigiladas por centinelas (RT. 134, pág. 17). El campamento de Swakopmund, en el desierto, se encontraba en una zona restringida en la que no podía entrar ninguna persona que no estuviese autorizada. Los detenidos no tenían alojamiento. Existían campamentos en Ondangwa, y en Oshakati, Oshikango y Runtu. Había también varios en Caprivi, uno en Grootfontein, otro en Windhoek, en Warmbad en el sur, y había empalizadas en Walvis Bay y Swakopmund (RT. 134, pág. 16). En su testimonio el Sr. Ilonga (RT. 132, pág. 31) declaró que gran número de personas detenidas durante la huelga habían permanecido encadenadas en Ondangwa durante 3 ó 4 días y luego habían sido transportadas en camiones a campamentos de tránsito.

161. El Sr. Garoeb (RT. 138, págs. 67 a 70) dijo que los detenidos en la faja de Caprivi habían sido reunidos en sus aldeas, que fueron incendiadas, y luego habían sido trasladados en helicópteros militares a Sudáfrica. No se sabía lo que les había ocurrido, pero el Sr. Garoeb alegó que a algunos los habían llevado presos a la isla de Robben. Otros fueron trasladados por aire desde la faja de Caprivi a zonas remotas de Namibia, en el sur, o hacia el desierto de Kalahari. Allí eran investigados y luego confinados en campamentos.

162. El Sr. Shipanga (RT. 134, pág. 32), manifestó que habían desaparecido las personas detenidas por tomar parte en manifestaciones durante la visita al Territorio efectuada por el Secretario General de las Naciones Unidas, por ejemplo en Windhoek, o que habían sido fotografiadas por la policía de Ovambolandia, por ejemplo en Oshakati, y que luego habían sido detenidas en sus hogares en incursiones efectuadas por la policía en las primeras horas de la mañana. No se sabía dónde se encontraban detenidas. El Sr. Ennals (RT. 130, págs. 49 y 50) dijo que 88 personas habían sido procesadas desde la visita del Secretario General en febrero. El memorando de la Federación Panafricana de Sindicatos se refería también al gran número de detenciones hechas después de esta visita.

163. El Sr. Shipanga (RT. 134, pág. 12) y Monseñor Winter (RT. 129, pág. 137) prestaron también declaración sobre el gran número de detenciones de africanos por infringir leyes y reglamentos menores. Según información con que cuenta el Partido Laborista, el 11 de junio de 1971 una fuerza policial armada realizó una incursión en el pueblo de Katatura en Windhoek, y detuvo a casi 800 hombres alegando que se encontraban ilegalmente en la zona. Los 5.200 habitantes del caserío fueron investigados, y sólo se los puso en libertad cuando la policía comprobó que se encontraban legalmente en la zona. Se esperaba que muchos de los detenidos fueran repatriados a Ovambolandia 9/.

164. Las únicas cifras oficiales con respecto al número de personas detenidas en virtud de la proclamación de emergencia fueron presentadas en la Asamblea Legislativa por el Ministro de Policía. Según el Times de Londres, el Ministro dijo que 213 personas habían estado detenidas durante más de 7.000 días y que 130 personas habían estado detenidas por períodos de 1 a 53 días. De éstas, 21 habían estado detenidas durante 29 días, 46 durante 49 días y 25 durante 53 días. Además, 83 personas seguían aún detenidas 10/.

165. Con respecto al número de presos namibianos en la isla de Robben, el Sr. Garoeb (RT. 138, págs. 74 y 75) declaró que eran 34, que todos eran combatientes activos de la SWAPO, y que entre ellos estaba Herman Ja Toivo.

b) Alegaciones sobre torturas y trato cruel, inhumano y degradante de los presos políticos

166. Varios testigos prestaron declaración con respecto a la tortura de los presos políticos y el trato inhumano, cruel y degradante de que fueron objeto mientras estuvieron detenidos. El Sr. Shipanga (RT. 134, págs. 5 a 10) dijo que su informante en Namibia le había comunicado que se había entrevistado con algunas personas que eran indudablemente inocentes y que habían sido puestas en libertad hacia fines de marzo de 1972, y les había preguntado sobre sus experiencias. El empleo de la tortura por la policía era un sistema y no un caso de trato cruel impuesto por ciertas personas. Aun antes de que se iniciara el interrogatorio, se daban golpes y puntapiés a la víctima. Un testigo ocular describió cómo un grupo de policías blancos habían dado puntapiés a un hombre en el estómago, en el diafragma y en los órganos sexuales y luego, cuando cayó al suelo, en la cara. Luego se le dijo que hablara. Si no tenía nada que decir, empleaban otros métodos. Este hombre fue amenazado con un revólver; se disparó un revólver cerca de su oído; se le lanzaron perros; se lo golpeó con la culata de un revólver y se lo insultó. Los detenidos trasladados a Oshikango no fueron alojados en prisiones sino en camiones, donde estaban hacinados, sin lugar para echarse a dormir. No se les daba de comer a menos que los africanos de la zona les trajeran comida. Por la mañana se les permitía abandonar los camiones para satisfacer sus necesidades en el bosque. Durante el día tenían que arreglárselas lo mejor que podían. Se los maltrataba y torturaba. Algunos fueron interrogados durante días enteros. La obligación de los policías africanos era golpear a los cautivos. También se los hacía estar de pie, en posiciones incómodas y sosteniendo pesos. Si se movían, les pegaban. Algunos eran colgados de un travesaño por las manos o los pies, con la cabeza colgando, y se les daban golpes o puntapiés. El trato más duro era el empleo de descargas eléctricas. Se cubrían los ojos de la víctima con un trapo húmedo c

---

9/ Rand Daily Mail, Johannesburgo, 12 de junio de 1971.

10/ Times, Londres, 13 de abril de 1972.

con una manta, y luego lo amarraban, sentado o agachado. Los electrodos se aplicaban a los pies y se conectaba la corriente. Si la víctima se desmayaba, la reanimaban con agua fría. Las víctimas no podían ver el aparato dado que tenían los ojos cubiertos, pero un hombre pudo ver la marca, que decía "Honda, made in Japan". Al final, se los amenazaba para que no contaran a nadie lo que habían experimentado, sobre todo con respecto a la aplicación de descargas eléctricas. Al cabo de unos días este grupo de presos fue trasladado a Ondanga. La prisión era demasiado pequeña y entonces se los alojó en una cuadra hecha de chapa corrugada, donde 10 u 11 hombres tenían que estar en un recinto de 3,5 metros por 3 metros.

167. Monseñor Winter (RT. 129, págs. 122 a 125) y el Sr. Ennals (RT. 130, págs. 36 y 37) citaron el caso del Reverendo Olavi Nailenge 11/ que había sido torturado. Monseñor Winter dijo que repetidas veces había llegado información a su oficina de Windhoek sobre casos de tortura. Una vez había visto las marcas en los dedos de un ovambo producidas por la aplicación de descargas eléctricas a que se lo había sometido durante su permanencia en la prisión de Ovambolandia. Otro ovambo le había mostrado cicatrices en la cara producidas cuando le habían arrancado parte de la barba mientras la policía lo había tenido en confinamiento solitario durante un año, en Pretoria (RT. 129, pág. 126).

168. En el memorando de la Federación Panafricana de Sindicatos se enumeran los métodos de tortura empleados, entre los que figuran: tirotear a la víctima; aplicación de descargas eléctricas; arrojar a las víctimas desde helicópteros; quemaduras; aplicación de parafina; golpear y apalear a la víctima.

169. En una declaración escrita presentada al Grupo, el Sr. George Mbele describe las condiciones existentes en la isla de Robben, incluso para los presos namibianos, según el relato hecho por un preso recientemente puesto en libertad. Con respecto a las condiciones generales en la isla, véase el capítulo I, párrafos 45 y 46. En cuanto a los presos namibianos, dijo que estaban aislados de los demás presos y en condiciones extremadamente malas, peores aún que en el caso de otros grupos de presos. Un preso al que se había herido de bala en una pierna en el momento de su detención, no había sido curado en la prisión y al final hubo que amputarle la pierna. En el memorando se dan detalles sobre tres grupos de presos namibianos confinados en la isla de Robben. En febrero de 1968 se condenó a 30 namibianos en aplicación de la ley sobre terrorismo; 19 fueron sentenciados a prisión perpetua, varios a 20 años y algunos a períodos de 2 a 5 años. En agosto de 1969 se condenó a seis hombres en aplicación de la ley sobre terrorismo: cinco a prisión perpetua y el sexto a 18 años de trabajos forzados. Uno de estos acusados, Gaus Shikomba, había sido baleado por la policía. Un médico informó al tribunal que había visto a un preso con una herida de bala cicatrizada, de 9 pulgadas por 4. Se le había hecho un injerto de piel y la herida era muy grave, pero Shikomba "podía caminar". Por último, en un juicio secreto celebrado en Pretoria a mediados de 1970, se acusó y condenó a diez hombres en aplicación de la ley sobre terrorismo.

---

11/ De la información al alcance del Grupo parece que el Reverendo Olavi Nailenge fue detenido el 26 de enero de 1972, alojado durante una semana en Oshikanga, y luego transferido a Ondangua, el 2 de febrero de 1972. (Declaración del Archidiácono de Odibe, dada a conocer en una conferencia de prensa celebrada en Londres el 9 de marzo de 1972.)

170. El Sr. Ennals (RT. 130, págs. 43 a 45) manifestó que la reclusión de esos hombres en la isla de Robben, a 1.000 millas de sus hogares, constituía un problema enorme que se agregaba a los que ya tenían sus familias, que deberían seguir procedimientos largos y difíciles a fin de obtener permiso para visitar a sus parientes en la prisión. De hecho, el permiso no se les concedía. Una complicación era el costo del viaje, si conseguían el permiso. El Sr. Ennals dijo que la reclusión de namibianos en la isla de Robben era totalmente impropia y simbolizaba la autoridad de Sudáfrica impuesta en Namibia. Agregó que el apoyo declarado de Sudáfrica al conjunto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, incluía el derecho de los presos -bajo la necesaria supervisión- a comunicarse con sus familiares y amigos reconocidos a intervalos regulares, tanto por correspondencia como mediante visitas. El Gobierno sudafricano había manifestado que reconocía la necesidad de prestar atención especial al mantenimiento y mejoramiento de las comunicaciones entre el preso y su familia, como cosa conveniente para el bien de ambos. No se observaba ninguno de estos principios. El Sr. Ennals (RT. 130, pág. 37) declaró que inquietaba el hecho de que el castigo se estaba haciendo extensivo a los parientes de los presos políticos namibianos. Un ejemplo de ello era el caso de la Sra. Elizabeth Toive, anciana viuda cuyas tentativas de visitar a sus hijos que cumplían penas de prisión perpetua en la isla de Robben se habían visto frustradas repetidas veces. Se había señalado al Comité de la Cruz Roja que había obstáculos casi insuperables para las visitas a la prisión dado que los permisos debían solicitarse por lo menos en cuatro departamentos gubernamentales antes de que una visita fuese autorizada.

171. El Sr. Ennals señaló también a la atención del Grupo (RT. 130, pág. 37) el destierro del Sr. Nathaniel Mahuilili, Presidente interino de la SWAPO, en aplicación de las disposiciones de la ley de 1950 sobre represión del comunismo. El Sr. Mahuilili era un ex detenido que había sido acusado junto con otros 36 namibianos en aplicación de la ley de 1967 sobre terrorismo. Declarado inocente de la acusación principal de participar en actividades terroristas, se lo condenó, con respecto a otras acusaciones basadas en la ley de represión del comunismo. Se le había impuesto una pena de cinco años de cumplimiento obligatorio suspendida durante 59 meses y, según observadores independientes, se encontraba entre los acusados respecto de los cuales el tribunal no había encontrado pruebas de participación en actos de violencia. El Sr. Mahuilili había estado bajo vigilancia policial durante un largo período, llevando una vida solitaria, aislado de todo; la nueva restricción que se le había impuesto, o sea la orden de destierro, aumentaría su aislamiento. Según la información recibida por el Grupo, éste es el primer caso de destierro de un namibiano en virtud de la ley sobre represión del comunismo, que se hizo extensiva al Territorio en 1966.

c) Alegaciones relativas a las violaciones del derecho de los acusados a un proceso justo y público, y procedimientos de reclamación y de reparación

172. El conjunto de testimonios sobre detenciones y encarcelamientos recientes ocurridos, especialmente desde la declaración del estado de emergencia en Ovambolandia, indica que los derechos de los detenidos han sido manifiestamente violados. Las detenciones en virtud de poderes conferidos por proclamación a la policía y a la administración, especialmente por la proclamación R.14, por la que se confirieron a la policía poderes de emergencia, han dejado a los detenidos sin recurso jurídico, puesto que se les ha impedido expresamente consultar a un abogado. Además, la mayoría de las detenciones ha ocurrido en lugares remotos del país, inaccesibles por la emergencia, y de los que no ha llegado ni siquiera información completa acerca del número de detenciones.



173. El Sr. Shipanga (RT. 134, pág. 22) dijo que, no obstante el pretexto de que se trataba de un sistema de mantenimiento del orden público, los tribunales eran sólo una comedia.

174. Un testimonio señaló en una audiencia privada (RT. 127/Add.1, págs. 8 y 9) que los enjuiciamientos de después de la huelga se han llevado a cabo en partes remotas e inaccesibles de Namibia. Eso ha hecho difícil, si no imposible, para el acusado, obtener ayuda legal o llamar testigos para organizar su defensa. Y eso no obedeció a razones de competencia de los diferentes tribunales, sino al propósito deliberado de la fiscalía de hacer que las cosas resultaran difíciles y costosas para el acusado.

175. El Sr. Garoeb (RT. 138, págs. 59 y 60) señaló a la atención del Grupo el caso del Sr. Brendan Simbwaye, Vicepresidente de la South West Africa Peoples' Organization y profesor de profesión. Enseñó en la faja de Caprivi hasta 1964, y fue detenido allí por sus actividades políticas. Fue llevado a Pretoria y después, a fines de 1968, a Namibia, donde fue encarcelado en la parte meridional, cerca de Keetmanshoop. En 1970 salió subrepticamente de la cárcel la noticia de su enjuiciamiento inminente, la cual se hizo pública, pero después no hubo ninguna otra señal de enjuiciamiento. Según el testigo, el Sr. Simbwaye se hallaba aún preso. Durante todos los años de su encarcelamiento no se le ha acusado oficialmente de ningún delito común político. Los últimos informes indicaron que se le había trasladado del sur a la parte septentrional, donde se hallaba aún preso y delicado de salud.

#### C. Situación de los africanos en las "reservas indígenas"

176. La presente sección pone al día los informes anteriores del Grupo sobre la situación de los africanos en las "reservas" y en los "territorios patrios". A juzgar por las pruebas e informaciones de que ha dispuesto el Grupo, parece que no se han establecido en Namibia "campamentos de tránsito" del tipo de los organizados en Sudáfrica. Hay casos en que se obliga a las personas a permanecer en una zona determinada de las reservas, pero han sido restricciones individuales a sitios prescritos, y no el traslado de grupos enteros de personas a las que no se permite buscar trabajo fuera de los campamentos de tránsito, o que no están autorizados para hacerlo. Ha habido, desde luego, traslados forzosos de poblaciones africanas (véase E/CN.4/1050, párrs. 268, 269 y 304) en el curso de la aplicación por el Gobierno de su política de redistribución en larga escala en los "territorios patrios", pero dichos traslados forzosos se distinguen de la política que se sigue dentro de Sudáfrica para asentamientos en los campamentos de tránsito a fin de poder controlar a ciertas categorías (descritas en E/CN.4/1050, párr. 157), especialmente las consideradas improductivas (los ancianos, los enfermos y los viudos) y ciertos presos políticos después de cumplida su condena. La alusión a los "campos de concentración" hecha por los testigos ante el Grupo Especial de Expertos (especialmente por el Sr. Shipanga, RT. 134) parece no referirse a los campamentos de tránsito o reasentamiento de la población, sino a los campamentos que se han establecido debido al excesivo número de presos en las cárceles, o en los sitios de emergencia dispuestos por la policía para los detenidos.



1. Antecedentes

177. En anteriores informes del Grupo<sup>12/</sup> se describió el sistema de reservas indígenas, ideado por la administración alemana antes del período de mandato de la administración sudafricana, y adoptado y ampliado después por esta última. También se describió la aplicación de la política de "territorios patrios" o "bantustanes", expuesta en un informe de una comisión oficial de 1964 <sup>13/</sup>.

2. Resumen de la legislación promulgada a partir del 30 de diciembre de 1970

178. Desde fines de 1970 se han tomado otras medidas con miras al establecimiento de los llamados "territorios patrios" para grupos étnicos, de conformidad con la Self-Government of Native Nations in South West Africa Act N° 54 de 1968 <sup>14/</sup>.

179. La Namaland Consolidation and Administration Act N° 79 de 1972 <sup>15/</sup> dispone que se reserve y se separe con el nombre de Namalandia una zona unificada en el territorio para el uso y ocupación exclusivos del pueblo Nama. El control que ejercía antes el Ministro de Administración y Desarrollo bantúes se ha transferido al Ministro de Asuntos de las Personas de Color (sección 8, inciso 1)). El "territorio patrio" consiste en cuatro reservas existentes: Berseba, Tses, Soromas y Gideón, junto con tierras del Estado ocupadas predominantemente por los namas en ciertos distritos. Se excluyen del territorio patrio tres antiguas reservas para namas: Bondes, Neuhoof y Warmbad. La ley dispone, entre otras cosas, que "todas las tierras de Namalandia se considerarán privadas, y el Ministro se considerará propietario de tales tierras". El Ministro puede autorizar la explotación de minerales y señalar la suma que ha de pagarse por tales derechos "en la forma que le pareciere conducente a la promoción del bienestar de los habitantes de Namalandia y al desarrollo general de Namalandia".

180. La Bantu Laws Amendment Act N° 23 de 1972, que era una ley de carácter general por la que se enmendaban otras leyes, cambió los nombres de Okavango a Kavango, y de Ovambo a Ovambo (sección 8), y amplió ligeramente las facultades de los consejos legislativos, aunque sólo en asuntos relacionados con asentamientos y registro de escrituras, control y regulación del tránsito por carretera, nacimientos, matrimonios, defunciones y uniones consensuales, el nombramiento de jefes (aunque sólo previa aprobación del Presidente del Estado) y el establecimiento de municipios (aunque sólo previa aprobación del Ministro) (sección 9).

181. La Development of Self-Government for Native Nations in South West Africa Act N° 54, de 1968, facultó al Presidente del Estado (en virtud de las secciones 3, 4 y 6) para establecer por proclamación asambleas legislativas de los "territorios patrios", sin referencia al Parlamento. Por la proclamación R.6, de febrero de 1972, se estableció un consejo legislativo para Caprivi oriental <sup>16/</sup>. Dicho consejo está

<sup>12/</sup> Véase E/CN.4/1020/Add.1, 30 de junio de 1970, capítulo XV, párrs. 29 a 36.

<sup>13/</sup> Véase A/8723/Add.2, párrs. 11 a 40; un resumen de las recomendaciones de la Comisión Odendaal figura en Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo sexto período de sesiones, Suplemento N° 23 (A/8424/Rev.1), capítulo VII, anexo, párr. 51.

<sup>14/</sup> Un resumen de dicha ley figura en E/CN.4/1020/Add.1, párr. 39.

<sup>15/</sup> Government Gazette N° 3578, 21 de junio de 1972.

<sup>16/</sup> Government Gazette N° 3373, 2 de febrero de 1972.

integrado por 28 miembros, que comprenden al Jefe, quien sirve ex-officio, y a 13 miembros por cada una de las autoridades tribales de Mafwe y de Basubia. Hay un Consejo Ejecutivo de cuatro miembros. La creación de cuatro departamentos del Consejo Legislativo se promulgó en la gaceta seis meses más tarde 17/. Dichos departamentos son el de Asuntos y Finanzas de la Administración, el de Agricultura y Obras Públicas, el de Educación y Cultura y el de Justicia y Asuntos Comunes. Las facultades del Consejo se limitaron a la promulgación de ordenanzas sujetas a la aprobación del Presidente del Estado, relacionadas esencialmente con asuntos correspondientes a los departamentos mencionados. El Caprivi oriental, que en julio de 1971 se agregó a la zona de jurisdicción del Comisionado General para los pueblos indígenas del África Sudoccidental, después de haber estado anteriormente bajo la jurisdicción directa del Gobierno sudafricano, viene a ser de esa manera el tercer "territorio patrio", después de Ovambolandia y Okavangolandia, que se designa como un "territorio patrio" con autonomía limitada.

182. Varios decretos del Consejo Legislativo de Ovambolandia fueron aprobados por el Presidente del Estado y promulgados por proclamación. Entre dichos decretos figuraban los siguientes: Decreto N° 3 de 1972 (Owambo Trading and Licensing Enactment) 18/, que dispone el control de empresas industriales y comerciales de los "miembros de la nación owamba" y la concesión de licencias; Decreto N° 5 de 1972 (Owambo Nation Registration Enactment) 19/, que dispone que se empadrone a los miembros de la nación owamba y se les expidan certificados; Decreto N° 7 de 1972 20/, que cambió el nombre de "Ovambolandia" a "Owambo", y el título de "Consejo Legislativo de Ovambolandia", por el de "Consejo Legislativo de Owambo".

### 3. Análisis de los testimonios recibidos

#### a) Derechos políticos y poderes de la policía

183. El Sr. Garoeb rindió testimonio acerca de la faja de Caprivi o Caprivi oriental (RT. 138, pág. 66) en el sentido de que desde agosto de 1972 había sido una zona virtualmente cerrada y que para entrar a la misma se necesitaba autorización oficial del Gobierno sudafricano. Desde 1971 la zona ha sido en realidad una zona militar, en la que hay patrullas militares diarias de helicópteros y botes militares en los ríos Zambesi, Chokwe y Cuando. Aunque de hecho la faja de Caprivi ha sido declarada un bantustán, la verdad es que constituye una base militar sudafricana (pág. 67).

184. El Sr. Shipanga describió en su testimonio (véase el párr. 20 del presente informe sobre el trato dado a los presos políticos) los amplios poderes de detención y encarcelamiento conferidos a la policía y ejercidos por ella.

---

17/ Proclamación 232 de 1972, 15 de septiembre de 1972.

18/ Proclamación R.1626, de 15 de septiembre de 1972.

19/ Proclamación R.1628, de 15 de septiembre de 1972.

20/ Proclamación R.1668, de 15 de septiembre de 1972.

185. Monseñor Winter (RT. 129, pág. 137) dijo que lejos de considerar a los "bantustanes" como instituciones que confieren a sus habitantes derechos políticos, los africanos estimaban el ser puestos en ellos como castigo por su oposición a la administración alemana y a los sucesivos gobiernos sudafricanos, con los que se habían negado a colaborar. Tal era el caso del pueblo herero, obligado a establecerse en el desierto de Kalahari. No se ha ofrecido otra opción a ese pueblo en las diversas reservas; se les ha forzado a trasladarse a ellas, que están siendo convertidas en territorios patrios.

186. Monseñor Winter (RT. 129, págs. 121 a 125) citó parte de un documento expedido por el Consejo Ejecutivo Tribal de Damara para su publicación, en el que se decía:

"Nosotros, el pueblo de Damara, hemos sido privados de la dignidad humana y la libertad, puesto que tenemos que llevar pases. Queremos señalar en este caso que nosotros, los naturales de esta tierra, llevamos pases, mientras que los extranjeros transitan libremente por nuestras tierras. No tenemos ni libertad de palabra ni de circulación en nuestra tierra. Queremos preservar la unidad y el espíritu de hermandad que existen en el pueblo del Africa Sudoccidental, pero se nos obliga a vivir **divididos**, como "desarrollos separados". Vivimos en nuestra propia tierra como esclavos, puesto que se nos considera sólo como mano de obra. No hay para nosotros una vida libre ... Nos oponemos a la política de los territorios patrios. Se nos deshereda sistemáticamente y se nos hace extranjeros en nuestra propia tierra. No se puede dar a los damaras autoridad territorial sobre una pequeña extensión que ellos consideran como un gallinero ..." 21/

187. Según la información disponible, el Concejal Jefe del territorio patrio de Kovango ha anunciado que su Junta Ejecutiva decidió por unanimidad pedir al Gobierno sudafricano que concediera la autonomía al territorio. Dijo que Kovango había progresado hasta un punto tal que esa medida estaba justificada, y que el Consejo Ejecutivo quería que el pueblo de Kovango desempeñara una función más prominente en la selección del Consejo Legislativo. Si se concedía la autonomía, el Consejo celebraría elecciones para que el pueblo pudiera elegir a los miembros del cuerpo legislativo 22/.

b) Traslados forzosos de poblaciones africanas

188. Además del testimonio de Monseñor Winter expuesto en el párrafo 39, no se ha presentado ningún otro testimonio acerca de traslados forzosos de la población africana.

189. Según la información de que dispuso el Grupo, se están estudiando planes oficiales para persuadir a los bosquimanos nómadas a trasladarse a su "territorio patrio" en Tsumkve, entre la zona de los okavangos y la de los hereros. Se afirmó que ello tenía por objeto reducir las pérdidas de ganado sufridas por los agricultores blancos en las más remotas partes del sector meridional. Se facilitarían en diversos puntos alimentos,

---

21/ Véase también Financial Mail, Johannesburgo, 4 de agosto de 1972.

22/ Summary of World Broadcasts, ME/4045/B/4, Johannesburgo, English for Abroad, 1600 GMT, 17 de julio de 1972.

tabaco y otros artículos; tendrían que ser comprados, y se esperaba que los nómadas aceptarían empleo para poder pagarlos 23/. El 11 de agosto de 1970 el Primer Ministro anunció que se había nombrado un Comisionado para Bosquimanos, y que bajo la dirección de expertos en diversas esferas se estaba promoviendo el desarrollo de la región en que habitaban, para que en fin de cuentas los bosquimanos la pudieran utilizar 24/.

190. De particular interés para la investigación es un informe en el sentido de que el Gobierno se dispone a separar del "territorio patrio" de Kaokaoveld la faja costera que se extiende a todo lo largo de Kaokaoveld y sustituirla por una faja de 266.000 hectáreas del Etosha Wild Game Park. Los detalles de la propuesta se han remitido al Select Committee on Bantu Administration de la Cámara de Representantes. Según dijo el Viceministro de Desarrollo Bantú, la faja costera que comprende 804.000 hectáreas es inhabitable, incultivable y no contiene yacimientos minerales que merezcan explotarse. A cambio de esta faja costera se asignaría al "territorio patrio" de Kaokaoveld una zona que extienda sus límites hasta el coto de caza 25/.

Informes procedentes de Sudáfrica indican que en relación con el territorio patrio de Damara, el Gobierno se propone canjear algunos sectores de las tierras agrícolas orientales de los blancos por las partes meridional y central del territorio. Este punto se examinará en la sección referente a las oportunidades económicas (párr. 197).

c) Libertad personal, libertad de expresión, reunión y asociación

191. En la sección B se han expuesto los testimonios relativos a estos puntos.

192. Además, Monseñor Winter (RT. 129, págs. 126 a 130) declaró acerca de la prescindencia total de los debidos procesos legales que había experimentado en el caso de su propia deportación y en la de tres colegas que habían trabajado en su diócesis. Estos eran el Padre Stephen Hayes, el Sr. David de Beer y la Srta. Tony Halberstadt, todos sudafricanos. El Padre Hayes y el Sr. de Beer se encontraban en ese momento bajo arresto domiciliario. Los deportados habían desafiado a la Administración a que se les sometiese a juicio ante un tribunal público.

193. Este testigo se refirió asimismo a la orden de destierro notificada al jefe de la SWAPO, quien era obispo y pastor en Walvis Bay (párr. 171).

d) Oportunidades económicas

194. Monseñor Winter dijo (RT. 129, pág. 137) que la razón que se ocultaba tras la política de los "bantustanes" era mantener al pueblo africano como fuente de mano de obra en regiones semiestériles que apenas podían proporcionar sustento a los habitantes allí confinados. Debido a que los recursos eran tan escasos para proporcionar medios de vida y permitir el desarrollo, los negros habían llegado a una situación

---

23/ Star, 10 de noviembre de 1969, según información en Survey of Race Relations, 1969, op. cit., 264.

24/ Hansard 4, 1970, col. 1450, según una cita en Survey of Race Relations, 1970, op. cit., pág. 286.

25/ Star, Johannesburgo, 22 de abril de 1972.

de total dependencia de la población blanca que controlaba la riqueza mineral, las minas y las zonas industriales. La política de dividir a Namibia en seis miniestados significaba la perpetuación del tribalismo y hacía imposible promover el bienestar del pueblo, al que se mantenía en territorios separados (págs. 138 a 140).

195. El Sr. Shipanga (RT. 134, pág. 26) dijo que las reservas se habían establecido como lugar donde los africanos pudieran vivir en su vejez, porque cuando eran jóvenes se esperaba que fuesen a trabajar para el hombre blanco. Eso se aplicaba a los hombres; las mujeres y los niños estaban condenados a vivir en la pobreza, ya que el suelo en esas partes del territorio era improductivo.

196. Según la información de que dispone el Grupo 26/, el propuesto "territorio patrio" de Damara abarca 4,8 millones de hectáreas de tierras baldías. Según el censo de 1970, de 64.973 damaras solamente 7.736 vivían allí. La mayoría subsiste trabajando en las minas de estaño de las cercanías o pastoreando cabras y ovejas. Fuera de los diez jefes a quienes las autoridades pagan una subvención mensual de cerca de 30 libras esterlinas, no existe virtualmente nada que sostenga económicamente activo a un damara en la región. Reconociendo aparentemente el reclamo de que las tierras propuestas para el "territorio patrio" no pueden ofrecer medios de subsistencia a los damaras, el Departamento de Administración y Desarrollo Bantúes, ha sugerido la posibilidad de transferir una porción de las tierras cultivables orientales de los blancos a cambio de la parte meridional y central del territorio evidentemente inservible. Esta región es virtualmente un desierto, a no ser por el interés de prospectores y geólogos en la posible presencia de discordancias geológicas y la posibilidad de encontrar material para obtener uranio 27/. Se han concedido derechos de prospección para explorar las discordancias descubiertas por la División of Geological Survey respecto de dos zonas de Damaralandia. Una está localizada en Spitzkop, donde se han concedido derechos de prospección a la Bantu Mining Corporation, David Graaf Investments, Di Gamma Mining (subsidiaria de Anglo-Vaal) y el Dr. Peter le Riche. Las concesiones en Trekkopje se han otorgado a Goldfields, O'Kiep Copper and Desert Finds (Pty) 28/. Un periódico financiero sudafricano comentaba: "Solamente el tiempo dirá si estas zonas darán los mismos resultados halagüeños de Rossing, cerca de Swakopmund, donde Rio Tinto Zinc tiene una concesión de uranio". Pero aun en caso de que den tales resultados, poco importará a los damaras, ya que los descubrimientos de petróleo, minerales y piedras preciosas y uranio en los territorios patrios siguen siendo dominio exclusivo del Estado en cuanto a la concesión de derechos de explotación minera. En tales circunstancias, por tanto, lo más que puede esperar el damara es la creación de unos cuantos empleos en las minas 29/.

197. Se había anunciado 30/ que el Departamento de Administración y Desarrollo Bantúes permitiría en breve a "agentes" agricultores blancos trasladarse al sector de 300.000 hectáreas de tierras de pastoreo en los territorios patrios de Kavango

---

26/ X RAY, Africa Bureau, Londres, octubre de 1972.

27/ Ibid.

28/ Financial Mail, 4 de agosto de 1972, pág. 386.

29/ Ibid.

30/ Star, Johannesburgo, 6 de mayo de 1972.

y Ovambo. Se están elaborando todavía los detalles finales de las condiciones en que se designaría a éstos "agentes", pero probablemente se les nombraría por diez años con opción a renovar sus contratos por otros cinco años. Los agricultores del Africa Sudoccidental mostraban ya notable interés en el proyecto. Este se estaba emprendiendo con la plena cooperación de los gobiernos de los territorios patrios de Ovambo y Kavango. Los "agentes" tendrían que explotar a satisfacción del Departamento las tierras que ocupasen, emplear africanos de los territorios patrios, capacitarlos en la esfera de la cría de animales y emprender las labores de conservación del suelo prescritas por el Departamento. El vocero del Departamento estaba convencido de que el proyecto y otros proyectos agrícolas que se estaban considerando, serían sumamente provechosos para los dos territorios patrios.

198. Según la información de que dispone el Grupo, el presupuesto para el Consejo Legislativo de Ovambolandia para el período 1970-71 era el siguiente:

	Rands
Asuntos administrativos y financieros	45 501
Asuntos de las comunidades	119 400
Obras públicas	1 887 700
Educación y cultura	1 043 500
Asuntos económicos	7 900
Justicia	35 500
Agricultura	289 400
	<hr/>
	3 428 901 <u>31/</u>

Además, el Departamento de Administración y Desarrollo Bantúes y el Departamento de Educación Bantú asignaron 101.000 rands para los sueldos de 30 funcionarios (blancos) 32/. No se declaraban las fuentes de ingresos. Estas comprenden el producto de los impuestos que pagan los ciudadanos de Ovambolandia y dinero suministrado por el South African Bantu Trust y los Departamentos de Administración y Desarrollo Bantúes y de Educación Bantú. Haciendo los cálculos sobre la base de las cifras correspondientes a 1966 para la población de Ovambolandia (270.000), esto significa un gasto anual per cápita de 12,6 rands 33/.

e) Empleo

199. Esta cuestión se examinará detalladamente en el informe que el Grupo presente al Consejo Económico y Social en cumplimiento de la resolución 1599 (L).

f) Sanidad

200. El Sr. Shipanga (RT. 134, pág. 26) dijo al Grupo que la tasa de mortalidad, especialmente entre los niños y ancianos, era extremadamente alta.

31/ Government Notices 793 y 796 de 29 de mayo de 1970, citadas en Survey of Race Relations, 1970, pág. 285.

32/ R.P. 2/1970 Vote 27, ibid.

33/ Ruth First, "The Bantustans: The Implementation of the Odendaal Report", documento mimeografiado presentado a la Conferencia Internacional sobre Namibia, Bruselas, mayo de 1970.

201. Monseñor Winter (RT. 129, pág. 147) dijo que, él no sabía que hubiese médicos africanos en Ovambolandia. Había hablado con médicos blancos que habían trabajado en el hospital de Oshikati, una obra que el Gobierno exhibía como modelo; los médicos habían informado que algunos de sus colegas habían ido a ese hospital no para ayudar a los negros enfermos, sino para "adquirir práctica con el bisturí".

g) Educación

202. Monseñor Winter (RT. 129, pág. 147) dijo que el Gobierno trataba de arrebatarse completamente la educación de las manos de la Iglesia. Podría contar con los dedos de una mano los graduados negros que había producido Sudáfrica. No había médicos ni ingenieros naturales de Namibia. Los esfuerzos de la Iglesia en Windhoek para suministrar medios para la formación de un pasante de abogado habían fracasado porque los blancos lo habían boicoteado por el hecho de que, basándose en razones religiosas, defendía a los negros cuando eran llevados ante los tribunales. El Gobierno oponía obstáculos a los que querían educarse más allá del nivel de la servidumbre; esto se hacía retardando los permisos para los maestros y ordenando la frecuente deportación de maestros. Las autoridades eclesiásticas calculaban que había 1.000 estudiantes negros quienes por razones de conciencia y porque se habían negado a acatar el apartheid habían sido expulsados de sus escuelas (págs. 122 a 125).

203. El memorando de la Federación Panafricana de Sindicatos ofrecía detalles de la clausura de la escuela secundaria y de la unidad de formación de maestros de Onguediva luego de una protesta estudiantil en apoyo del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Tres estudiantes fueron gravemente heridos por la acción de la policía. Esto había sucedido el 6 de agosto de 1971. Dos semanas más tarde, el 21 de agosto, 300 estudiantes fueron arbitrariamente despedidos de la escuela de Onguediva y a la mitad de ellos se les negó la admisión en cualquier otra escuela del territorio. Su expulsión tuvo por causa su protesta contra el apaleamiento de estudiantes que se habían opuesto a que se les adoctrinase en el apartheid durante las clases.

D. Graves manifestaciones de colonialismo  
y discriminación racial en Namibia

204. Se recordará que la Comisión de Derechos Humanos decidió, en su resolución 21 (XXV) aprobada en su 25º período de sesiones, que el mandato del Grupo Especial de Expertos incluyera una investigación de las graves manifestaciones de colonialismo y discriminación racial que acompañaban a la situación existente en Namibia. De conformidad con esa resolución, el Grupo Especial presentó un informe preliminar (E/CN.4/1020/Add.1), párrafos 1 a 70) a la Comisión, en su vigésimo sexto período de sesiones, seguido del documento E/CN.4/1050, presentado al vigésimo séptimo período de sesiones.

205. En sus períodos de sesiones de 1972, el Grupo continuó examinando, sobre la base de declaraciones de testigos, si la situación revelaba elementos del crimen de genocidio y otras manifestaciones de la aplicación del apartheid en Namibia.

206. Hay una estrecha relación entre este capítulo y otros aspectos de la labor del Grupo, particularmente en lo relativo a las condiciones de los africanos en las "reservas nativas" y a los problemas del trabajo (que se examinan en detalle en el informe que presenta el Grupo al Consejo Económico y Social en cumplimiento de la resolución 1599 (L) y al trato de los presos políticos.

207. La mayoría de los testigos consideraba que la práctica global de gobierno, incluida la aplicación de la política de "territorios patrios" de los "bantustanes", las condiciones de vida de los trabajadores contratados y los africanos en las "reservas", el tratamiento infligido a los combatientes por la libertad, a los presos políticos africanos y a los detenidos con arreglo a las normas de emergencia, la política sobre derechos sindicales, salud y educación, eran graves manifestaciones de colonialismo y discriminación racial y graves violaciones de los derechos humanos.

208. Monseñor Winter (RT. 129, pág. 137) dijo que la política del Gobierno de Sudáfrica en lo relativo al pueblo herero constituía genocidio. También se alegó la existencia de genocidio en las declaraciones escritas presentadas por la Federación Panafricana de Sindicatos.

209. Monseñor Winter (RT. 129, págs. 138 a 140) dijo que los namibianos rechazaban los "bantustanes" como forma del intento del hombre blanco de dividir y vencer. El apartheid no tenía ningún fundamento teológico, constituía herejía y era tan perverso como el legado del herrenvolk que Adolfo Hitler había tratado de perpetuar (pág. 151).

210. El Sr. Illonga (RT. 132, pág. 31) dijo que la política de los "bantustanes" representaba un peligro para las vidas humanas en la parte meridional del continente y en otros lugares. El Sr. Shipanga dijo que los "bantustanes" eran verdaderos campos de concentración (RT. 132, pág. 26) y que los namibianos, que morían y eran torturados y encarcelados a diario tenían el tiempo en su contra (pág. 27).

211. Monseñor Winter (RT. 129, págs. 121 y 131) esbozó los efectos de la política oficial como contribución a la pobreza de las reservas y la desesperación de los habitantes de ellas que, dijo, los namibianos habían soportado durante cien años y estaban aumentando en magnitud, y que aumentarían todavía más con la aplicación del régimen de "bantustanes". Los habitantes de las diversas reservas no tenían otra opción que ser enviados contra su voluntad a los "bantustanes". Citó el caso de los damaras, que se quejaban de ser sistemáticamente privados de su patrimonio y tratados como extranjeros en su propia tierra. Este testigo dijo que el Gobierno de Sudáfrica impedía que el pueblo africano adelantase verdaderamente, dándoles educación inferior y carente de control (*sic*), y denegando a los africanos el derecho de aspirar a nada fuera de las tareas más insignificantes. Además, el Gobierno estaba dispuesto a recurrir a cualquier método, incluidos la tortura, la deportación, el arresto domiciliario y la prisión para imponer su voluntad a un pueblo deseoso de librarse de esas tiranías.

212. El Sr. Garoeb (RT. 138, págs. 68 a 70) puso especialmente de relieve la declaración de un bantustán en la faja de Caprivi. Esto era contrario a las resoluciones de las Naciones Unidas que estipulaban que Namibia debía conservar su condición de entidad territorial y no ser fragmentada. Este testigo declaró que la situación en Namibia se había empeorado desde la visita del Secretario General de las Naciones Unidas, no necesariamente a causa de la presencia de éste, sino porque la situación se había empeorado.

213. El Sr. Garoeb (RT. 138, pág. 67) destacó también la utilización de la faja de Caprivi como base militar sudafricana. La policía, el ejército y las fuerzas de seguridad de Sudáfrica utilizaban bases situadas en la faja y en campamentos establecidos en ella para actuar no sólo entre la frontera de Namibia y Zambia, sino también entre la frontera de Namibia y Angola.



214. La política de severa represión aplicada en Namibia, especialmente durante la huelga de 1971 y 1972, época en que se aceleraron las detenciones en masa de namibianos y de dirigentes del movimiento de protesta y se infligió un trato cruel e inhumano a los presos políticos, y que fue mencionada después por testigos como una de las manifestaciones más graves de la política de apartheid y colonialismo.

215. En su testimonio sobre la proclamación de poderes de emergencia en las zonas septentrionales de Namibia, y sobre el tratamiento dado a los combatientes por la libertad capturados, el Sr. Shipanga (RT. 134, págs. 23 a 25) citó parte de una carta leída a los parlamentarios blancos en Sudáfrica por el Senador Jack Leock, en la que el hijo del Senador, que estaba prestando servicio en las fuerzas armadas sudafricanas en Namibia, dijo que le traería al Primer Ministro la cabellera de un terrorista. Este testigo dijo que la brutalidad y el sadismo se habían transformado en principal característica del régimen ilegal sudafricano en Namibia.

216. Varios deponentes dieron testimonio sobre policías que efectuaban disparos contra el pueblo y recurrían a la tortura durante la huelga. El Sr. Shipanga (RT. 134, págs. 4 y 5) dio pruebas detalladas de incidentes ocurridos durante enero de 1972, cuando, por ejemplo, cuatro hombres fueron muertos en Epinga después de un oficio religioso. El memorando presentado por la Federación Panafricana de Sindicatos confirmó esto. El Sr. Illonga (RT. 132, págs. 28 a 30) también presentó pruebas de asesinatos y maltratos durante la huelga. El Sr. Garoeb (RT. 138, pág. 73) atestiguó sobre el número de detenciones que tuvieron lugar durante este período. El Sr. Shipanga (RT. 134, págs. 5 y 6) dio testimonio sobre detenciones y encarcelamientos en campos. Varios testigos, entre ellos el Sr. Shipanga (RT. 134, págs. 4 y 5), Monseñor Winter (RT. 129, págs. 122 a 125) y la Federación Panafricana de Sindicatos dieron ejemplos de casos de torturas policiales. Otras pruebas se referían a la violación del derecho del acusado a un juicio justo. (Sr. Shipanga, RT. 134, pág. 22, Sr. Garoeb, RT. 138, págs. 59 y 60).

217. El Sr. Ennals (RT. 130, págs. 54 y 55) dijo que el trato dado en Sudáfrica a los presos era una patente infracción de las normas que alegaba seguir. Sudáfrica se había abstenido en la votación sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, pero había adoptado las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el trato de los reclusos como normas de administración de prisiones de Sudáfrica; no obstante, está violando estas normas. El testigo instó (RT. 130, pág. 67) a que se aplicaran los convenios relativos a los prisioneros de guerra al trato de los combatientes por la libertad capturados.

218. Las malas condiciones de salud de la población africana fueron mencionadas por el Sr. Shipanga (RT. 134, pág. 26). Monseñor Winter (RT. 129, pág. 147) señaló a la atención la falta de médicos africanos y las actitudes insensibles del personal médico blanco que trabajaba en el hospital de Ovambolandia.

219. El Sr. Shipanga (RT. 134, págs. 23 a 25) dijo que no aceptaba las estadísticas de población del Gobierno de Sudáfrica. El propósito de Sudáfrica era ocultar los hechos. El testigo opinaba que la población de Namibia era superior a las cifras oficiales, y con certeza de más de un millón.

220. Respecto de la política de educación del Gobierno, Monseñor Winter (RT. 129, pág. 147) dijo que el Gobierno ponía obstáculos a los que trataban de dar a los

africanos una educación superior al nivel de siervos. Las autoridades eclesiásticas calculaban que había 1.000 estudiantes africanos que, por razones de conciencia y por haberse negado a aceptar el apartheid, habían sido expulsados de sus escuelas (págs. 122 a 125).

221. Respecto de los derechos sindicales, el Sr. Kambode (RT. 132, pág. 16) dijo que el Gobierno no permitía la existencia de los sindicatos y que la huelga era ilegal. Durante la reciente huelga los trabajadores fueron trasladados a Ovambolandia a fin de que el Gobierno pudiese contratar rompehuelgas para reemplazarlos. Los sindicalistas activos eran arrestados y asesinados y se traían rompehuelgas para reemplazarlos a fin de que pudiese continuar el trabajo. La huelga de 1971-1972 había tenido como respuesta la declaración del estado de emergencia.

E. Medidas de represión adoptadas después de  
la visita del Secretario General

222. El Grupo, al recibir durante sus viajes testimonios según los cuales el Gobierno de Sudáfrica había tomado medidas de represión contra las personas que habían participado en manifestaciones durante la visita del Secretario General a Namibia, estimó que debía dirigirse una carta al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos para señalarle que, según la información proporcionada al Grupo por representantes autorizados de ciertos movimientos de liberación, como la SWAPO, y por personalidades eminentes, como Monseñor Colin Winter, obispo de Damaralandia, la situación había empeorado considerablemente en Namibia y que el Grupo, oídos los testimonios, estaba convencido de que se habían practicado muchas detenciones en Namibia a resultas de las manifestaciones que marcaron la visita del Secretario General, en particular cuando éste llegó al aeropuerto de Windhoek (el texto de la carta figura en el anexo IV).

223. Se envió un telegrama al Secretario General con carácter urgente, para señalarle este hecho (el texto del telegrama se reproduce en el anexo V).

224. Posteriormente, el 9 de noviembre de 1972, a petición del Presidente del Grupo, un miembro de este último, el Sr. Mani, transmitió al Secretario General las actas de los testimonios pertinentes (E/CN.4/AC.22/RT. 128 a 130, 132, 134 y 138). El 22 de diciembre de 1972 se acusó recibo de esas actas en nombre del Secretario General.

225. A este respecto, el Grupo desea dar las gracias al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y al Secretario General por la consideración que han prestado a las comunicaciones antes mencionadas.

#### IV. RHODESIA DEL SUR

226. En lo que se refiere al proceso ilegal mediante el cual el régimen rebelde de Rhodesia del Sur proclamó unilateralmente la independencia de ese territorio el 11 de noviembre de 1965 y aprobó una llamada "Constitución", nos remitimos a los párrafos 1 a 11 del documento E/CN.4/AC.22/13 y al informe del Grupo (E/CN.4/1020/Add.1, párrs. 72 a 74).

227. El 2 de marzo de 1970 entró en vigor una nueva "Constitución" aprobada por la "Asamblea Legislativa" el 17 de noviembre de 1969. La "Asamblea Legislativa" aprobó asimismo el 17 de noviembre de 1969 los otros instrumentos legislativos secundarios, o sea, la "Ley Constitucional Electoral" y la "Ley de Tenencia de Tierras". En el informe del Grupo (E/CN.4/1020/Add.1, párrs. 72 a 74) se analizan las disposiciones pertinentes de la "Constitución".

228. La "Ley de Tenencia de Tierras", algunas de cuyas disposiciones son consideradas preceptos constitucionales expresos de la nueva "Constitución", reemplaza a la Ley de Asignación de Tierras y suprime la presente categoría de tierras "no reservadas". Divide las tierras de Rhodesia del Sur en tres partes: tierras de africanos, tierras de europeos y tierras nacionales.

229. La "Ley Electoral", algunas de cuyas partes son consideradas preceptos constitucionales expresos, establece los derechos electorales. Entre otras cosas, fija recursos y un grado de instrucción más elevados que los que se exigen en la actualidad a los votantes inscritos.

230. La "Ley de Tenencia de Tierras" y la "Ley Electoral" se estudiaron detalladamente en el informe de 1971 del Grupo (E/CN.4/1050, sección IV C), y las leyes sobre la pena capital y el trato de los presos y detenidos políticos han sido examinadas en las secciones A y B del mismo informe.

231. Es preciso subrayar que con arreglo a las distintas resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y también desde el punto de vista del Reino Unido, Rhodesia del Sur sigue siendo una colonia de la Corona del Reino Unido y, en consecuencia, todos los convenios internacionales firmados y ratificados por el Reino Unido son también aplicables a Rhodesia del Sur.

232. Entre los hechos recientes que guardan relación con la legislación de Rhodesia del Sur cabe mencionar las propuestas de arreglo del Gobierno británico 1/ y la Declaración de Derechos contenida en los términos para un acuerdo convenidos en noviembre de 1971 entre Sir Alec Douglas Home, Ministro de Relaciones Exteriores y del Commonwealth del Gobierno británico y el Sr. Ian Smith, líder del régimen de Rhodesia 2/. La importancia de esos documentos en relación con la cuestión de la pena capital y la Ley de

---

1/ Rhodesia: Proposals for a Settlement, HMSO, Cmnd 4835.

2/ Rhodesia, Report of the Commission on Rhodesian Opinion under the Chairmanship of Lord Pearce, HMSO, Cmnd 4964.

Mantenimiento del Orden Público se trata en las secciones pertinentes; pero cabe señalar que la Declaración de Derechos conservó la pena capital y también dejó intacta dicha Ley. La Declaración de Derechos no afectaría a las leyes vigentes con anterioridad a la promulgación de la Constitución que surgieran de las propuestas de arreglo. La cláusula pertinente de dichas propuestas es la cláusula 84 B que figura en la página 22 y cuyo texto es el siguiente:

"Ningún tribunal declarará que disposición alguna de una ley o instrumento legal adoptados con anterioridad a la fecha fijada según lo definido en el párrafo 14 de la Declaración de Derechos, excede de las atribuciones de quien las hubiera dictado por considerar que la disposición es incompatible con las disposiciones de la Declaración de Derechos según figuran en el capítulo VI de la Constitución de Rhodesia de 1961 o en el capítulo VII de la Constitución de Rhodesia de 1965, según el caso."

Se observará que la "fecha fijada" se define como "la fecha de entrada en vigor de la Ley de Enmienda de la Constitución (1972)", o sea, la fecha en que se esperaba que el Parlamento británico y el de Rhodesia enmendarían simultáneamente la actual (1969) Constitución ilegal de Rhodesia a fin de que estuviera en armonía con los términos convenidos para el arreglo. Se recordará que las propuestas de arreglo disponen que se aceptará la Constitución de 1969 como instrumento de gobierno básico de una República de Rhodesia 3/.

#### A. Pena capital

##### 1. Síntesis de algunas leyes

233. La pena capital está establecida por ley en Rhodesia del Sur y lo estaba ya antes de la declaración unilateral de independencia en 1965. Los textos legislativos correspondientes se citan en detalle en el informe de 1970 del Grupo 4/ y en la nota de la Secretaría sobre las disposiciones legales de Rhodesia del Sur aplicables a los presos políticos, detenidos y personas bajo custodia policial 5/. Se recordará que en ese informe se dice que la Ley de Mantenimiento del Orden Público enumera una amplia variedad de delitos a los que corresponde la pena de muerte. En 1968 se derogó la sección de dicha ley que establecía la pena de muerte obligatoria en ciertas circunstancias y, por lo tanto, volvió a quedar librado al criterio del juez imponer o no la pena capital según las circunstancias de cada caso. Cabe advertir, sin embargo, que la derogación de la cláusula que hacía obligatoria la sentencia de muerte no elimina la pena capital misma. Puede sostenerse que la derogación de esa cláusula podría tener el efecto de reducir el número de condenas a muerte. Pero la lista de actos que constituyen delitos a los que corresponde la pena capital es muy amplia; corresponde al acusado probar su inocencia; los casos en que se considera que está en juego la seguridad del Estado se juzgan a puerta cerrada, de modo que parece que se ganará muy poco con la derogación de la cláusula sobre la condena obligatoria a muerte.

---

3/ A/AC.109/L.760, párr. 14.

4/ E/CN.4/1020/Add.1, párrs. 75 a 77.

5/ E/CN.4/AC.22/13, anexo III.

234. La Declaración de Derechos contenida en los términos del arreglo 6/ mantuvo la pena capital. La cláusula correspondiente dice lo siguiente: "Nadie será privado de su vida intencionalmente salvo en ejecución de una sentencia judicial impuesta por un delito de derecho penal por el que haya sido condenado" 7/.

2. Análisis de la información recibida por el Grupo Especial de Expertos

235. La información recibida por el Grupo puede dividirse en dos categorías, a saber: a) información relativa a la pena capital aplicada mediante proceso judicial, y b) información relativa a la muerte de personas, en circunstancias sospechosas, mientras se hallaban en la cárcel o en campamentos de detenidos.

a) Información relativa a la pena capital aplicada mediante proceso judicial

236. La información estadística sobre los presos que se hallan bajo sentencia de muerte es muy fragmentaria y, en consecuencia, el Grupo no dispone de cifras seguras sobre el número de presos que están en las celdas de los condenados aguardando su ejecución. Según la declaración hecha por el régimen de Rhodesia el 16 de diciembre de 1968 8/ había 92 presos condenados cuyas sentencias estaban pendientes de apelación. El 7 de marzo de 1969 se conmutó la sentencia de muerte de 49 presos por la de prisión perpetua y el 19 de agosto de 1969 se hizo lo mismo con la de otros 19 9/. Suponiendo que no hubiera habido otras condenas a muerte durante ese período, el 19 de agosto de 1969 hubieran debido quedar sólo 14 personas en las celdas de los condenados. Pero el 15 de septiembre de 1972 el régimen de Rhodesia anunció que ese día habían sido ejecutados cuatro presos y que se había conmutado la sentencia de muerte de 55 presos por la de prisión perpetua 10/. Esas cifras sugerirían que deben haberse dictado otras 11 condenas entre el 19 de agosto de 1969 y el 19 de septiembre de 1972. La declaración de Rhodesia no dice cuántos presos siguen aún en las celdas de los condenados a muerte aguardando la ejecución o la conmutación de la pena.

237. Lo fragmentario de la información sobre el número de presos condenados a muerte queda demostrado por las declaraciones de los testigos oídos por el Grupo Especial. La Srta. Judith Todd (RT. 127) declaró que alrededor de otras 200 personas habían sido

---

6/ Véase The Pearce Commission, pág. 112, párr. 420, nota 2.

7/ Véase Rhodesia: Proposals for a Settlement, inciso i) de la sección 1, pág. 23, nota 1, léase conjuntamente con la sección 84 en la pág. 20.

8/ Véase el documento A/7623/Add.1, párr. 59.

9/ Véase documento E/CN.4/1050, párr. 334.

10/ Véase el Guardian del 16 de septiembre de 1972 y también el boletín de la Agencia France Presse del 15 de septiembre de 1972.

condenadas a muerte desde el 11 de noviembre de 1965 y estaban aguardando la ejecución en las celdas de los condenados a muerte en Salisbury. Destacó empero que la cifra de 200 era aproximada y que podían ser 188 o incluso 220 (RT. 127). El Sr. Guy Clutton-Brock (RT. 128) dijo que no sabía cuántos habían sido condenados a muerte. Sólo podía calcular que serían, quizás, unos 40 (RT. 128). El Sr. Attwell Bokwe (RT. 138), en un anexo a la declaración que leyó ante el Grupo, dio una lista de personas "sentenciadas a muerte" desde 1963. La lista contiene los 67 nombres siguientes:

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Benoni Sibanda      | 27. Office              |
| 2. Galist Guri         | 28. Rabede Sibanda      |
| 3. James Butche        | 29. Albert Ncube        |
| 4. Lloyd Gundu         | 30. Matswawayi Thomson  |
| 5. Jikonayi Mabena     | 31. Alexander Chirwa    |
| 6. Peter Dube          | 32. Simon Runyowa       |
| 7. Linos Manzozzo      | 33. Lazarus             |
| 8. Robert Mholwa       | 34. Jankison            |
| 9. Moses Makamadza     | 35. Isaac Mpofu         |
| 10. Jonatham Chatyiwe  | 36. Bernard Mangwarira  |
| 11. Fanwell Mayangata  | 37. Samuel Sikhosana    |
| 12. Elijah Masibi      | 38. Canaan Masanuka     |
| 13. Shoty Mkandla      | 39. Paul Chatiwa        |
| 14. Dani Mkosi Ndlovu  | 40. Paul Chinowaita     |
| 15. Boniface           | 41. Stephen Bhebe       |
| 16. Raymond Chiwashire | 42. Silambula           |
| 17. George Kawenda     | 43. Dani Makacha Ndlovu |
| 18. Masawi Moya        | 44. Herbert Chimsoro    |
| 19. Amen Chikwakwada   | 45. Antony Cherume      |
| 20. Simon Macebo       | 46. Isaac Muyisinda     |
| 21. Samson Mudzingwe   | 47. Dokotela Ndlovu     |
| 22. James Mpofu        | 48. Jacob Mtandwa       |
| 23. Herbert Sambo      | 49. James Chatiwa       |
| 24. Mathew             | 50. Hezekiah Moyo       |
| 25. John Hlazo         | 51. Rhodes Rose         |
| 26. Justin             | 52. Josiah              |

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 53. Bernard Sibanda      | 61. Sylveste Ndliziyo |
| 54. Thomas Moyo          | 62. Amos Sagonda      |
| 55. Myandeni Ernest      | 63. Josiah Moyo       |
| 56. Samuel Kagoyo        | 64. Mjinisi Pula      |
| 57. Isiah Mupinda        | 65. Sly Masuku        |
| 58. Eliaken Gondo        | 66. Ngcobo            |
| 59. Stanley Rambakupotwa | 67. Kopotsha          |
| 60. Moffat Redebe        |                       |

238. Según los testimonios recibidos, parecería que el régimen de Rhodesia ha seguido una política de no llevar a cabo ejecuciones en masa de presos condenados a muerte. Aparte de los cinco ejecutados en 1968 <sup>11/</sup> y los cuatro ejecutados en septiembre de 1972 <sup>12/</sup>, como dijo el Sr. Clutton-Brock (RT. 128), el régimen ha seguido la política de conmutar gradualmente la condena a muerte de los presos, para que pasaran a ser presos ordinarios. "No han colgado a nadie" agregó. La Srta. Todd dijo que creía que "el régimen de Smith había tenido miedo de tocar (ejecutar) a esa gente mientras seguía en un estado de ilegalidad ... porque el verdugo mismo podía en el futuro ser condenado por asesinato" (RT. 127). Tenía muy pocas dudas de que estas personas serían ejecutadas en masa si se acordaba el reconocimiento jurídico al régimen de Rhodesia. Dijo que creía que su padre, el Sr. Gardfield Todd, había sido detenido y arrestado por el régimen por haber declarado públicamente que la aceptación de los términos de arreglo conduciría a la legislación del régimen, lo que a su vez llevaría a la ejecución de los 200 presos condenados a muerte (RT. 127). El Sr. Clutton-Brock expresó también la opinión de que la condición jurídica ilegal del régimen servía como freno a la aplicación de las sentencias de muerte. "El régimen teme colgar a la gente porque podría tener que pagar las consecuencias más adelante" (RT. 128). El Sr. Mawema creía que el clamor público que siguió a las ejecuciones de 1968 había disuadido al régimen de llevar a cabo otras ejecuciones. Añadió que el régimen mantenía "detenidas a muchísimas personas a las que los jueces habían condenado a muerte, especialmente a nuestros combatientes por la libertad" (RT. 129).

b) Información relativa a la muerte de personas en circunstancias sospechosas mientras se hallaban en la cárcel o en campamentos de detenidos

239. Se recordará que en las sesiones celebradas en 1970 por el Grupo Especial, algunos testigos se refirieron en sus declaraciones a la misteriosa muerte del Sr. Leopold Takawira, que había estado preso en la cárcel de Salisbury <sup>13/</sup>. Además del caso del Sr. Takawira, a cuya muerte volvieron a referirse varios testigos, entre ellos la Srta. Todd (RT. 127) y el Sr. Mawema (RT. 22), el Sr. Musikavanu hizo referencia a otros siete casos de personas que habían muerto en circunstancias sospechosas mientras se hallaban en la cárcel, detenidos o bajo custodia policial (RT. 129). Los nombres de esos muertos son los siguientes:

<sup>11/</sup> Véase A/7623/Add.1, 22 de septiembre de 1969, párrs. 4 y 6.

<sup>12/</sup> Ibid., párr. 7.

<sup>13/</sup> E/CN.4/1050, párr. 350.

Sr. Chacha, que murió en la cárcel de Gwelo en 1970 mientras estaba preso.

Sr. Edward Mangena, que murió en la cárcel de Gwelo en 1971 mientras estaba preso.

Sra. Miriam Mushambi, que murió en el campamento de detención de Whawha en 1970, mientras se hallaba presa.

Sr. Jakalasi Katanda, que murió en Gonakudzingwa mientras estaba preso (no se mencionó la fecha en las declaraciones).

Sr. Romulus Sibiya, que murió en Gonakudzingwa mientras estaba preso allí. El testigo Jacob Moyo (RT. 129) declaró que Romulus Sibiya había muerto en su casa una semana después de salir de Gonakudzingwa.

Sr. Nimrod Khumalo, que murió en la prisión de Bulawayo, en 1971, en circunstancias análogas.

Sr. Mashawira, que murió mientras se hallaba bajo custodia policial en Salisbury (no se mencionó la fecha de su muerte).

Con respecto a la muerte del Sr. Nimrod Khumalo, el Sr. Moyo (RT. 129) y el Sr. Hove (RT. 139) declararon que había formado parte de un grupo de 21 personas que huyeron del país para evitar ser arrestadas en Botswana; se les negó asilo y se los deportó de vuelta a Rhodesia, donde el Sr. Khumalo fue arrestado y torturado en la cárcel hasta que murió.

c) Ejecución sumaria de combatientes por la libertad

240. El análisis detallado de las declaraciones de los testigos sobre la ejecución sumaria de combatientes por la libertad se hace en la sección relativa al "trato de los combatientes por la libertad"; pero como las consecuencias de ese acto entrañan la pérdida de la vida, debe mencionárselo brevemente en esta sección.

241. El Sr. Bokwe (RT. 138) declaró que los combatientes por la libertad capturados son fusilados en forma sumaria. Como ejemplo, mencionó el caso de un combatiente por la libertad, Jonathan Ncube (seudónimo) capturado por las fuerzas de seguridad de Rhodesia en las luchas de enero y febrero de 1970. Según este testigo, se le disparó a quemarropa y "cuando el enemigo descubrió que aún estaba vivo, lo ató con una soga, cabeza abajo, en un helicóptero". El Sr. Musikavanu, al declarar sobre la misma cuestión, habló del número de combatientes por la libertad fusilados sumariamente cuando son capturados por las fuerzas de Smith. Aunque "algunos, inevitablemente, habían muerto en la lucha", manifestó que "el mayor número es capturado y ejecutado sumariamente, porque el régimen desea evitar la publicidad adversa que sigue a las ejecuciones judiciales, como en el caso de Dlamini y Mlambo". Según este testigo, "la mayoría de las personas que se dice han caído en combate, han sido en realidad capturadas y fusiladas después sumariamente" (RT. 129). Citó el caso de un combatiente por la libertad capturado por las fuerzas de Rhodesia y muerto como venganza (RT. 129).



B. Trato que se da a los presos políticos y a los combatientes por la libertad que caen prisioneros

1. Antecedentes históricos

242. El fenómeno de los presos políticos surgió en Rhodesia del Sur con la promulgación de la Ley de Orden Público de 1950. Se conocen pocos casos de detenciones y condenas en virtud de dicha Ley. Los casos conocidos son los del Sr. Joshua Nkomo, acusado y condenado en 1953 por haber importado, según se decía, literatura prohibida de Londres, y el de un tal Mangombe, trabajador ferroviario que fue encarcelado por haber participado en la huelga ferroviaria de 1956. Anteriormente también se había invocado esta Ley en el caso de la huelga de los mineros de Wankie cuando todos los dirigentes de los mineros huelguistas fueron detenidos, procesados y condenados a diversas penas de cárcel por haber violado, según se alegaba, dicha Ley. Desde entonces se han incorporado a las leyes correspondientes varias medidas que han aumentado en gran medida el alcance de las actividades consideradas ahora delitos políticos. La más destacada de este importante conjunto de leyes de seguridad es la Ley de Mantenimiento del Orden Público de 1960 y sus muchas reformas. En una nota de la Secretaría (E/CN.4/AC.22/13, anexo 11) figura un análisis detallado de esta Ley.

243. El fenómeno de los detenidos y los confinados políticos apareció en Rhodesia en 1959 con la declaración del estado de emergencia y la aprobación posterior de la Ley de Detención Preventiva (disposiciones provisionales) de 1959 y la Ley de Organizaciones Ilegales, de 1959. Esta última Ley se resume en el anexo II de la nota de la Secretaría (E/CN.4/AC.22/13). Se recordará que como consecuencia de la declaración del estado de emergencia, 500 hombres y mujeres fueron encarcelados sin acusación ni proceso. Algunos de ellos siguen detenidos hasta hoy (Sr. Daniel Madzimbamuto). Desde entonces ha habido siempre muchos detenidos y confinados en las cárceles y campamentos de Rhodesia del Sur.

244. Las actividades de los combatientes por la libertad se intensificaron después de la declaración unilateral de independencia del régimen ilegal de Rhodesia en 1965. Los principales instrumentos legales empleados por el régimen rhodesio para luchar contra los combatientes por la libertad se encuentran en las diversas leyes de seguridad y particularmente en las diversas reformas de la Ley de Mantenimiento del Orden Público y en las Normas de Emergencia (Mantenimiento del Orden Público). Estas leyes contienen disposiciones sobre las operaciones contra las incursiones y sobre la detención de "terroristas" por las fuerzas de seguridad de Rhodesia.

2. Resumen de algunas leyes pertinentes

245. Como se indica en los párrafos precedentes, las leyes y reglamentos que prevén penas de cárcel y la detención sin proceso de los combatientes por la libertad han sido analizadas en detalle en los informes de 1969 y 1970 del Grupo (E/CN.4/984/Add.5 y E/CN.4/1020/Add.1), así como en el documento de trabajo preparado por la Secretaría (E/CN.4/AC.22/13).

246. Cabe señalar que la Ley de Orden Público fue derogada y que se permitió que caducara la Ley de Detención Preventiva (disposiciones provisionales) al terminar el período de vigencia previsto. Ambas leyes, en efecto, fueron reemplazadas por la Ley de Mantenimiento del Orden Público. La Ley de Organizaciones Ilegales fue también derogada; pero hace poco se incorporó al cuerpo de leyes otra ley con el mismo nombre y propósito (Ley de Organizaciones Ilegales Nº 55, de 1971). Otras adiciones recientes son: i) la renovación de las atribuciones del "Ministro" con arreglo a la sección 52 de la "Ley de Mantenimiento del Orden Público de 1972"; ii) la prórroga del estado de emergencia y de todas las reglamentaciones consiguientes (1972) y iii) la "Reforma de la ley sobre la salida de Rhodesia (Control) de 1972".

a) La "Ley de organizaciones ilegales Nº 55, de 1971"<sup>14/</sup>

247. La "Ley" autoriza al "Presidente de Rhodesia" a declarar ilegal toda organización, si, a su juicio, puede estimarse que a) las actividades de la organización pueden poner en peligro, perturbar o dificultar la defensa, la seguridad o el orden públicos; b) la organización está afiliada a una organización proscrita o promueve los objetivos y opiniones de cualquier organización fuera de Rhodesia; c) la organización es el órgano principal de una organización ilegal; d) la organización es el sucesor de una organización ilegal y e) la organización está compuesta en buena parte, aunque no necesariamente en forma predominante, por personas que hayan sido o sean dirigentes o funcionarios de organizaciones ilegales (sección 3 1) y 2)) o esté dirigida o controlada por ellas directa o indirectamente. La sección 6 de la "Ley" faculta al "Presidente" para ordenar a una persona a que renuncie a su calidad de miembro o dirigente de una organización declarada. El "Presidente" está facultado asimismo para ordenar a una persona que no participe como dirigente o miembro en una organización o en ninguna de las actividades de alguna organización o clase de organización especificada, en una nota a ese efecto, durante ese período que no excederá de tres años. La subsección 2 de la sección 6 prevé ciertas penas por los delitos cometidos en violación de la "Ley". Toda persona que contravenga las disposiciones de cualquier advertencia hecha en virtud de esta "Ley" será penada con una multa que no excederá de 200 dólares de Rhodesia, o de cinco años de cárcel o de ambos.

b) La renovación de las atribuciones del "Ministro" para dar órdenes de restricción en virtud de la "Ley de Orden Público"

248. La "Cámara Legislativa de Rhodesia" aprobó una moción (véase Rhodesia, Parliamentary Debates, House of Assembly, 18 de agosto de 1972, columna 302) para prorrogar hasta agosto de 1977 las atribuciones del "Ministro de Orden Público" para confinar a ciertas personas sin someterlas a proceso en virtud de las secciones 50 y 51 de la Ley de Mantenimiento del Orden Público. La renovación periódica de la facultad del "Ministro" para dar órdenes de restricción es necesaria porque la sección 52 de la "Ley" dispone que la facultad del "Ministro" para dar órdenes de restricción en virtud de la sección 50 ó 51 no se ejercerá después de la fecha fijada a menos que el "Presidente", de conformidad con una resolución de la "Cámara", haya prorrogado el período en el que puede ejercerse esa facultad.

---

<sup>14/</sup> En el documento A/AC.109/L.760 se hizo referencia a esta ley cuando era aún un proyecto presentado al Parlamento.

c) Estado de emergencia

249. El 16 de junio de 1972, el "Parlamento" de Rhodesia prorrogó por otros 12 meses el estado de emergencia y todas las reglamentaciones consiguientes.

d) "Reforma de la Ley sobre la salida de Rhodesia (Control) de 1972"

250. La Ley fue enmendada por el "Parlamento" en agosto de 1972 (véase Rhodesia, Parliamentary Debates, 22 de agosto de 1972, columna 390). La "Ley" da al "Ministro de Información, Inmigración y Turismo" facultades para evitar la salida legal de Rhodesia de toda persona si el "Gobierno" considera que no sería conforme al interés público que esa persona abandone el país.

251. La importancia de esta ley resulta clara cuando se lee junto con la sección 23 A de la Reforma Nº 12 de la Ley de Mantenimiento del Orden Público de 1970. Dicha reforma dispone (sección 6 1)) que "cometerá un delito todo residente de Rhodesia que asista a cualquier curso de entrenamiento dentro o fuera de Rhodesia con el propósito de fomentar un objetivo político". Cabe señalar que el 4 de septiembre de 1972, el Sr. Pieter van de Byl, "Ministro de Información, Inmigración y Turismo", en ejercicio de las atribuciones que le confiere la subsección 1 de la sección 3 B de la "Ley", canceló el pasaporte del Obispo Muzorewa, dirigente del African National Council 15/. En la sección relativa a las "manifestaciones graves de colonialismo" se describen otros aspectos de esta "Ley".

252. La ley es de aplicación extraterritorial. Por ejemplo, es ilegal que un rhodesio asista fuera de Rhodesia a la reunión de una organización declarada ilegal en Rhodesia.

3. Análisis de los testimonios

253. Nota sobre las definiciones. Los presos políticos en Rhodesia están divididos en las siguientes categorías:

"a) Presos políticos que cumplen condenas, o sea, los presos políticos que cumplen condenas de cárcel en virtud de una condena judicial por violación de alguna de las muchas leyes de seguridad. El régimen de Rhodesia no reconoce la condición de "preso político", sino que sostiene que se trata de criminales condenados por los tribunales con arreglo a la ley. En esta categoría de presos se encuentran personalidades como el Reverendo Ndabaningi Sithole, dirigente de la Zimbabwe African National Union (ZANU), que fue sentenciado a seis años de cárcel por la Corte Suprema de Rhodesia el 12 de febrero de 1969 16/.

15/ La orden por la que se canceló el pasaporte del Obispo Muzorewa se reproduce en Moto, 16 de septiembre de 1972. La paradoja del caso es que la orden contiene información que no coincide con la del pasaporte al que pretende referirse. La orden dice que el pasaporte de Muzorewa lleva el Nº 88475 y fue emitido el 10 de junio de 1969. Según la noticia aparecida en Moto, el pasaporte de Muzorewa lleva el Nº 88318 y fue emitido el 12 de junio de 1969.

16/ Véase A/7623/Add.1, párr. 60.

b) Detenidos, o sea, los detenidos sin juicio previo en cárceles o campamentos por órdenes "ministeriales" dadas en virtud de la "Ley de Orden Público" y del "Reglamento sobre facultades de emergencia (Mantenimiento del Orden Público)" o ambos.

c) Sospechosos, o sea, los que están bajo custodia policial detenidos en virtud de la cláusula de 30 días del "Reglamento de Emergencia" 17/.

d) Combatientes por la libertad: estos presos pueden estar en cualquiera de las tres categorías anteriores según las circunstancias de cada caso y la etapa en que se encuentre su caso en un momento dado. El "Secretario de Orden Público" informó en 1970 que todos los combatientes por la libertad detenidos habían sido condenados ya por los tribunales 18/. Informó además que entre los 137 detenidos en ese momento se contaban "terroristas y saboteadores que habían sido capturados" 19/.

254. El Sr. Ennals señaló especialmente la frecuencia cada vez mayor de la detención de presos políticos después de cumplidas sus condenas (RT. 130). Su declaración es corroborada por un informe publicado en Moto, un semanario rhodesio, según el cual algunos presos habían sido trasladados al campamento de detención de Gonakudzingwa al terminar sus períodos de reclusión en la cárcel de Salisbury 20/.

255. Los testimonios recibidos por el Grupo pueden analizarse bajo los siguientes epígrafes:

- a) denuncias relativas al número de presos y a la organización de los servicios carcelarios;
- b) denuncias relativas al trato cruel, inhumano o degradante impuesto a los presos políticos y a los combatientes por la libertad;
- c) denuncias relativas a los malos tratos sufridos por presos políticos y combatientes por la libertad capturados en cuanto se refiere i) al alojamiento, ii) a la alimentación, iii) a la vestimenta, iv) a los servicios médicos y v) a otros servicios;
- d) denuncias relativas a violaciones del derecho de los acusados a un juicio público justo y relativas igualmente a los procedimientos para presentar denuncias y recursos.

256. El Grupo examinó los testimonios, como anteriormente, a la luz de las normas internacionales que figuran en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos aplicables 21/.

---

17/ Véase Emergency Powers (Maintenance of Law and Order) Regulations 1970, sección 45 1).

18/ Informe del "Secretario de Orden Público" correspondiente al año que terminó el 31 de diciembre de 1970.

19/ Ibid.

20/ Moto, 7 de octubre de 1972.

21/ Véase E/CN.4/1050, párrs. 338 y 339.

a) Denuncias relativas al número de presos y a la organización de los servicios carcelarios

257. No se ofrecieron pruebas sobre el número de presos políticos que cumplen condenas en Rhodesia. La Srta. Todd (RT. 127) habló de los 200 que están condenados a muerte y se refirió a más de 1.000 arrestos efectuados durante el período en que la Comisión Pearce estuvo en Rhodesia. La Comisión Pearce informó posteriormente que el Gobierno de Rhodesia había proporcionado las siguientes cifras totales sobre el número de detenidos y encarcelados durante todo el período en que la Comisión permaneció en Rhodesia 22/:

	al: 27 de enero de 1972	28 de febrero de 1972	11 de marzo de 1972
Número de detenciones	1.119	1.607	1.736
Número de condenas	176	647	689

En los casos restantes se estaba a la espera del juicio o los detenidos habían sido absueltos o dejados en libertad sin juicio.

258. Las declaraciones de los testigos no permiten saber el número de detenidos en Rhodesia. La Srta. Todd (RT. 127), por ejemplo, dijo que no sabía con certeza cuántos detenidos había en total, pero que muchos de ellos estaban encerrados desde hacía ocho o nueve años. El Sr. Ennals (RT. 130) sólo mencionó cifras sobre el número de presos que habían seguido encerrados después de cumplir sus condenas. Dijo que eran 33 y nombró en particular al Sr. Welshman Mabheba (RT. 130), quien cumplió una condena por delitos políticos que terminó en junio de 1966, pero que sigue todavía detenido en Gonakudzingwa. Una carta dirigida al Sr. Lardner-Burke, "Ministro de Justicia y Ley y Orden", por los detenidos en la Cárcel de Salisbury para los que esperan ser juzgados, indica que hay 34 detenidos sólo en Salisbury 23/. No se sabe cuántos detenidos hay en otras cárceles. Según el régimen ilegal, en noviembre de 1971 había 93 africanos detenidos, 31 de los cuales iban a ser puestos en libertad en cuanto pudieran hacerse los arreglos necesarios 24/. Esas cifras no incluían al Sr. y a la Sra. Chinamano ni al Sr. Garfield Todd ni a las personas que fueron detenidas y arrestadas durante la visita de la Comisión Pearce a Rhodesia.

259. El número de combatientes por la libertad detenidos es un secreto estrechamente guardado porque el régimen teme que su revelación alarme a la opinión pública.

---

22/ Rhodesia, Report of the Commission on Rhodesian Opinion under the Chairmanship of Lord Pearce, op. cit., párr. 350.

23/ El Observer de Londres, del 29 de octubre de 1972, publicó un texto editado de la carta bajo el título de "Sufrimientos inhumanos a que están sometidos los presos de Smith".

24/ Véase A/AC.109/L.760 y Rhodesia: Proposals for a Settlement, Cmd 4835, párr. IV.

260. A la organización y a la ubicación de las cárceles y de otros lugares de detención se refieren el informe del Grupo para 1970 (E/CN.4/1050, párr. 340) y el informe del Relator Especial (E/CN.4/949/Add.2).

b) Denuncias relativas al trato cruel, inhumano o degradante impuesto a los presos políticos y a los combatientes por la libertad

261. Hay algunas diferencias en la clase de malos tratos sufridos por los presos y detenidos políticos, por una parte, y los combatientes por la libertad y los que están bajo custodia policial, por la otra.

262. La Srta. Todd (RT. 127) declaró que tanto ella como su padre pasaron cinco semanas en reclusión aislada mientras estuvieron en la cárcel. Aunque suponía que su celda en la cárcel de Chikurubi "no era mala" porque tenía una cama, una mesa y una ducha de agua fría, pensaba que en su caso lo más penoso había sido la reclusión solitaria (RT. 127)

263. La Srta. Todd describió el tormento de la alimentación forzada a la que se la sometió (RT. 127). Había iniciado una huelga de hambre para protestar contra el incumplimiento de la promesa de que se permitirían actividades políticas normales en Rhodesia durante la visita de la Misión Pearce; y a su juicio la decisión de alimentarla por la fuerza era una decisión política adoptada para que coincidiera con una conferencia de prensa en la que el Sr. Smith negó que la Srta. Todd estuviera haciendo una huelga de hambre. La tentativa de alimentarla por la fuerza se repitió 12 ó 13 veces en esa oportunidad, después de lo cual la testigo cayó sin sentido en el piso de su celda. La segunda tentativa de alimentarla por la fuerza, que se realizó al día siguiente, tuvo éxito.

264. El Sr. Mawema (RT. 129) describió cómo se obligaba a los presos, bajo la amenaza de un perro de policía, a desnudarse cada vez que aparecía un funcionario oficial de policía. Otro caso análogo fue contado por el Sr. Musikavanu (RT. 129) en los siguientes términos: "Se me ordenó que me desnudara por completo y, sin ningún respeto por mi persona o mi dignidad, examinaron detalladamente parte por parte de mi cuerpo sin excepción, y se me pidió que ejecutara una danza muy humillante, por cierto, al terminar la cual me obligaron a inclinarme y examinaron mi ano en busca de cualquier contrabando o información carcelaria que pudiera haber traído del exterior a los presos".

265. El Sr. Moyo (RT. 129) se refirió especialmente a las palizas a que los sometía la policía y a los perros de policía que se lanzaban contra los presos. "Todas las mañanas la policía venía a despertarnos ... para que pudiéramos contestar cuando pasaban lista, y si un detenido se demoraba en levantarse, lo pateaban". El Sr. Moyo recordó que un día un policía saltó sobre el pecho de Kumira mientras éste se hallaba aún dormido porque demoraba en levantarse. El Sr. Moyo (RT. 127) recordó además el caso de Nzaca Nkomo "que se había quedado prácticamente sin pantalones, porque se los había comido un perro de policía, y que sufrió lesiones en un ojo".

266. Con respecto a los combatientes por la libertad y a los sospechosos bajo custodia policial, se dijo que la crueldad y el trato inhumano consistían en palizas y tratamiento de shock eléctrico, encierro en "cámaras de congelación" y "fusilamiento sumario".

267. La Srta. Todd (RT. 127) prestó testimonio sobre el caso de un estudiante africano de unos 21 años de edad, Kwirirai Shoko, que había sido arrestado en una reunión en la zona de Belingwe. Se la había informado que el Sr. Shoko fue severamente apaleado por el D.I.C. africano durante un interrogatorio en la selva, efectuado donde los demás prisioneros no podían oír lo que ocurría, para tratar de obligarlo a informar sobre las personas que estaban organizando la "campaña negativa". El Sr. Guy Clutton-Brock (RT. 128) creía que los policías europeos "tenían cierto temor de golpear a los prisioneros en las celdas", pero que los detectives africanos del D.I.C. los golpeaban y que "para esa tarea el régimen elegía personas muy brutas, verdaderos inmorales".

268. El Sr. Mawema (RT. 129), que había estado detenido, dijo que les ataban las piernas y los colgaban en unos postes cabeza abajo. Los golpeaban en el cuerpo y los pateaban en el pecho. Añadió que, para "quebrantarlos", se les obligaba a permanecer despiertos durante interrogatorios que duraban 24 horas. El Sr. Mawema también describió cómo se aplicaban los castigos corporales. Se desnudaba a un hombre, se lo ataba a un poste con cinturones alrededor de su cuello, espalda y rodillas y después se lo apaleaba. Se lo amordazaba para que no se lo pudiera oír si gritaba (RT. 129). El Sr. Moyo (RT. 129), contando lo que había pasado él mismo en la prisión de Gwelo, dijo que lo habían golpeado con un bastón y que, como resultado, perdió los dientes; las raíces le fueron extraídas en el hospital de Whawha. El Sr. Mawema (RT. 129) también declaró que los combatientes por la libertad encarcelados bajo custodia eran sometidos a choques eléctricos y severas palizas. Se recordará que según uno de los testigos que declaró en la audiencia de 1970 (véase el documento E/CN.4/1050), el Sr. Bhebe, ex chófer de Joshua Nkomo, había quedado sordo e inválido como resultado de esa clase de tratamiento.

269. Al declarar sobre la muerte en la cárcel del Sr. Nimrod Khumalo, el Sr. Moyo (RT. 129) se refirió al empleo de una "cámara de congelación" para torturar a los sospechosos. A su regreso a Rhodesia desde Botswana, donde se le había negado asilo, el Sr. Khumalo fue arrestado y sometido a un intenso interrogatorio. A intervalos se lo dejaba en una habitación cuya temperatura estaba en el punto de congelación del agua. Cuando la policía consideraba que estaba suficientemente helado, lo llevaban a una oficina donde se lo interrogaba. Periódicamente, se le aplicaban pinzas. Como resultado de esa constante tortura, el Sr. Khumalo murió después en la prisión. Se recordará que en el caso Bhebe, mencionado anteriormente (véase E/CN.4/1050, párr. 349), la policía le arrancó también las uñas de los dedos de las manos utilizando un par de pinzas.

270. El Sr. Musikavanu (RT. 129) dijo que la cárcel de detención de Guromonzi era utilizada como centro de tortura. Tenía celdas individuales con caños por los que se echaba agua helada. Los presos eran detenidos indefinidamente. Citó el caso del Sr. Nevison Mukanganga, que había estado detenido en esa cárcel bajo sospecha de posesión de armas. Había salido de esa prisión mentalmente destruido, y sufriendo además de asma y reumatismo.

271. El Sr. Musikavanu (RT. 129) dijo también que los sospechosos lesionados durante las palizas no eran dejados en libertad por temor de que sus lesiones permitieran ver los ataques que habían sufrido, sino que se los mantenía detenidos indefinidamente. Agregó que así había ocurrido con el Sr. Mukanganga después de su tortura en la cárcel de Guromonzi.

272. El Sr. Clutton-Brock (RT. 128) y el Sr. Ennals (RT. 130) declararon que los combatientes por la libertad capturados no eran tratados como prisioneros de guerra sino como criminales. El Sr. Clutton-Brock creía que su encarcelamiento era riguroso y que su vida en la cárcel era penosa. El Sr. Ennals dijo que había que recomendar que se aplicaran los convenios relativos a los prisioneros de guerra a los combatientes por la libertad. Sugirió que se enviara una misión de las Naciones Unidas a Rhodesia, donde un gobierno ilegal encarcelaba a la gente, la maltrataba y la mantenía confinada.

273. El Sr. Bokwe (RT. 138) se refirió especialmente a la clase de malos tratos sufridos por los detenidos por oponerse expresamente a la propuesta de arreglo y que eran mantenidos en la cárcel en virtud de la cláusula de los 30 días. No había sido posible averiguar mayores detalles sobre las condiciones en que se los había mantenido, pues habían sido sacados repentinamente de la prisión y después no habían permanecido en un solo lugar. Manifestó que se los había dejado sin comida durante días y que continuaban sometidos a malos tratos. Como castigo se les había dejado sin zapatos en lugares donde había espinas.

c) Denuncias relativas a los malos tratos sufridos por los presos políticos y los combatientes por la libertad en cuanto se refiere al alojamiento, alimentación, vestimenta, atención médica y otros servicios

i) Alojamiento

274. Varios testigos declararon sobre la cuestión del alojamiento en las cárceles. El Sr. Musikavanu (RT. 129) consideró que la superficie de confinamiento era muy pequeña. Seis prisioneros estaban hacinados en una celda mal ventilada, de alrededor de 8 pies por 6. Durante el día se mantenía a 90 prisioneros en un patio que medía unas 40 yardas por 25 (RT. 129). También manifestó que la celda estaba infestada de pulgas y piojos (RT. 129). El Sr. Mawema (RT. 129) dijo que los prisioneros dormían sobre el cemento desnudo y frío y, que por esa razón, él había contraído un reumatismo crónico. La Srta. Todd creía, por lo que había podido ver desde su propia celda, que en cada dormitorio de la prisión en la sección africana había 20 presos que no disponían de instalaciones sanitarias internas.

275. El Sr. Bokwe (RT. 138) dijo que en el campamento de confinamiento de Gonakudzingwa los detenidos vivían en barracas de hierro galvanizado que se convierten en hornos cuando hace calor y en heladeras cuando hace frío. Gonakudzingwa está además en una zona pantanosa y palúdica cerca de la frontera con Mozambique y muchos presos sufrían distintas enfermedades.

ii) Alimentación

276. Según el Sr. Musikavanu (RT. 129) la alimentación carecía de vitaminas y variedad. La comida de los presos contenía un 98% de carbohidratos y consistía principalmente en harina de maíz todos los días. Como resultado de la mala alimentación (RT. 129) los presos sufrían enfermedades producidas por la nutrición deficiente; el testigo había perdido cuatro dientes por esa razón.



277. Los presos de la prisión de Salisbury hicieron denuncias semejantes en una carta al "Ministro de Justicia y Orden Público" de fecha 1º de agosto de 1972 25/, en la que decían que la "comida del grupo III es sumamente pobre, siempre mal cocinada deliberadamente e inadecuada para el consumo humano". La carta decía después: "Sus cárceles se han convertido en instituciones donde los hombres contraen tuberculosis y otras enfermedades ... Uno de nosotros sufre de tuberculosis que contrajo en la prisión Khami".

iii) Vestimenta

278. Ningún testigo se refirió a este punto, pero mencionaron especialmente el grupo cuarto (vestimenta) grupo 3 (hombres) del Reglamento de Prisiones (Federal Govt. Notice Nº 42 of 1956) (véase E/CN.4/949/Add.2). Según las disposiciones correspondientes, se entregan sólo dos camisas y dos pares de pantalones cortos. En la carta de los presos de Salisbury, mencionada en el párrafo 277, se decía que los presos necesitaban angustiosamente "artículos tan indispensables como camisas, pantalones, zapatos, almohadas, toallas, cepillos de dientes, dentífrico, cucharas, etc."

iv) Atención médica

279. El Sr. Musikavanu (RT. 129) dijo que como consecuencia de la detención algunos prisioneros habían perdido la vista. El Sr. Amos Mkwanzani, por ejemplo, se había quedado completamente ciego y otros tres sólo tenían visión parcial. El régimen se había negado a proporcionar anteojos a los que los usaban normalmente. Se había pedido a las organizaciones internacionales que los socorrieran con esos artículos, pero los detenidos aún debían pagar la mitad del costo por ser tan grande el número de personas que los necesitaban. Manifestó que los presos también sufrían de úlceras e hipertensión causadas por la disolución de las familias debida al encierro del sostén de la familia.

280. El Sr. Moyo (RT. 129) declaró sobre la escasez de médicos en los campamentos de detención. Por esa razón, el Sr. Romulus Sibiya había tenido que salir del campamento para ir a comprar ciertas tabletas, por lo que le dieron una paliza y falleció poco después de ser puesto en libertad. La Srta. Todd (RT. 127) dijo que la muerte del Sr. Takawira había sido debida a negligencia grave de las autoridades médicas de la prisión en la que había estado encerrado. El Sr. Mawema (RT. 129) dijo que se le negó la hospitalización al Sr. Takawira en los últimos seis años en que estuvo detenido.

v) Otros servicios

281. Los testigos manifestaron que mientras estaban en la cárcel se les negaba a los presos todo servicio externo, incluso la comunicación con sus familias. Según el Sr. Musikavanu (RT. 129) no podían comunicarse realmente con sus familias y tampoco se les permitía recibir instrucción. Añadió que los presos podían ver a sus familias sólo una vez por semana a través de un vidrio muy grueso. No había contacto físico durante la visita. La comunicación se efectuaba mediante un aparato telefónico.

---

25/ Véase la llamada 23.

d) Denuncia relativas a violaciones del derecho de los acusados a un juicio justo

282. La Srta. Todd se refirió en su testimonio (RT. 127) a casos de detención en virtud de órdenes ministeriales y a arrestos con arreglo a la cláusula de los 30 días de la Ley sobre facultades de emergencia, casos en los que no se puede apelar a los tribunales. La testigo citó el caso del Sr. Shoko para demostrar hasta qué punto era impotente un abogado cuando se trataba de las leyes de seguridad. Después del arresto del Sr. Shoko, la Srta. Todd dio instrucciones a un abogado para que se ocupara de su caso. Cuando el abogado se puso en contacto con la policía, se le dijo que el Sr. Shoko estaba detenido en virtud del "Reglamento sobre facultades de emergencia" que no permitía a los abogados hacer nada por sus clientes. En respuesta a la pregunta de si un detenido podía comunicarse con un abogado (RT. 127), la testigo señaló que no tenía sentido recurrir a un abogado porque no se podía llevar el caso a la justicia. Citó como ejemplo los casos del Sr. Joshua Nkomo, que estaba detenido desde abril de 1964 sin ser acusado ni sometido a juicio, y el del Sr. Daniel Madzimbamuto, que había estado detenido igualmente durante más de 13 años.

283. La Srta. Todd dijo (RT. 127) que su caso y el de su padre habían sido llevados al tribunal de apelación, pero que ellos se habían negado a presentarse porque el tribunal debía juzgar si era conveniente que la persona continuara detenida pero no si el detenido era culpable o no de un delito concreto. El tribunal se componía de tres jueces, pero también participaba la Sección Especial de la policía, que era quien formulaba la acusación. No se permitía al detenido ver a ninguno de los testigos y se le proporcionaba sólo una copia rigurosamente censurada del documento que le concernía (RT. 127). No se comunicaba al detenido las pruebas en su contra ni las razones por las que los jueces decidían que debía continuar encarcelado. La testigo consideraba que esas actuaciones eran una "farsa" y por esa razón no se había presentado al tribunal.

284. Se recordará que desde la entrada en vigor de la "Ley de Mantenimiento del Orden Público" el acusado en casos políticos ya no está protegido por el principio jurídico de que "todo acusado se considera inocente" hasta que se pruebe lo contrario 26/.

C. Condiciones en que viven los africanos en las "reservas indígenas" y los "campamentos de tránsito"

1. Antecedentes históricos

285. La expresión "reservas indígenas" ya no está en uso en Rhodesia del Sur. Fue abolida en 1962 de conformidad con las disposiciones de la Constitución de 1961, cuando las reservas y las zonas especiales indígenas se combinaron para formar las tierras tribales en fideicomiso, confiadas a una junta de fideicomisarios, para el uso exclusivo de los miembros de las tribus. Fue un cambio de nombre únicamente, ya que todas las leyes y condiciones que se aplicaban a las reservas antes del cambio se siguen aplicando en todos

los aspectos importantes a las actuales tierras tribales en fideicomiso. En el informe de 1970 del Grupo, E/CN.4/1020/Add.1 se hace una detallada reseña de los antecedentes históricos de las reservas indígenas en Rhodesia del Sur y un resumen de las leyes pertinentes relativas a las mismas.

286. El fenómeno de los "campamentos de tránsito" tiene dos dimensiones en Rhodesia del Sur, según el sentido en que se emplea esa denominación. En el primer caso, los campamentos de tránsito africanos creados por el Gobierno sudafricano para volcar a los africanos sin tierras sacados de las llamadas zonas blancas 27/, parecen ser sinónimo de las "aldeas de reasentamiento" de Rhodesia.

287. Este proceso de remoción existe en Rhodesia desde hace varios decenios. En 1950, por ejemplo, el Gobierno decidió sacar a los llamados "africanos no autorizados" de la zona europea, se necesitaran o no esas tierras para la inmediata ocupación por europeos 28/. Los africanos desalojados eran llevados a "bolsas" de reasentamiento, que llegaron a ser después las tierras tribales en fideicomiso. Pueden verse ejemplos recientes en los casos del jefe de los tangwenas y su pueblo, el pueblo del valle Nyamukwarara de Stapleford y muchos otros 29/. En el análisis de los testimonios que figura en la sección sobre "reasentamiento en masa" se hace una completa reseña de estos casos.

288. La segunda clase de campamentos de tránsito es la descrita por el Sr. Bokwe (RT. 138) y el Sr. Malianga (RT. 139) en sus declaraciones ante el Grupo. El Sr. Bokwe (RT. 138), los califica de campamentos de trabajo en donde se tiene a las personas sin trabajo, especialmente a los que han abandonado la escuela, y se los obliga a trabajar y/o se los envía a las "granjas boers" donde trabajan por muy poco dinero. El Sr. Malianga (RT. 139) considera que esos campamentos son bolsas de trabajo donde las personas sin trabajo permanecen alrededor de un mes y son enviadas después a diversos centros donde podría haber trabajo para ellas. El Sr. Bokwe dijo que los campamentos se hallaban en distintos centros y que los africanos eran enviados a los situados en las regiones que parecían las más cercanas de su lugar de origen según su sistema de identificación, llamado certificados de inmigración o "stupas".

## 2. Resumen de la legislación en vigor

289. Puede hallarse un estudio amplio de las leyes que afectan a los africanos en las tierras tribales en fideicomisos en los informes del Grupo correspondientes a 1970 y 1971 (E/CN.4/1020/Add.1 y E/CN.4/1050), respectivamente. En el período que se examina no ha habido novedades legislativas de importancia.

## 3. Análisis de los testimonios

### a) Remociones en masa

290. Las declaraciones de los testigos y la información de que dispone el Grupo demuestran que las autoridades de Rhodesia continúan aplicando la política de remociones

---

27/ Véase E/CN.4/1050, párrs. 156 y 157.

28/ H. Dunlop, "Land and Economic Opportunity in Rhodesia", Rhodesian Journal of Economics, vol. 6, Nº 1, 1972.

29/ Report of the Secretary for Internal Affairs for Year ending 31 December 1970.

en masa. La Srta. Todd (RT. 127), el Sr. Clutton-Brock (RT. 128) y el Sr. Bokwe (RT. 138) hablaron de los africanos que habían sido expulsados de las tierras fértiles que habían ocupado tradicionalmente y enviados a zonas áridas y yermas. Todos se refirieron al caso de la tribu tangwena sobre el que informó el Grupo de Expertos en sus informes anteriores. El elemento nuevo en este caso, mencionado por la Srta. Todd (RT. 127) y por el Sr. Bokwe (RT. 138) es el incendio de las cabañas de los tangwenas en julio de 1972 y el secuestro de sus hijos, tomados como rehenes. Según ciertas averiguaciones, esos niños fueron llevados a un campamento situado en la zona de Salisbury. El Sr. Clutton-Brock (RT. 128) citó otros casos de desarraigo de la población en la reserva Wheya, donde se destruyeron las cosechas y los cercados del pueblo, como resultado de lo cual fueron encarceladas más de 100 personas en dos grupos, y en las zonas de tierras bajas de los Jefes Mtema y Mtambara, donde se echó al pueblo de sus tierras. El declarante manifestó que tales casos eran frecuentes en las tierras de misiones y en las zonas "blancas" 30/.

291. Las declaraciones de los testigos son apoyadas por informaciones contenidas en publicaciones oficiales del "Gobierno". El informe anual del "Secretario del Interior" sobre el año que terminó en diciembre de 1970 31/ dice que había 5.000 personas en el valle de Nyamukwarara en Stapleford, cerca de Umtali, que debían ser reasentadas en las tierras tribales en fideicomiso. El reasentamiento había comenzado ya en 1970. En el informe se dice que en Matabelelandia, las tierras tribales en fideicomiso de Bubi, Lupane y Nkai, recibieron ese año familias que habían estado viviendo en zonas boscosas adyacentes. El informe dice además que, entre mayo y septiembre, 11.000 personas asentadas ilegalmente fueron sacadas de Chilimanzi y reasentadas en el distrito de Queque. La última operación abarcó 92 aldeas.

292. El documento de trabajo A/AC.109/L.760, de 8 de febrero de 1972, se refirió a la intención del régimen de expulsar a 3.500 africanos de la Misión Epworth, 1.000 de la Misión Católica de Chishawasha y 5.000 de las tierras de propiedad de la Comisión Forestal en Stapleford.

b) Derechos políticos

293. El Sr. Clutton-Brock (RT. 128) destacó la falta de derechos políticos en las tierras tribales en fideicomiso y de la población africana en general. A su juicio, el "Ministerio del Interior" se inspiraba profundamente en el espíritu del nazismo y había tratado de adquirir control absoluto sobre la vida de los africanos. Según el Sr. Bokwe (RT. 138), el régimen de Rhodesia estaba introduciendo el sistema sudafricano de los "bantustanes" sobrepretexto de "provincialización". Se tenía la intención de dar un mínimo de derechos políticos a los africanos en las llamadas asambleas provinciales. El Sr. Christopher Munnion 32/ consideraba que la provincialización era una regionalización del tipo de los "bantustanes" que comprendería la creación de dos asambleas africanas regionales en Matabelelandia y en Mashonolandia. El jefe ejercerá influencia dominante en las asambleas.

---

30/ Véase Rhodesia: The Ousting of the Tangwena, Christian Action Publications, Ltd., Londres, enero de 1972.

31/ Report of the Secretary for Internal Affairs for Year Ending 31 December 1970.

32/ Daily Telegraph, 14 de julio de 1972.

c) Libertad personal; libertad de expresión, de reunión y de asociación con fines pacíficos

294. Se recordará que, a nivel nacional, la "Ley de salida de Rhodesia (Control)" restringe la libertad de los africanos para salir del país. La libertad de movimiento dentro del país está severamente restringida por el requisito legal de que nadie puede salir de su distrito de residencia sin permiso del jefe o el comisionado de distrito. Según el Sr. Moyo (RT. 129), toda persona que va a la zona de otro jefe sin permiso, es procesada ante el tribunal de jefes o el tribunal del comisionado de distrito.

295. La actuación de la policía en Humbani demuestra las violaciones de la libertad de reunión y asociación. Según la Srta. Todd (RT. 127), la policía intervino en una reunión convocada para debatir el Libro Blanco sobre los términos para un arreglo constitucional. Antes de que comenzara la reunión, la policía arrestó a varias personas que se habían ocupado de organizar reuniones para discutir el Libro Blanco. Como resultado de la intervención policial, estalló la violencia. El 29 de junio de 1972 el "Gobierno" impuso otras restricciones a la organización de reuniones políticas en zonas africanas. La nueva orden limita la celebración de reuniones en las zonas africanas de adquisición sin autorización del comisionado de distrito. La orden también prohíbe que se celebren reuniones al aire libre en zonas africanas.

d) Oportunidades económicas

296. Las oportunidades económicas en las tierras tribales en fideicomiso dependen en su mayor parte de la distribución y la calidad de la tierra. Así lo señalan todas las declaraciones de los testigos que se refirieron a este punto. Todos subrayaron la injusta distribución de las tierras entre los europeos y los africanos. El Sr. Moyo (RT. 129) dijo que las tierras asignadas a los africanos se hallan en el veld bajo las asignadas a los europeos en el veld alto. Según la Srta. Todd (RT. 127), varios cientos de miles de personas estaban siendo pasada de zonas buenas a zonas pobres.

297. Se recordará que según un testigo que declaró en la audiencia de 1970 (Sr. Blackney, E/CN.4/1050, párr. 385), el mapa geológico oficial publicado por el "Gobierno" muestra que, de la tierra que el organismo de agrimensura del "Gobierno" considera adecuada para la aforestación, el cultivo de árboles frutales y la cría intensiva de ganado vacuno, sólo el 2% se encuentra en la parte africana y el 98% en la parte europea; de las tierras que permiten una explotación agrícola intensiva, sólo el 18% está en zonas de africanos, mientras que el 82% es de propiedad de europeos; pero si la tierra no es adecuada para la explotación agrícola, el 100% de la misma se encuentra en zonas de africanos y nada en zonas de europeos. Esta disparidad entre la calidad de las tierras de los africanos y los europeos limita en gran medida las oportunidades económicas de los africanos en las tierras tribales en fideicomiso.

e) Educación

298. Los gastos para educación continúan favoreciendo al niño blanco. En 1970 se destinaron a la educación de los africanos 17.104.380 libras de Rhodesia y 16.329.652 libras de Rhodesia a la educación de los blancos. Dada la cantidad de alumnos en cada

grupo, la suma gastada por cada niño africano es alrededor de una décima parte de la gastada por cada niño blanco 33/. En 1970 había 637.000 niños africanos y 33.046 niños blancos en las escuelas primarias, pero en las escuelas secundarias, los blancos eran 23.365 y los africanos 26.183 34/.

299. El 25 de agosto de 1971 el régimen de Smith canceló las becas de 24 estudiantes africanos de la Universidad de Salisbury porque habían participado en una manifestación de protesta 35/. El régimen ha continuado intensificando su política de apartheid en la educación. El 3 de febrero de 1971 el "Ministro de Educación" escribió a los obispos católicos para hacerles saber las cuotas raciales que deben observarse en las escuelas multirraciales. En las escuelas predominantemente blancas, los africanos no deben exceder normalmente del 6% del total de alumnos. En las escuelas predominantemente asiáticas y mestizas, el porcentaje de africanos no debe exceder del 15% 36/.

D. Graves manifestaciones de colonialismo y discriminación racial en Rhodesia del Sur

300. En su resolución 21 (XXV) la Comisión de Derechos Humanos decidió que el mandato del Grupo Especial de Expertos incluyera una investigación sobre las graves manifestaciones de colonialismo y discriminación racial en Rhodesia del Sur. En cumplimiento de esa resolución el Grupo Especial de Expertos presentó un informe preliminar a la Comisión en su 26º período de sesiones (E/CN.4/1020/Add.1, párrs. 71 a 111) e incluyó información sobre el tema en los informes presentados a la Comisión en sus períodos de sesiones 27º (E/CN.4/1050, párrs. 393 a 419) y 28º (E/CN.4/1076, párrs. 79 a 85). En sus audiencias de 1972 el Grupo Especial de Expertos continuó recibiendo declaraciones sobre graves manifestaciones de colonialismo y discriminación racial, en particular sobre las medidas de represión contra la población africana, la alianza militar de Rhodesia del Sur con Sudáfrica, las medidas adoptadas respecto de la distribución de la tierra y los traslados forzosos; el trato de los presos políticos y la violación de los derechos sindicales y las oportunidades de empleo.

a) Medidas de represión contra la población africana

301. Para la investigación del Grupo sobre las manifestaciones de colonialismo y el empleo de medidas de represión contra la población africana tuvo particular importancia la actitud del régimen y de su fuerza policial durante la misión de la Comisión Pearce a Rhodesia para decidir la aceptabilidad de los términos convenidos entre el Gobierno británico y el régimen ilegal de Rhodesia. (El texto completo de los términos

---

33/ The African Predicament in Rhodesia, Minority Rights Group, Londres, Report Nº 8, enero de 1972, pág. 9.

34/ Ibid.

35/ Véase A/AC.109/L.760, párr. 76.

36/ Guardian, Londres, 18 de febrero de 1971.

del acuerdo figura en el documento S/10405 del Consejo de Seguridad, del 1º de diciembre de 1971.) Al terminar su investigación la Comisión declaró que "el pueblo de Rhodesia en conjunto no considera aceptables estas propuestas como base para la independencia".

302. El Sr. Mawema (RT. 128) destacó que aunque el Gobierno había dicho que durante las demostraciones efectuadas mientras estuvo la Misión Pearce resultaron heridas de bala 14 personas, su número ascendía en realidad a 31.

303. La Srta. Todd (RT. 127) señaló que, aunque en el Libro Blanco se exigía expresamente que se permitieran las actividades políticas normales en el período anterior y posterior a la prueba de aceptabilidad, el régimen no había cumplido esa parte del acuerdo. La declarante consideraba (RT. 127) que una de las razones de que se la hubiera detenido en virtud de las normas de emergencia era que en diciembre de 1971 y a comienzos de enero de 1972 había podido dar a la prensa y a la Comisión Pearce información sobre la represión policial en las tierras tribales en fideicomiso. Esta información provenía de una de las primeras zonas del país donde la población estaba comenzando a responder "No" a los términos del arreglo. Las autoridades comenzaron a mostrarse muy activas por intermedio de sus administradores, el "Ministerio del Interior" y la policía, y hacia fines de diciembre comenzaron los primeros arrestos en gran escala. El Sr. Garfield Todd, padre de la declarante, y el Sr. Josiah Chinamano y su esposa (conocidos, junto con la declarante, como los "detenidos Pearce" porque se oponían a los términos del acuerdo), continuaron detenidos (RT. 127). La Srta. Todd dijo que no podía calcular con exactitud el número de personas arrestadas durante ese período porque ella misma había estado detenida, pero que según informes provenientes de la zona de Belingwe, próxima a su hogar, los arrestos fueron tantos cuando la Comisión Pearce salió del país que la policía tuvo que alquilar ómnibus particulares para llevar a los presos a la cárcel (RT. 127). La finalidad de la medida de represión fue asegurar un voto afirmativo mientras la Comisión Pearce estaba en el país, y después de la visita de dicha Comisión, tratar de invertir la eventual decisión negativa. El proceso continuaba y el ejército y la policía estaban "muy activos". A comienzos de enero un grupo de policía paramilitar, conocido por el nombre de "Dependencia Policial de Apoyo", que fue llamado a la zona llamada Humbani para limpiar la zona, arrestó a cientos de hombres y llegó a golpear a los niños para que dijeran dónde se hallaban sus padres (RT. 127).

304. La Srta. Todd dijo (RT. 127) que el régimen de Smith estaba tan decidido a llegar a un acuerdo con el Gobierno británico que había iniciado otra ola de represión en las zonas de africanos en Rhodesia, en particular en las tierras tribales en fideicomiso. El "Ministro del Interior" había advertido que se removería a jefes débiles y que no hubieran "gobernado adecuadamente" mientras la Comisión Pearce estaba en el país. La declarante suponía que la advertencia estaba dirigida a los jefes que habían tenido el valor de decir "No". Pensaba (RT. 127) que se invitaría a los jefes a emplear más ampliamente los poderes que tenían para imponer flagelaciones públicas por conducto de los tribunales de jefes. Eso aumentaría la posibilidad de que hubiera violencia, manifestó la declarante, dado que habría seguramente una reacción contra el uso de esos poderes. El Sr. Mawema (RT. 128) dijo que después de la decisión de la Comisión Pearce,

el "Gobierno" había comenzado una "caza de brujas" contra los jefes y notables que no habían aceptado las propuestas. Los jefes y notables estaban siendo llamados al centro de adoctrinamiento en Domboshawa, cerca de Salisbury, donde se les exigía que declararan su posición con respecto a la política gubernamental. Como los jefes estaban al servicio del Gobierno, sus cargos correrían lógicamente peligro si se manifestaban en desacuerdo con la política del "Gobierno". Esas medidas del "Gobierno" eran parte de una tentativa de reunir una delegación de africanos que se esperaba presentaría una petición a Londres para que se revocara la decisión negativa.

305. El Sr. Clutton-Brock (RT. 128) calificó de nazi al régimen de Rhodesia y dijo que el "Ministerio del Interior" había estado tratando de adquirir control total sobre la vida de los africanos. Según ese testigo, el control incluía el empleo de informantes pagados; esa práctica se había hecho más y más corriente, al punto de que los africanos tenían hablar francamente a menos que de estar seguros de su interlocutor. El Sr. Musikavanu (RT. 129) dijo que las leyes de seguridad habían convertido al país en un Estado policial.

306. El Sr. Mawema (RT. 128) se refirió a las actividades del "Gobierno" para tratar de frustrar las actividades del African National Council. Esto incluía medidas para privar a la organización de todas sus fuentes de recursos. Cuando el African National Council pidió donaciones al pueblo, en las zonas rurales se arrestó y detuvo a cientos de personas por haber hecho donaciones a la organización. El Sr. Mawema dijo que sólo se habían publicado los nombres de dos personas detenidas porque los arrestos se habían hecho en virtud de una sección de la ley que no exigía la publicación de los nombres (RT. 128). Esto significaba que el "Gobierno" estaba eliminando a los líderes locales del pueblo, lo que le dejaba el camino más libre para lograr una petición contra el resultado negativo del referéndum.

b) Distribución de tierras y traslado forzado de los africanos

307. Varios de los testigos se refirieron al uso de la "Ley de Tenencia de Tierras de 1969" como instrumento legal para sacar a los africanos de sus tierras tradicionales y dejarlos absolutamente sin tierras. Gran parte de los testimonios destacaron el desarraigo de los tangwenas. La Srta. Todd (RT. 127) dijo que esa tribu poseía un campo de 17 millas cuadradas en una zona llamada Inyanga que ocupaba desde antes de la llegada de los blancos a Rhodesia y que la tribu había resistido durante años las tentativas de trasladarla. Poco antes de la audiencia del Grupo se había sabido que la batida más reciente de la policía contra los tangwenas se había hecho en helicópteros. Sus cabañas habían sido totalmente quemadas y sus cosechas destruidas. Los tangwenas habían huido de sus hogares, pero sus hijos eran cuidados en una escuela que funcionaba en una granja cooperativa africana próxima llamada Nyafaru. La policía había sacado a los niños de esa escuela para llevarlos a Salisbury, donde los mantenía virtualmente como rehenes. El Sr. Mawema (RT. 129) dijo que según su información los hijos de los tangwenas estaban en un hogar de ancianos, donde eran alimentados por el "Departamento de Bienestar Social". Agregó que sus padres estaban dispersos en las colinas y en la frontera con Mozambique. El Sr. Clutton-Brock (RT. 128) dijo que sabía que unos 120 niños habían sido trasladados.



308. El Sr. Clutton-Brock citó (RT. 128) varios otros casos de traslados de poblaciones africanas, entre ellos el de la reserva Wheya, donde se habían destruido las cosechas y los cercos. Como resultado de los consiguientes procesos judiciales se encarceló primero a 65 personas y después a otras 50, y el declarante creía que aún no habían concluido las actuaciones. También había habido problemas en las zonas irrigadas gobernadas por el jefe Mutema y en Mutambara, en las tierras bajas. Hubo asimismo casos de personas expulsadas de tierras de las misiones y de las zonas de europeos. Estos eran los casos más recientes que podía recordar.

309. El Sr. Mawema (RT. 128) dijo que se estaba trasladando a las personas que vivían en la Misión Epworth, la Misión Shishawasha y también en la zona de Lelsetter, en la parte oriental del país. Esas personas eran sacadas de tierras fértiles y de tierras próximas a zonas urbanas para ser llevadas a zonas muy alejadas en el valle del Zambesi, que es seco, donde el agua sólo se obtiene mediante perforaciones y donde los habitantes tienen que caminar largas distancias para conseguirla. En esas zonas de reasentamiento no se proporcionaban servicios sociales ni educacionales. Los trasladados eran dejados en los bosques para que sobrevivieran como pudieran.

310. El Sr. Clutton-Brock (RT. 128) dijo que ningún africano tenía en la actualidad derecho a estar en ninguna parte de su propio país, ya se tratara de zonas de africanos o de europeos. En las zonas de africanos estaba totalmente sometido a los jefes y notables que podían no asignarle tierras y que estaban a su vez sometidos a presiones muy intensas del "Ministerio del Interior", que cada vez controlaba más la vida de los africanos y todo lo que se refería a la agricultura, la educación y la administración de esas poblaciones. El comisionado de distrito citaba a los jefes y notables y les advertía que no recibirían sus asignaciones en efectivo hasta que no cesara toda conversación "subversiva" en sus aldeas.

c) Otros ejemplos de graves manifestaciones de colonialismo y de discriminación racial en Rhodesia del Sur

311. Según una información de prensa 37/, "a partir de esta semana, los comisarios provinciales que administran las "tierras tribales" de Rhodesia están facultados para imponer multas de importe ilimitado a las colectividades africanas sin oír su defensa ni recurrir a los tribunales. A falta de pago, se incautará el ganado". Estos hechos, si son exactos, constituyen sanciones colectivas contra los africanos.

312. En la propia prensa de Rhodesia del Sur pueden hallarse otros ejemplos de graves manifestaciones de colonialismo y de discriminación racial. En el Paper on Revised Policies, presentado a la Conferencia anual del Rhodesian Front, en octubre de 1972, figuran las siguientes observaciones importantes 38/.

"Debería haber, para cada colectividad, servicios sanitarios separados situados, siempre que fuera factible, dentro de sus zonas respectivas.

---

37/ Véase Le Monde del 25 de enero de 1973, pág. 13, y The Times (Londres), del 20 de enero de 1973, pág. 5.

38/ Property and Finance, Nº 200, octubre de 1972, Salisbury, pág. 3.

Deberían asignarse a las diferentes culturas zonas residenciales separadas, y la ocupación de tiendas en una zona determinada debería quedar reservada a los miembros de la comunidad interesada.

Deberían establecerse nuevas ciudades en la zona africana; debería conseguirse que los africanos empleados en la zona europea viviesen en poblados situados en tierras africanas (es decir, tribales) adyacentes; además, ya no se debe permitir que los africanos sean propietarios de bienes raíces en las zonas europeas...

Hay que mantener el espíritu de la Ley de Tenencia de Tierras."

313. Se cree que se han expedido a 34 hoteles, restaurantes y clubes nocturnos de Salisbury permisos en virtud de la nueva ley que limita las ventas de bebidas alcohólicas a los africanos 39/.

"Entre ellos figuran los tres principales hoteles multirraciales de Salisbury: el Jameson, el Ambassador y el Meikle's.

En virtud de la nueva reglamentación, que entrará en vigor mañana, los bares africanos de las zonas europeas cerrarán a las 19.00 horas los días de semana y a las 13.00 los sábados, y estarán cerrados los domingos y días feriados oficiales.

Los permisos autorizan a los hoteles para servir bebidas alcohólicas a los huéspedes africanos después de las 19.00 horas los días de semana y de las 13.00 los sábados."

314. La Sociedad de Radiodifusión de Rhodesia ha puesto el veto a dos personalidades conocidas: Bob Cary, autor y presidente del Settlement Council y a la actriz Beryl Salt 40/. En la prohibición se dispone que ni el uno ni la otra puede intervenir de ninguna manera en los programas del servicio general. Los locutores tienen instrucciones escritas de no mencionar los nombres de esas dos personas y de no utilizar sus guiones. El Sr. Cary ha criticado la "asombrosa esterilidad" de la Sociedad de Radiodifusión de Rhodesia y de la televisión de Rhodesia, diciendo: "Su única norma es negativa: no perjudicar las relaciones entre las razas; pero tampoco hacen nada para mejorar esas relaciones".

d) Derechos sindicales y oportunidades de empleo

315. El Sr. Musikavanu (RT. 129) dijo que la segregación en el empleo no era legal sino administrativa y que funcionaba como resultado de que se reservaban los empleos para los trabajadores blancos. Esta política consistía en mantener empleados a los electores que, naturalmente, eran blancos. En lugar de capacitar a los artesanos africanos se fomentaba la inmigración de blancos. Muchos de los que dejaban la escuela estaban desempleados debido a la política de reservar los empleos para los blancos.

---

39/ The Rhodesia Herald, 31 de octubre de 1972, pág. 4.

40/ The Sunday Mail, Salisbury, 5 de noviembre de 1972, pág. 1.

316. El Sr. Valticos (RT.131), representante de la Organización Internacional del Trabajo, dijo al Grupo que la OIT no tenía información sobre Rhodesia porque ya no mantenía contacto directo con el régimen de Salisbury y porque el Gobierno británico, oficialmente responsable por la colonia, había declarado que ya no estaba en condiciones de suministrar información.

317. La información disponible indica que el régimen de Smith no respeta los derechos sindicales. El 25 de junio de 1972 el régimen empleó al ejército para romper la huelga de empleados del transporte en Salisbury y Bulawayo, que había sido iniciada el 12 de junio en apoyo de su pedido de mejoras de sueldo a la compañía de ómnibus. Se condenó a 60 chóferes en Salisbury por participar en lo que el régimen calificó de huelga ilegal, y se procesó a otros 67 en Bulawayo 41/.

318. La disparidad en las oportunidades de empleo entre europeos y africanos queda demostrada por las siguientes cifras proporcionadas por el "Ministerio de Servicios Públicos", que permiten ver la distribución por raza de los empleados del Gobierno en cargos de plantilla al 31 de diciembre de 1971 42/:

Europeos	10.842
Africanos	827
Mestizos	254
Asiáticos	13

319. Puede verse otra prueba de la discriminación racial contra los africanos en la gran diferencia entre los sueldos promedio de los europeos y los africanos. Las cifras corresponden al año 1970 43/. El cuadro siguiente da cifras comparativas que indican el número de trabajadores africanos y europeos y sus sueldos promedio por sector.

---

41/ Financial Times, Londres, y Guardian, Londres, 27 de junio de 1972.

42/ Hansard, 28 de julio de 1972, col. 1.692.

43/ Monthly Digest of Statistics, junio de 1971.

Sector	Nº de empleados		Sueldo anual promedio	
	Africanos	Europeos	Africanos	Europeos
			Libras de Rhodesia	Libras de Rhodesia
Agricultura	306 300	4 360	153	2 457
Minería	52 200	3 650	334	4 456
Manufactura	103 600	20 100	478	3 606
Electricidad y agua	4 200	1 520	448	3 840
Construcción	48 400	8 560	428	3 273
Finanzas y seguros	2 800	7 140	714	3 280
Restaurantes y hoteles	46 600	20 460	454	2 654
Transporte	17 500	4 910	626	3 600
Administración pública	27 600	11 960	409	3 129
Educación	20 600	6 400	590	2 709
Sanidad	7 600	3 310	579	2 388
Servicio doméstico	113 100	Ninguno	256	Ninguno
Otros	25 300	9 320	430	2 442
Total	775 800	106 700	312	3 104

Se observará que el sueldo promedio de los europeos es de 3.104 libras de Rhodesia, y el de los africanos de 312 libras de Rhodesia.

e) Cooperación entre Sudáfrica y el régimen ilegal de Rhodesia del Sur

320. Los testigos dijeron que lo que permitía ver la cooperación entre los dos regímenes era su creciente cooperación militar y policial y, además, el empleo del apartheid como modelo para la práctica de la discriminación racial en Rhodesia.

321. El Sr. Musikavanu (RT. 129) dijo que la política de Rhodesia era llamada desarrollo separado, pero que en realidad era esencialmente una política de apartheid. El efecto de las leyes de segregación como la Ley de asignación de tierras de 1960, que se había convertido simplemente en la "Ley de tenencia de tierras" de 1969, era dividir rígidamente la tierra en zonas de blancos y zonas de africanos. La "Ley de tenencia de tierras" había consolidado la política de apartheid en Rhodesia. Las ciudades estaban en las zonas "blancas", lo que significaba que los africanos sólo eran tolerados allí. En las zonas urbanas, la Ley sobre zonas urbanas dividía además las zonas residenciales en distritos africanos y suburbios de blancos. En los suburbios de blancos ningún sirviente africano podía tener consigo a su familia, ni tampoco contaba con

servicios educacionales o de otra clase en su lugar de trabajo. Los lugares de esparcimiento estaban siendo segregados (RT. 129) y los africanos vivían sometidos a humillaciones continuas, cualquiera fuera el nivel que hubieran alcanzado. El Sr. Mawema (RT. 129) convino en que la "Ley de tenencia de tierras" era la base de la discriminación y el racismo.

322. Al referirse a la cooperación directa entre los dos regímenes, el Sr. Ennals (RT. 130) destacó que había una cooperación sumamente estrecha entre las fuerzas policiales de Africa meridional e indudablemente entre la policía de Rhodesia y la de Sudáfrica. El Sr. Clutton-Brock (RT. 128) dijo que en el valle de Zambesi había considerable ayuda policial, que por lo general no se prestaba abiertamente. Sabía que algunos sudafricanos se habían incorporado a las fuerzas policiales de Rhodesia.

323. Varios testigos, entre ellos el Sr. Moyo (RT. 129) y el Sr. Ennals (RT. 130), citaron casos de personas de Rhodesia a las que se les negaba asilo en otros países del Africa meridional y se entregaban a Rhodesia. El Sr. Ennals dijo que había habido entre 18 y 21 casos de personas a las que se hizo regresar a Rhodesia desde Botswana porque otros Estados Miembros de las Naciones Unidas no estaban dispuestos a darles asilo. El Sr. Moyo (RT. 129) se refirió al caso de 21 personas deportadas de Botswana y enviadas de regreso a Rhodesia. Manifestó (RT. 129) que 129 combatientes por la libertad habían estado en Zambia pero fueron deportados de vuelta a Rhodesia. Cuatro de ellos fueron sentenciados a muerte y 18 a prisión por períodos de 5 a 15 años.

324. El Sr. Ennals manifestó su preocupación (RT. 130) por la frecuencia cada vez mayor con que los presos políticos se convertían en convictos después de cumplida su condena. Había muchas personas en esas condiciones, algunas detenidas en Gonakudzingwa, 26 en la cárcel de detención provisional de Salisbury y un número desconocido en la cárcel de Gwelo. El declarante sospechaba (RT. 130) que la razón de su continua detención era que esas personas no habían querido hacer alguna clase de promesa de lealtad al actual "Gobierno". La detención continuada de esas personas era un desacato al tribunal que había impuesto originalmente la sentencia y significaba que la policía se arrogaba la facultad de pasar sobre las decisiones de los jueces.

## V. TERRITORIOS AFRICANOS BAJO DOMINACION PORTUGUESA

325. El Grupo Especial de Expertos examinó en 1972 los testimonios de 44 personas relativos a los territorios africanos bajo dominación portuguesa, durante las reuniones celebradas en Londres, Ginebra, Nairobi, Dar es Salaam, Lusaka, Brazzaville y Kinshasa.

326. Como lo hiciera en su anterior viaje a Africa, para estudiar la situación, el Grupo oyó las deposiciones de testigos que habían venido de los campos de batalla de Angola y Mozambique para prestar declaración sobre acontecimientos recientes que habían presenciado. Después de prestar declaración, dichos testigos volvieron a las zonas de combate.

327. El Grupo no tuvo oportunidad de oír testimonios directamente relativos a Guinea (Bissau). No obstante, toma nota con preocupación de los testimonios relativos a la intensificación de actos de represión, matanzas, bombardeos y destrucción de aldeas, hospitales, escuelas, cultivos y ganado de los habitantes, y otras atrocidades cometidas por las fuerzas portuguesas en ese Territorio. Esos testimonios figuran en los informes de la visita que en abril de 1972 hizo la misión especial del Comité Especial encargado de estudiar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, a las zonas liberadas de Guinea (Bissau), así como las declaraciones que hizo ante el Comité Especial y ante la Asamblea General en su vigésimo séptimo período de sesiones el Sr. Amílcar Cabral, Secretario General del Partido Africano da Independencia da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) el mismo que después fue asesinado en Conakry el 20 de enero de 1973 1/.

328. Las normas internacionales relativas a la pena capital, el trato de los presos políticos y las graves manifestaciones de colonialismo y discriminación racial fueron objeto de un amplio examen en el informe anterior del Grupo Especial de Expertos (E/CN.4/1020), y en el capítulo I del presente informe se hace referencia a dichas normas.

### A. La pena capital en los territorios africanos bajo dominación portuguesa

#### 1. Disposiciones reglamentarias

329. En el capítulo XXI, sección A, del informe del Grupo Especial de Expertos a la Comisión en su 26º período de sesiones (E/CN.4/1020/Add.1), figura un resumen de algunas leyes pertinentes relativas a la pena capital. No se ha producido cambio alguno en las leyes portuguesas sobre el particular.

#### 2. Análisis de los testimonios

##### a) Testimonios relativos a Angola

330. El Sr. Makina Mwonyo declaró que su esposa y la esposa de su hermano menor fueron capturadas por soldados portugueses en Muye, distrito de Moxico, en Angola. Se les pidió que guiaran a los portugueses a los campamentos de los combatientes por la

---

1/ Véase A/8723/Add.3 y A/C.4/SR.1986.

libertad. Todos los que vivían en los campamentos, incluidos su tío y otros parientes, fueron capturados y llevados en vehículos a través de una pequeña corriente llamada Chikului. Fueron golpeados duramente y llevados a un campamento de prisioneros donde había un cuartel militar. Según el Sr. Mwonyo, su abuela y otras personas que habían escapado del cuartel secreto le informaron que tres días después de haber sido hechos prisioneros su abuelo Chinjana y su tío Kapalingua habían sido muertos por los soldados portugueses y arrojados al río Muye. Se dijo que los soldados habían mutilado a su abuelo antes de su llegada al cuartel, habiéndole cortado los testículos. El testigo declaró además que los soldados portugueses habían violado varias veces a su esposa y a la esposa de su hermano menor, y que más tarde (en un domingo de marzo de 1972) las habían asesinado y arrojado sus cuerpos al río Muye. Dijo que su hijo de dos años, que estaba con las dos mujeres, fue golpeado y dejado por muerto, pero que un amigo suyo, un soldado angolano negro, estaba presente cuando los portugueses sacaban los cadáveres y observó que su hijo no estaba muerto. El soldado escondió al niño en un lugar de la selva y logró llevar al testigo hasta donde estaba escondido su hijo. El Sr. Mwonyo declaró que su hijo estaba marcado con cicatrices y que había perdido los dedos de una mano (RT. 139).

331. El Sr. Lumeu Chikulu testimonió que en abril de 1972 los portugueses habían atacado su aldea de Chimowole, en el distrito de Moxico, en la parte oriental de Angola. Habiendo capturado toda la aldea, de 100 personas aproximadamente entre jóvenes y viejos, los llevaron a todos a uno de los campamentos estratégicos, o ndandanda, en el distrito de Vunonge. Al otro día de mañana, los administradores portugueses comenzaron a preguntar a cada uno de los angolanos capturados por qué habían preferido permanecer en la selva, viviendo con los guerrilleros. Cuando el cacique de la aldea contestó que la gente había optado por luchar contra el colonialismo, todo el grupo fue recluido en prisión en el distrito de Kangamba, de donde el testigo logró escapar con dos amigos, Jonas Alberto y Joao Jelamiya, para unirse a los combatientes por la libertad del MPLA. El testigo declaró que los soldados portugueses habían seleccionado a cinco personas del grupo capturado, incluido el cacique de la aldea, y que, luego de atarlos de pies y manos, los habían ejecutado, rociado con petróleo y quemado hasta reducirlos a cenizas (RT. 139).

332. El Sr. Yata Nsamba declaró que se había unido al grupo especial de fuerzas portuguesas integrado exclusivamente por negros, llamado el G.E., en noviembre de 1971, y que había permanecido con ese grupo durante 24 días. Afirmó que, el 24 de diciembre de 1971, los portugueses reunieron a todas las personas confinadas en la aldea estratégica de Kameya, en el distrito de Moxico, en Angola, y les preguntaron qué deseaban para Navidad. El Jefe Mayengu, el Jefe Kapapelo, el Jefe Kameya y el Jefe Muzaza, que estaban viviendo en la ndandanda, preguntaron si podían salir a cazar para traer carne. Los portugueses anunciaron entonces a todas las personas que estaban congregadas allí que sus jefes habían pedido permiso para ir de caza para traer carne a pesar de que sabían perfectamente que había guerrilleros en la selva. Según el Sr. Nsamba, en lugar de dejarlos ir, los portugueses decidieron matar a todos los jefes, disparándoles delante de todos, descuartizándolos y cocinando su carne. El 25 de diciembre de 1971, según se afirma, los soldados portugueses los habían reunido a todos, incluido el testigo, y, amenazándoles con armas de fuego, les habían obligado a comer la carne de sus jefes. El Sr. Nsamba aseguró a los miembros del Grupo que no sólo había presenciado los hechos que relataba, sino que él mismo había comido carne de los jefes (RT. 139).

333. El Sr. Mui'a Mavungo testimonió que había sido recluido como preso político en la prisión de Saõ Nicolau de 1963 a 1971, y que en toda oportunidad en que se capturaba a los presos cuando intentaban escapar de dicha prisión se les hacía cruzar los brazos y luego se les fusilaba. Mencionó los casos de José Pambo, de quien se dijo que había sido muerto, y de otros cinco presos políticos que habían sido capturados cuando escapaban y que fueron muertos en el acto (RT. 140).

334. El Sr. Luis Sebastián Mateus declaró que había estado recluido como preso político en la prisión de Quitexe, en Angola. Le habían atado las manos con alambre detrás de la espalda y había estado confinado en una pequeña celda de poco más de un metro cuadrado, en la que sólo podía estar de pie. Declaró que con frecuencia había sido golpeado por la policía hasta desplomarse en el suelo y que, durante las dos semanas de reclusión había estado sin agua y que lo único que le habían dado de comer eran dos orejas humanas cortadas del cadáver de su camarada Moisés Antonio, de Combata, que había sido muerto en la prisión. El testigo declaró que había sido juzgado en un campamento militar y condenado a muerte por ser hijo de assimilado. El Sr. Mateus dijo que unos pocos días antes de la fecha fijada para su ejecución había sido sacado de la celda para que tomara algo de sol y que había escapado mientras su guardia fue a beber agua. Declaró además que sus padres y cuatro hermanos y hermanas habían sido detenidos en la aldea de Luege y habían sido recluidos con él en la prisión de Quitexe. Dijo que su padre estaba todavía en esa prisión, pero que su madre y sus hermanos y hermanas habían sido muertos por los portugueses, presuntamente para impedir que su padre escapara (RT. 140).

335. El Sr. Manuel Miranda manifestó en su testimonio que él y otros dos combatientes por la libertad habían caído en una emboscada el 25 de octubre de 1971 cerca del río Lué, cuando viajaban de Quissingueta a Quixico. El testigo declaró que habían sido detenidos, que sus dos camaradas habían sido baleados, heridos con bayoneta y muertos en el acto, y que él había sido gravemente golpeado y hecho prisionero 2/ (RT. 143).

336. Según la Sra. Marta Fernández de Brito, el 1º de junio de 1972 se dirigía hacia una plantación en la zona de Mata-Kanga, en Angola, con su cuñada y dos muchachos, cuando fueron atacados por soldados portugueses que se habían infiltrado en los campos cultivados. La testigo declaró que había logrado escapar, pero que los soldados habían capturado a su cuñada y a los dos niños y los habían matado (RT. 143).

337. El Sr. Pedro Vida García declaró que el 17 de julio de 1971, durante una incursión realizada por las fuerzas militares portuguesas y la milicia en la aldea de Muenga, en Angola, habían sido muertas varias personas, que fueron quemadas con todas sus posesiones. Habían sido acusadas de dar refugio a miembros de sus familias que, según se decía, formaban parte del movimiento nacionalista o recibían correspondencia para los guerrilleros. Después de la operación, que fue realizada de noche, se encontraron las siguientes víctimas: la familia de Manuel Antomica, Marcelo Ngongo, Adao Kinguengu y su esposa, Nsumba, junto con sus hijos. El testigo declaró además que el 28 de noviembre de 1971 habían sido detenidos, torturados y posteriormente asesinados cruelmente miembros de una célula guerrillera en la aldea de Mussela, después de una incursión de las fuerzas portuguesas. Se informó que entre los muertos

---

2/ Véase también el párrafo 371.



estaban Moisés Tussamba, Nsambo Gozo y Mwana Vakasi, todos ellos combatientes por la libertad. Según el testigo Vida García, la aldea de Catalambanza, en el distrito de Zaire, fue objeto de una incursión similar el 8 de febrero de 1972, en la que se dio fuego a sus casas con bombas y granadas incendiarias y muchas personas murieron en las llamas. El Sr. Vida García afirmó además que 250 jóvenes angolanos de distintas escuelas rurales habían sido detenidos por la policía de seguridad (DGS) acusados de realizar actividades contra el Estado y que habían sido asesinados salvajemente en septiembre de 1971 en las cercanías de Luanda. En un incidente posterior, ocurrido en julio de 1972 en el camino de Enrique de Carvalho a Malange, soldados portugueses habían atacado a un grupo de refugiados y se afirmaba que los habían rociado con herbicidas al mismo tiempo que los ametrallaban y los herían gravemente (RT. 143).

338. Según el Sr. Domingo Sebastiao Sobrinho, cuando los portugueses se infiltraban en zonas nacionalistas y capturaban a angolanos autóctonos en la selva, los mataban en el acto. El testigo afirmó que había visto cómo sus compañeros angolanos eran asesinados después de haber sido torturados, mientras se encontraba en la región de Uige trabajando para la administración portuguesa. En particular, citó el caso de Joao Neto Serafin, un enfermero diplomado del hospital central de Luanda, a quien se acusó de haber colaborado con los guerrilleros el 20 de enero de 1970 y a quien -según se afirmaba- primero le habían sacado los ojos y luego le habían dado muerte. El testigo declaró que muchos estudiantes de enfermería habían sido muertos por los portugueses el 4 de marzo de 1970, y citó los nombres de Carlos Domingos Agostinho, Gonçalito Manuel (hijo), José Francisco Horacio, Adriano Feijó y Jorge Ferjó Neto. Dijo que también se había dado muerte a personas pertenecientes a otras profesiones, como Joaquim Lucas, Joas Moniz y Antonio Salvador Caifalo (RT. 143).

339. El Sr. Sebastien Lubaki declaró que de acuerdo con la información recibida por el Partido Democrático de Angola para la región oriental, más de 3.000 africanos autóctonos habían sido muertos y más de 17.000 habían sido detenidos para trasladarlos a los campamentos de concentración en el desierto de Moçamedes. Se indicó que muchos de los detenidos se habían unido a los guerrilleros después de caminar durante muchos días. El Sr. Lubaki declaró que en marzo de 1972, hacia las cuatro de la madrugada las fuerzas portuguesas rodearon el barrio africano de Sambizanga, en Luanda, donde los autóctonos fueron atacados por las brigadas de seguridad y la policía, que habían derribado las puertas de sus hogares y habían golpeado violentamente a hombres, mujeres y niños, sin distinción alguna. Se dijo que el propósito de ese registro era tratar de encontrar armas introducidas clandestinamente por un grupo angolano que, según se afirmaba, planeaba provocar disturbios con ocasión de la celebración del estallido de la revolución del 15 de marzo. Según el testigo, seis personas acusadas sobre la base de una presunción de culpa habían sido muertas por las fuerzas portuguesas. Entre ellas estaba la madre de dos niños, la Sra. Isabel Jovita, originaria de Namuangongo, y cuyo esposo, Luiz Romeira, había sido asesinado en esa misma aldea por considerársele sospechoso de atentar contra la seguridad del Estado. Entre las otras personas ejecutadas estaban Rui Mesquita, natural de Dembos, que vivía cerca de Casa Branca, y Manuel Koko, chófer procedente de Ambrizette, que estaba en Luanda visitando parientes. El testigo declaró que un suceso similar se produjo en Uige, el 13 de julio de 1972, durante el cual habían sido muertos dos jóvenes angolanos (RT. 142).

340. Según el Sr. Lubaki, los comandos portugueses aplicaban a los combatientes por la libertad que capturaban las torturas más crueles mientras los interrogaban sobre las posiciones de las guerrillas, y luego los mataban. Sucede frecuentemente que en

las zonas en que las fuerzas portuguesas ven dificultados sus movimientos, los prisioneros africanos son obligados después de ser interrogados y torturados a servir de guías en la selva hasta que por último los matan. El Sr. Lubaki testimonió que, respecto del año 1971, en los informes presentados al concluir el año por los mandos operacionales de los tres frentes de combate del Frente Nacional para a Libertação de Angola (FNLA) figuraba una lista de 32 soldados africanos del Armée de libération nationale de l'Angola (ALNA) capturados por las fuerzas portuguesas. De ese número, se dijo que ocho habían sido ejecutados en el lugar de captura, después de haber sido torturados; doce habían sido muertos en las bases portuguesas después de ser torturados e interrogados; y tres habían sido muertos, después de ser utilizados como guías y de ser sometidos a torturas e interrogatorios. Se dijo que otros siete habían desaparecido y que dos habían logrado escapar. El testigo declaró además que el 22 de septiembre de 1971, después de una gran ofensiva contra el sector nacionalista cerca de la aldea de Cazage, en la parte oriental de Angola, las fuerzas portuguesas habían logrado capturar a ocho combatientes por la libertad del ALNA que estaban heridos y que durante el curso de las operaciones se hallaban en un puesto de primeros auxilios. Se dijo que, a pesar de su condición, las fuerzas portuguesas los habían hecho desfilar por las aldeas bajo jurisdicción portuguesa, a fin de intimidar a los autóctonos, y que finalmente los portugueses los habían matado frente a una reunión de aldeanos que habían sido invitados a presenciar la ejecución. Se dijo que sus cuerpos habían sido quemados con petróleo (RT. 142).

341. El Sr. Lubaki proporcionó la lista siguiente de combatientes por la libertad de angolanos capturados y muertos por las fuerzas portuguesas en Angola:

"Soldados angoleños capturados y posteriormente asesinados por las fuerzas portuguesas en Angola"

Fuentes de información: a) células de los partidos y guerrilleros que viven clandestinamente en el sector portugués: informe de los mandos operacionales del ALNA

<u>Nombre</u>	<u>Fecha</u>
José Tshissengue	17 de enero de 1971
Fue herido e interrogado sobre las operaciones del ALNA; su cuerpo fue despedazado. Sumbo/Lunda. Frente nororiental.	
Samuel Koko y Antonio Alberto	23 de marzo de 1971
Estando heridos fueron llevados a un puesto militar en la región de Musserra, donde se les interrogó y torturó. Fueron muertos con espadas frente a toda la unidad. Muserra/Zaire, frente norcentral.	
Ernesto Chilunga	28 de marzo de 1971
Fue capturado por una patrulla enemiga, que se había infiltrado en las guerrillas, mientras viajaba de una aldea estratégica a otra junto con otro soldado, que resultó muerto. Fue torturado, interrogado, utilizado como guía por la patrulla portuguesa y muerto el 2 de abril en Cahungula/Lunda, frente nororiental.	

José Tshiwaika

1º de abril de 1971

Fue capturado después de una operación nacionalista contra una guarnición portuguesa en la zona de Alto-Tshikapa. Se desconoce su suerte. Alto-Tschikapa/Lunda, frente oriental.

María Elena Futila

1º de abril de 1971

Fue herida y trasladada al puesto portugués de Nova Chaves. Violada, torturada y muerta el 20 de abril. Nova Chaves/Lunda, frente oriental.

Joao Nunes Gabriel

2 de mayo de 1971

Fue capturado durante una operación del ALNA contra la ciudad de Kibaxi. Torturado e interrogado, prestó servicios como guía de las unidades portuguesas y logró escapar el 19 de junio durante una de esas misiones. Frente norcentral.

Rui Pascoal Capapela,

Ernesto Gomo y

Manuel Chitundo

23 de mayo de 1971

Resultaron heridos cuando formaban parte de un grupo de primeros auxilios del ALNA. Fueron capturados en la selva por fuerzas portuguesas mientras llevaban a una persona enferma, de edad avanzada, a un puesto médico-social de los nacionalistas en la región de Cazage. La persona enferma fue muerta en el acto, y los soldados fueron atados unos a otros y lanzados desde helicópteros en pleno vuelo. Lunda, frente oriental.

Armando Kafumu

5 de junio de 1971

Capturado en Dondo/Luanda. Se desconoce su suerte.

Gabriel Landu

12 de junio de 1971

Capturado durante una operación relámpago en el centro comercial portugués de Muxauluando. Se le torturó e interrogó durante diez días. Fue atado a un carro y arrastrado durante varios minutos a lo largo de una de las calles principales, lo que le causó la muerte. Luanda, frente norcentral.

Cristina Kilengue

12 de junio de 1971

Fue herida y dejada bajo la protección de un camarada -que posteriormente fue muerto- en Santa Cruz, frente nororiental. Se desconoce su suerte.

Pedro Kingengo

15 de junio de 1971

Fue capturado durante un ataque nacionalista contra una plantación resguardada al otro lado de las montañas. Fue muerto de inmediato. Cuanza, frente norcentral.

Kutu Kitonda

30 de junio de 1971

Herido; fue capturado durante una operación contra la fuerza aérea militar portuguesa en Toco, después de ser herido por la metralla de una granada. Fue muerto después de ser sometido a torturas e interrogatorios.

Jorge Makandi

5 de julio de 1971

Fue capturado durante un ataque relámpago de los nacionalistas contra la compañía azucarera de Angola, en Caxito. Fue torturado, interrogado y utilizado como guía por las fuerzas portuguesas, y logró escapar durante una de esas misiones, el 2 de agosto de 1971. Caxito/Luanda, frente norcentral.

Miguel Tufu y  
Joao Marcos

9 de agosto de 1971

Fueron capturados por fuerzas portuguesas que se habían infiltrado en el sector liberado de Luso. Fueron torturados y asesinados. Luso/Luanda, frente oriental.

Reis Zombo Zinga

19 de agosto de 1971

Le capturaron fuerzas portuguesas que se habían infiltrado en el sector nacionalista de Lubalo. Fue torturado, interrogado y utilizado como guía por las unidades portuguesas, que lo mataron durante una de esas misiones. Lubalo/Lunda, frente nororiental.

Mutu Makiadi

7 de septiembre de 1971

Fue capturado después de haber sido herido durante una operación en Muriege. Le quemaron vivo delante del puesto administrativo de la ciudad en presencia de unidades del OPVDCA. Muriege/Lunda, frente oriental.

Bernardo Futila

23 de septiembre de 1971

Le capturaron durante una operación del ALMA contra un puesto militar portugués en Tembo. Fue torturado, interrogado y asesinado el mismo día. Tembo/Malange. Frente nororiental.

Miguel Moisés

3 de noviembre de 1971

Le capturaron mientras realizaba actividades de patrulla, a raíz de una emboscada enemiga en Camaxilo/Lunda. Frente nororiental. Se desconoce su suerte.

Caluis Tshimutira

12 de noviembre de 1971

Le capturaron mientras realizaba actividades de patrulla como resultado de una emboscada enemiga. Se desconoce su suerte. Dendo/Luanda, frente norcentral.

Kuti Kamulette

11 de diciembre de 1971

Le capturaron luego de haber sido herido por la explosión de una granada mientras viajaba solo de una aldea a otra en el sector de Bembe. Lo llevaron al puesto de Bembe, donde fue torturado e interrogado y, luego, asesinado.

La mayoría de los asesinatos que se cometen en la selva se hacen a cuchillo." (RT. 142.)

b) Testimonios relativos a Mozambique

342. El Sr. Corneliu Conforme Chauque declaró que en marzo de 1971 había presenciado la matanza de 15 personas, tres de las cuales eran niños, cometida por soldados portugueses en la aldea de Matundo, Mozambique, cuando la población de la aldea supuestamente se negó a decir si estaba escondiendo o alimentando a personas que pasaban por la zona. Se dijo que los soldados habían golpeado a los niños contra los troncos de los árboles. El Sr. Chauque declaró que el 3 de marzo de 1971 vio cómo soldados portugueses interrogaron a un niño que viajaba en bicicleta desde Moatize, luego arrojaron a un lado su bicicleta, quemaron sus pertenencias y por último le golpearon hasta que se desmayó. El testigo dijo también que el 24 de junio de 1971, luego de perseguir a niñas jóvenes de una misión católica de la zona de Moatize, los soldados portugueses "hicieron lo que se les antojó" hasta que el sacerdote regresó a la misión, momento en que se dieron a la fuga. Se afirmó que durante el asalto, un soldado sacó su daga y con ella atravesó el cuello de un joven de la escuela de la Misión, que posteriormente murió en el hospital de Moatize.

343. El Sr. Chauque declaró además que, a raíz de la explosión de una mina el 3 de abril de 1972 que dañó un vehículo del ejército en el camino entre Moatize y Zobwe, los soldados portugueses fueron a la aldea de Mbola y preguntaron a los pobladores si habían oído la explosión. Como la respuesta fue negativa, se dice que los soldados reunieron a todas las mujeres embarazadas que pudieron encontrar, asesionaron a tres de ellas cortando sus vientres con las bayonetas y extrayendo los fetos, y mataron a bayonetazos o mediante golpes en la cabeza a otras mujeres que no estaban embarazadas. Según este testigo, los soldados recorrieron la villa para matar a las mujeres embarazadas, porque, según decía, "si permitimos que sobrevivan las mujeres embarazadas nunca se podrá eliminar al FRELIMO". El Sr. Chauque declaró que, además de esta matanza de mujeres, había presenciado el asesinato de un muchacho de 17 años de una escuela técnica. Según se informó, el joven y dos amigos de la escuela estaban cruzando el puente sobre el río Zambesi mientras se dirigían de Tet a Matundo, en septiembre de 1971, cuando los tres fueron detenidos por soldados portugueses. Cuando se negaron a decir de dónde venían, fueron perseguidos por los soldados; uno de ellos fue capturado y arrojado al río, donde murió ahogado (RT.135).

344. Según el testimonio presentado por la Srta. Mariana Matola, algunos nativos de Mozambique fueron expulsados de sus aldeas y forzados a vivir cerca de los caminos. La comida era insuficiente y los campos cultivados estaban lejos. Continuamente se les preguntaba si les gustaba el FRELIMO. Si los portugueses los encontraban, los golpeaban y les robaban todo su ganado y sus aves de corral. Comprendiendo que iban a ser perseguidas, estas personas comenzaron lentamente a alejarse de la zona, pero después que todos se habían alejado, fueron perseguidos y capturados uno tras otro. Los que se escondieron fueron alcanzados por bombas arrojadas por aviones portugueses. Según la testigo, en un solo día murieron diez personas como consecuencia de los bombardeos. Los que podía correr lograron alejarse, pero algunos fueron heridos y permanecieron en donde estaban. Mientras tanto, otros nativos de Mozambique eran detenidos por los portugueses y obligados a regresar con los soldados para vivir junto a ellos. Se dice que, después de persuadir a unos pocos nativos, los soldados portugueses los encerraron en casas a las que luego prendieron fuego. La testigo continuó diciendo que ella, su hermano y un grupo habían tratado de cultivar tierras en zonas relativamente alejadas de las fuerzas portuguesas. Un día de 1968, éstas les habían bombardeado los campos y las cosechas y a fin de sobrevivir, habían decidido regresar y tratar de salvar la comida que pudieran encontrar en su aldea. En el camino de

regreso cayeron en una emboscada cerca de la aldea de Catur, en el distrito de Niasa. Su hermano de 16 años, Akimo Saidi, murió instantáneamente a consecuencia de un balazo en el corazón, y se dice que después que había muerto, los soldados portugueses empezaron a cortarlo en pedazos con sus cuchillos.

345. La Srta. Matola declaró que entonces se afilió al FRELIMO pero que no permaneció mucho tiempo en esa aldea porque las fuerzas portuguesas atacaron la base y mataron a tres de sus camaradas. Informó también que cuando se encontraba en la base de Gungunhana, aviones portugueses localizaron a su grupo y otros cuatro camaradas, cuyas edades oscilaban entre los 14 y los 15 años, resultaron muertos. Dos de ellos, llamados Amina y Cuanturo, fueron muertos en junio de 1969 por soldados que bajaron de helicópteros (RT. 136).

346. Según el testimonio prestado por el Sr. Silvestre Mueda, cuatro nativos de Mangasa, Cacha Cacha, Leso y Lyambedo, Mozambique, que trataban de evitar que se los reclutara para trabajar para el ejército portugués en la estratégica aldea de Chai, en el distrito central de Pemba, fueron metidos y llevados en un vehículo a un valle en donde un grupo de soldados los rodeó y los mató a balazos. Según se informó, ninguno de los ejecutados fue enterrado (RT. 136).

347. El Sr. Ernesto Erbert Njolomola declaró que un día de julio de 1970 los soldados portugueses llegaron a la aldea de Chimpene, en la provincia de Tete, Mozambique, y lo detuvieron junto con sus padres, ataron a todos con alambre, les golpearon y les llevaron a la administración de Furancongo. Allí fueron recibidos nuevamente con golpes y se les preguntó si sabían algo de los guerrilleros del FRELIMO. Al responder negativamente, se dice que los portugueses los golpearon con un látigo y con una palmatoria 3/. Durante los cuatro días siguientes, fueron sometidos a trabajos forzados, escoltados por soldados portugueses. Posteriormente, los soldados los ataban y los llevaban de vuelta a la prisión en donde se les daba mala comida. Muy a menudo iban a dormir sin haber comido y de tiempo en tiempo se les daba solamente sal. Después de permanecer en la prisión por algún tiempo fueron puestos en libertad.

348. El Sr. Njolomola declaró que los soldados portugueses vinieron por segunda vez a su aldea, destruyeron la casa de su familia y se llevaron todas sus pertenencias: gallinas, ganado y demás cosas. Esta vez, él y sus padres fueron llevados a Tete en donde, según dijo, fueron golpeados fuertemente durante un largo rato y luego se les hizo dormir encadenados. Como nuevamente manifestaron que no sabían nada sobre los guerrilleros del FRELIMO, se dice que los portugueses dijeron: "No, ustedes esconden y protegen a los guerrilleros; esto lo sabemos muy bien porque entre ellos hay miembros de su propia familia". Se dice también que luego el testigo y sus padres fueron golpeados nuevamente y advertidos de que si no decían la verdad se les mataría. Según

---

3/ La palmatoria es un instrumento de madera largo con un extremo redondeado con muchos agujeros. Este instrumento se usa para golpear fuertemente en la palma de la mano abierta, en donde los agujeros producen un efecto de succión en la carne, de manera que cada golpe causa dolor intenso y cada vez mayor. Se dice que a veces se utiliza para golpear los pies o las nalgas. Véase E/CN.4/AC.22/21, párr. 22.

el Sr. Njolomola, los soldados portugueses volvieron a la prisión y cortaron los dedos de la mano y de los pies de su madre en su presencia y trataron de forzarla a que se los comiera. El testigo dijo que su madre, la Sra. Aphale Talabuko, estaba encadenada cuando los soldados la obligaron a poner sus dedos sobre un trozo grande de madera y se los cortaron con un cuchillo. Su madre fue llevada a un hospital donde permaneció durante dos días y, a su regreso, murió después de haber sido golpeada. El testigo declaró además que cuando se le llamó para informarle de la muerte de su madre, la policía trató de forzarlo a que cortara un pedazo del cuerpo de su madre y se lo comiera. Como se negó a hacerlo, la policía comenzó a golpearlo. Finalmente lo dejaron en libertad, después de unos pocos días más en la prisión, porque era menor de edad (RT. 136).

349. El testimonio escrito presentado por la Federación Democrática Internacional de Mujeres contiene la deposición de la Sra. Joanina Moka, quien declaró que el 24 de abril de 1971, cuando se iba de su aldea a Kumemba, en el distrito de Mueda, Mozambique, para llevar a su hijita a un médico, fue perseguida por soldados portugueses. Al tratar de escapar, los soldados hicieron disparos que dieron en su hombro y en la pierna de su niñita. Declaró que ella y su niña fueron dejadas por muertas en los matorrales; posteriormente fueron llevadas por combatientes del FRELIMO a un hospital donde se amputó la pierna herida de la niñita 4/.

350. Según el testimonio escrito de Langton Notisse, presentado al Grupo de Expertos en Dar es Salaam en julio de 1971, los soldados portugueses llegaron a la aldea de Froco, donde detuvieron a José Saidi y le preguntaron si sabía dónde estaban los "terroristas". Al contestar que no sabía, le colocaron una cuerda alrededor del cuello, lo colgaron del techo de su choza y comenzaron a tirar de la cuerda. José Saidi fue colgado del cuello en presencia de todos los habitantes de la aldea. El Sr. Notisse declaró además que en julio de 1971, cerca de la aldea de Chinanga, un hombre llamado Dique, volvía de su campo llevando un hacha. Se le acercaron los soldados que le preguntaron de dónde venía. Contestó que venía de sus cultivos. Luego los soldados le pidieron su hacha, separaron la hoja del mango y con éste lo golpearon en la cabeza hasta matarlo. Los soldados se llevaron el cuerpo con ellos. El testigo declaró que más tarde encontró el cuerpo en los arbusto, comido por los perros y por los cerdos. Reconoció a Dique por su ropa, ya que su cara había sido totalmente comida. El testigo declaró también que, ese mismo mes, un camión del ejército fue destruido por una mina cerca de la aldea de Candomire. Los soldados fueron a la aldea y comenzaron a golpear a los pobladores con palos. Un hombre y una mujer resultaron muertos por esos golpes. Los soldados se llevaron los cuerpos a Changara, los pusieron sobre una pila de madera, los rociaron con petróleo y la incendiaron.

351. Según el testimonio escrito presentado por el Sr. Duarte Namashinga, él y un grupo de diez personas, ocho de ellas mujeres y un niño pequeño -todos civiles- fueron emboscados cerca de Namopa el 25 de septiembre de 1971. El testigo declaró que el ejército portugués abrió fuego y mató a su amigo Estevao así como a una mujer cuyo padre se llamaba Andola. Los otros fueron capturados. Al principio los soldados querían matar a todos pero finalmente decidieron dejar vivos a los prisioneros para interrogarlos. Se afirma que los soldados violaron a todas las mujeres, incluida la

---

4/ "Les femmes d'Afrique du Sud, d'Angola, du Mozambique, du Portugal témoignent contre l'apartheid, contre la terreur colonialiste et fasciste", Documents et informations N° 5/1971, Berlín, Federación Internacional Democrática de Mujeres, párrs. 14 y 15.

hermana del testigo. En la prisión, éste recibió golpes en la cabeza y en todo su cuerpo pero logró escapar en enero de 1972.

352. Según el testimonio escrito presentado por el Sr. Macossa, en 1971 los soldados portugueses fueron a la aldea de Daqui para castigar a sus pobladores, a quienes acusaron de ayudar al FRELIMO. Llegaron ochenta soldados, que detuvieron a todos los que consideraban sospechosos de tener vínculos con el FRELIMO. El testigo declaró que los soldados les ordenaron cavar hoyos y luego les mataron a tiros. Muchos otros resultaron muertos. Entre los muertos estaba Tembo Malizani, a quien el testigo conocía muy bien.

353. Según el testimonio escrito presentado por el Sr. Machaia Duwa, soldados portugueses entraron en la aldea de Moganil en abril de 1972, emboscaron y capturaron a un agricultor nativo y le detuvieron junto con su esposa, su hija y su yerno. Se dice que los soldados los torturaron para que dijeran dónde estaban los "turras", o soldados del FRELIMO. El testigo dijo que luego ataron a los prisioneros y después de haberlos desnudado completamente, hicieron una fogata y con pedazos de madera ardientes quemaron los órganos sexuales de los hombres y las mujeres. El testigo declaró que no sabía los nombres de las dos mujeres pero que sí sabía los nombres del padre, Mogani, y del yerno, Murema. Se dice también que los soldados arrasaron la aldea y robaron 90 libras (moneda de Rhodesia), y que también mataron su ganado. El Sr. Duwa declaró además que en mayo de 1972 las fuerzas portuguesas arrasaron la aldea de Duwa Songo, robaron y mataron vacas, burros y cabras y también robaron ropa. Dijo también que en febrero de 1972, cuando los soldados se aproximaban a la aldea de Xidecunde, los habitantes trataron de escapar pero que 16 aldeanos fueron capturados, incluidos hombres, mujeres, algunas de ellas embarazadas y niños. Se dice que los portugueses los encerraron en una casa y luego arrojaron una granada matando a todos con excepción de una mujer, llamada Madigei, a quien la explosión le arrancó un brazo.

354. En testimonio presentado por escrito, el Sr. Alexandre Franco Nkhalamba Thawe denunció que había presenciado muchos crímenes mientras estaba detenido, incluidos 16 casos de asesinato directo o muerte violenta. El último caso comprendía a un grupo de 40 personas presas en Machava. Esas personas, que habían sido denunciadas por agentes infiltrados, habían sido sometidas a crueldades y amenazadas con la muerte si se negaban a traicionar su causa o a sus camaradas dentro y fuera de la prisión. El testigo dijo que se les había encerrado en celdas especiales, desnudado y mojado con agua de una manguera dos o tres veces por día. Pasaron varios días sin comida y sin agua potable, y cuando se les daba comida ésta era muy salada. Declaró que 12 personas habían muerto como resultado de este tratamiento entre abril y octubre de 1970: Joao Maduna, Alberto Mudao, Bila, Jaime Nhantumbo, Carlos Juma, Alexandre Nchicoma, Joao Agostinho Chitete, José Salimo y otras dos personas cuyos nombres desconocía.

355. En el testimonio escrito presentado por el Padre Luis Alfonso da Costa <sup>5/</sup> recientemente expulsado de Mozambique, figura el siguiente relato cronológico de matanzas y asesinatos de africanos negros en aproximadamente un tercio del distrito de Tete:

El 4 de mayo de 1971 los soldados portugueses mataron a balazos a un cierto Aroni (Mucumbura).

---

<sup>5/</sup> "Encore une année d'agonie... sans espoir de résurrection", diócesis de Tete, Mozambique, mayo de 1971 - mayo de 1972, págs. 1, 2 y 3. Documento presentado al Grupo Especial.



El 7 de mayo de 1971 el ejército portugués mató 14 campesinos de Kapinga y Catacha, cuyos nombres eran los siguientes: Guidibo, Mariamo, Grizi, Zéze, Tapureta, Caropora, Fungurane, Pitroce, Maizi, Marias, Kenete, Diquissoni, Langisse y Jona.

El mismo día, en Mahanda, los soldados mataron a Chimuchamu, Ringuitioni, Joane, Pensura, Wachení, Gomo, Sanhadadza Saimoni.

El 8 de mayo de 1971, el ejército mató a cuatro personas cerca de la tienda del Sr. Gabriel, en aldea de Antonio. Las víctimas se llamaban, Januário (fumo), Charedzera, Kasswasswaira y Chirega.

En julio de 1971, el ejército mató a M. Therere en Estima.

A fines de julio (?) de 1971, resultaron muertos (sic) en Chicôa: Augusto Fone Chirenje y Luciano Clement, ambos de Chinhanda (Estima).

El 23 de agosto de 1971, el O.P.V. mató a Maiyombe M. Patricio después de haberle arrancado todos los documentos de identificación que llevaba.

El 26 de agosto de 1971, los comandos mataron a balazos a Inhamajanela Antonio Neti, de 10 años de edad.

Entre el 3 y el 9 de septiembre de 1971, el ejército rhodesiano vino a ayudar a las tropas portuguesas y asesinó a 18 personas. Sus nombres eran los siguientes: Jacob Zenda (18 años), Sanfur Aroni (12 años), Paulo Zirise (12 años), David Jorge (casado), Pini, Singa (anciano), Rónica Singa (casada, encinta), Matiguiri (casado), Retina (casado), Ester (casada), un hijo pequeño de Ester y otro de Matiguiri, una niña de 10 años, dos muchachos de entre 12 y 14 años; dos cadáveres no fueron identificados. Los cadáveres de Singa y de todos los que después de él se nombran en la lista fueron quemados.

El 9 de septiembre de 1971, los guerrilleros mataron al jefe tribal Chiundiza.

El 14 de septiembre de 1971, los comandos obligaron a Santa Dause (15 años) a servir de guía. Este perdió su vida en un encuentro entre los guerrilleros y las tropas, en Inhamamba.

El 16 de septiembre de 1971, los guerrilleros fueron al campamento de reclusión de Mfidzi y mataron al Sr. Ferrao Coelho.

El 19 de septiembre de 1971, los soldados mataron a Passagem Vinho, en Cateme, después de haberlo torturado, porque intentó reclamar el dinero que le habían robado.

El 30 de septiembre de 1971, los soldados mataron a siete personas en Cambewe (Moatize/Tete): Chandiguera (casado, de 60 años), Agostinho Chandiguera (casado), Sózinho Chaguluka (25 años), Cinto Chandiguera (casado), Eduardo Chandiguera (casado), Kalua Siale (lisiado, de 25 años) y una persona cuyo cadáver no se identificó. No interrogaron a las víctimas. Simplemente las mataron.

A fin de septiembre y principios de octubre de 1971, las tropas arrojaron dos bombas en Inhagalankope, matando a Mapalata (casada) y a Duzíria (casada).

El 23 de octubre de 1971, los soldados mataron a balazos a tres trabajadores de la Ermoque (compañía encargada de la construcción de la carretera de Tete a Songo) en la aldea de Inhamachola. Sus nombres eran los siguientes: Sinalo Tacho (casado), Vunzani Sani (casado) y Mauzissi Salamaia (casado).

El 4 de noviembre de 1971, los comandos quemaron vivas a 16 personas en la aldea de António (Mucumbura). Las víctimas se llamaban: Helena (esposa del jefe tribal Buxo, muerto por el FRELIMO), Ester Helena Buxo (10 años), Margaretta Helna Buxo (8 años), María Helena Buxo (6 años), Tarifei Helena Buxo (un mes), Majozi (65 años), Rute (casada), Kufa Rute Chidekunda (13 años), Massa Ruto Chidekunda (8 años), Rosa Rute Chidekunda (6 años), Rebeca Rute Chidekunda (7 meses), Dzudzai (casada, de 20 años), Rorosi (2 años), Haiti (70 años) y a otras dos personas que los misioneros no pudieron identificar. Frente a la tienda del Sr. Gabriel se encontraron los cadáveres quemados de otras cinco personas, totalmente desfigurados. Entre ellos se reconoció a un niño de 2 a 3 años de edad.

El 12 de noviembre de 1971, el Sr. Caldas, Jefe del O.P.V. mató a Keni Dirao en Inhacapiriri.

Después del 15 de diciembre de 1971, los soldados mataron a Nyamphunga Chaleke (60 años), esposa de Gervásio Kairiga, en Chirodzi. Esta mujer fue muerta en represalia porque su marido se había fugado de Estima, en donde estaba preso.

El 19 de diciembre de 1971, en Chacolo, los comandos mataron a tres personas: Laeni Tikha (casado), Saeni Alfai (casado) y Maki Godo (casado).

El 10 de febrero de 1972, en Inhaticoma, los soldados mataron a balazos a Kedeka Laisse, que buscaba a sus hijos que se habían escondido en los matorrales por temor a los soldados.

El 6 de marzo de 1972, los comandos mataron a dos personas en Inhantondo: Gedece Telha y el niño que llevaba en su vientre y que estaba a punto de nacer.

El 16 de marzo de 1972, los soldados apalearon a un viejo de 70 años hasta matarlo, en António (Mucumbura).

El 18 de marzo de 1972, los soldados mataron a balazos en la aldea de António a António Chinaca (58 años) y a Saeni (71 años). Los mataron cuando estos abrían la puerta del establo.

El 20 de marzo de 1972, la D.G.S. (PIDE) de Mucumbura, apaleó al Sr. Macaza (68 años) de la aldea de António hasta matarlo.

El 20 de marzo de 1972, los soldados apalearon hasta matarlos a una pareja de la aldea de Chimandabue, quemando después los cuerpos de las víctimas.

B. Trato de los presos políticos y de los combatientes  
por la libertad capturados

1. Referencia a algunas leyes pertinentes

356. En el documento E/CN.4/AC.22/14 y en los informes anteriores del Grupo Especial de Expertos (E/CN.4/1020/Add.1, capítulo XXII y E/CN.4/1050, capítulo V (B)) se examina ampliamente la legislación sobre este asunto, incluso los decretos-leyes relativos a la antigua policía de seguridad o policía secreta, Policia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE), así como las leyes por las que se dispone su abolición y su sustitución por una Dirección General de Seguridad (DGS).

357. Una nueva ley (Decreto Nº 239/72, de 18 de julio de 1972) reglamenta la aplicación de medidas de seguridad o la retención de personas sin someterlas a juicio, en relación con actos cometidos contra la integridad territorial del Estado 6/. El texto de la ley dice así:

"Considerando que la situación actual en las Provincias de Ultramar no permite la abrogación inmediata del régimen jurídico de medidas administrativas de seguridad;

"Considerando, no obstante, la conveniencia de revisar el sistema que rige actualmente en las Provincias de Ultramar, limitando el alcance de las medidas gubernamentales y restringiendo la aplicación de dichas medidas a casos de peligro que tengan su origen en la comisión de actos perjudiciales para la integridad territorial de la nación; y

"Teniendo presentes las disposiciones del párrafo 6 del artículo 109 de la Constitución y la resolución de la Asamblea Nacional publicada en el Diário do Governo el 27 de diciembre de 1971;

"Como cuestión de urgencia, y según lo autoriza el párrafo 3 del artículo 136 de la Constitución,

"En el ejercicio de las facultades conferidas por el párrafo 1 del artículo 136 de la Constitución y en conformidad con el párrafo 2 de dicho artículo, el Gobierno decreta y por la presente promulgo lo siguiente, para que tenga fuerza de ley en las Provincias de Ultramar:

---

6/ Según los despachos publicados en "Noticias e Fatos", Nº 218, de 17 de noviembre de 1972, una hoja informativa publicada por la Casa de Portugal, Nueva York, y The New York Times del 3 de diciembre de 1972, un decreto del Ministerio del Interior, fechado el 16 de noviembre de 1972, anuló las disposiciones que permitían la detención de presos políticos por un período de seis meses a tres años como medida de seguridad, de conformidad con el Decreto-Ley Nº 40550, de 12 de marzo de 1956. No se dispone todavía del texto del nuevo decreto; sin embargo, se dice que contiene disposiciones que incluyen en el código penal portugués como delitos graves, sancionables con sentencias de prisión de seis meses a tres años, delitos tales como el formar un grupo que trastorne el orden social o actúe contra la seguridad del Estado, el pertenecer a tal grupo o el subvencionarlo. Los mismos despachos indican que a consecuencia de estas modificaciones trece presos políticos fueron puestos en libertad a fines de noviembre.

"Artículo 1o 1

1. Las medidas administrativas de seguridad se aplicarán tan sólo a personas que cometan actos nocivos para la integridad territorial de la nación, o cooperen en la perpetración de los mismos, y consistirán en:

- a) La reclusión en una colonia agrícola; y
- b) El domicilio en una localidad determinada.

2. La duración de una medida administrativa de seguridad no excederá de tres años y podrá extenderse por otros tres años si siguen existiendo las circunstancias que hicieron necesaria la aplicación de esa medida; tales medidas no se aplicarán en forma simultánea con una sanción que suponga la privación de la libertad o con una medida de seguridad de carácter judicial.

"Artículo 2

La medida prevista en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 1 se aplicará sólo cuando, habiéndose investigado las circunstancias, se determine que es la medida más apropiada en el caso de que se trata.

"Artículo 3

1. Las medidas administrativas de seguridad se impondrán mediante una decisión acompañada de una exposición de los motivos en que se basan y en la cual se especifique qué medida ha de aplicarse y su duración, dictada en actuaciones dispuestas por la Dirección General de Seguridad, cuando se haya demostrado la comisión de actos mencionados en el artículo 1 o la cooperación en la comisión de tales actos.

2. Tales medidas podrán ejecutarse en la provincia en que se encuentra la persona a que se aplican, en otra provincia o en el Portugal metropolitano.

3. Si en un momento dado se determina que sería conveniente dar por terminada la ejecución de una medida, la Dirección General de Seguridad puede reabrir el procedimiento y proponer que deje de aplicarse la medida.

"Artículo 4

1. Las medidas administrativas de seguridad que entrañen la reclusión o la residencia fuera de la provincia serán de la competencia del Ministro de Provincias de Ultramar, a quien se remitirá el caso para su ejecución cuando la provincia considere conveniente proponer que la persona de que se trata sea removida de la Provincia.

2. Las medidas que no impliquen el traslado de la provincia serán impuestas por el Gobernador." 7/

## 2. Análisis de los testimonios

358. El Secretario General de Amnesty International, Sr. Martin Ennals, declaró que su organización contaba con muy poca información sobre la situación de las personas que habían sido capturadas en los territorios africanos bajo administración portuguesa. En algunos casos, las personas que pertenecían al movimiento de liberación, al ser capturadas, eran enviadas a Portugal para someterlas a juicio o podían ser enviadas a una de las islas situadas frente a la costa de Angola, tales como Cabo Verde. Posiblemente se mantenía a esas personas en prisión en una diversidad de circunstancias bastantes siniestras, sobre las que era en extremo difícil obtener información.

359. En opinión del Sr. Ennals, habían muchos motivos para exigir que los convenios de Ginebra de 1949, referentes a los prisioneros de guerra, se aplicasen de hecho al tratamiento de los combatientes por la libertad. En el momento en que el Comité Internacional de la Cruz Roja y las Naciones Unidas trataban de revisar las disposiciones relativas al tratamiento de los prisioneros tomados no sólo en períodos de guerra sino también de conflicto armado, el Sr. Ennals consideraba que era muy importante, en interés de los propios combatientes por la libertad, que se obligase a Portugal a reconocer que el tratamiento de prisioneros de guerra era aplicable en este caso (RT. 130).

360. En el testimonio que presentó por escrito el Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) figuran las observaciones y conclusiones de una abogada belga, la Sra. Marie-Thérèse Cuvelliez, observadora de la Liga Belga de los Derechos del Hombre, quien asistió a la primera parte del juicio del sacerdote angoleño Pinto de Andrade en Lisboa y de otras personas detenidas en Portugal en relación con el movimiento de liberación de los territorios africanos bajo administración portuguesa. Se presenta a continuación el texto del informe de la abogada:

### "DETENCION PREVENTIVA

"Se ha determinado ya que se han utilizado siempre las disposiciones reglamentarias citadas por la Sra. BERENBOOM, delegada de la Liga al proceso de algunos miembros del M.O.D. Las personas detenidas están en poder de la policía durante un período de tres meses sin intervención alguna del poder judicial. Este período de tres meses puede prolongarse por dos períodos de 45 días en las mismas condiciones. En principio, al terminar estos seis meses, la persona debería o bien ser puesta en libertad o bien ser remitida a la jurisdicción competente. La detención preventiva sobrepasó este período en el caso de los diez procesados de que se trata.

"Existe en el derecho portugués, continúa el informe, un recurso de "habeas corpus" muy complicado, pero este recurso conlleva grandes riesgos para el abogado que lo presenta, ya que si la jurisdicción que se ocupa de él considera que la instancia de "habeas corpus" no tiene fundamento, el abogado está sujeto a penas de prisión o a multas.

"En el caso de los acusados del proceso "Andrade", la detención preventiva, en sentido estricto, se prolongó en la forma siguiente:

Alvaro José de Melo Sequeira Santos, desde el 5 de enero de 1970; Raúl Jorge Lopes Feio, 27 de enero de 1970; José Coelho da Cruz, 27 de enero de 1970; María José Pinto Coelho da Silva, 27 de enero de 1970; Diana Marina Dias Andriga, 27 de enero de 1970; António Manuel García Neto, 2 de febrero de 1970; Rui Filipe de Matos F. Martins Ramos, 14 de noviembre de 1969; António José Ferreira Neto, octubre de 1969; Fernando Emílio de Campos F. Sabrosa, 29 de febrero de 1970; Joaquim da Rocha Pinto de Andrade, 7 de abril de 1970.

"En principio, con arreglo a los textos, la persona detenida debe poder ponerse en contacto inmediatamente con su abogado. En la práctica, no existe tal cosa.

"En el proceso "Andrade", continúa la Sra. Cuvelliez, pude reunir información acerca de:

- DIANA MARINA DIAS ANDRINGA: esta joven periodista, de raza blanca, originaria de Luanda, perteneciente a la burguesía de los negocios portugueses, era conocida en Lisboa por sus opiniones de izquierda. Su marido se encontraba en prisión. Ella había tenido la precaución de dar un poder a su abogado asesor (abogado igualmente de su marido). Fue detenida el 27 de enero de 1970. Su abogado, provisto del valioso documento, trató en vano de visitarla inmediatamente. Pudo verla por primera vez tan sólo el 22 ó 23 de abril de 1970, en la prisión de Caxias donde pudo conversar a solas con ella. Sin embargo, un tabique separaba al abogado de su cliente y para entenderse era preciso hablar en voz muy alta. La correspondencia entre el abogado y el cliente es abierta; algunas veces es incautada y se encuentra en los archivos de la policía. El abogado debe solicitar autorización cada vez para ver a su cliente y precisar la hora y la fecha.

"Entre los hechos de que se inculpa a la acusada figuran dos artículos rechazados por la censura y que no fueron publicados. Se acusa a la joven de haber dado su aprobación al M.P.R. Por su parte, ella se declara solidaria del pueblo angoleño pero no del M.P.L.A.

- JOAQUIM PINTO DE ANDRADE: pudo ver libremente a su abogado. Este conferenció con él tantas veces como quiso, lo que le permitió preparar minuciosamente su defensa, que se basa en el racismo de que ha sido víctima este sacerdote negro y en una persecución de diez años. Esta es la primera vez que se juzga a este sacerdote.

#### "TORTURAS

"Salvo Joaquim Pinto de Andrade, se observa en el informe, todos los acusados se quejan de haber sido sometidos a torturas físicas, de las que la más común parece ser la del sueño, que consiste en privar de él a la persona detenida por toda clase de medios (especialmente medicamentos). Escuché en particular a la Srta. Diana Andringa decir al tribunal que había sufrido la tortura del sueño durante seis días y seis noches, lo que para un "entendido", en este caso una mujer que había sido detenida hace algunos años durante 17 ó 18 meses y había sufrido la misma prueba, parecía demasiado duro.

"Es particularmente notable -así como motivo de angustia- en nuestro concepto de la tortura, que para los portugueses interrogados sobre este tema la tortura del "sueño" fuera algo anodino, al punto que tendían a olvidarla y a no mencionarla cuando se les interrogaba de una manera general acerca de la tortura. La citan tan sólo cuando se profundiza el interrogatorio a este efecto.

"Las amenazas se citan a título de información: amenaza de reclusión en "campamentos".

"Las mujeres son interrogadas durante el día por hombres y durante la noche por mujeres (cuestión de decoro) y los interrogadores se reemplazan cada cuatro horas", observa la Sra. Cuvellez.

"...

#### "CONCLUSIONES

"El proceso iniciado contra los acusados calificados de "militantes del M.P.L.A.", tal como lo pude examinar por el auto de acusación, el procedimiento seguido en la audiencia y los elementos suministrados por la defensa, constituye una irrisoria y triste comedia, una parodia de justicia, especialmente a causa de:

- la ausencia del poder judicial durante el sumario;
- el lapso en que los acusados estuvieron a disposición de la policía;
- el empleo de torturas;
- las condiciones de encarcelamiento;
- la falta de investigación preliminar seria en el curso de la audiencia;
- la falta de verdadera publicidad de la audiencia;
- las trabas puestas a la defensa de los acusados.

"Durante este proceso se violaron abiertamente los derechos humanos g/.

"..."

---

g/ MPLA - Informe presentado al Grupo Especial de Expertos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, anexo IV, Lusaka, agosto de 1972, en el que se cita un despacho aparecido en La Cité, de Bélgica, el 19 de febrero de 1971.

a) Testimonios relativos a los acontecimientos en Angola

361. El Sr. Pascal Luvualu declaró que Angola se había convertido en una vasta prisión y citó como ejemplos muchos campamentos de concentración, tales como Bié, Péu-Péu (Huila), São Nicolao y Baía dos Tigres (Moçamedes), Forte Rocades (Kuenes), Menonge (Kwando-Kubango), donde, según se decía, los métodos recordaban a todos los tiempos más negros del nazismo. El testigo dijo que los que lograban escapar contaban historias aterradoras de ejecuciones sumarias (RT. 139).

362. Según el Sr. Mario de Andrade, existen tres categorías de presos políticos que determinan, por decirlo así, el efecto de la opinión sobre las condiciones en que estos presos se encuentran detenidos. Algunos presos están confinados en el campamento de concentración de São Nicolao, en una región muy remota de la propia Angola. Otros presos políticos angoleños están igualmente aislados en la prisión de Tarrafal, en una de las islas de Cabo Verde. Finalmente, otros son puestos en prisión en Portugal y se dice que, con arreglo a la legislación portuguesa, tienen la posibilidad de una defensa e incluso un juicio. El Sr. Andrade declaró que la información acerca de los presos políticos dependía de la personalidad del detenido. Un trabajador nativo ordinario era la peor víctima. Sin embargo, algunos angoleños encarcelados en Tarrafal, tales como el escritor Luandino Vieira, los poetas Antonio Jacinto y Antonio Cardoso y el combatiente por la libertad Armindo Fortes, podían suscitar mayor preocupación. Se decía que los que se encontraban detenidos en el fuerte Peniche, en Portugal, entre los cuales el testigo mencionó a su hermano, el Padre Pinto de Andrade, habían podido hacer frente a las autoridades portuguesas durante el juicio de los diez nacionalistas angoleños. El Sr. Andrade declaró además que tenía informaciones precisas acerca de la discriminación entre los prisioneros en Tarrafal, aun en materia de alimentación y sanidad, y agregó que Cardoso, uno de los que se encontraban detenidos allí, se había vuelto loco (RT. 141).

363. El Sr. Andrade y el Sr. J. J. Caetano presentaron al Grupo de Trabajo testimonio escrito con información sobre la forma en que está dividido el campamento de concentración de São Nicolao así como los nombres de varios presos políticos angoleños detenidos allí, en el fuerte Peniche (Portugal) y en la prisión de Tarrafal, información que dice así:

ALGUNOS NATURALES DE ANGOLA DETENIDOS EN EL CAMPAMENTO DE  
CONCENTRACION DE SAO NICOLAO

EL CAMPAMENTO DE CONCENTRACION DE SAO NICOLAO, SITUADO EN EL DESIERTO DE MOÇAMEDES, ESTA COMPUESTO DE TRES PARTES CADA UNA DE LAS CUALES SE LLAMA A SU VEZ CAMPAMENTO. EN EL CAMPAMENTO Nº 1 LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA SON MENOS MALAS, EN EL CAMPAMENTO Nº 2 LAS CONDICIONES SON MEDIOCRES Y EN EL CAMPAMENTO Nº 3 SON MUY MALAS.

Ultimamente ha sido posible descubrir los nombres de algunos de los prisioneros que fueron deportados allí en 1971 y 1969 para unirse a los casi 4.000 deportados de São Nicolao. Sus nombres son:

1. JOSE JACINTO SILVA VAN-DUNEN: Nacido en 1940, con estudios secundarios completos, sargento miliciano de caballería, detenido en 1971 y deportado en 1971.



2. LUI EDGAR CETTA: Nacido en 1947. Estudios secundarios completos; topógrafo; ex sargento del ejército portugués. Detenido y deportado en 1971.
3. CARLOS JORGE: Nacido en 1949. Estudios secundarios incompletos; sargento miliciano; detenido y deportado en 1971.
4. JOSE VIEIRA RODRIGUEZ MINGAS: Nacido en 1944. Funcionario de los servicios de sanidad. Detenido y deportado en 1971.
5. JOAO BONECO: Estudios secundarios completos. Detenido, arrestado y deportado en 1971.
6. MOISES CAMABAIA: Estudiante universitario y funcionario. Detenido y deportado en 1971.
7. CARLOS MANUEL MESQUITA OCTAVIO: Detenido el 4 de enero de 1970, puesto en libertad a comienzos del mes de abril; detenido nuevamente en enero de 1971 y deportado en abril de 1971.
8. JOAO CAHFIRO: Estudiante, de 18 años de edad. Detenido en 1970 y deportado en 1971.
9. JOAO MATIAS: 19 años, cinco años de escuela secundaria. Detenido y deportado en 1970.
10. MANUEL VAN-DUNEN: Cabo de la aviación. Detenido en febrero de 1972.
11. MARIO GRINGO: Detenido y deportado en 1969.
12. ROMULO: Detenido dos veces. se encuentra actualmente en São Nicolao.
13. ANTONIO LOTTY: Detenido dos veces, se encuentra actualmente en São Nicolao.
14. VALENTIM: Estudiante de ingeniería, detenido en 1969 y deportado a Tarrafal (archipiélago de Cabo Verde) el 29 de marzo de 1970. Trasladado a São Nicolao a fines de 1971.

#### AMENAZAS DE DEPORTACION A SAO NICOLAO

- 1 y 2. GUIMARAES y MAJOR NETO: fracasaron en el apresamiento de un avión, fueron detenidos en 1971.
3. AUGUSTO SILVA: Funcionario de la D.T.A. (División de Transportes Aéreos), detenido por tercera vez en enero de 1972.

#### ANGOLEÑOS DETENIDOS EN PORTUGAL (FUERTE DE PENICHE)

Del "PROCESO DE LOS DIEZ", cinco han cumplido su pena de prisión y están en libertad. Se encuentran todavía en prisión:

1. ALVARO JOSE DE MELO SEQUEIRA SANTOS
2. ANTONIO MANUEL GARCIA NETO
3. RUI DE MATOS F. MARTINS RAMOS
4. ANTONIO JOSE FERREIRA NETO
5. JOAQUIM DA ROCHA PINTO DE ANDRADE

Según el veredicto, cada patriota fue condenado a una multa de 20 escudos diarios (17.500 escudos).

#### ANGOLEÑOS DETENIDOS EN TARRAFAL (ARCHIPIELAGO DE CABO VERDE)

Se ignora el número exacto del grupo de los más antiguos, entre los que se cuentan:

1. JOSE VIEIRA MATEUS DA GRACA (el muy conocido escritor LUANDINO VIEIRA) que debe terminar su condena en 1974.
2. ANTONIO JACINTO, poeta muy conocido.
3. ARMINDO FORTES, condenado a 25 años de prisión.
4. ANTONIO CARDOSE.

Otro grupo fue detenido en Uganda en víspera de las elecciones para diputados de la Asamblea portuguesa, el 25 de octubre de 1969, acusados de querer hacer explotar algunas bombas; un tercer grupo fue detenido en noviembre del mismo año y acusado de participar en una de las desviaciones de aviones hacia Pointe Noire (República Popular del Congo). Bajo la amenaza de ser pasados por las armas, fueron obligados a firmar una "confesión" según la cual se proponían asesinar a Marcello Caetano.

He aquí algunos de sus nombres:

5. ALBERTO CORREIA NETO: Detenido el 4 de enero de 1969; 20 años, estudiante de medicina.
6. ALCINO BORGES DE CARVALHO: 19 años; detenido el 4 de enero de 1969; estudiante de medicina.

7. ALDEMIRO VAZ DA CONCEIÇÃO: 20 años; Liceo Técnico; soldado de la escuela de adiestramiento militar; detenido el 12 de diciembre de 1969.
8. ANDRE MATEUS NETO: 43 años; carpintero; antiguo militante del MPLA.
9. ANTONIO CONÇALVES CAPITA: 25 años, obrero.
10. AUGUSTO KIALA BENJE: 30 años, obrero de la DIAMANG, y participante en los acontecimientos del 4 de febrero de 1961, quien ya había sufrido seis años de prisión en Luanda.
11. BERNARDO LOPES TEIXEIRA: 20 años; funcionario de colonización.
12. EDUARDO SANTANA VALENTIM: 25 años; estudiante de ingeniería; trasladado actualmente al campamento de São Nicolao.
13. FRANCISCO CAETANO: 23 años; pintor de la isla de Luanda.
14. GILBERTO SARAIVA DE CARVALHO: 29 años; ex subteniente (prisionero de guerra).
15. JAIME GASPAR COHEN: 21 años; estudiante detenido el 12 de diciembre de 1969.
16. JUSTINO PINTO DE ANDRADE: 23 años, estudiante de medicina.
17. PAIVA DOMINGOS DA SILVA: 40 años, participante en los acontecimientos del 4 de febrero; nueve años en varios campamentos de concentración; había sido puesto en libertad en São Nicolao y después de tres meses fue nuevamente detenido.
18. TITO ARMANDO DOS SANTOS: 36 años, sastre.
19. VICENTE PINTO DE ANDRADE: 20 años, estudiante del Liceo Comercial.

(Hay además otros 23 patriotas angoleños no identificados...) (Véase también RT. 141.)

304. El Sr. Makina Mwonyo testificó que a raíz de la captura de varios combatientes por la libertad en el propio campamento de éstos en Muye, en el distrito de Moxico, en marzo de 1972, donde las fuerzas portuguesas habían asesinado a cuatro de sus parientes 9/, su abuela y otros angoleños habían sido retenidos en la prisión de Muye. Ella logró escapar y, según se dice, informó al testigo que los presos políticos eran torturados severamente en la prisión, donde eran obligados a beber orines y a comer "desperdicios". El Sr. Mwonyo declaró además que a otro tío suyo, ~~hannam meno~~ del que había sido asesinado en Muye por los soldados portugueses, éstos le habían cortado

---

9/ Véase el párrafo 330.

las orejas y le habían obligado a cavar tumbas para otras personas que habían sido asesinadas. Según se informa, la razón por la que le cortaron las orejas fue que él no podía oír bien, ya que era medio sordo, y por tanto no podía entender cuando los soldados le llamaban..

365. El testigo Mwonyo declaró asimismo que antes de salir para Zambia a fin de presentarse ante el Grupo Especial de Expertos en julio de 1972, las fuerzas portuguesas habían entrado en su aldea para atacar a los aldeanos. Cuando la gente escapaba, los soldados portugueses capturaron una niña de aproximadamente dos años, llamada Kabuyi, y, según se dice, tomaron una estaca afilada y se la clavaron hasta la mitad de la garganta, y la dejaron ahí (RT. 139).

366. El Sr. Nsamba, ex soldado de la división especial del ejército portugués, atestiguó que, después de haber presenciado el asesinato de cuatro jefes en la aldea estratégica de Kameya <sup>10/</sup> y de haberse fugado ulteriormente de esa aldea, había sido apresado de nuevo por los portugueses. Declaró que mientras se encontraba en la prisión, él y otros presos políticos fueron obligados a beber orines y a lavarles las nalgas a los carceleros con sus propias manos. El testigo mostró las cicatrices en sus manos y en su frente que, según dijo, habían sido causadas por cigarrillos encendidos que les aplicaban los guardias de la prisión. En febrero de 1972, el Sr. Nsamba logró escapar por segunda vez y se unió a los combatientes por la libertad (RT. 139).

367. El Sr. Muila Mavungo testificó que la policía secreta (PIDE) le había detenido en Bucó-Zau, Angola, en septiembre de 1963, como sospechosa de apoyar al movimiento de liberación, y había sido interrogado y golpeado violentamente todos los días hasta que quedó seriamente herido y con tres dientes rotos. Más tarde fue trasladado a un campamento de concentración en Menongue, distrito de Cuando-Cubango, cerca del río Missombo, donde se colocaba a los prisioneros en tableros de madera y se disparaba contra ellos para hacerles caer y morir en el río. El testigo declaró que después de dos años en Menongue, fue trasladado a la prisión de São Nicolao, distrito de Moçamedes, donde trabajó con otros 4.000 prisioneros partiendo rocas para construir casas. Cuando llegó a São Nicolao en 1965 había solamente dos casas; cuando partió en 1971 era prácticamente una ciudad. Se decía que los presos tenían que vivir allí con sus esposas e hijos en pequeñas chozas para cinco o seis personas, las mujeres en chozas separadas, y que tenían que trabajar hombro a hombro realizando el mismo trabajo pesado en los campos y en las minas de sal. El testigo declaró además que se daba a los detenidos alimentos en mal estado y poca agua, ya que para conseguirla era necesario ir a unos cuatro kilómetros de distancia. Según el Sr. Mavungo, uno de los alcaides de São Nicolao, llamado Lima, castigó una vez a un preso con 500 varazos y, debido a que no se dieron de inmediato los cuidados necesarios al preso, éste murió en la prisión. De acuerdo con los informes, había seis u ocho muertes diarias en la prisión a consecuencia de las enfermedades o de fuertes palizas dadas por los guardas. El testigo declaró además que durante su permanencia en la prisión, en junio de 1967, según creía

---

<sup>10/</sup> Véase el párrafo 332.

él, un grupo de extranjeros, incluso un representante de la Cruz Roja 11/, un ministro estadounidense y algunos franceses, estuvieron en São Nicolao y, según se dijo, quedaron atónitos ante las condiciones de vida que prevalecen allí, y habían visto a los presos andando prácticamente desnudos, con un tiempo bastante frío. Después de la visita cambiaron para los prisioneros las condiciones en lo referente a la ropa. El Sr. Mavungo declaró que después de haber estado en prisión durante 11 años, sin ser sometido a juicio, fue puesto en libertad en 1971 (RT. 140).

368. El Sr. Tomas Manuel testificó que había sido detenido en 1966 y puesto en prisión en Caxito, distrito de Luanda, donde había sido hacinado con otros veinte presos políticos en una pequeña celda, que tan sólo servía para dar cabida a sus necesidades físicas. El testigo dijo que los presos vivían hambrientos porque no había comida y que se les golpeaba a toda hora; que los guardas les habían quitado sus ropas y que a consecuencia de ello había tenido que dormir desnudo en el suelo. Según se informa, el Sr. Manuel pudo escapar sobornando a un guardia de la prisión con 100 escudos (RT. 140).

369. Según el Sr. Lubaki, las unidades operacionales portuguesas someten a los combatientes por la libertad que capturan a las torturas más crueles en el curso de los interrogatorios, y luego los matan. Se dice que, antes de matarlos, fuerza a los angoleños capturados a servir de guías o de exploradores en el bosque para ayudarles a encontrar los campamentos de los guerrilleros 12/ (RT. 142).

370. El Sr. Jose Adao Gomes declaró que había sido capturado por 22 soldados portugueses en Kizele, Angola, el 22 de abril de 1970, mientras vestía el uniforme de miembro del movimiento nacionalista y portaba armas. Después de haber sido recluido, golpeado e interrogado varias veces, se le llevó ante un oficial en el puesto del ejército portugués en Santa Eulalia, donde fue interrogado y golpeado nuevamente por considerársele terrorista. El testigo declaró que se le había atado con una cuerda, se le había cargado a la espalda una mochila de alimentos enlatados y se le había obligado a subir a un helicóptero. Cuando el helicóptero estaba a unos 15 metros de altura, según declaró, un subteniente le empujó y le hizo caer en el monte. Comenzó a sentirse enfermo, según dijo, y sangraba por la boca, la nariz y los ojos. El

---

11/ El informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja correspondiente a 1966 contiene información sobre la visita del representante de la Cruz Roja, Sr. Hoffmann, a Angola, el 22 de junio. En el informe se dice que durante su misión, el Sr. Hoffman inspeccionó un campamento de prisioneros en el distrito de Cuando-Cubango, a unas 15 millas de Serpa Pinto, el "Campo de Trabalho de Missombo", un centro de detención en el distrito de Moçamedes, y el "Campo de Recuperação Social de São Nicolao", agregándose que en todos los lugares que visitó el delegado, éste tuvo completa libertad para investigar las condiciones de encarcelamiento. En el informe anual correspondiente a 1970 se dice que el Sr. Hoffman fue a Luanda para presentar a las autoridades portuguesas al delegado y al delegado-médico, quienes, del 1º al 17 de noviembre, visitaron dos prisiones, un hospital militar y un "campamento de rehabilitación", en donde vieron a cerca de 1.340 detenidos políticos. Se dice que el CICR envió informes sobre las visitas a las autoridades de los campamentos de detención.

12/ Véase también el párrafo 340.

helicóptero volvió, y cuando los portugueses se dieron cuenta de que no había muerto, según informó, lo arrastraron con la cuerda unos 10 metros, provocándole mayores heridas, y luego le llevaron de vuelta a la prisión, donde perdió el conocimiento. Después de recibir dos inyecciones recuperó el conocimiento, y se le dejó en la cárcel durante cinco meses. Entonces, dijo, fue llevado a una senzala, o aldea estratégica 13/, donde tenía que trabajar siete días por semana desde las 6 hasta las 19 horas, sin remuneración alguna, hasta que logró escaparse con otras 23 personas en abril de 1971. El testigo, que se presentó ante el Grupo cojeando y ayudándose con un bastón, declaró que su columna vertebral y otros huesos se habían dislocado por haber sido arrojado del helicóptero y que se le había lesionado el pene, por lo que le habían introducido un tubo de plástico para que pudiese orinar (RT. 142).

371. El Sr. Manuel Miranda, soldado del movimiento nacionalista angoleño, declaró que había sido capturado con otros dos camaradas el 25 de octubre de 1971 en las cercanías del río Lué. Manifestó que sus compañeros habían sido muertos por las fuerzas portuguesas, en tanto que él había sido golpeado y encarcelado en el puesto de Nambugangongo. El testigo declaró que posteriormente había sido llevado al bosque, acompañado de soldados portugueses, y obligado a caminar toda la noche, siempre maniatado cuando cayeron en una emboscada de las fuerzas de ALNA que causó la muerte de dos portugueses. Como resultado de ello, el comandante del batallón dio instrucciones de que se privara de alimentos al testigo y que se le golpeará constantemente, puesto que se le había enviado allí para guiar a los soldados portugueses hasta las posiciones nacionalistas y en lugar de ello había dejado que los soldados cayeran en una emboscada. El testigo declaró que fue trasladado a otra prisión donde encontró a seis camaradas capturados anteriormente que habían sido heridos y lesionados por las torturas que habían sufrido; estos combatientes por la libertad fueron desapareciendo uno por uno. El 3 de enero de 1972, el testigo fue llamado ante un mayor quien, según declaró, le dijo que los portugueses le habían salvado la vida en la emboscada para que pudiese guiar a sus fuerzas por la zona donde había sido capturado. Se le obligó a servir de guía nuevamente y se le mantenía amarrado con la excepción de una mano libre con la que manejaba un machete para limpiar el camino por el bosque. Sin embargo, después de caminar unos 23 km, el cabo que estaba con él soltó el extremo de la cuerda que todavía lo amarraba apenas el tiempo necesario para que el testigo pudiera huir. Después, según manifestó, se unió nuevamente a las fuerzas clandestinas (RT. 143).

372. El Sr. Antonio Martins informó sobre el bombardeo de hospitales y escuelas en el interior de Angola 14/, en el cual un alumno suyo llamado Domingo Rodrigues Miguel, de 14 años de edad, fue capturado vivo por las fuerzas portuguesas en la escuela de Sao Fernandes el 7 de marzo de 1972. Según afirmó, le llevaron a unos 25 kilómetros de distancia, le cortaron el brazo derecho y la oreja izquierda con un machete y lo pusieron en libertad. Se dice que el muchacho regresó a su hogar llevando consigo las partes de su cuerpo que le habían cercenado y que, a los cuatro meses, después de haber recibido tratamiento en un hospital, se unió al movimiento nacionalista (RT. 143).

---

13/ Véase también el párrafo 401.

14/ Véase el párrafo 414.

373. El Sr. Pedro Vida García declaró que en todo el territorio de Angola y especialmente en las regiones cercanas a las zonas afectadas por la guerra de liberación, las fuerzas portuguesas frecuentemente organizan ataques a fin de descubrir a las personas que colaboran con los guerrilleros. En el curso de sus incursiones detienen arbitrariamente a muchísimas personas, a quienes someten a torturas y posteriormente asesinan. En 1971 ocurrieron varias incursiones de esa naturaleza en Kinkunzu, Mussela y Catalambanza 15/ (RT.143).

374. El Sr. Francois Lele, Presidente del Partido Nto-Bako, declaró que había más de 40.000 presos viviendo en condiciones inhumanas y degradantes en Angola, privados de todo en un lugar lleno de enfermedades. Dijo que los presos Andres Mazoa y Paul Kralu, cuando se les trasladaba de la cárcel de São Paulo, fueron obligados bajo pena de ser azotados en la espalda, a hacer a pie todo el recorrido hasta la costa atlántica, a 35 kilómetros de la capital, cargando arena sobre la cabeza. El testigo suministró los nombres de las siguientes prisiones en la zona de Luanda: San Pedro de Boiro, a ocho kilómetros de Luanda; una cárcel civil; la prisión del PIDE; la cárcel para delincuentes comunes en São Paulo; los campamentos de concentración de Damba, bahía de los Tigres, Moçamedes -a 160 kilómetros de Luanda- y Serpa Pinto (RT.146). El testigo dijo que las siguientes personas se encontraban presas en Luanda:

Alberto de Cruz (actualmente en Carmona);

Samuel Teixeira, ídem;

Samuel César, ídem;

Paul Muila, quien está en Sanza Pombo;

Simón Kiala (Kimbele);

Samuel Kosi (Macocola);

François Suamono (Buenga);

Simón Bambili (Bcu)

Paul Kiala (Bcu);

Elias Morais (Macocola);

Kosi Farao (Damba);

Manuel Lelo (Damba);

Pedro Panda (Damba);

Joao Miezi (Damba);

Fernando Pinto (Purim);

Joao Pedro Mbola (Maquela);

Joao Purgante (Macocola);

José Manuel (Bengo);

Tomaz Antonio (Sanza Pombo);

Antonio Coelho (Sanza Pombo);

Moises Mateus (Sanza Pombo);

Daniel Kanza (Sanza Pombo);

Mafuani Makundi (Massau);

Joao Laurengo (Sanzo Pombo);

---

15/ Véanse los detalles en el párrafo 337.

Caetano Laurengo (Sanza Pombo);  
Pedro Mbanza (Sanza Pombo);  
Joao Marcos Pedro (Sanza Pombo);  
Fonseira Muanza (Macocola);  
Mateus Zulumongo Sok (Sanza Pombo);  
Paulo Alberto Cataquisto (Sanza Pombo);  
Guilhermo (Sanza Pombo);  
Pedro (Sanza Pombo);  
Rigiador Kimoyoyo (Macocola);  
Joaquim Pires (Macocola);  
Marcos Nzumbo (Macocola);  
Francisco Maluta (Macocola);  
Antonio Maiala (Macocola);  
Andreade Marindo (Macocola);  
Raul Buala (Macocola).

En 1970, Francisco Kadiemba y los hermanos Cato fueron detenidos y enviados a la Isla de São Nicolao en la provincia de Moçamedes. El mismo año los portugueses detuvieron a los siguientes dirigentes tribales:

Jefe Mpambu de la región de Sanza Pombo;  
Jefe Ngonga de la región de Mukaba;  
Jefe Ngonga Nzau de la región de Kwilu Pombo;  
Jefe Kongo de la región de Carmona.

Estos cuatro jefes revolucionarios fueron trasladados con los ojos vendados a la cárcel de la isla de São Nicolao (RT.146).

375. Según el Sr. Lele, los miembros de su partido que estaban presos sufrían de enfermedades tales como bronquitis, paludismo, etc. Se informó que eran amarrados con alambre y se les obligaba a comer pescado y frijoles podridos; se les obligaba a comer tierra mientras se les azotaba; y les echaban los perros. El Sr. Lele declaró que el secretario general de su partido, Sr. Alberto da Cruz, fue asesinado por los portugueses en Ucuá, cerca de Luanda (RT.146).

b) Testimonios relativos a los acontecimientos en Mozambique

376. El Sr. Joaquim Chissano declaró que las medidas represivas empleadas por los portugueses contra los africanos negros, especialmente después de la iniciación de la lucha armada por la liberación nacional, habían empeorado considerablemente en el curso de los dos últimos años, llegando a extremos inimaginables (RT.135). El testigo citó la información publicada por un periódico sudafricano, The Star, en su edición de 6 de noviembre de 1971, en el sentido de que en el distrito de Tete los soldados portugueses habían forzado a las madres a aplastar a sus hijos en morteros y habían ordenado a los civiles abandonar sus aldeas. Se comunicó que al día siguiente, cuando los aldeanos se dirigían a otro lugar, fueron atacados desde helicópteros y asesinados salvajemente (RT.135).



377. Según el Sr. Chissano, las personas que protestaron contra tales actos del ejército portugués en Mozambique son aprisionados, como se dice que ocurrió con cuatro sacerdotes -dos portugueses, los padres Sampaio y Mello, y dos españoles- que fueron detenidos en Rhodesia por la policía de ese país y trasladados a Mozambique. Estos cuatro sacerdotes católicos estaban esperando el proceso ante el tribunal militar portugués por haber denunciado desde sus púlpitos la matanza de civiles por los portugueses en Mukumbura en abril de 1972. Los cuatro sacerdotes habían estado incomunicados desde su detención y se les había negado la asistencia letrada.

378. El Sr. Chissano declaró que ninguna de las atrocidades cometidas por el ejército portugués jamás había sido objeto de una investigación o de un juicio, lo que demostraba que, lejos de ser actos aislados, constituían una práctica deliberada. A su parecer, la justificación para estos actos se podía encontrar en las obras del Comandante en jefe del ejército portugués en Mozambique, General Kaulza de Arriaga, en cuyas "Lecciones de Estrategia" para los cursos de Alto Mando, 1966-1967, vol. XII, se manifiesta lo siguiente:

"... La estrategia portuguesa en Africa debe estar destinada a lograr un equilibrio entre la población negra y la blanca." (RT.135).

El testigo sostuvo además que, desde esa perspectiva, el General Kaulza de Arriaga, después de haber loado "la exportación de esclavos africanos al Brasil como algo bueno", propuso los siguientes objetivos para la acción portuguesa.

"... Por una parte el crecimiento de la población blanca; por la otra, la limitación de la población negra." (RT.135).

379. El Sr. José Ngolombe declaró que había sido detenido en Beira el 9 de mayo de 1964 por agentes de la PIDE. Había sido enviado a una prisión en Lourenço Marques, donde la policía comenzó a golpearlo con hierros y a emplear una p'leta o palmatoria 16/ a fin de extraerle información sobre el FRELIMO. El testigo dijo que jamás se le había enjuiciado sino que había sido enviado a la prisión de Machava donde estuvo hasta julio de 1965, compartiendo una celda con otros presos en la que estaban hacinados como sardinas. No se les daba agua, se les golpeaba y tenía que observar mientras sus compañeros de cárcel eran objeto de atrocidades y después eran asesinados. Fue trasladado a la prisión de Malaban 17/ en julio de 1965 y posteriormente fue trasladado varias veces entre la prisión de Malaban y la de Machava más o menos cada año hasta su liberación el 9 de febrero de 1971.

380. El Sr. Ngolambe declaró que en la prisión de Machava, que según se dice es la prisión central, había 3.000 presos 18/. La comida que se servía allí consistía en huesos hervidos en agua. La mejor parte de la sopa, con toda la grasa, se distribuía a los presos comunes; el resto se distribuía entre los presos políticos,

---

16/ Véanse el párrafo 347 y la nota 3.

17/ Véase el documento E/CN.4/1050, párr. 468, en el que se dice que Malaban es el campamento de concentración más grande, con 20.000 presos.

18/ Véase el documento E/CN.4/1050, párr. 474.

quienes llegaban a tener dolencias estomacales y hemorragias internas como resultado de su alimentación. Cuando estuvo en Machava en octubre de 1967, los 80 presos políticos de su grupo estaban desnudos, excepto por algunos trozos de arpillera tomados de sacos de harina. El que protestase porque la arpillera tenía agujeros era castigado y enviado a trabajar desnudo en la plantación.

381. El Sr. Ngolombe declaró además que cuando llegó a Machava en enero de 1971 se le puso en el nuevo pabellón de la cárcel con un grupo de 30 presos. Se les dijo que cualquiera que continuara hablando del FRELIMO no saldría nunca de la prisión. Las mismas 30 personas se negaron a obedecer órdenes y como resultado de su acción se les recluyó incomunicados en el nuevo pabellón sin ropa durante la época de frío. Cuando los presos tenían que regresar y dormir se echaba agua al piso, y no se suministraban alimentos. Según el testigo, de las 30 personas que ingresaron en ese nuevo bloque, sólo siete sobrevivieron. Todos los demás murieron allí mismo, debido a la mala alimentación y a los severos castigos. Entre los que murieron estaban Salimo, Joel, Joao Chitete, Alexandro Mixicomá y Juma. Algunos camaradas que él conocía quedaron en Machava: los vio cuando los transferían del pabellón Nº 8 al Nº 9. Pero a otros no los volvió a ver nunca más. El testigo afirmó que durante los siete años que pasó preso había visto morir a 50 personas, como consecuencia de las palizas y el cruel trato recibidos. Dijo que él mismo había sufrido duras palizas, según se podía comprobar por un diente que había perdido en la prisión cuando se le sometía a esas brutalidades.

382. El Sr. Ngombole testificó que mientras estaba en la prisión de Malaban lo visitaron dos representantes de la Cruz Roja -primero el Sr. George Hoffmann, en junio de 1966, y luego un hombre llamado André, en 1968- quienes tuvieron la oportunidad de observar a los presos políticos desnudos o cubiertos de arpillera, así como el tipo de alimentación que recibían. El testigo declaró que los representantes de la Cruz Roja jamás fueron a la prisión de Machava porque las autoridades portuguesas mantenían allí a las personas que no dejaban ver a nadie, y que siempre habían estado encarceladas. El testigo creía que había sido puesto en libertad como resultado de las visitas de la Cruz Roja, debido a que los portugueses sintieron vergüenza ante los visitantes (RT.135).

383. El Sr. Silvestre Mueda declaró que había sido capturado por las fuerzas portuguesas después de haber sufrido un balazo en un pie mientras huía del valle de Muidumbe con su familia. Dijo que le habían encarcelado en una celda en que los presos debían satisfacer todas sus necesidades, puesto que no se permitía que ninguno saliera. Posteriormente, fue sacado de la prisión por algún tiempo y trasladado a la aldea estratégica de Chai, rodeada de alambradas, donde se le había golpeado con una palmatoria por resistir las exigencias de los soldados auxiliares de que portara armas y penetrara en el bosque para luchar al lado de ellos. En la aldea estratégica se le había obligado a trabajar en los campos a fin de obtener dinero para pagar impuestos, siempre bajo la vigilancia de soldados auxiliares. Cuando una o más personas deseaban hacer sus necesidades tenían que mostrar sus tarjetas de identificación para que se les permitiese salir por el portón, y tenían que permanecer cerca de éste, a veces hombres y mujeres juntos, donde los soldados pudiesen verlos. El

testigo manifestó que había sido recluido nuevamente en la prisión de Mueda por algunos meses y, luego, trasladado a la prisión de Macomia, donde se le mantuvo durante un año sin someterlo a juicio. Dijo que los presos no tenían ropa, y que en la prisión él dormía en el suelo, cubriéndose con un pedazo de arpillera (RT.136).

384. Según el testimonio prestado por el Sr. Ernesto Erbert Njolomola, se le encarceló junto con sus padres en la aldea de Chimpene en julio de 1970, por considerársele sospechoso de haber escondido a guerrilleros del FRELIMO 19/. Según declaró, les habían golpeado con un látigo y con una palmatoria, encadenados, y les daban sólo sal en grano para comer tres veces por día, durante dos semanas. El testigo declaró que había sufrido dolores de estómago y en todo el cuerpo, como consecuencia de ese régimen y del tratamiento brutal que había recibido en prisión (RT.136).

385. Según el testimonio escrito presentado por el padre Luis Alfonso da Costa, misionero de la Orden Camboniana expulsado de Mozambique en 1972, los acontecimientos recientes confirmaron que se practicaba la tortura contra los presos políticos en varias regiones de Mozambique. Citó diversos casos, tal como el de Xavier Tomas, maestro auxiliar en una de las misiones católicas, que según se dice fue golpeado duramente en tres oportunidades hasta que cayó en coma; el de Manuel Chawanda, hospitalizado con un brazo quebrado en Tete como consecuencia de las palizas, el de Gouveia Chaola, de 70 años de edad, a quien se le gangrenaron las palmas de las manos como resultado de los golpes recibidos; y el de M. Macaza, de 68 años de edad, de quien se dijo que había sido azotado por la policía secreta (DGS) hasta que murió el 20 de marzo de 1972. El padre da Costa dijo a continuación lo siguiente 20/:

"Mientras esperamos, escuchemos lo que nos dice Auguste Luís, quien estuvo encarcelado en Estima. Nos contará un poco de lo que pudo ver y lo que sufrió él mismo. Entre otras cosas:

- Se doblaba el dedo de la víctima por la tercera falange presionándola contra la segunda falange y luego se le amarraba con un pedazo de cordel de plástico (mika). La operación se ejecutaba en todos los dedos uno tras otro.

- Se obligaba a los presos a dormir amarrados unos a otros por las manos y los pies.

- Se ataba una cuerda al cuello de la víctima, se le hacía pasar sobre una viga y luego tiraban lentamente. Cuando el verdugo veía que la víctima estaba a punto de asfixiarse, la dejaba sentarse durante algún tiempo en un palo. Muchos de ellos pierden el conocimiento; otros...

- Con los brazos en cruz, se ata al preso por los brazos a un palo. Luego se aprieta cada pie con un pedazo de cuerda que se hace pasar por encima de una viga. Entonces levantan a la víctima por los pies conservando las piernas separadas para poder golpear fácilmente con el látigo y las reglas grandes.

- Se apalea hasta hacer saltar la sangre."

---

19/ Se dan detalles en los párrafos 347 y 348.

20/ Véase "Encore une année d'agonie ... sans espoir de résurrection", op. cit., pág. 5.

386. En testimonio presentado por escrito, Joao Carlos Antonio Nhamizinga declara que el domingo 16 de enero de 1972, a eso de las 18 horas, estaba esperando con unos amigos en una parada de autobús conocida como "Bar Paraíso" en la zona de Manga. Llegaron algunos soldados y pidieron los documentos de identidad de los pasajeros al mismo tiempo que los insultaban. Luego los soldados arrojaron los documentos al suelo y, cuando las personas protestaron, se sacaron los cinturones y las golpearon. El testigo manifestó que le rompieron un brazo y que a uno de sus amigos, Bauchande, le rompieron la cabeza. El mismo día, los soldados mataron a dos personas en la zona de Manga golpeándolas con sus cinturones. No sabía los nombres de las víctimas, pero vio los cadáveres. Los soldados no respetaban a las mujeres, declaró el testigo. Trataban de violarlas y golpearlas, así como a sus familiares, cuando las mujeres se atrevían a defenderse. En los días de Pascua en 1971, dijo, en la aldea de Massanga algunos soldados llegaron en un jeep y trataron de violar a su prima, pero ella pudo escapar.

387. El testigo declaró además que los portugueses deseaban obligar a todos a "asimilarse". Enviaban listas a todas las compañías con los nombres de los que tenían que "asimilarse" y, según se decía, se despedía a los que se negaban y se ponía una nota en rojo en sus documentos de identidad. La policía detenía a todos aquellos que tenían la nota en rojo, alegando que se trataba de "terroristas". El testigo dijo que se le forzó a asumir la condición de "asimilado" en la CELMOQUE, la compañía donde trabajaba y que la lista llegó a dicha compañía en febrero de 1972. Esta campaña de "asimilación", según declaró, era una forma de forzar a las personas a alistarse en el ejército, porque una vez que la persona estaba "asimilada", se le obligaba a prestar servicio militar. Dos personas que conocía fueron detenidas por el PIDE-DGS por haber escuchado la Radio FRELIMO. Sus nombres eran Jose Nacete y Joaquim Luis. Fueron detenidos en noviembre de 1971 en sus hogares en la zona de Vaz, en Nova Chipangara, y estuvieron en la prisión de la PIDE durante seis meses. El testigo declaró también que en la cárcel de la PIDE, en la zona de Ponta Gea, en Beira, los portugueses torturaban y mataban personas. Según informó, una de las maneras que empleaban para matar a la gente consistía en encerrar a los presos en una celda en una cueva. Durante la pleamar, el agua inundaba la cueva y las personas se ahogaban.

388. En una declaración escrita, presentada al Grupo en Dar es Salaam el 11 de agosto de 1972, el Sr. Alexandre Franco Nkhalamba Thawe, maestro de la Misión Anglicana de Messumba (Niassa), manifestó que había sido detenido el 11 de septiembre de 1964. Liberado oficialmente el 8 de enero de 1971, permaneció en prisión hasta el 26 de febrero de 1971, es decir, casi 7 años; pero jamás fue sometido a juicio. Declaró además que de septiembre a octubre de 1964 fue mantenido en la cárcel de Vila Cabral; el 10 de octubre fue enviado a la penitenciaría de Lourenço Marques, donde permaneció hasta marzo de 1965; de marzo a julio de 1965 se le mantuvo en la prisión de Machava; en julio fue trasladado a los campamentos de trabajo Pinto Teixeira en 1969, donde permaneció hasta el 8 de enero de 1971. Entonces fue llevado nuevamente a Lourenço Marques, donde finalmente se le puso en libertad en febrero de 1971.

389. Manifestó además que el período de interrogación era el más peligrosos y crítico, dado que muchos presos perdían la vida durante el mismo. Mientras se les interrogaba, eran torturados. Según se dice, las principales torturas consistían en:

- a) ser "planchado" en la espalda con una plancha de ropa;
- b) ser suspendido del cielo raso por las manos;
- c) ser obligado a permanecer de rodillas sobre arena durante varios días;
- d) recibir descargas eléctricas;
- e) ser obligado a ingerir píldoras o recibir inyecciones que alteraban el sistema nervioso;
- f) ser mantenido en un cuarto helado;
- g) ser azotado, golpeado con una "palmatoria" o con un bastón (cachiporra);
- h) ser golpeado con una "palmatoria" perforada;
- i) ser atado y golpeado por seis policías;
- j) cuando el preso se desmayaba, se le hacía volver en sí con agua y se reanudaba la tortura.

Dijo que muchos presos morían a causa de estas torturas; otros, en las zonas en guerra, eran muertos por los soldados. Uno de sus amigos, Estavao Njilamo murió en Machava a consecuencia de los golpes que recibió mientras era interrogado. Muchos presos tienen cicatrices; algunos quedan mutilados o impedidos. Según el testigo, entre 1965 y 1968, el ejército se llevaba a los presos cuyos interrogatorios habían terminado y los utilizaba como detectores de minas en frente de los convoyes militares. Se vendaba los ojos a los presos con esparadrapo o con pañuelos y se les ataba y mantenía en el extremo de una cuerda de unos 10 metros. Los vehículos los seguían. El testigo manifestó que el ejército ya no empleaba a los presos para detectar minas, sino a las personas capturadas en las zonas de guerra. Según se informa, después del interrogatorio, todo -el trabajo forzoso, la asistencia médica, el alimento, los dormitorios, el agua- se utiliza para castigar a los presos políticos.

390. El Sr. Thawe declaró que en la cárcel de Mabalane la comida era de muy mala calidad. Consistía principalmente en cáscaras de arroz o maíz de la calidad que normalmente se emplea para alimentar gallinas. En Machava era todavía peor. Sostuvo que varias veces vio a personas desmayarse de hambre y, a veces, hasta morir de hambre. Se daba a cuatro personas la cantidad de alimento suficiente para una, y la situación empeoró después de 1966. Se daba a los presos media taza de arroz y tres cuartos de taza de frijoles, no recibían azúcar, y jamás se les daba carne, sólo pequeños huesos "cuidadosamente raspados". Dijo que la diarrea era frecuente debido a la mala alimentación.

391. El Sr. Thawe declaró que en Mabalane los presos dormían en el suelo y que desde 1967 se distribuían mantas cada dos años. Pero era mucho peor en Machava; cuando él partió había allí 4.700 presos en los tres pabellones reservados para los presos políticos. Se amontonaba a los presos como sardinas en lata, oprimidos uno contra otro, los pies de uno en la cabeza del otro. En estas condiciones, según se decía, las epidemias eran frecuentes y se difundían fácilmente entre los presos. Podía observarse que las barracas utilizadas como dormitorios se empleaban como medio para poner fin a la vida de los presos. Agregó que en Mabalane, al igual que en Machava, habían grifos y duchas. Sin embargo, durante la estación cálida (la estación lluviosa) las autoridades solían cortar el agua y sólo la dejaban correr cada dos días, mientras que en la estación fría (la estación seca) había agua todos los días, pero sólo de las 3 a las 5 horas. Desde noviembre de 1967, en Mabalane, continuó el testigo, se distribuía ropa sólo una vez cada dos años: ropa que se destrozaba rápidamente debido al trabajo que los presos eran obligados a hacer. A veces, declaró el testigo, no se daban mantas y las que se proporcionaban estaban hechas jirones y llenas de pulgas.

392. Con respecto a los períodos para caminar, el testigo declaró que se daba dos a los presos de la cárcel de Machava y que ambos, en total, no llegaban ni a una hora. Durante el resto del tiempo se mantenía encerrados a los presos. En Mabalane los presos tenían más tiempo para permanecer en el exterior, porque era un campamento de trabajo forzoso. El Sr. Thawe prosiguió diciendo que, a veces, los presos tenían que viajar. Si tenían que hacerlo en tren, se les encerraba en vagones de ganado. Si tenían que viajar por barco, se les arrojaba como sacos en las bodegas. Se decía que a causa de ello, algunos presos morían y otros quedaban impedidos. Durante algunos de estos viajes por mar, algunos de sus amigos y parientes resultaron muertos o heridos como, por ejemplo, un maestro llamado David, que fue muerto en el viaje de Mozambique a Lourenço Marques. También fue muerto durante el mismo viaje el Jefe Mohequene, de Chinanga (Metangula), así como un muchacho llamado Aide, de Nampula, que sufrió la fractura del cráneo. Se dice que el cadáver del muchacho fue arrojado al mar. Según se informa, el Reverendo Padre Paulo Litumbi resultó con ambas piernas fracturadas y sólo puede caminar con muletas. Los maestros Aideo Lilinga y Jaime Farahane resultaron con los brazos rotos.

393. El testigo declaró más adelante que no se aceptaban quejas. En 1968, seis presos, incluso él mismo, dirigieron una protesta por escrito al inspector de la Sección de Presos de la PIDE en Machava. La reacción de las autoridades fue ponerlos en reclusión aislada. Se dice que permanecieron en esa reclusión del 6 de agosto de 1968 al 6 de julio de 1969, es decir, 11 meses.

394. El Sr. Thawe también declaró que los presos, incluso él mismo, fueron sometidos a trabajo forzoso en la cárcel de Mabalane. La jornada de labor, bajo el sol o la lluvia, duraba de las 5 a las 17 horas. Trabajaban en las plantaciones, excavando canales de irrigación y, mientras lo hacían, eran insultados y golpeados por los carceleros. Dijo que los productos de la plantación -arroz, maíz, kenaf, etc.- no eran para que ellos los comieran; sólo se les daba las hojas de las cebollas y los tomates y papayas podridos. También se obligaba a los presos a trabajar en las casas de los agentes de la PIDE, de las 5 a las 19 horas. Por otra parte, en la prisión de Machava, a partir de enero de 1971 se obligó a los presos a trabajar en la construcción de edificios en el puerto, como estibadores y en los ferrocarriles.

395. Con respecto a las inhumaciones, declaró que en Mabalane se permitía enterrar a los presos fallecidos. Se permitía que de 20 a 30 presos siguieran la procesión fúnebre y enterraran decentemente a su camarada. En Machava, empero, los presos no sabían qué se hacía con los muertos. Por lo que se decía, se utilizaban los cadáveres para fertilizar las plantaciones de bananas y árboles frutales.

396. El Sr. Thawe agregó que los presos que llegaban del campamento de concentración de Ibo estaban sumamente delgados; otros tenían hinchada parte de su cuerpo o estaban anémicos. La policía militar vigilaba a los presos en Ibo, en su mayoría prisioneros de guerra. Se les mantenía encerrados todo el tiempo y no tenían derecho a períodos para caminar. En las celdas habían mitades de barriles que se utilizaban como excusados. En la mañana, los presos, desnudos, formaban fila y eran obligados a ir a bañarse en el mar y a llevar con ellos los excusados para lavarlos. Tanto cuando iban al mar como cuando regresaban tenían que pasar entre filas de soldados armados con varas y látigos, y eran golpeados. Al retornar del mar, los barriles estaban llenos de agua salada y se obligaba a los presos a beberla. El testigo sostiene que a causa de estos castigos había más fallecimientos en el campamento de Ibo que en cualquier otra prisión.

### C. Graves manifestaciones de colonialismo y discriminación racial

#### 1. Denuncias relativas al confinamiento de africanos en aldeas cercadas con alambre de púas

##### a) Testimonios relativos a Angola

397. El Sr. Pascal Luvualu declaró que los agricultores indígenas de Angola eran instalados en aldeas estratégicas, llamadas "ndandanda" o "aldeas de la paz" o "aldeamentos" en la versión portuguesa, donde la gente vivía al borde de la inanición, la enfermedad, el ocio y los sufrimientos y sometida a la fiscalización más estricta por parte de las autoridades militares, políticas y administrativas. Las propias aldeas estaban cercadas con alambre de púas y la población africana vivía, según se informaba, en un estado de terror constante y no podía circular sin pases de salvoconducto. El Sr. Luvualu dijo que los portugueses habían desarrollado el sistema de aldeas estratégicas a medida que progresaba la lucha por la liberación, especialmente desde la apertura del frente oriental, para alejar al pueblo del movimiento de liberación nacional, para impedirle que participara en la lucha y para aislarlo de la influencia del MPLA. Los habitantes de las aldeas estratégicas no habían vivido en las mismas localidades originalmente, sino que procedían de grupos diversos tomados de aldeas diseminadas por toda Angola. (RT.139).

398. El Sr. Joao Jacob Caetano señaló que en el este, sudeste, nordeste, norte y noroeste de Angola, las poblaciones rurales eran desplazadas de las zonas de guerrilla y concentradas en aldeas estratégicas cercadas con alambre de púa, la primera de las cuales había sido establecida en 1963; los habitantes eran vigilados por milicianos armados. A menudo pasaban hambre, debido a la falta de fertilidad de la tierra y tropezaban con dificultades a casua de que hablaban diferentes idiomas en las regiones distantes. Por ejemplo, en 1969, la población de las aldeas de Piri, Ngombe, Quibaxi, Katende, Ngombe y Mukiana y parte de la aldea de Kibaxe, en la región de Dembos, distrito de Cuanza Norte, fue transferida a las aldeas de Bonza, cerca de Sao Salvador, y Quienza, cerca de Madimba, en el distrito de Zaire, en el extremo noroeste del Territorio (RT.141).

399. El Sr. Caetano dijo que se mantenía al pueblo en las ndandandas bajo estrecha vigilancia y observación. Se restringía su contacto con poblaciones de otras aldeas. No podían desplazarse libremente y, para hacerlo, primero debían consultar a las autoridades, sin cuyo consentimiento no podían ni siquiera ir a los campos de cultivo; incluso cuando se les permitía ir, eran acompañados por la milicia. El objeto de la milicia era controlar a las masas de habitantes indígenas e impedirles que tuvieran contacto con los combatientes por la libertad, que estaban en la selva. Los confinados en estas aldeas que, según dijo el testigo, podían ser denominadas campamentos de concentración, no podían siquiera llevar consigo jabón, azúcar o sal, por temor a que estos artículos pudieran llegar a manos de los maquisards.

400. El Sr. Caetano declaró después que la población que vivía en las aldeas estratégicas no era necesariamente gente de actuación política; los africanos de los que la policía de seguridad (DGS) sospechaba que estaban asociados con el movimiento nacionalista, eran llevados desde sus aldeas a campamentos más remotos, tales como São Nicolao o Misombo, pero se abligaba a sus familias a vivir en las ndandandas, que se organizaban prácticamente en todo el territorio, dado que, en la actualidad, toda Angola estaba al alcance de la actividad militar y política del MPLA. Según se informa, hay de 200 a 600 familias en cada aldea estratégica. El testigo dijo que en una época había tenido contacto con organizaciones políticas en las aldeas estratégicas mediante las cuales el MPLA había podido liberar a personas que vivían en tales aldeas en el sector de Alto Galungo, a unos 80 kilómetros de Luanda (RT.141).

401. El Sr. Adao Gomes testificó que había sido trasladado de una prisión en Nambugangongo, Angola, a una senzala de paz 21/, o "aldea de paz" pero que en realidad era una aldea de muerte, un campamento de concentración. Declaró que todas las personas que vivían en las aldeas estratégicas eran ex presos, incluso las mujeres, personas que habían sido capturadas desde hacía mucho tiempo o más recientemente. No se permitía a la población salir de los campamentos y tenían que hacer trabajo forzoso (RT.142). El testimonio del Sr. Gomes fue corroborado por el Sr. Pedro Vida García, quien declaró que, para controlar mejor a la población, los portugueses habían establecido "aldeas de paz" que, en realidad, se parecían más a campamentos de concentración o a plantaciones donde los esclavos hacían trabajo forzoso (RT.143).

402. Según el Sr. Lumeu Chikulu, en abril de 1972 las fuerzas portuguesas se apoderaron de toda la aldea de Chimowole, en el distrito de Moxico y llevaron a todos los pobladores -alrededor de 100 personas- a una de las ndandandas. El testigo y sus amigos Jonas Alberto y Joao Jelamiya permanecieron en el campamento hasta que lograron escapar, pero los que dijeron que preferían permanecer en el bosque, incluso el jefe de la aldea, fueron muertos a tiros en presencia de la población 22/ (RT.139).

403. El Sr. Yata Nsamba declaró que, junto con otras personas, había sido llevado por la fuerza a una aldea estratégica llamada Kameya. La gente que vivía allí provenía de distintos lugares, algunos de zonas situadas a más de 100 millas de distancia y tenían

---

21/ Según el diccionario portugués la "senzala" es un conjunto de "chozas de negros". Véase también el párrafo 364.

22/ Véase también el párrafo 331,



que construir sus propias casas. Las casas ya existentes allí eran utilizadas para alojar a los soldados portugueses. No se permitía a la población de la ndandanda cultivar sus propios huertos; los portugueses les daban un pequeño jarro de granos de maíz por persona. Se les pedía que salieran y trajeran su propio alimento, para lo que a veces tenían que viajar dos o tres días (RT.139).

b) Testimonios relativos a Mozambique

404. El Sr. Faustino Kambeu declaró que, dado que la lucha armada en Mozambique tenía su base en el campo, donde vivía alrededor del 90% de la población, los portugueses habían recurrido a las matanzas, las incursiones sistemáticas contra los cultivos y la población civil y el traslado de la población de sus aldeas a las llamadas aldeas protegidas, que en realidad, eran campamentos de concentración (RT.138).

405. El testimonio escrito presentado por el Padre Luis Alfonso da Costa, misionero católico portugués expulsado recientemente de Mozambique, suministra la siguiente información acerca de las aldeas estratégicas en ese Territorio:

"Lo primero que debe hacerse es llamarlas por su nombre: campamentos de concentración. Están rodeados de alambre de púas; los internados necesitan una autorización escrita de los guardias para ir a los locales de trabajo, etc.. Se obliga a la gente a entrar en una aldea de internación para protegerla de un enemigo que no lo es, pero que el Gobierno lo ha transformado en enemigo. No se concede la menor indemnización por la destrucción de los negocios de estas personas. Se obliga a la población a cambiar de aldea de internación, de acuerdo con las necesidades de la situación militar. Se obliga a las personas a ir a estos campamentos de concentración, donde resulta más fácil controlar a los habitantes. Ese es el objetivo esencial de las llamadas aldeas de internación (aldeamentos). Efectivamente, en el documento "Visite à Montepuez - mars 1969", se describen las aldeas de internación de la región y se da la orden de seguir en todo el distrito de Tete la misma política de aldeas de internación. En el capítulo a) - formación de una aldea de internación - se dice que "es rectangular, aproximándose al cuadrado, en terreno llano; el número de chozas de paja varía de 200 a 300. Algunas tienen 400 pero, de acuerdo con las informaciones obtenidas, no es aconsejable construirlas con más de 250, para que haya el máximo de posibilidades de control de los habitantes: todas las chozas de paja están alineadas y son perfectamente visibles...". La seguridad de que hablan las autoridades y que se hallaría en una aldea de internación, se traduce así: cuando el FRELIMO ataca a los guardias o las tropas de la aldea de internación; cuando una mina explota en el interior; cuando ocurre algo muy cerca... la población es la que paga los platos rotos. Siempre es la culpable. Se detiene a 10, 15, 20 o más personas, para darles la prima de la protección: torturas, cárcel, trabajo forzoso y cosas peores 23/."

---

23/ "Encore une année d'agonie... sans espoir de résurrection", op. cit.,  
págs. 7 y 8.

406. En un segundo documento, el Padre da Costa escribió:

"... No se ha pedido a la población opinión alguna respecto de la elección y la formación de las aldeas de internación. Se ha llegado incluso a negarse a escuchar a los que han tenido el coraje de hablar, como en el caso de la delegación de la aldea de Mancomba, dirigida por el Sr. Vasco, que fue al puesto administrativo de Marara para pedir al administrador Nunes V. Santana que no los obligara a cambiar nuevamente de lugar. Habían ido a esta aldea de internación obligados por el terror y ahora llega la orden de partir hacia otro lugar, a la aldea Andiceni, donde las condiciones de supervivencia son aún más precarias (el agua potable está muy lejos, etc.). No se tienen en cuenta las condiciones de vida de la población. La única cosa que se ha tenido en cuenta es exclusivamente la estrategia militar y cuando ésta es superada, a causa de la habilidad militar de los guerrilleros del Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), se desplaza a las personas sin el menor escrúpulo. Eso ocurrió a los 420 jefes de familia que se hallan concentrados en la aldea de internación de Mfidzi (Ferrao Coelho).

"Ocurre lo mismo con la aldea de internación de Bandala, donde hay más de 60 familias desplazadas, y lo mismo en las aldeas de Matsatsa, Matema, Mancomba, Chirodzi, etc. Y cuántas personas porque se han negado a obedecer o porque han protestado, han sido detenidas, obligadas a trabajar, torturadas e incluso muertas. Eso ocurrirá, entre otros, a un grupo de ancianos de la zona administrativa de Vila Gamito... Un misionero me contó que en una población de la zona de Angónia, alrededor de 200 personas que durante la noche habían salido de la aldea de internación para regresar a su primer alojamiento, habían sido halladas muertas al día siguiente: el ejército portugués había arrasado y destruido las casas y asesinado a los habitantes. A los que se niegan a dejarse fijar al "corral de cabras" (así es como los africanos llaman a las aldeas de internación) les queda una sola posibilidad para defender su libertad: huir. Al entrar en una aldea de internación, verdadero campamento de concentración, no queda la menor posibilidad de ser libre: hay que entrar y salir a la hora fijada, que presentar una tarjeta de control, hay alambradas de púa, etc... Cosa sorprendente, estas aldeas de internación son construidas según planes mucho más completos que los planes de urbanización de las aldeas mozambiqueñas. Todo se halla preestablecido: calles de 20 metros de ancho, dos avenidas de 30 metros de ancho, cada casa de 7,50 por 4 metros sobre un terreno de 20 metros por 20 metros. Un orden perfecto en un mundo de concentración. Un pueblo obligado a un estilo de vida que no eligió sino que se le impuso por la fuerza... Se obliga a los habitantes a trabajar gratuitamente en la corta de árboles, la edificación de las viviendas para las milicias y los jefes europeos, la construcción de caminos, etc... Ningún habitante puede ausentarse de la aldea de internación sin una tarjeta en que se mencione su nombre, la aldea a que pertenece y el motivo del desplazamiento (trabajo, necesidad de ir al hospital, etc.)... Si en las proximidades de una aldea de internación estalla una mina, o si en una emboscada del movimiento de liberación se ataca a las tropas portuguesas, la población sufre las represalias: mujeres, niños, ancianos y jóvenes son detenidos, torturados, exiliados y a menudo muertos. Eso ocurrió en la aldea de internación de la zona de Chipera. Según la versión de los militares, una mina estalló en el interior de la aldea de internación, haciendo saltar un vehículo militar. Se reunió a la población, que fue enseguida pasada por las armas y toda la aldea fue arrasada..." 24/.

2. Denuncias relativas a bombardeos aéreos de aldeas habitadas y campos y al uso de la guerra química

a) Testimonios relativos a Angola

407. El Sr. D. Arslan Humbaraci del Servicio de Información de Zambia, en nombre del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, ha divulgado testimonios relativos a la intensificación de los bombardeos y al uso de la guerra química por las fuerzas portuguesas contra aldeas habitadas y campos cultivados en zonas bajo el dominio del movimiento nacionalista de Angola. En el informe se dice que la utilización de agentes químicos por la fuerza aérea portuguesa se observó por primera vez el 1º de mayo de 1970, cuando se vio a cinco aviones que volaban bajo sobre las riberas del río Luena, en Angola oriental, rociando los cultivos de mandioca, que es el principal producto alimenticio, y que helicópteros de la fuerza aérea sudafricana estaban cooperando en el uso de ácido cacodílico, picloram y otros productos químicos peligrosos como desfoliantes y con propósitos represivos contra el pueblo africano 25/.

408. El Sr. Pascal Luvualu declaró que, además de la práctica tradicional de tortura, las fuerzas portuguesas estaban perfeccionando sus métodos de represión y exterminación en masa en Angola, y que sus operaciones se caracterizaban por una política de tierra arrasada, por intensos bombardeos contra poblaciones pacíficas y por el uso del napalm y de otros agentes químicos y tóxicos (RT.139). Otro testigo, el Sr. Pedro Vida García confirmó el testimonio del Sr. Luvualu (RT.143).

409. Según el Sr. Joao Jacob Caetano, el ejército portugués utiliza toda clase de recursos bélicos en Angola. Se dice que se han lanzado diversos tipos de bombas contra la población civil, desde las de tipo corriente hasta las de tipo "piña"; desde las bombas de napalm corrientes que producen un calor de 900 a 1.300 grados, hasta las de Progel PTI que producen un calor de 2.000 grados. El Sr. Andrade manifestó que había presenciado un bombardeo con napalm en la zona de Ngalame en el distrito de Cuanza Norte, el 27 de noviembre de 1967, y que aviones portugueses habían bombardeado con napalm una escuela en una zona dominada por el movimiento nacionalista; 13 niños murieron quemados y 16 quedaron gravemente heridos, de los cuales 10 murieron más tarde como resultado de las heridas recibidas. El Sr. Andrade declaró además que los portugueses habían introducido la guerra química en Angola desde 1965 y que habían intensificado el rociamiento con agentes químicos de campos cultivados después de 1970 (RT.141).

410. El Sr. Joao Jacob Caetano manifestó que él también había sido testigo del uso de bombas de napalm en Ngalama el 27 de noviembre de 1967 (RT.141). El Sr. Caetano agregó que las fuerzas portuguesas habían utilizado el napalm también en 1971 y en 1972 y que los periodistas soviéticos que visitaron el frente oriental del movimiento de liberación tuvieron la oportunidad de ver los efectos de estos productos químicos en Angola (RT.141). El Sr. Caetano afirmó además que un análisis realizado en los Países Bajos de las muestras que sus compañeros habían recogido en el Territorio indicaba que estos productos químicos eran el ácido diclorofenoxiacético 2,4, el ácido triclorofenoxiacético 2,4,5,

---

25/ Véanse el Guardian del 6 de julio de 1971; Le Monde (Paris) del 9 de julio de 1971; el Standard (Londres) del 7 de julio de 1971; Morning Star (Londres), del 8 de julio de 1971; The Standard (Tanzania) del 8 de mayo de 1971.

el ácido cacodílico, picloran y el tordon, que él creía que habían sido fabricados en la República Federal de Alemania (RT.141).

411. Según el testimonio dado por el Sr. Sebastien Lubaki, desde 1963 el ejército portugués ha perfeccionado varios productos químicos de naturaleza destructiva para su utilización en una guerra de represión contra hombres, plantas e incluso el suelo, con el fin de obligar a los nacionalistas de Angola a capitular. El Sr. Lubaki dijo que esos productos se habían hecho cada vez más fuertes y más violentos a medida que se desarrollaba la lucha nacionalista y que habían alcanzado tal grado de destrucción que, junto con las bombas de tipo corriente, constituían la principal arma de las fuerzas portuguesas contra el pueblo. Desde 1969, el Alto Mando de la revolución de Angola había recibido informes diarios de bombardeos con agentes químicos y de la rociadura de desfoliantes, herbicidas y esterilizadores del suelo por las fuerzas portuguesas en todo el frente de operaciones y en las zonas liberadas, donde centenares de hombres, mujeres y niños habían muerto, centenares de kilómetros de tierra habían perdido su vegetación y centenares de plantaciones habían sido destruidas. Por regla general, esos productos se lanzaban desde aviones adaptados para esas operaciones que volaban a poca altura sobre zonas seleccionadas; tales aviones eran protegidos por aviones a reacción y con frecuencia por helicópteros Alouette, con el propósito de evitar toda clase de contraataque o intervención de los guerrilleros o combatientes angoleños. El Sr. Lubaki dijo que los productos utilizados por el ejército portugués eran de tres clases: herbicidas y desfoliantes, esterilizadores del suelo, y agentes letales e inhabilitantes. Los objetivos perseguidos por los portugueses al recurrir a este tipo de guerra eran los siguientes: primero, reducir al mínimo el follaje de las zonas boscosas para aumentar la visibilidad de su fuerza aérea, impidiendo así la construcción de aldeas y puestos o bases nacionalistas en ciertas zonas estratégicas; segundo, destruir las plantaciones de los combatientes por la libertad y de la población, obligándoles a abandonar las zonas liberadas; y tercero, obligar a los combatientes por la libertad a salir de las zonas liberadas que habían sido contaminadas y a capitular o a buscar refugio en zonas más accesibles a las fuerzas portuguesas. El Sr. Lubaki describió con más detalles estos productos y sus efectos sobre ciertas plantas y sobre el ser humano, así como sus consecuencias para el Territorio, de la manera siguiente:

Productos químicos que esterilizan el suelo. Descripción: líquidos; cuando son rociados desde aviones tipo Dakota se transforman en gases altamente concentrados. Color: blanco. Olor: como el DDT y acre. Sabor: ácido. Efectos sobre las plantas y el suelo: desfoliación de las plantas en forma más rápida que con el uso de herbicidas. El suelo se vuelve completamente improductivo y aparecen sólo ciertas plantas silvestres unos pocos meses después de la contaminación.

Creemos que estos productos son o bien herbicidas altamente concentrados, o bien herbicidas mezclados con otros agentes para combinar los efectos característicos de unos y otros.

Como en el caso de los herbicidas y desfoliantes, estos productos son nocivos incluso para los seres humanos. Su ingestión, ya sea por inadvertencia o descuido al comer plantas contaminadas, produce en general diarrea y cólico, generalmente fatales. Asimismo, los niños que han tenido contacto con estos agentes han sufrido lesiones en los ojos, los pulmones y los intestinos. Dos niños de pocos meses murieron después de haber sido rociados con estos productos químicos, habiendo sufrido convulsiones terribles que duraron respectivamente 30 minutos y 42 minutos.

Agentes letales. Descripción: gas. Color: blanco o gris. Olor: acre. Gusto: ácido. Efectos sobre los seres humanos: a) tos acompañada de convulsiones; lagrimeo e inflamación de los ojos; b) sensación de quemadura en la piel, tos, vómitos, fatiga general.

Nos hemos dado cuenta de que en ciertas zonas los productos del tipo letal que encontramos no producen los mismos efectos sobre las personas contaminadas con ellos que en otras zonas. Es decir, en ciertas zonas los efectos son muy violentos y casi siempre fatales, mientras que en otras son menos violentos y rara vez fatales. Creemos que las fuerzas portuguesas emplean uno u otro tipo de concentración, según tengan por objetivo el simple hostigamiento o el genocidio.

La consecuencia más nefasta, tanto inmediata como a largo plazo, de esta guerra vergonzosa de represión es sin duda la contaminación resultante. Con sus acciones, los colonialistas portugueses están condenando a Angola, como Territorio y como nación, a pagar el precio de su odiosa presencia por medio de los horrores de una atmósfera irrespirable, de la esterilidad de su suelo otrora fértil, la destrucción de la flora y de la fauna del país y, sobre todo, de la desaparición de miles de millones de insectos que la naturaleza necesita para su continuación y crecimiento. Los colonialistas portugueses dejarán tras ellos el cólera, la tuberculosis, la lepra, la tifoidea y toda una serie de enfermedades resultantes de las condiciones bárbaras en que llevan a cabo su guerra de represión. En resumen, dejarán un legado de miseria física, combinado con la destrucción de aldeas, familias y seres humanos.

A modo de ejemplo, el siguiente es un cuadro estadístico en la esfera de la sanidad relativo a ciertas zonas de Angola de 1969 a 1971:

ENFERMEDADES	1969	1970	1971
Tuberculosis	59 casos	119 casos	537 casos
Tifoidea	102	237	1 068
Lepra	19	87	249
Asma	893	2 976	3 672
Diarrea fatal	473	1 561	2 937
Abortos	353	693	1 007
Nacimientos prematuros	87	322	653

¿A qué podemos atribuir estos aumentos si no a la intensificación del uso de agentes químicos por las fuerzas portuguesas en sus actos de represión? Además, estos hechos también explican por qué está aumentando el número de enfermedades mortales entre los refugiados de Angola en la República del Zaire. Estos mismos refugiados han tenido que atravesar centenares de kilómetros de zonas boscosas contaminadas para poder llegar al Zaire (RT.142).

412. El Sr. Samuel Abrigada declaró que la guerra química se llevaba a cabo en la región septentrional de Angola, que se extendía unos 150 kilómetros desde el sur del Zaire hasta aproximadamente el paralelo 31; la zona norcentral, que comprendía los distritos de Malange y de Cuanza Sur, la zona oriental que incluía los distritos de Luanda y Moxico;

y la zona septentrional, donde están situados los distritos de Uige, Zaire, Luanda y Cuanza Norte. La guerra química llevada a cabo por las fuerzas portuguesas se concentraba en la selva virgen, debido a que la población autóctona frecuentemente se refugiaba allí. El testigo confirmó la información proporcionada por el Sr. Lubaki en el sentido de que el empeoramiento de la situación médico-sanitaria de Angola de 1969 a 1971 26/ era el resultado de la guerra química (RT.142).

413. El Dr. Sebastiao Roberto -un médico que presta sus servicios en el Centro Sara del Hospital Kingantoko, situado cerca de Kinshasa, en el Zaire, donde son recibidos y tratados la mayoría de los refugiados enfermos procedentes del interior de Angola- declaró que algunos pacientes con lesiones causadas por el napalm y otros productos o agentes químicos eran recibidos en el Centro pero que la mayoría de ellos moría en camino. El Dr. Roberto testimonió que había recibido a tres pacientes que sufrían graves quemaduras y que había podido salvar a dos; el tercero, una mujer murió porque había quedado demasiado afectada por los agentes químicos. En marzo de 1972 había recibido a varios pacientes que sufrían de diarrea, todos los cuales murieron. Un análisis realizado por un laboratorio importante, a petición del Dr. Roberto, confirmó que no se trataba de casos de cólera, como lo había sospechado al principio, sino de diarrea tóxica causada por agentes químicos. El testigo concluyó diciendo que las trazas de productos químicos halladas en los pacientes indicaban definitivamente que las fuerzas portuguesas habían utilizado la guerra química en Angola (RT.145).

414. El Sr. Antonio Martins, Secretario de Educación de las zonas liberadas de Angola, declaró que entre 1970 y 1972 habían sido destruidas 39 escuelas por los bombardeos en las zonas de Caxito, Ambriz, Dembos y Cuanza Norte, y que todos los días, por lo general de las 8 a las 12 horas y de las 14 a las 15 horas, eran bombardeadas las aldeas y las escuelas, lo que hacía imposible la continuación de un programa coherente de enseñanza. Como las escuelas generalmente se construyen a la sombra de los árboles, diariamente se lanzaban productos químicos desde los aviones portugueses, haciendo que cayeran las hojas de los árboles y que las escuelas quedaran visibles y expuestas. El producto químico rociado era una sustancia semejante a una nube, un líquido blanco que tenía la apariencia de aceite sobre las hojas. Según el testigo, una vez que los aviones descubrían dónde estaban las escuelas, las bombardeaban. Algunos de los niños podían huir; otros morían en el acto. Dijo que los bombardeos habían causado la muerte de 11 alumnos de la escuela de Santa María en Kikulungo; 12 niños de la región de Ambriz; dos de Caxito y cuatro niños de Santa Cruz. El Sr. Martins testimonió además que había visto personalmente el bombardeo de la escuela de Sao Fernandes, a cinco kilómetros de su casa, el 7 de marzo de 1972 a las 10 horas, cuando a uno de sus alumnos, Domingo Rodrigues Miguel, que fue capturado vivo, le cortaron el brazo derecho y la oreja izquierda los soldados portugueses que bajaron de seis helicópteros 27/. Se informó que el bombardeo fue realizado por ocho aviones a reacción, tres del tipo Dakota adaptados para operaciones en la selva, y dos bombarderos seguidos de helicópteros. El testigo también declaró que el 12 de enero de 1972 fue destruido por los bombardeos un hospital en Coba, Consejo de Ambriz, distrito de Luanda, con una bandera de la Cruz Roja visible, como consecuencia de lo cual murieron seis de sus pacientes. El testigo se encontraba allí cuando cayó la

---

26/ Véase el párrafo 411.

27/ Véase también el párrafo 372.

primera bomba y logó huir con su hijo mayor, que estaba enfermo y hospitalizado allí. El Sr. Martins agregó que los bombardeos diarios amenazaban la estabilidad de los programas educacionales de las zonas liberadas. Cuando los maestros veían un avión de reconocimiento en determinada zona, se daban cuenta de que a continuación vendrían los bombardeos, se veían obligados a tomar medidas para trasladar a los alumnos a otra escuela, fuera de la zona de bombardeo (RT.143).

415. La Sra. Martha Fernandes atestiguó que durante 1970 y 1972 las fuerzas portuguesas intensificaron los bombardeos, que ocurrían diariamente. Los bombardeos se hacían generalmente contra centros civiles y urbanos de la zona de Mata-Kanga. La Sra. Fernandes había observado a mujeres embarazadas que tenían abortos y a mujeres que daban a luz a niños que morían pocos minutos o pocas horas después. La testigo citó los casos de Doña Joana Kanga, quien murió el 12 de junio de 1971 como resultado de las condiciones en que dio a luz en una zona sometida a los bombardeos aéreos, sin ningún medio de protección; de la Sra. Conceicao Zinga, quien murió en las mismas condiciones el 2 de octubre de 1970; y de la Sra. Rebecca Conga, quien murió en las mismas circunstancias el 15 de junio de 1972. La Sra. Fernandes atestiguó además que en la región en que vivían se rociaba con productos químicos, al principio una vez al año y después gradualmente se llegó a cada tres meses, causando varias enfermedades tales como la neumonía y la tuberculosis (RT.143).

b) Testimonios relativos a Mozambique

416. En un despacho periodístico reciente 28/ puesto a disposición del Grupo se sostiene que la fuerza aérea portuguesa, ayudada por mercenarios sudafricanos, está llevando a cabo la guerra química contra las posiciones nacionalistas en las selvas del norte de Mozambique. Según el artículo del periódico, en las primeras semanas de abril de 1972 empezaron las misiones secretas realizadas por aeronaves fuertemente armadas que acompañaban aviones rociadores de desfoliantes con el propósito de destruir el suministro de alimentos de los guerrilleros. Se dice que uno de los productos químicos utilizados contra las zonas del distrito de Cabo Delgado es el Convolvotox, que no sólo destruye las plantas latifoliadas sino que también obstaculiza la fertilización. Según se informó, la base de operaciones estaba en Nangololo, y a medida que los aviones sudafricanos pasaban rasando la selva al nivel de las copas de los árboles, rociando la zona con los agentes químicos, aviones portugueses del tipo Harvard les precedían disparando con ametralladoras y cohetes contra el monte, mientras que, más arriba, dos aviones a reacción Fiat de la fuerza aérea dejaban caer bombas de 50 y 100 kilogramos.

417. El Sr. Chissano atestiguó que desde comienzos de 1972 el ejército portugués utilizaba armas químicas en la zona liberada de Cabo Delgado, en Mozambique, con miras a destruir los medios de subsistencia de la población. Citó el testimonio del experto agrícola Anastasio Saidi, quien había destacado que se habían dañado y destruido los cultivos de mandioca, batata, banana, papaya y calabaza. El Sr. Chissano corroboró la información contenida en el despacho mencionado en el párrafo precedente. Declaró además que se habían utilizado bombas de napalm y de otra clase, tales como bombas de presión, y que sabía de casos de personas muertas o heridas por los bombardeos con napalm. El testigo declaró que los portugueses apuntaban sus bombas contra los cultivos, primero

que todo, para hacer morir de hambre no sólo a los soldados del FRELIMO sino también a la población civil y para obligar a la población a ir a las aldeas estratégicas y a los campamentos de concentración (RT.135).

418. En testimonio prestado por escrito, el Sr. Anastasio Saidi indicó que a comienzos de 1972, en la provincia de Cabo Delgado, en la zona comprendida entre la carretera de Mocimboa da Praia a Mueda y el río Messalo, los portugueses empezaron a utilizar herbicidas para destruir los cultivos de la población. Se empleaban cuatro aviones en estas operaciones: dos de ellos hacían la rociadura mientras los otros dos los protegían. Dos o tres días después de la rociadura, la mayoría de las plantas empezaba a secarse. Las papas se pudrieron después de que las hojas se habían secado completamente. Los bananos, los marañones, las plantas de mandioca y los papayos se secaron completamente.

419. La Srta. Mariana Matola declaró que las fuerzas portuguesas habían lanzado bombas desde aviones sobre los campos cultivados, destruyendo los cultivos de los aldeanos, quienes entonces se vieron obligados a huir de sus aldeas hacia zonas de difícil acceso para los portugueses, alrededor de Catur, en la provincia de Niassa, en Mozambique (RT.136). Otro testigo, el Sr. Faustino Kambeu, afirmó que había habido matanzas, incursiones aéreas sistemáticas contra los cultivos y la población civil, y traslados de personas desde sus aldeas a las llamadas "aldeas protegidas", las cuales se decía que en realidad eran campamentos de concentración (RT.138).

### 3. Denuncias relativas a la discriminación racial

#### a) Magnitud de la discriminación racial

420. El Sr. Joaquim Chissano, se quejó de que, a pesar de que el Decreto-ley Nº 43.893, de 6 de septiembre de 1961, había anulado la Ley de 1954 sobre la condición de las personas autóctonas de nacionalidad portuguesa en las provincias de Guinea, Angola y Mozambique, conocida como el Estatuto de los Nativos, se la seguía aplicando en Mozambique, donde se utilizaban diferentes documentos de identificación para distinguir entre los portugueses blancos y los africanos nativos. Uno era la tarjeta de identidad para los portugueses blancos (bilhete de identidade); el otro era la libreta de identidad para los africanos autóctonos (caderneta de identidade). La tarjeta de identidad para los portugueses blancos era una simple tarjeta; la libreta de identidad para el africano negro o el africano autóctono (indigena, ahora llamado autoctona) era una libreta con varias páginas donde asentar el registro de los pagos de impuestos de cada africano nativo, o autoctona, como se solía hacer antes de la abolición del Estatuto de los Nativos de 1961 (RT.135). Otro testigo, el Sr. Kambeu, dijo que, para que se le considerara assimilado (ahora llamado registrado), un africano nativo (o autoctona) que hubiera alcanzado cierto nivel de educación podía obtener una tarjeta de identidad, es decir, la clase de tarjeta de identidad que tenía un portugués blanco. El Sr. Kambeu señaló que, no obstante, los africanos negros a quienes se clasificaba como registrados (anteriormente assimilados) eran considerados por las autoridades portuguesas como un grupo separado y que las autoridades portuguesas podían anular en cualquier momento la tarjeta de identidad otorgada a un africano negro registrado; esa misma libertad no se tomaba con la tarjeta de identidad otorgada a un portugués blanco (RT.138).



421. El Sr. Chissano declaró que si un portugués salía después de las 21 horas nadie le pedía que presentara sus documentos de identidad, pero que si se veía a un africano negro en la calle, de noche, el agente de policía lo detenía y le preguntaba si tenía una caderneta indigena. Si presentaba la libreta de identidad, quedaba en libertad pero no podía permanecer en las calles después de las 21 horas. El Sr. Chissano dijo además que había pruebas de discriminación en todas partes: en la construcción de la presa de Cabora Bassa, donde el centro de la aldea Tsongo era para los europeos y los barrios de Tsongo para los obreros negros; en el ejército, donde no había oficiales portugueses negros, con excepción de uno o dos designados de conformidad con la nueva estrategia de la guerra psicológica; en los restaurantes de Lourenço Marques o Beira, donde siempre servían sólo nativos negros, nunca blancos; en los campos, donde nunca se veía a un blanco laborar en trabajos forzados en las plantaciones de azúcar; y en la iglesia, donde los asientos delanteros se reservaban para los blancos mientras que los asientos para los africanos negros, si es que existían, se los encontraban siempre en algún lugar detrás, en un sector separado. El Sr. Chissano dio más detalles sobre el trato discriminatorio a que se sometía a los africanos negros en las iglesias de Mozambique, declarando que la Iglesia Católica siempre había cooperado con el Gobierno de Portugal. La religión católica, según se sabía, era la religión del Estado, y los sacerdotes colaboraban con las autoridades portuguesas alentando a los africanos a obedecer al Estado. Antes de toda ceremonia eclesiástica, la gente era obligada a cantar el himno nacional de Portugal y saludar la bandera portuguesa. Si los nativos no obedecían a esta orden en la iglesia, o si se sentaban en lugares en los que no tenían derecho de hacerlo, se encargaba del castigo el administrador portugués o chefe do posto y no el sacerdote, aunque el incidente hubiera ocurrido en la iglesia. Los testigos declararon que se había detenido a algunos sacerdotes porque se habían rebelado al ver que los portugueses empleaban la iglesia para fomentar sus fines políticos (RT.135).

422. El Sr. Paulo Jorge confirmó el testimonio escrito<sup>29/</sup> del Padre Waldo García de la Congregación del Espíritu Santo -recientemente expulsado de Angola, donde durante varios años fue profesor en el Seminario Mayor de Nova Lisboa- en el sentido de que en Angola había iglesias separadas para los blancos y los negros, y que había parroquias reservadas exclusivamente para los blancos, mientras que los negros iban a lo que se llamaban misiones. El Sr. Jorge dijo que, en particular en las grandes poblaciones, había iglesias a las que iban juntos blancos y negros, pero que durante la misa los blancos se sentaban de un lado y los negros del otro; y que incluso los blancos y los negros utilizaban puertas diferentes para entrar en la iglesia. Según el testigo, los sacerdotes aceptaban esta política porque estaban prácticamente obligados por la policía de seguridad (DGS) a adoptar esas actitudes (RT.139; también RT.141 (testimonio del Sr. Caetano)).

423. El Sr. Chissano citó los casos del abogado Domingos Aronca, así como los de Dinis Mondlane y Joao Baptista, como ejemplos típicos de discriminación racial aplicada a los nativos de los territorios africanos bajo dominación portuguesa. El abogado Aronca fue detenido, condenado bajo falsas acusaciones y enviado a Portugal por razones de seguridad. Como cayó enfermo presentó una petición, junto con otros abogados, para obtener su libertad. Según se informa, los abogados blancos quedaron en libertad condicional, mientras que a Aronca se lo mantuvo en prisión (RT.132).

---

<sup>29/</sup> Véase Angola in Arms (órgano de información publicado por el MPLA en Tanzania), vol. 2, abril/mayo de 1972, pág. 7.

424. El Sr. Faustino Kambeu, miembro ejecutivo del Comité Revolucionario de Mozambique (COREMO), declaró que en Mozambique había discriminación en las esferas política y civil. Se citó una declaración del actual gobernador militar, General Kaulza de Arriaga, para demostrar que las oportunidades de los africanos nativos para tomar parte en el gobierno central eran muy limitadas, debido a que el adelanto de los africanos se consideraba perjudicial para los intereses de los colonos blancos. La declaración dice lo siguiente: "Podremos mantener la autoridad de los blancos en Angola y Mozambique -que es un objetivo nacional- sólo si el crecimiento de la población blanca es tal que acompaña y supera ligeramente la producción de negros evolucionados 30/. Porque, si sucede lo contrario, con seguridad ocurrirán uno de estos dos hechos: o establecemos el apartheid o tenemos gobiernos de negros con los resultados que ya hemos visto." (RT.138).

425. Según el Sr. Kambeu, la deplorable situación de los africanos nativos en las esferas de la economía y la educación les hacía difícil adquirir preparación para puestos superiores. La verdadera contratación de personal en la administración pública había revelado prácticas y tendencias discriminatorias por motivos de raza, y la situación era agravada por la constante entrada de colonos blancos. El objetivo de la colonización blanca en los territorios era reducir en todo lo posible la oportunidad de los africanos de obtener puestos mejor pagados. El testigo citó otra declaración de política del Gobernador Kaulza de Arriaga sobre el asunto, que dice lo siguiente:

"El povoamento /asentamiento/ no tiene por objeto equilibrar el poder demográfico de los negros, sino de equilibrar el número de negros evolucionados, porque con los "negros de las tribus" no hay problema aunque aumenten en gran cantidad. El problema es con los negros evolucionados. Como gracias a Dios no tenemos la posibilidad de hacer adelantar a todos los negros, es posible, casi seguro, que podemos asentar aquí bastante gente como para equilibrar los negros evolucionados."

El testigo añadió que, en la esfera de la economía, la discriminación había sido expresada por el Gobernador en los siguientes términos:

"Si el "subsidio familiar" tiene que ser elevado en la metrópoli -Portugal- a fin de que la gente tenga muchos hijos, no podemos hacer lo mismo con los negros, porque de ser así ellos también tendrán muchos hijos." (RT.138).

426. El Sr. Sebastiao Sobrinho declaró que en el Territorio no existía igualdad entre los angoleños nativos y los portugueses blancos. Recordó la cuestión de las diferentes tarjetas de identidad, declarando que cuando un padre inscribía un niño recién nacido y solicitaba su partida de nacimiento, el documento tenía el dibujo de un ser humano con cola de animal si se trataba de un niño negro, mientras que la partida de nacimiento de un niño blanco no tenía ese emblema. Mencionó también casos de malos tratos dados por los soldados portugueses a mujeres angoleñas, quienes, presuntamente, eran meros instrumentos para ellos. El Sr. Sebastiao Sobrinho declaró que si un portugués deseaba tomar la hija de un angoleño negro, el padre no podía oponerse porque corría el riesgo de perder la vida; mientras que un angoleño negro no se atrevería a tener relaciones con una portuguesa blanca porque, a su vez, sería asesinado inmediatamente (RT.143).

---

30/ "Negros evolucionados" significa, literalmente, "negros evolucionados".

b) Trabajo forzoso y discriminación en materia de salarios 31/

427. El Sr. Ennals declaró que la discriminación en lo referente a las condiciones de trabajo y los salarios era cosa corriente en los territorios africanos bajo dominación portuguesa. El testimonio del Sr. Ennals incluía también informes sobre el trabajo forzoso (RT.130).

428. El Sr. Luvualu declaró que el 57% de los asalariados de Angola hacían trabajo forzoso, particularmente en los sectores primarios, en los que se había alcanzado la espantosa cifra del 89%. Declaró asimismo que formas particularmente atroces de trabajo forzoso se llevaban a cabo mediante el alistamiento obligatorio de mujeres y niños en la construcción y mantenimiento de caminos, y mediante el trabajo no pagado como forma de castigo por razones falsas. En vez de emplear mano de obra pagada, la administración portuguesa enviaba siempre a la policía para ponerse en contacto con los jefes tradicionales, que a continuación movilizaban a los angoleños para trabajar en obras viales, o fabricar ladrillos y construir casas para la administración, sin recibir salario alguno. Cuando una mujer no podía trabajar porque estaba enferma, se llevaban en su lugar a trabajar a niños muy pequeños. El propio testigo había sufrido esa experiencia cuando tenía 12 años de edad. Añadió que si las mujeres y los niños rechazaban el trabajo asignado, se los "detenía" para que lo hicieran, y que debían siempre traerse sus propios alimentos para comer en los caminos o donde tuvieran que trabajar. Cuando habían terminado el trabajo asignado se les permitía regresar a su casa (RT.139).

429. El Sr. Sebastiao Sobrinho declaró que durante la cosecha de café se enviaban a los angoleños nativos a trabajar en las plantaciones de los colonos portugueses para recoger el café. Al final de la cosecha se daba a los trabajadores una manta ordinaria, 900 escudos 32/, sobre los cuales tenían que pagar impuestos, y alguna ropa que consistía en dos camisas y un par de pantalones. De los 900 escudos, el trabajador tenía que pagar sus impuestos, y si no tenía bastante dinero para pagarlos, se le obligaba a recurrir a los miembros de su familia para que lo ayudaran. Si todavía no llegaba a tener la suma necesaria para pagar los impuestos, se le imponía un severo castigo. Incluso se obligaba a sus hijos a trabajar para los colonos portugueses durante la cosecha de café. Al final de la cosecha se le daba alguna ropa, una camisa caqui, un par de pantalones caqui, una manta y 60 escudos. El testigo añadió que se obligaba a las mujeres a trabajar en los caminos en todo momento sin recibir pago alguno. Algunas veces les daban un poco de pescado podrido y harina de mandioca -simplemente para que los portugueses pudiesen decir que las trataban bien y engañar así al público. Los portugueses con frecuencia castigaban a los trabajadores angoleños con la palmatoria 33/, comenzando con 100 golpes. Si un angoleño no terminaba el trabajo que se le asignaba en la plantación, recibía 50 golpes de palmatoria en las manos, 25 en los pies y 25 en las nalgas.

---

31/ Se incluirá información detallada sobre los sindicatos, la contratación forzosa de trabajadores y el trabajo forzoso en el informe que el Grupo presentará al Consejo Económico y Social en cumplimiento de la resolución 1599 (L).

32/ Un escudo equivale a 0,035 de dólar de los EE.UU.

33/ La palmatoria se describe en la nota 3, párr. 347.

Algunas veces, ciertos jefes empleaban el látigo. Cuando tenían que reprender a los angoleños, en vez de limitarse a las palabras, los azotaban (RT.143). El Sr. Luvualu declaró también que el trabajador angoleño era una víctima de la discriminación en materia de salarios, mencionando un informe secreto del Dr. Alfonso Mende, director del Instituto de Trabajo y Bienestar y Seguridad Sociales de Angola, en el sentido de que el salario mensual medio de los trabajadores agrícolas y los trabajadores que hacían trabajos similares, siempre de origen africano, era de 600 escudos, es decir, 22 dólares, mientras que el de los trabajadores no agrícolas, generalmente de origen europeo, era seis veces superior (RT.139). Según una declaración del Sr. Vida García, en las plantaciones el salario aproximado de los trabajadores es 9 escudos por día y no hay escuelas ni asistencia médica (RT.143).

430. Otro testigo, el Sr. Paulo Jorge, recordó que, a pesar de que existía una ley en virtud de la cual las personas debían recibir el mismo salario por el mismo trabajo, había discriminación racial, porque un angoleño negro no recibía el mismo pago que un portugués blanco, aunque la ley decía que todos eran ciudadanos portugueses (RT.139).

431. Según el Sr. Muila Mavungo, que estuvo preso en São Nicolao de 1963 a 1965, las mujeres y los niños prisioneros juntos con sus esposos y padres en el campamento de São Nicolao eran obligados a hacer el mismo trabajo pesado, a la par de los presos comunes, trabajando en las canteras, los campos y las minas de sal (RT.140) 34/.

432. En una declaración escrita, el Sr. Kemiasse Macossa manifestó que en abril de 1971, cuando llegó a la frontera, las autoridades portuguesas le quitaron su dinero y su radio para pagar impuestos, sin darle un recibo. Dijo que, un mes más tarde, los soldados llegaron a Massapa y se llevaron a cuatro personas: Quediasse, Castro, Henriques y él mismo. Los llevaron a Mague a construir un aeropuerto. Trabajaron dos meses y, al final, les dieron 50.00 escudos, pero no habían recibido ni comida ni alojamiento. Esto se lo tenían que proporcionar ellos mismos, según dijo, y cuando trabajaban, si se detenían, aunque fuera por un plazo breve, los castigaban. Declaró además que en Mague había muchas personas obligadas a trabajar en las mismas condiciones.

433. El Sr. Adao Gomes declaró que en abril de 1971, cuando estaba internado en una aldea estratégica, se le obligó a trabajar junto con otros presos políticos sin recibir remuneración. A pesar de un dolor constante debido a una dislocación de la columna vertebral, se le obligó a trabajar desde las 6 hasta las 19 horas, siete días por semana sin ningún descanso (RT.142) 35/.

434. El Sr. Chissano suministró información que le había transmitido un trabajador de Cabora Bassa que se había escapado para unirse a los combatientes por la libertad. Según ese trabajador, la mayoría de las personas que están construyendo la represa de Cabora Bassa son traídas de provincias que se encuentran muy distantes de la zona. En cambio, no llevan a la presa de Cabora Bassa a personas de la propia provincia y de la zona donde el FRELIMO es bien conocido. Así, a fin de conseguir personas que vayan a trabajar a Cabora Bassa, el sistema de reclutamiento forzoso de la mano de obra se emplea del mismo modo que para el trabajo en las plantaciones de caña de azúcar.

---

34/ Véase el párrafo 333.

35/ Véase también el párrafo 370.

435. El Sr. Chissano dijo que había muchas maneras de aplicar los procedimientos de trabajo forzoso en los territorios africanos bajo dominación portuguesa. Uno consistía en no dar empleo a las personas en los lugares donde querían trabajar, a fin de decir después que eran desocupados. Como era prohibido estar desocupado, se les daba un trabajo por la fuerza. Otra forma era ir al jefe de la tribu y solicitarle que suministrara para el proyecto de Cabora Bassa una docena de "cabezas", como los portugueses llaman a los trabajadores africanos. A veces esa contribución de trabajadores se la llama una "contribución de brazos" ("contribuição braçal"), lo que significa una contribución hecha con los propios brazos (RT.135).

436. El Sr. E. E. Njolomolo declaró que después de que fuera detenido en julio de 1970 con sus padres en la aldea de Chimpene, provincia de Tete, Mozambique, bajo la sospecha de esconder a guerrilleros del FRELIMO, se les obligó a hacer trabajo forzoso bajo la escolta de soldados portugueses: barrer oficinas o trabajar en los caminos. Al final del día de trabajo, los soldados los ataban y los llevaban de vuelta a la prisión, donde, según afirmó, se les castigaba y hacía dormir encadenados (RT.136) 36/.

437. Según el Sr. de Andrade, en Angola había más de 500.000 trabajadores asalariados en los sectores privados, pero sólo 60.000 pertenecían a sindicatos. Esto significaba que los sindicatos estaban completamente controlados por el Gobierno. Como los afiliados europeos eran prácticamente 50.000, se podía ver que la discriminación en el empleo realmente existía, ya que el número de afiliados inscritos en los sindicatos era poco mayor que el número de asalariados europeos. El testigo declaró que si las leyes portuguesas estuvieran destinadas realmente a proteger los derechos de todos los trabajadores no serían obligatorias para los trabajadores europeos únicamente, sino que también exigirían que los africanos se afiliaran. No obstante, en su forma actual, los sindicatos estaban controlados por los empleadores europeos, no por los africanos (RT.141).

c) Discriminación en materia de educación y capacitación

438. El Sr. Kambeu declaró que los niños africanos sentían profundamente los efectos de la discriminación racial en materia de educación y capacitación. La discriminación en la educación se caracterizaba por la existencia de un sistema doble de educación primaria y asignación de fondos. Había educación primaria obligatoria para los niños del llamado sector civilizado de la población y sólo educación primaria voluntaria para los niños africanos. Un sistema comprende lo que se llaman postos escolares limitados a los hijos de los africanos que no son asimilados o registrados. /Los niños que están en los postos escolares no tienen relación con los portugueses/. El otro sistema, el de las zonas urbanas, comprende las escuelas a las que asisten los niños de los llamados africanos civilizados o asimilados, ahora llamados registrados, y los niños de los colonos blancos. El testigo citó lo que denominó la "política de integración" de Portugal, de la manera siguiente: "No tenemos que ser demasiado eficaces en la promoción de los africanos. Debemos promoverlos, pero sin exageración" (RT.138).

439. El Sr. de Andrade declaró que la educación en Angola, como en todos los territorios bajo dominación portuguesa, siempre había sido una educación para la clase privilegiada, una educación discriminatoria basada en la raza y que las escuelas se creaban donde había

---

36/ Véanse también los párrafos 347, 348 y 384.

centros urbanos y donde la población europea las necesitaban. La población africana -que hasta cierta época eran considerados como asimilados, es decir, los angoleños pertenecientes al grupo de los llamados auxiliares coloniales- sólo pueden aspirar a las vacantes de esas escuelas, tanto primarias como secundarias. Esto ocurría incluso antes de la introducción de la educación superior. Debido a las diferentes condiciones sociales y al hecho de que las escuelas se crearon donde había una población europea, ya existía una discriminación social y económica básica que determinaba la distribución y posibilidades de admisión en esas escuelas. El testigo dijo que cerca del 40% de los africanos negros asistían a escuelas secundarias y que menos del 10% pasaban a la educación superior. Agregó que las cifras se basaban en cálculos preparados con arreglo a la información suministrada por grupos clandestino de nacionalistas en las poblaciones y en todas partes de Angola, cálculos que se podían encontrar en los informes de las Naciones Unidas sobre la educación secundaria y superior. El Sr. de Andrade dijo además que la población africana no tenía las mismas oportunidades que la europea porque, desde el punto de vista económico y social, se discriminaba contra los africanos. La educación debía pagarse en todos los niveles, y las familias africanas, naturalmente, como todas las familias que estaban integradas en una sociedad colonialista, no tenían los medios para pagar esos estudios. A ello se debía que el porcentaje de estudiantes africanos fuera siempre considerablemente inferior al de los estudiantes europeos. El costo de la educación secundaria y superior no guardaba proporción con los ingresos de las familias africanas (RT.141).

440. El Sr. Sebastien Lubaki declaró que en Angola la educación era sistemáticamente reprimida, particularmente en lo que se refería a la gente del pueblo, como se podía observar por el hecho de que la gran mayoría de los refugiados que llegaban a los cuarteles nacionalistas -el 80%- eran analfabetos. Esta situación, creada deliberada y expresamente por los portugueses, estaba dictada por su deseo de no educar a los angoleños, pues el angoleño educado era capaz de reemplazar al portugués en un puesto determinado. Los escasos estudiantes negros que asistían a las escuelas oficiales en todo el territorio de Angola eran hijos de los funcionarios nativos asimilados de la administración pública. Por ello, el número de niños blancos que ingresaban a las escuelas excedían con mucho al de los niños negros. El Sr. Lubaki rindió homenaje a los misioneros que en 1920 ya habían creado escuelas primarias; y de otra manera no hubiera existido ni siquiera el pequeño número de intelectuales, ya que el Estado no había creado ninguna escuela oficial antes de 1950. El Sr. Lubaki dijo que, a pesar de la creación de esas escuelas estatales, se habían hecho intentos para frenar el desarrollo de la educación en general en el Territorio. Los estudiantes africanos negros debían estudiar ocho años para terminar los cuatro años de escuela primaria, por lo que los angoleños no podían tener una educación completa. Además, las masas no podían enviar a sus hijos a las escuelas para los hijos de los funcionarios públicos y registrados (RT.142).

441. El Sr. Abrigada señaló que, no obstante el número cada vez mayor de estudiantes en las escuelas elementales de Angola, el número de escolares negros seguía siendo el mismo. La población blanca había aumentado de 200.000 a 500.000 habitantes, con un aumento correspondiente en el número de escolares blancos, pero, respecto de los africanos, la cifra seguía siendo prácticamente la misma (RT.142).

d) Discriminación en materia de tenencia de tierras y reasentamiento forzado de africanos

442. El Sr. Chissano declaró que con motivo de la construcción de la presa de Cabora Bassa se había desalojado a una gran parte de la población nativa -muchos cientos de miles- y se la había reasentado en campamentos de concentración, primero a los efectos de construir la presa y segundo para facilitar la entrada de nuevos inmigrantes portugueses y otros blancos que deseaban establecerse en la zona, en donde se estaba construyendo un sistema de irrigación para beneficio de la nueva población blanca. El testigo sostuvo que la corriente de inmigrantes tenía por objeto lograr el desequilibrio previsto en "Lecciones de estrategia" del general Kaulza de Arriaga <sup>37/</sup>, para crear lo que ellos llamaban "un nuevo Brasil". El testigo recordó la experiencia anterior del pueblo de Mozambique cuando se construyó una presa en el valle de Limpopo, en 1950, para beneficio de los portugueses muy pobres que vinieron de Portugal y se enriquecieron en el Territorio (RT.135).

443. Según el Sr. Kambeu, otro aspecto de la discriminación racial se reflejaba en la existencia de leyes separadas para los africanos, a quienes se clasificaban de "población rural", clasificación ésta que excluía a los blancos que vivían en la misma zona (RT.138).

444. El Sr. Lubaki declaró que en Angola se continuaban produciendo casos de discriminación, opresión y explotación. La supremacía de los derechos de los blancos sobre los derechos de los negros se afianzó más a consecuencia de una serie de maniobras de la administración portuguesa, que trató de consolidar su control individual y colectivo sobre los africanos en todos los niveles, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, a fin de sofocar cualquier intento de realizar una llamada subversión. El testigo afirmó que estas sórdidas maniobras generalmente comprendían una serie de operaciones violentas caracterizadas por incursiones constantes en la ciudad de Luanda, una vez al mes; detecciones y matanzas en las prisiones, y bombardeos, tiroteos y destrucción de aldeas en las zonas rurales. El Sr. Lubaki dijo que a principios de enero de 1972, los administradores de la región de Humbe, en el distrito angoleño de Cunene, recibieron órdenes del Gobierno de realizar el traslado de varias aldeas africanas hacia regiones más meridionales dentro del contexto de una reorganización del Territorio, que debía preceder a las diferentes etapas de la "operación Cunene", incluida la construcción de la presa de Cunene y la creación de asentamientos para portugueses y sudafricanos blancos. Manifestó que, sabiendo que los aldeanos africanos no estaban de acuerdo con esta nueva medida de expropiación de sus tierras y sus bienes, los administradores decidieron emplear primero ciertas artimañas y luego recurrir al uso de la fuerza para asegurar que se ejecutaran sus órdenes. La consecuencia de esta situación, había sido un levantamiento del pueblo, que se había extendido a todo el distrito de Cunene. El testigo dijo que según información recibida por los comandantes nacionalistas de la región oriental de Angola, más de 3.000 africanos habían sido muertos y más de 17.000 detenidos y trasladados a campamentos de concentración en el desierto de Moçamedes (RT.142) <sup>38/</sup>.

---

<sup>37/</sup> Véase el párrafo 425.

<sup>38/</sup> Véase también el párrafo 339.

445. El Sr. Abrigada señaló que se había perseguido y expulsado a los africanos autóctonos de las tierras fértiles de la zona del Colonato de Ceta, a lo largo del río Cunene, en Angola, en donde se iba a realizar un proyecto de irrigación en gran escala, para que la tierra pudiera ser utilizada para asentamientos de inmigrantes portugueses y otros colonos blancos. El Sr. Abrigada declaró que más de 200 granjeros sudafricanos ya habían comprado tierras a lo largo del valle del Cunene para radicarse allí (RT.142). Este testimonio fue confirmado por el del Sr. Joao Ngonga, quien declaró que los portugueses querían expulsar a los habitantes nativos del fértil valle del Cunene y apoderarse de la tierra para asentar allí a unos 500.000 portugueses. Dijo que por lo menos 1.000 nativos angoleños serían expulsados de la zona de la presa de Humbe, que era la primera de 28 presas que se habrían de construir en la región. Calculó que el número total de personas que serían obligadas a reasentarse ascenderían a 100.000 aproximadamente. Recordando el incidente del Colonato de Ceta, el testigo declaró que al principio, en 1970, las autoridades portuguesas habían ordenado a los pobladores que dejaran sus tierras. Cuando los nativos se negaron, las autoridades decidieron hacer cumplir sus órdenes por la fuerza. Las fuerzas portuguesas habían atacado aldeas, capturado ganado, matado pobladores que no podían escapar y detenido a unas 17.000 personas que habían sido llevadas en vehículos y trenes al campamento de concentración de São Nicolao, en el desierto de Moçamedes (RT.143) 39/.

e) Libertad de expresión, reunión y asociación

446. El Sr. Martin Ennals, Secretario General de Amnesty International, declaró que había ciertas dificultades para obtener información en los territorios africanos bajo administración portuguesa, en donde no había libertad de palabra. Sostuvo de que si alguna persona, como había tratado de hacerlo un sacerdote en Mozambique, informaba sobre situaciones que efectivamente habían ocurrido, tal como la matanza de 100 mujeres y niños por apoyar supuestamente al FRELIMO, esa persona se arriesgaba a ser encarcelada; de hecho, actualmente había tres sacerdotes detenidos por esa causa (RT.130).

f) Libertad de circulación y de residencia

447. El Sr. Joao Jacob Caetano señaló que, a fin de impedir que los africanos autóctonos circularan libremente, la administración portuguesa había impuesto a todos los africanos la obligación de llevar consigo un certificado de residencia. En virtud de la disposición oficial, toda persona de más de 12 años de edad debía llevar consigo un certificado de residencia, pero en la zona en que él actuaba la norma se aplicaba solamente a los africanos autóctonos. Dijo que los africanos que querían trasladarse de una aldea a otra debían solicitar un permiso de salida sobre la base del certificado de residencia (RT.141).

g) Discriminación relativa a las condiciones de vida, la sanidad y el tratamiento en las prisiones

448. El Sr. de Andrade señaló que en 1971 se había producido una epidemia de fiebre amarilla en Luanda y un brote de cólera en Luanda, Lobito y Benguela como consecuencia

---

39/ Véase el párrafo 444.



de la falta de condiciones higiénicas apropiadas en las secciones africanas, los museques, que rodeaban la ciudad de Luanda, en particular en los barrios pobres en donde estaba concentrada la población autóctona. Estas epidemias no afectaron a la población europea de las ciudades, sino sólo a la población autóctona que, debido a la discriminación racial, vivía en condiciones insalubres (RT.141).

449. El Sr. J. J. Gaetano declaró que el campamento de concentración de Sao Nicolao, en el desierto de Moçamedes, estaba compuesto de tres partes: el campamento N° 1, donde existían las mejores condiciones; el campamento N° 2, donde las condiciones eran mediocres, el campamento N° 3, en que eran malas. El campamento N° 1 estaba reservado para presos políticos europeos y assimilados, el campamento N° 2 estaba reservado para assimilados que habían cometido infracciones menores y el campamento N° 3 estaba reservado para los nativos (RT.141).

## VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

450. El Grupo presenta a continuación las conclusiones y recomendaciones resultantes de las investigaciones que realizó en 1972, y pide al Secretario General que las transmita a los ministros de relaciones exteriores de los Estados Miembros.

### A. Sudáfrica

#### 1. Conclusiones

1) El Grupo tuvo la modesta satisfacción de enterarse de que, desde que comenzó sus investigaciones en 1967, han mejorado algo las condiciones de vida de los presos políticos en algunas cárceles de Sudáfrica.

2) Sin embargo, el Grupo advierte que, tanto en las comisarías de policía como en las cárceles, todavía se infligen tratos inhumanos y degradantes a las personas detenidas únicamente por su oposición a la política de apartheid del Gobierno sudafricano y en virtud de leyes retrógradas basadas en el apartheid, ya estudiadas por el Grupo.

3) Si bien ha disminuido el número de ejecuciones capitales, cabe observar que las ejecuciones de condenados no blancos son mucho más numerosas que las de blancos; análogamente, para un mismo delito (por ejemplo, la violación), el número de sentencias de muerte dictadas contra los no blancos es, con mucho, superior al de sentencias de muerte pronunciadas contra blancos.

4) Sudáfrica sigue siendo el país en que se registra el mayor número de sentencias de muerte y de ejecuciones.

5) El Grupo señala a la atención de la Comisión las condiciones inhumanas en que viven los presos en el ala de los condenados a muerte de la "cárcel de la horca" (prisión central de Pretoria).

6) La justicia sudafricana se conforma muy a menudo, por no decir casi siempre, con la versión que da la policía sudafricana de las causas de los fallecimientos sospechosos de personas no blancas en las comisarías de policía; según el Grupo, esos fallecimientos son consecuencia de las torturas que siguen aplicando los policías.

7) Un testigo declaró que nadie se atrevía a decir la verdad sobre la tortura por temor a influir en los magistrados o los jueces.

8) El caso de Mons. Winter es un ejemplo patente de persecución contra un ser humano progresista. Mons. Winter gastó todas sus economías en procesos y finalmente tuvo que "huir" por temor a que se le encarcelara.

9) El Grupo señala a la atención de la Comisión la utilización de los testigos de cargo, a quienes también se guarda incomunicados y que comparecen ante los tribunales sin haber tenido tiempo de preparar su defensa.

10) Los "territorios patrios" no son sino reservas de mano de obra negra barata para los hombres de negocios sudafricanos blancos; son tierras superpobladas, en su mayor parte áridas. En la política de los "territorios patrios" no se respetan las aspiraciones de los jefes locales. Las regalías de la explotación de minas no se pagan a las autoridades de los "territorios patrios", sino al Gobierno sudafricano: las condiciones de salud, higiene y educación son malas.

11) Se comprueba que las autoridades sudafricanas tratan de instaurar un nuevo sistema para castigar a los infractores de las leyes relativas a los salvoconductos. Los individuos que cometen una primera infracción son puestos a disposición de los granjeros blancos como mano de obra barata, pero los que reinciden son enviados a los "territorios patrios" o a campamentos de tránsito. Ese nuevo sistema puede parecer menos indignante, pero es igualmente inhumano.

12) Las autoridades sudafricanas siguen aplicando su política degradante de "reasantamiento" de las personas calificadas como "no empleables", "superfluas" o "inactivas" (mujeres, niños y ancianos).

13) El Grupo señala a la atención de la Comisión el caso de los ex presos políticos que, una vez liberados, son enviados a los "campamentos de reasantamiento", donde no pueden encontrar ningún empleo para mantener a sus familias. Esos ex presos políticos siguen sometidos a la vigilancia de la policía y su libertad de circulación es limitada.

14) La política de traslado de los trabajadores africanos se intensifica: los trabajadores son trasladados en condiciones inhumanas, y el resultado de esa política es que los trabajadores africanos permanecen separados de sus familias durante mucho tiempo.

15) El sistema de los trabajadores migrantes es una de las graves manifestaciones del apartheid; repercute en la vida familiar y en el comportamiento de los individuos.

## 2. Recomendaciones

16) El Grupo reitera sus recomendaciones anteriores en lo que se refiere al trato inhumano y degradante a que se somete a las personas detenidas y encarceladas únicamente por su oposición a la política de apartheid del Gobierno sudafricano.

17) Después de cada caso de fallecimiento sospechoso debe hacerse una investigación judicial.

18) El Grupo pide que las autoridades sudafricanas inicien una investigación judicial sobre el fallecimiento del Sr. Uthayeni Gutshela. El Sr. Gutshela murió tras un prolongado interrogatorio en la cárcel de Umtata y la policía se quedó con el certificado de defunción.

19) El Grupo recomienda a la comunidad internacional que siga de cerca las diversas causas que se sigan en Sudáfrica, y señala el proceso incoado contra cuatro indios en Pretoria el 13 de junio de 1972.

20) El Grupo recomienda que, en los casos en que las personas detenidas por su oposición a la política de apartheid necesiten ayuda financiera, se constituyan fondos internacionales para la defensa de los acusados.

21) El Grupo recomienda que se suprima pura y simplemente el nuevo sistema de contratación de mano de obra africana entre los infractores de la ley relativa a los salvoconductos.

22) El Grupo recomienda que se supriman todos los campamentos de tránsito y de reasentamiento.

23) El Grupo recomienda que se deje total libertad de circulación total a los antiguos presos políticos.

24) El Grupo recomienda que se ponga fin inmediatamente a la política de traslado de trabajadores africanos, así como a la de la separación de los trabajadores de sus familias.

25) El Grupo recomienda que los testigos de cargo sean tratados como verdaderos testigos y no como acusados, y no sean encerrados ni reclusos de ninguna manera.

26) El Grupo reitera sus recomendaciones anteriores en lo que se refiere a la política llamada de "territorios patrios".

#### B. Namibia

##### A. Conclusiones

27) En el período 1970-1972 se ha seguido traspasando a Sudáfrica gran parte de los poderes y las funciones ejercidas por el Gobierno del territorio.

28) La Bantu Education Amendment Act Nº 44, de 1970, confió al Gobierno sudafricano el control directo de la enseñanza africana.

29) La Coloured Persons in South West Africa Education Act Nº 63, de 1972, la Paratus of Rehoboth Education Act Nº 35, de 1972 y la Nama in South West Africa Education Act Nº 6, de 1972 confirieron el control de la enseñanza al Departament of Coloured Relations and Rehoboth Affairs.

30) En Owanbolandia; a) están prohibidas las reuniones, asambleas y mítines de todas clases; b) la policía sudafricana y los comisionados indígenas están facultados para detener y recluir a todo sospechoso de haber participado o haber tenido la intención de participar en cualquiera de los delitos a que se refiere la Proclamación; c) la persona detenida o recluida no tiene derecho de consultar con un abogado sin el asentimiento del Ministro; d) está restringida la entrada a todas las zonas prohibidas. Desde marzo de 1972, no se han atenuado las medidas adoptadas al amparo del estado de emergencia.

31) Las leyes sudafricanas que prevén la pena capital siguen aplicándose en Namibia.

32) Según testimonios, después de la huelga de 1971-1972, la policía mató e hirió a varias personas que participaban en reuniones en diferentes ciudades de Namibia. Se ha señalado que varios de esos muertos fueron enterrados en fosas comunes.

33) Según un comunicado de prensa entregado por el Reverendo Colin D'Brien Winter, obispo de Damaralandia, el 30 de enero de 1972, los policías sudafricanos mataron en Epinga a cuatro hombres después del servicio religioso celebrado en la iglesia anglicana.

34) Las personas detenidas en la faja de Caprivi fueron trasladadas a Sudáfrica, y sus casas fueron enteramente quemadas.

35) Según dos testigos, varios centenares de personas se hallan encarceladas en prisiones que resultan demasiado pequeñas; por ello, las demás personas detenidas están en campamentos rodeados de alambre de púas electrificado.

36) Algunos namibianos están encarcelados en la isla de Robben, donde son maltratados y no reciben prácticamente ningún cuidado.

37) Los parientes de los presos no pueden comunicarse con ellos. Se señaló el caso de la Sra. Elizabeth Toire, viuda de avanzada edad, que pese a todos los esfuerzos desplegados no consigue visitar a su hijo, condenado a prisión perpetua en la isla de Robben.

38) El Grupo señala a la atención de la Comisión el caso del Sr. Nathaniel Mahnili, Presidente interino de la SWAPO, desterrado en virtud de la Suppression of Communism Act, de 1950.

39) Las personas detenidas son objeto de las torturas más crueles y degradantes, tanto en las comisarías de policía como en las cárceles. Se citó el caso del Reverendo Ilari Nailenge.

40) Los poderes conferidos a la policía y a la administración por la Proclamación dejan a los detenidos sin recurso jurídico.

41) Los procesos que siguieron a la huelga se celebraron en regiones aisladas e inaccesibles de Namibia.

42) El Grupo señala a la atención de la Comisión el caso del Sr. Brendan Simbaraye, Vicepresidente de la South West Peoples Organization, que ejercía la profesión de maestro en la faja de Caprivi. Al parecer, ha sido trasladado del sur al norte del país.

43) Desde fines de 1970 se han adoptado nuevas medidas con miras a crear los llamados "territorios patrios", de conformidad con la Self-Government of Native Nations in South West Africa Act Nº 54, de 1968, en particular:

- a) la Namaland Consolidation and Administration Act Nº 79, de 1972;
- b) la Bantu Laws Amendment Act Nº 23, de 1972.

44) Desde agosto de 1972 sólo se puede entrar en la región del Caprivi oriental con una autorización oficial del Gobierno sudafricano.

45) Se están proyectando traslados de poblaciones, como ocurre en el caso de los hereros que serán instalados en el desierto de Kalahari; se dividen regiones, sin hacer caso de la unidad de sus habitantes (caso de Kaokaoveld).

46) Por su oposición a la política del Gobierno sudafricano, los ciudadanos sudafricanos progresistas son expulsados, como Monseñor Winter y tres colaboradores de su diócesis.

47) Según declaró Monseñor Winter, la razón de ser de la política de los "bantustanes" consiste en mantener una reserva de mano de obra africana en las zonas semi-desérticas, donde apenas es posible la supervivencia de los habitantes allí asignados; asimismo, esa política tiende a destruir la unidad del pueblo de Namibia, a crear clanes, a perpetuar el tribalismo y a impedir que mejore la suerte de la población así dividida.

48) La tasa de mortalidad es sumamente elevada.

49) El Gobierno sudafricano pone toda clase de obstáculos a la educación de los namibianos; hasta los intentos de la Iglesia han fracasado. Se expulsa de las escuelas a centenares de alumnos negros por su oposición a la política sudafricana. Se cierran las escuelas bajo los pretextos más nimios. Algunos alumnos son objeto de castigos corporales antes de ser definitivamente expulsados de las instituciones escolares del territorio.

## 2. Recomendaciones

50) El Grupo recomienda que se restituyan los poderes y las funciones usurpados por el Gobierno sudafricano.

51) El Grupo recomienda que se ponga fin al estado de emergencia en Owanbolandia, y que se abroguen todas las medidas adoptadas en cumplimiento de la Proclamación sobre el estado de emergencia.

52) El Grupo recomienda que Sudáfrica deje de aplicar las leyes sudafricanas en Namibia.

53) El Grupo recomienda que se efectúe una investigación judicial sobre el caso de las personas matadas después de la huelga de 1971-1972.

54) El Grupo recomienda que se inicie una investigación judicial sobre el caso de las personas matadas en Epinga el 30 de enero de 1972.

55) El Grupo recomienda que se ponga fin al trato inhumano y degradante que se inflige a las personas detenidas o encarceladas únicamente por su oposición a la política sudafricana en Namibia.

56) El Grupo recomienda que las personas detenidas en la faja de Caprivi y deportadas vuelvan a sus hogares.

57) El Grupo recomienda la abolición de los "campos de concentración" existentes en Namibia.

58) El Grupo recomienda que los presos namibianos detenidos en la isla de Robben sean trasladados a Namibia.

59) El Grupo recomienda que los procesos de las personas detenidas por su oposición a la política sudafricana en Namibia sean justos e imparciales y se ajusten a lo dispuesto en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

60) El Grupo recomienda que los presos políticos puedan comunicarse con sus parientes y sus abogados.

61) El Grupo recomienda que las Naciones Unidas estudien el caso del Sr. Nathaniel Nahnili, así como el del Sr. Brendan Simbaraye.

62) El Grupo recomienda que la entrada en la región del Caprivi oriental y la salida de la misma sean libres.

63) El Grupo recomienda que se ponga fin inmediatamente a la política de traslado de poblaciones, así como a la política de desmembramiento de las regiones de Namibia, a fin de salvaguardar la unidad del pueblo namibiano.

64) El Grupo recomienda que los ciudadanos namibianos progresistas arbitrariamente expulsados de su patria puedan regresar libremente a su país.

65) El Grupo recomienda que se vele por la educación de los jóvenes namibianos.

### C. Rhodesia del Sur

#### 1. Conclusiones

66) Según testimonios, varias personas están condenadas a muerte, pero no han sido todavía ejecutadas. Según la Srta. Todd, esos condenados a muerte serán probablemente ejecutados en cuanto se haya reconocido el régimen de Rhodesia.

67) Según algunos testigos, varias personas han muerto en circunstancias sospechosas cuando se encontraban en la cárcel o en las comisarías de policía.

68) Según testimonios, los combatientes por la libertad son ejecutados sumariamente sin proceso, cuando son capturados por las fuerzas de Smith. Esos combatientes por la libertad son ejecutados sumariamente para evitar todo proceso y toda publicidad.

69) Después del paso de la Comisión Pearce por Rhodesia del Sur los presos políticos fueron objeto de un trato aún peor.

70) Los presos políticos son objeto de tratos sumamente degradantes e inhumanos.

71) Las autoridades en Rhodesia del Sur han promulgado muchas leyes y reglamentos contrarios a la Declaración de Derechos Humanos.

72) Cabe citar en especial, las disposiciones de la Unlawful Organizations Act Nº 55, de 1971.

73) El 16 de junio de 1972, el Parlamento de Rhodesia prorrogó por 12 meses el estado de emergencia y todos los reglamentos pertinentes.

74) En Rhodesia del Sur hay tres categorías de presos políticos (véase el párrafo 28 del informe).

75) Se prosigue la política de traslados de población en masa de regiones fértiles a regiones áridas. El caso de la tribu de los tangwena sigue preocupando a la opinión pública internacional, especialmente el de los niños tangwena (más de 100) guardados como rehenes para obligar a sus padres a que abandonen la selva donde se refugiaron cuando fueron expulsados de sus tierras tradicionales, después de que la policía incendiara sus viviendas y sus bienes.

76) Se dice que, estando la Comisión Pearce en Rhodesia del Sur, varias personas fueron detenidas y, según varios testimonios recogidos por el Grupo, se ejercieron presiones sobre algunas personalidades africanas, en particular sobre los jefes.

77) Cabe señalar la cooperación cada vez más estrecha que se ha establecido entre la policía de Sudáfrica y la de Rhodesia del Sur.

## 2. Recomendaciones

78) El Grupo recomienda que el Gobierno de Gran Bretaña, Potencia administradora, intervenga ante las autoridades de Rhodesia del Sur y se ocupe del caso de los condenados a muerte, encarcelados desde hace mucho tiempo.

79) El Grupo recomienda que la Gran Bretaña, Potencia administradora, disponga que se efectúe una investigación judicial sobre los fallecimientos sospechosos ocurridos en las cárceles o las comisarías de policía.

80) El Grupo recomienda que la Gran Bretaña, Potencia administradora, disponga que se efectúe una investigación sobre la ejecución sumaria de los combatientes por la libertad, capturados por las fuerzas de Ian Smith.

81) El Grupo recomienda que se ponga fin a los tratos inhumanos y degradantes infligidos a los presos políticos.

82) El Grupo recomienda que la Gran Bretaña, Potencia administradora, abroge todas las leyes contrarias a las normas internacionales, promulgadas por el régimen ilegal de Ian Smith.

83) El Grupo recomienda que la Gran Bretaña, Potencia administradora, pida a las autoridades de Rhodesia del Sur que dejen al pueblo tangwena regresar a sus tierras ancestrales; recomienda que los niños sean entregados a sus padres sin demora.

## D. Territorios africanos bajo dominación portuguesa

### 1. Conclusiones

84) Los combatientes por la libertad capturados y sus familias son víctimas de torturas brutales, inhumanas y feroces. Por ejemplo: los hombres son mutilados y se les obliga a comer partes de sus cuerpos; las mujeres son violadas y muertas en presencia



de sus maridos; se tortura a los ancianos hasta la muerte, y su carne es ofrecida como alimento. Estas bárbaras medidas de represión siguen aplicándose con la misma violencia.

85) Se arranca a las familias de su aldea tradicional y se las instala en "centros estratégicos" y en "campamentos de paz". No se trata ni más ni menos que de campos de concentración cercados de alambradas. Las condiciones de vida y de trabajo de los africanos que viven en esos campamentos son pésimas. La comida que se les da apenas les permite no morir de hambre, y las instalaciones médicas y sanitarias son inexistentes. Son escasos los medios previstos para la educación de los niños. Los africanos que se encuentran en esos campamentos no sólo son objeto de un lavado de cerebro, sino que viven bajo la constante amenaza de muerte.

86) El destino de los presos políticos es aún peor. Las cárceles son todavía rudimentarias y es frecuente la reclusión en un espacio exiguo. El régimen alimentario deja mucho que desear. Los guerrilleros capturados son objeto de un trato mucho peor. Son ejecutados sin juicio, después de haber sido sometidos a torturas sin nombre.

87) Los aldeanos de quienes se sospecha que han dado asilo a los guerrilleros o conocen los movimientos de los combatientes por la libertad, son exterminados. En cerca de un tercio del distrito de Tete, en Mozambique, ha habido matanzas de africanos negros. Para la construcción de la presa de Caborra Bassa, se han expulsado a miles de personas de su hogar ancestral, a fin de dejar sitio a los inmigrantes blancos.

88) Hay casos en que los prisioneros pertenecientes a los movimientos de liberación han sido enviados a Portugal para ser juzgados o son deportados a islas situadas lejos de Mozambique y de Angola como, por ejemplo, las islas de Cabo Verde. Esos presos padecen sufrimientos y tormentos inauditos, hacinados en cárceles desprovistas de las comodidades más elementales.

89) Se practica la guerra química por medio de helicópteros y aviones ligeros, procedentes sobre todo de Sudáfrica, para aterrorizar a las poblaciones de las zonas liberadas.

90) El napalm, los desfoliantes, los herbicidas, los agentes químicos, etc., se utilizan sin reparo contra los seres humanos y los vegetales. Esos métodos tienen por objeto aterrorizar a las poblaciones y a destruir sus cultivos. Según algunos testigos que no pudieron dar pruebas irrefutables al Grupo, algunos países de Europa occidental han proporcionado bombas y sustancias químicas tóxicas. Esta forma de entorpecer el progreso de las fuerzas de liberación ha tenido graves consecuencias para la salud de los habitantes de las zonas liberadas, como demuestra el aumento de casos de enfermedad registrados en 1971 en relación con 1969.

91) La discriminación racial se practica en gran escala. La mayoría de los africanos de las zonas rurales tienen que someterse a los intereses de la administración blanca. Hay dos clases de iglesias una para los africanos negros, la otra para los africanos blancos. Se ha creado un sistema de tarjetas de identidad diferentes para los africanos de las zonas rurales a fin de limitar su libertad de circulación, con lo que se perpetúa la discriminación racial. A esos africanos se les niega el acceso a mejores empleos. Sigue practicándose el sistema del trabajo forzoso.

92) Los combatientes por la libertad de Sudáfrica capturados son entregados a la policía sudafricana. A este respecto, el Grupo oyó declaraciones de testigos sobre la actuación ilegal de las autoridades portuguesas que, según parece, entregaron a la policía sudafricana al Sr. Marcus Mokgotle y al Sr. Sidney Mbuyaze, miembros del Pan Africanist Congress, que se hallaban en las zonas ocupadas de Mozambique. (Sin embargo, el Grupo debe señalar que el Gobierno sudafricano persiste en negar que el Sr. Marcus Mokgotle se encuentre en poder de la policía sudafricana.) La colaboración de las policías portuguesa y sudafricana se traduce de hecho en una asociación entre ambas fuerzas con miras a la ejecución de su política racista.

93) La situación de los africanos en Angola y en Mozambique se agrava manifiestamente en todas las esferas. Los africanos bajo dominación portuguesa siguen siendo objeto de discriminación, opresión y explotación.

94) El Gobierno de Portugal sigue amenazando a los países africanos independientes vecinos de Mozambique y Angola.

95) El Grupo Especial de Expertos celebra que los movimientos de liberación nacional de Angola hayan decidido formar un frente unido para luchar contra la opresión; es una decisión que el Grupo deseaba y recomendaba desde su creación.

## 2. Recomendaciones

96) El Grupo recomienda que se ponga fin al traslado de africanos en Angola, Mozambique y Guinea (Bissau).

97) El Grupo recomienda que se abandone el sistema de los "centros estratégicos", las "aldeas de paz" o oudandas, y que se restituya al pueblo la libertad de circulación.

98) El Grupo recomienda que se ponga fin a las medidas de represalia contra las familias de los combatientes por la libertad y contra sus mujeres y niños.

99) El Grupo recomienda que los presos y detenidos políticos sean tratados humanamente y sometidos a juicio imparcial, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos.

100) El Grupo recomienda que se ponga fin al lanzamiento, desde aviones, de sustancias químicas tóxicas y a la utilización de éstas en las zonas liberadas, y que el Consejo de Seguridad adopte, con tal fin, medidas pertinentes y a este respecto pide que ningún Estado preste ayuda al Gobierno de Portugal.

101) El Grupo recomienda que se preste toda la ayuda moral y material posible al movimiento de liberación, a los territorios liberados y a sus poblaciones, y que esa ayuda sea prestada, en particular, por los órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas.

102) El Grupo recomienda que se ejerza una presión internacional sobre Portugal para que los combatientes por la libertad capturados sean tratados como prisioneros de guerra en virtud de los Convenios de Ginebra, como se ha pedido en múltiples resoluciones de los órganos de las Naciones Unidas y en el trabajo preparatorio del Comité Internacional de la Cruz Roja.

103) El Grupo recomienda que el Gobierno de Portugal muestre a los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja las condiciones reales de los campamentos de detención y de las cárceles en que están recluidos los presos políticos y los combatientes por la libertad en los territorios africanos bajo dominación portuguesa; el Grupo recomienda que se pida al Comité Internacional de la Cruz Roja que, en la medida en que lo permita su mandato, presente a la Comisión de Derechos Humanos informes sobre sus visitas a las cárceles y campamentos de detención donde están recluidos presos políticos y combatientes por la libertad; recomienda, además, que se estudien sobre el terreno las condiciones de las cárceles y se presente un informe al respecto a los órganos competentes de las Naciones Unidas.

104) El Grupo recomienda que se eliminen las prácticas discriminatorias contra los africanos de las zonas rurales en todas las esferas.

105) El Grupo recomienda que se ponga fin al régimen injusto de salarios que se aplica contra los africanos de las zonas rurales.

106) El Grupo recomienda que se hagan todos los esfuerzos necesarios por mejorar la atención médica de los refugiados.

107) El Grupo recomienda que el Gobierno de Portugal ponga fin a sus amenazas y ataques contra los países africanos independientes vecinos de Mozambique, Angola y Guinea (Bissau).

VII. APROBACION DEL INFORME

451. El presente informe ha sido aprobado y firmado por los miembros del Grupo Especial de Expertos, a saber:

Sr. Ibrahima Boye, Presidente-Relator

Sr. Felix Ermacora

Sr. Branimir Jankovic

Sr. A. S. Mani

Sr. Luis Marchand-Stens<sup>1/</sup>

Sr. M. N. Rattansey

---

<sup>1/</sup> El Sr. L. Marchand-Stens no pudo participar en la reunión.

ANEXOS

Anexo I

A. DECLARACION INTRODUCTORIA HECHA POR EL SR. IBRAIMA BOYE, PRESIDENTE,  
EN LA 296ª SESION DEL GRUPO ESPECIAL DE EXPERTOS CELEBRADA EN  
DAR ES SALAAM, REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA, EL 9 DE AGOSTO DE 1972

Señor Ministro:

Permítame agradecerle, a título personal, y en nombre del Grupo de Expertos y de la Secretaría, la calurosa acogida que su Gobierno nos ha dispensado.

Esto no constituye una sorpresa para los que ya conocemos el interés que su Gobierno manifiesta por la unidad africana; y esta unidad africana sólo se realizará plenamente cuando todos los territorios que se encuentran en Africa sean libres para determinar por sí mismos su propio destino.

Me complace rendir un homenaje especial a su gran líder, el Presidente Julius Nyerere, y a sus compañeros, quienes profesan por Africa un amor profundo y sincero. Tenga a bien, señor Ministro, transmitirle la expresión de nuestra gratitud por todas las facilidades que se nos han concedido.

Los representantes de su país en los órganos internacionales defienden, sin desmayo y sin equívoco, la causa de los movimientos de liberación nacional.

Tal vez sea ésta la ocasión de decir que sabemos que su Gobierno y su pueblo no retroceden ante ningún sacrificio para ayudar a los africanos que se encuentran todavía bajo dominación colonial a recobrar su dignidad humana, su derecho a la libre determinación de su destino.

Las Naciones Unidas, de las que su país es Miembro influyente dentro del grupo del tercer mundo, se esfuerzan, por diversos medios, por eliminar las secuelas del colonialismo en Africa, y sobre todo, por el restablecimiento de los pueblos de Azania, Namibia, Zimbabwe, Angola, Mozambique, Guinea (Bissau) y las Islas de Cabo Verde en sus derechos legítimos.

Con frecuencia se nos pregunta qué han hecho hasta ahora en concreto las Naciones Unidas para resolver los dolorosos problemas que se plantean en Africa.

Sin duda, se olvida muy frecuentemente que las Naciones Unidas constituyen una asociación de Estados Miembros. Corresponde a los Estados Miembros asumir íntegramente sus responsabilidades para hacer aplicar sin desfallecimiento las disposiciones de la Carta. El éxito de las Naciones Unidas es el éxito de los Estados Miembros; el fracaso de las Naciones Unidas, es el fracaso de los Estados Miembros.

Sea lo que fuere, por lo que a nosotros atañe, no escatimaremos ningún esfuerzo para poner a disposición de la comunidad internacional la documentación sustanciosa y

objetiva que reuniremos durante nuestros viajes, para permitirle en esa forma tomar las decisiones que la Carta le autoriza a imponer.

Somos expertos independientes, no gubernamentales; y nuestras investigaciones e informes han permitido hasta el momento reunir muchas pruebas que hemos presentado a las Naciones Unidas.

Ha sido muy reconfortante para nosotros el haber escuchado recientemente que después de la creación de nuestro Grupo, en 1967, las condiciones de vida de los presos políticos en Sudáfrica han mejorado ligeramente. Son los antiguos presos salidos recientemente de Sudáfrica quienes nos lo han afirmado. Pero que no haya lugar a engaño en este punto, que se sepa bien que el lenguaje que habla todavía Vorster no es el lenguaje que a las Naciones Unidas le agradaría escuchar. Que no haya lugar a equivocaciones: las leyes del apartheid, las leyes discriminatorias en Rhodesia del Sur y en los territorios africanos que se encuentran bajo dominación portuguesa están todavía vigentes, y se aplican aún de manera firme y rigurosa.

Señalaremos a la atención de los Estados Miembros de las Naciones Unidas esta situación; pero pediremos igualmente a los movimientos de liberación nacional, para que puedan ayudarnos a ayudarles, que pongan en práctica una unidad común para hacer frente de manera eficaz a las burdas y vergonzosas provocaciones de los regímenes racistas que existen en sus países.

Considero que si todos los esfuerzos se coordinan sinceramente, lograremos hacer desaparecer del Africa esas densas nubes que impiden todavía que los africanos vean finalmente, en un cielo azul y sereno, el sol radiante de la libertad, de la igualdad, de la dignidad y de la fraternidad con todos los pueblos del mundo entero.

B. DECLARACION DEL EXCMO. SR. I. ELINAWINGA, MINISTRO DE RECURSOS  
HIDRAULICOS Y ENERGIA Y MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES  
INTERINO DE LA REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

Señor Presidente: Constituye para mí un gran honor aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida en nombre de nuestro Gobierno, nuestros dos partidos, TANU y Afro-Shirazi, así como del pueblo de Tanzania. No tengo necesidad de destacar la gran importancia que Tanzania concede a su visita. Y ello por razones obvias. Su Grupo, compuesto de personalidades de tan alta categoría y especialistas en la esfera de los derechos humanos, realiza una gran contribución para hacer el mundo mejor para los desafortunados seres humanos que se hallan todavía privados aun de sus derechos fundamentales. El tema que ustedes van a examinar aquí está estrechamente vinculado con la cuestión del colonialismo y el problema del apartheid, las dos grandes plagas que todavía en este siglo XX afligen a la humanidad en nuestro continente. Teniendo estos males multiplicándose en nuestras fronteras, nosotros, el pueblo de Tanzania, consideramos un gran privilegio el darles a ustedes la bienvenida a nuestro país.

Durante su corta permanencia aquí escucharán varias peticiones y testimonios de personas a quienes no solamente se les han negado sus derechos humanos básicos en las

esferas económica, social y cultural, sino que también han sido privadas del derecho fundamental de vivir en su patria. Así pues, siendo víctimas de la discriminación, la opresión y la injusticia a causa de sus diferencias de raza, color o religión, escapan para lograr que el mundo los escuche. Esta situación es particularmente grave en Sudáfrica. Siendo, pues, víctimas de sistemas coloniales pasados de moda, escapan para poder luchar y ser oídos. Tal es la situación en las colonias portuguesas de Mozambique, Angola, Guinea (Bissau), así como en Zimbabwe.

Desde los primeros días del movimiento de independencia, Tanzania se ha comprometido plenamente a defender el derecho de todos a la dignidad humana y a la libertad, y, desde entonces, nuestra independencia se ha basado en el respeto de esos principios. Tanzania ha deplorado persistentemente los inicuos actos de discriminación y racismo cometidos por los regímenes fascistas de Sudáfrica, Rhodesia y Portugal contra las poblaciones indígenas de esos territorios que han estado luchando durante largo tiempo por su libre determinación. Teniendo esto presente, Tanzania tiene gran confianza en la labor de la Comisión, labor que ésta ha estado realizando durante los últimos años. Esperamos que las peticiones que han de presentar los movimientos de liberación y diversos testigos particulares serán acogidas con simpatía por esta Comisión con miras a posteriores deliberaciones en otros órganos de las Naciones Unidas.

El mundo entero es ahora perfectamente consciente de los sufrimientos, torturas de toda clase, y degradación humana a que los regímenes opresivos del Africa meridional someten a seres humanos. Es obligación de la humanidad, por lo tanto, oponerse firmemente a estos inicuos actos y condenar severamente toda forma de segregación racial y apartheid. Nosotros, el pueblo de Tanzania, creemos desde hace tiempo que corresponde al pueblo oprimido escoger los medios más eficaces para combatir a sus opresores. Creemos por tanto que la lucha en Africa y en todo el mundo para eliminar estos males es una lucha legítima, aunque esto signifique el empleo de la fuerza de las armas.

Huelga repetir aquí ante una Comisión como ésta el hecho de que el racismo y el colonialismo constituyen de hecho una infracción del derecho internacional. Tales prácticas violan la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su Comisión contribuyó, a no dudarlo, a la preparación de estos instrumentos, que cimentan actualmente normas internacionales verdaderamente humanas. En resumen, el colonialismo y el racismo constituyen una flagrante violación del derecho internacional. Más aún, constituyen por ello una amenaza a la paz y a la seguridad mundiales.

A este respecto, permítaseme citar la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, de 1965, en la que se declara que:

"Toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y nada en la teoría o en la práctica permite justificar, en ninguna parte, la discriminación racial."

Continuando con la cita de este pasaje, la Convención dice además que:

"La discriminación entre seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y puede perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos, así como la convivencia de las personas aun dentro de un mismo Estado."

Siendo el de ustedes un Grupo de Expertos, señor Presidente, sé que su mandato hace que su tarea ahonde más que mis observaciones generales aquí. Es una lástima, por tanto, que no se les permita a ustedes visitar los territorios de que se trata, a saber Sudáfrica, Zimbabwe, Mozambique, Angola, Guinea (Bissau), y aun Namibia, territorio que se halla bajo responsabilidad directa de las Naciones Unidas, ya que es allí donde podrían ver la prueba de cómo se mantiene al pueblo en custodia policial, prisión y campos de concentración, en reservas indígenas y en los denominados campamentos de tránsito. Allí ustedes podrían evaluar adecuadamente el castigo que se aplica en venganza contra los presos políticos, y la detención y acusación ilegales de trabajadores inocentes en huelga y de los patrióticos combatientes por la libertad que han sido capturados. Tras una completa investigación como ésa ustedes podrían informar más tarde a la Comisión de Derechos Humanos en pleno acerca de las condiciones generales de los africanos en estas tierras, información que más tarde podría considerar a su vez detenidamente la Asamblea General. Si bien esto no es posible, el mundo sabe ya lo que sucede en estos territorios. La información se filtra, y esto les ayuda a ustedes, en sus deliberaciones aquí. Los colonialistas y los racistas del Africa meridional no pueden continuar ocultando indefinidamente un caparazón que se descompone. Por lo tanto, nosotros en Tanzania haremos todo cuanto esté a nuestro alcance para facilitar la labor del Grupo de Trabajo.

En Tanzania creemos, pues, firmemente que el remedio inmediato y pacífico a estos males raciales que prevalecen actualmente en las colonias portuguesas de Angola, Mozambique y Guinea (Bissau), en Zimbabwe, Namibia y Sudáfrica, es la concesión de la independencia a estos países.

Es evidente, por tanto, Señor Presidente, que las barreras raciales son incompatibles con los ideales de cualquier sociedad humana. Ustedes, en su condición de Comisión investida de facultades para combatir estos males, tienen una gran responsabilidad para que los gobiernos interesados pongan fin a las políticas de apartheid, segregación y separación. Creemos, por tanto, que la manera más eficaz de combatir el racismo y el colonialismo es redoblar la acción nacional e internacional para la emancipación completa del continente africano, la eliminación del apartheid en Sudáfrica, la libertad del pueblo en Namibia, y la terminación de las guerras coloniales en los territorios que se encuentran bajo administración portuguesa y en Zimbabwe. No puede destacarse en demasía la contribución que una Comisión como la suya puede aportar para lograr estos fines.

No dudo que a medida que escucha o entrevista a los diversos testigos, aunque se trate de simples particulares, usted, señor Presidente, tendrá ciertamente presentes estos objetivos generales. Toda vez que los derechos humanos no pueden florecer en una situación de colonialismo o en la tierra del apartheid. La existencia de estos sistemas es en sí misma una negación de los derechos humanos. Sin embargo, estoy convencido de



que el racismo será tarde o temprano algo del pasado. Puedo asegurarles que cuando se llegue a esa etapa de la civilización humana su Comisión habrá contribuido de manera significativa a ese fin. Por tanto, cualquier cosa que logren ustedes, aun en unos pocos días, contribuirá definitivamente a este propósito.

Permitáme reiterar una vez más, señor Presidente, que ustedes son cordialmente bienvenidos a Tanzania, y les pido a todos que se sientan en casa y completamente libres durante su permanencia aquí. Con este fin, les deseo a todos la mejor suerte en sus importantes deliberaciones y en la lucha por eliminar las injusticias sociales de todas clases que algunos de nuestros hermanos y hermanas sufren en territorios todavía colonizados en nuestro continente.

Anexo IIDECLARACION DEL EXCMO. SR. M. NDENGUE, MINISTRO DE TRABAJO  
Y DE JUSTICIA Y MINISTRO INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES  
DE LA REPUBLICA POPULAR DEL CONGO

En nombre del Partido Congolés del Trabajo y de su Presidente, el camarada Marien Ngouabi, quiero agradecerles esta visita y decirles cuánto nos complace recibirlos en nuestra capital. Mucho agradecemos la misión que ha emprendido la Secretaría -misión que es tan afín a la lucha del pueblo congolés en el esfuerzo de liberación nacional, lucha que se inserta en el marco general de la que sostiene el pueblo congolés contra la ocupación extranjera, en la medida en que deseamos que cada país pueda disfrutar plenamente de su libertad y de su independencia a fin de afirmarse en cuanto país libre a los ojos del mundo.

Aún no podemos decir que hemos hecho más de lo que hizo el pueblo al nivel de los movimientos de la liberación, en vista de los medios limitados de nuestro pueblo y de nuestro Gobierno, pero pensamos que es deber de nuestro pueblo ayudar a los movimientos de liberación nacional porque, tal como acaba de señalarse, aunque el Congo sea independiente, no podemos sentirnos orgullosos mientras una parte de Africa permanece bajo el dominio colonial.

Por ello, según el lema propuesto por el Presidente Marien Ngouabi en instancias nacionales e internacionales, y recientemente en la Conferencia de Jefes de Estado celebrada en Marruecos, creemos y afirmamos que la lucha del pueblo congolés no se limita al nivel nacional, sino que tiene alcance internacional, en la medida en que debemos hacer todo lo posible por ayudar a los pueblos que aún se hallan bajo el dominio colonial en su lucha contra el ocupante y por la independencia.

Así, pues, cuando se trata del problema de la negociación con Sudáfrica pensamos que, en la medida en que no se reconozcan los derechos de las poblaciones autóctonas en Sudáfrica, no podemos sentarnos a una mesa junto con quienes no reconocen la libertad y la personalidad de los pobladores del Africa del Sur. No hay posibilidad alguna de que nuestro Gobierno acepte ninguna forma de negociación con Sudáfrica.

Lo mismo cabe decir en lo que respecta a los pueblos de Angola y de Guinea (Bissau). Seguiremos apoyándolos en su lucha de liberación nacional, porque creemos que para instaurar una paz auténtica en todo el mundo, los pueblos deben ejercer su derecho de libre determinación. Sólo cuando cada pueblo tenga independencia y pueda adoptar sus decisiones sin influencia exterior podremos aceptar una forma de paz en el mundo.

Por ello celebro la presencia de ustedes aquí, en vista de que, como acabo de decirlo, su misión es muy afín a la lucha de nuestro pueblo contra el ocupante. Nuestro Gobierno está enteramente dispuesto a proporcionarles todo lo que pueda permitirles cumplir con éxito su tarea en nuestro país.

Estoy de acuerdo con usted, señor Presidente en que, para combatir al enemigo común, los movimientos de liberación nacional deben formar un frente único. Como usted

recordará hace dos meses nuestro país acogió a los movimientos de liberación de Angola -es decir, el MPLA y el FNLA- precisamente para facilitar la misión que la OUA había asignado a nuestro Jefe de Estado. Esos dos movimientos se reunieron en nuestra capital, con la participación del Presidente Mobutu Sese Seko del Zaire y del Presidente de la República Popular del Congo, Marien Ngouabi, a fin de favorecer o de suscitar la unidad de acción y luchar de manera consecuente contra el ocupante portugués.

Anexo III

DECLARACION DEL EXCMO. SR. KARL-I-BOND NGUZA, MINISTRO  
DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DEL ZAIRE

Señor Presidente -y tentado estoy de decir señor Embajador, querido colega y querido hermano- antes de responder a su pregunta, es evidentemente mi deber como Ministro de Relaciones Exteriores -y más vale tarde que nunca- desear la bienvenida a los miembros del Grupo Especial de Expertos de la Comisión de Derechos Humanos. Quisiera ante todo decirles que el Gobierno del Zaire, por razones particulares, sigue con gran interés todo lo que ocurre en las Naciones Unidas y en particular todo lo que se hace en materia de descolonización.

Quisiera también señalar que el Gobierno del Zaire ha seguido hasta la fecha con gran interés sus trabajos, no sólo en el marco de la descolonización sino también en otras esferas, como por ejemplo la cuestión del Oriente Medio, para tratar de encontrar soluciones humanitarias a problemas humanos. Al hacer esta declaración preliminar, quisiera señalarles que la República del Zaire, como todos los demás países africanos, atribuye gran importancia a los problemas de la descolonización del Africa por vivir estos problemas en sus propias fronteras. Han citado el problema de Angola; este problema lo vivimos de manera particular, de manera directa, de manera física, y me complace por ello grandemente el trabajo utilísimo que han realizado durante su permanencia en Kinshasa. Me complace asimismo saber que, a pesar de mi ausencia -pues tuve que trasladarme a Gabón con el Presidente- los colegas que permanecieron en el Zaire han hecho todo lo posible para que su estancia resultase agradable.

Por lo que respecta al problema concreto de Angola, saben que, después de la India, la República del Zaire es el país del mundo que cuenta con más refugiados. Tenemos refugiados del Sudán, de Rwanda, de Burundi, e incluso algunos refugiados de Zambia, pero muchos de los refugiados son nuestros hermanos de Angola. La cifra en el momento actual es aproximadamente de 700.000. Estos refugiados se hallan repartidos por diversas regiones de la República del Zaire, pero sobre todo por Kinshasa. El Gobierno del Zaire es huésped desde hace algunos años del Gobierno revolucionario de Angola en el exilio, dirigido por el Sr. Roberto Holden, y como saben no sólo consagra un presupuesto importante al suministro de elementos de combate para la liberación de los hermanos de Angola sino que se dedica asimismo a la tarea importante de resolver los problemas sociales. Se les han asignado barrios enteros; se ha puesto totalmente a su disposición un hospital; se ha previsto un presupuesto para la educación. Los escolares angoleños se integran sin discriminación con sus colegas del Zaire en el programa de becas de estudio del Gobierno. Y los esfuerzos que realiza en el plano presupuestario el Gobierno del Zaire no se limitan sólo a la esfera social, es decir, a la salud y a la educación como acabo de señalar, sino que se extienden también a la esfera del empleo con objeto de ofrecerles un empleo adecuado a fin de que puedan vivir decentemente como si de zairenses se tratase. Se trata de un problema de integración programado en el marco del presupuesto del Gobierno.

Pero el aspecto más importante es el aspecto militar. El Estado mayor general ha puesto a su disposición la base de Kinkoso, que pertenece a las fuerzas armadas del Zaire,

y que ha sido cedida por entero a los combatientes de Angola. Se ha puesto a su disposición el equipo militar y los medios de adiestramiento, y las fuerzas armadas del Zaire están totalmente a su servicio para adiestrarles y ayudarles en el manejo de los aparatos.

Creo que su pregunta debe entenderse en el marco de este esfuerzo que el Gobierno del Zaire realiza desde hace tiempo; se trata de un problema general que se inscribe en el marco de la lucha contra el colonialismo. Nuestro Gobierno está decidido no sólo a ayudar a Angola, sino también a ayudar a los otros territorios africanos, en particular Guinea (Bissau), y Mozambique. Muy recientemente, con ocasión de su visita a Guinea, el Presidente de la República prometió públicamente al Presidente Sekou Touré que en caso de dificultad de parte de Guinea (Bissau) estaba dispuesto a poner a disposición del Gobierno de Guinea, e incluso de los gobiernos que tropezasen con las mismas dificultades que Guinea (Bissau), fuerzas armadas del Zaire a fin de poder llegar juntos a una solución militar. ¿Por qué una solución militar? Cuando no hay otra solución, cuando Portugal se limita en las Naciones Unidas a amontonar las resoluciones unas sobre otras, no queda otro camino que el de la fuerza. Lo mismo cabe decir del problema de Rhodesia y del apartheid. Nuestro Gobierno, dada su vocación africana, suscribe actualmente la posición al respecto de la Organización para la Unidad Africana y en particular le presta ayuda material importante con su presupuesto y sus fuerzas, que pone a la disposición de las fuerzas combatientes de Angola, facilitándoles los elementos necesarios para este combate. La radio nacional, La Voz del Zaire, está en estos momentos a disposición de nuestros hermanos de Angola que la utilizan para importantes emisiones en el marco de su lucha.

He aquí como creo que puede entenderse el problema en términos generales, desde el punto de vista del Gobierno del Zaire.

La octava reunión de Jefes de Estado de la OUA, celebrada en Addis-Abeba el año último, encomendó como misión al Presidente Ngouabi de Brazzaville, al Presidente Nyerere de Tanzania, al Presidente Kaunda de Zambia y a nuestro Presidente, hacer todo lo posible para reunir las fuerzas del MPLA, tanto políticas como militares, y las fuerzas del GRAE. En respuesta a este llamamiento, el Presidente Mobutu Sese Seko se trasladó a Brazzaville donde se celebraron conversaciones entre los dos Presidentes y los dos responsables del MPLA y del GRAE. Por una parte, se encontraban el Presidente Mobutu Sese Seko acompañado del Sr. Augustinho Vaal Neto, y por otra el Presidente Ngouabi acompañado del Sr. Roberto Holden. Las negociaciones se desarrollaron en una atmósfera sumamente franca; se dijo todo lo que podía decirse y felizmente se llegó a la conclusión de que reinaba entre las partes la voluntad sincera de unir sus fuerzas tanto políticas como militares. El comunicado firmado por los dos Jefes de Estado presentes sancionó esta voluntad de ambas partes.

El problema que quedaba era el de las modalidades prácticas de esta unificación de fuerzas, es decir, el de llegar a un solo Estado mayor general y a un solo Estado mayor político. Este problema debía resolverse en negociaciones ulteriores entre las dos partes, con la colaboración de las delegaciones de los gobiernos designados por la OUA. Puesto que la voluntad política se ha manifestado en presencia de testigos, en esta ocasión Jefes de Estado, nos corresponde ahora tomar la iniciativa de reunirnos para

tratar de encontrar las modalidades prácticas de esta unificación. Estimo, pues, que se ha encontrado una solución al problema, al menos de principio.

El Gobierno del Zaire, puedo decirlo, se felicita realmente de estos resultados, ya que es sumamente difícil que unas fuerzas que combaten por una misma causa y se encuentran en frentes diferentes no compartan los mismos principios de combate, siendo así que la causa que les impulsa es la misma. Espero que comprendan también que hubiésemos deseado que todas las fuerzas que se encuentran en la República del Zaire para combatir contra Angola defendiesen unos principios de unidad y no unos principios de desunión, lo que para nuestros pueblos constituiría un elemento de inseguridad.

Creo que la solución dada al problema en Brazzaville es sumamente satisfactoria no sólo para nuestro Gobierno sino también, como hemos podido advertir, para todos los gobiernos de la OUA.

Anexo IV

CARTA DE 23 DE AGOSTO DE 1972 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE  
LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS POR  
EL GRUPO ESPECIAL DE EXPERTOS

Señor Presidente:

En nombre del Grupo Especial de Expertos de la Comisión de Derechos Humanos establecido con arreglo a la resolución 2 (XXIII) de la Comisión, de 6 de marzo de 1967, tengo el honor de señalar a su atención algunos elementos de información en lo que respecta a la evolución reciente de la situación en Namibia, puestos en conocimiento del Grupo durante la misión de estudio que acaba de efectuar en Europa y en Africa con objeto de recoger testimonios sobre las graves violaciones de los derechos humanos en el Africa meridional y en los territorios bajo dominación portuguesa, conforme al mandato que le asignó la Comisión.

Con respecto, en primer lugar, a la cuestión de la independencia de Namibia, se ha señalado a la atención del Grupo Especial la contradicción existente entre la concepción que de una futura independencia tiene el Gobierno de Sudáfrica y la independencia a la que se refieren los movimientos de liberación nacional y las Naciones Unidas. Para el Gobierno de Sudáfrica, la independencia significaría la creación de "bantustanes" del tipo de los de Sudáfrica, en tanto que para los movimientos de liberación la independencia debería reflejarse en la fundación de un Estado basado en el sufragio universal de todos los habitantes en condiciones de completa igualdad.

Por otra parte, de las informaciones proporcionadas al Grupo por representantes autorizados de algunos movimientos de liberación, tales como la South West African People's Organization (SWAPO) y por eminentes personalidades, como Monseñor Colin Winter, obispo de Damarlandia, se deduce que la situación en Namibia se ha agravado considerablemente.

En particular el Grupo Especial tiene noticia, por los testimonios que se han presentado, de que al parecer se procedió a muchas detenciones en Namibia a raíz de las manifestaciones que marcaron la visita del Secretario General, en particular a su llegada al aeropuerto de Windhoek. También se ha averiguado que la represión contra los namibianos que exigen el retiro del Gobierno de Sudáfrica de Namibia, lejos de disminuir,

Excelentísimo Señor  
Eugeniusz Kulaga  
Embajador Extraordinario Plenipotenciario  
Representante Permanente ante las Naciones Unidas  
Misión Permanente de la República Popular de Polonia ante las Naciones Unidas  
9 East 66th Street  
Nueva York, N.Y. 10021

se ha intensificado aún más después de dicha visita. El Grupo Especial ha sido informado de que, en tales condiciones, la lucha abierta por la liberación de Namibia del yugo sudafricano debe proseguir activamente, y de que, en la hipótesis de que pudiera llegarse a cierto diálogo con las autoridades sudafricanas, la cuestión esencial, la única cuestión que debería plantearse, consiste en saber si Sudáfrica está verdadera e incondicionalmente dispuesta a retirarse del territorio en el plazo más breve posible.

El informe que el Grupo Especial de Expertos presentará a la Comisión de Derechos Humanos en su próximo período de sesiones, en febrero de 1973, contendrá amplios detalles sobre todos estos puntos. Sin embargo, el Grupo Especial juzga oportuno señalar desde ahora a su atención lo que precede.

Se acaba de enviar al Secretario General un telegrama del cual se adjunta copia a la presente.

Aprovecho la oportunidad para expresarle, señor Presidente, el testimonio de mi alta consideración.

Ibrahima Boye  
(Senegal)

Presidente del Grupo Especial de Expertos  
de la Comisión de Derechos Humanos



Anexo V

TELEGRAMA DE 23 DE AGOSTO DE 1972 DIRIGIDO AL SECRETARIO GENERAL  
POR EL GRUPO ESPECIAL DE EXPERTOS

Excmo. Señor  
Kurt Waldheim  
Secretario General de las Naciones Unidas  
UNATIONS, Nueva York

Cumpliendo mandato de la Comisión de Derechos Humanos Grupo Especial de Expertos ha recogido informaciones importantes sobre situación a raíz visita de usted a Namibia. Cuando hayamos estudiado todas las actas de testimonios le enviaremos cuanto antes y en todo caso en la primera quincena noviembre carta detallada sobre los hechos que nos han expuesto los testigos.

El Presidente, Ibrahima Boye (Senegal)

Los miembros del Grupo: Ermacora (Austria),  
Jankovic (Yugoslavia), Mani (India),  
Marchand-Stens (Perú),  
Rattansey (República Unida de Tanzania)

-----